



TOMO I

PRIMERA
POLÍTICA PÚBLICA
EN DERECHOS HUMANOS
Y PLAN NACIONAL
DE ACCIÓN
EN DERECHOS HUMANOS

Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos

ISBN: 978-99926-819-3-0

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Artículo 59.- “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.

La dignidad del ser humano es inviolable...”

© SJDH, Honduras, 2013

Reservados todos los derechos. Esta publicación puede ser reproducida con fines educativos o para llevar a cabo acciones de promoción y protección de los derechos humanos, de forma total o parcial por cualquier medio, sea electrónico, mecánico o fotocopiado o de otro tipo, siempre y cuando se cite la fuente.

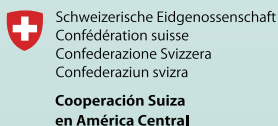
Una versión electrónica de la Primera Política Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos está disponible en el sitio web de la Secretaría: www.sjdh.gob.hn

La Secretaría solicita que se le comunique los usos mencionados con el fin de evaluar su impacto. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o en su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la SJDH.

El diseño de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es una contribución de:



Al servicio
de las personas
y las naciones



Foreign Affairs and
International Trade Canada



Esta es una publicación con el apoyo financiero de:



PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

TOMO I

Secretaría de Estado en los Despachos
de Justicia y Derechos Humanos



Tegucigalpa M.D.C., Honduras - Enero 2013

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA Y ASESORES PRINCIPALES

Ana A. Pineda H.

Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos

Jorge Irías Mena

Asesor principal

Paola Zavala

Asesora Internacional

ASESORÍA, SUPERVISIÓN GENERAL, REDACCIÓN DE CAPÍTULOS

Martha Savillón Castro
Nelson A Mejía Gonzales
Jaime Sepúlveda, Asesor Internacional
Adán Barahona
Kenia Irías
Rolando Sierra
Gustavo Irías
Andrés Pérez
Mirta Kennedy
Osman López
Emilia Alduvín
Ian Quiroz
Elena Gaviria
Eduardo Cano
Santos Espinal
Thelma Mejía
Javier Acevedo

SOPORTE INFORMÁTICO, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Eduardo Martínez Dubón

DISEÑO DE PORTADA

Allan Mc Donald

CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO EN DERECHOS HUMANOS

Andrés Pavón
Amanda Cruz
Alicia Calles
Carlos Sosa Coello
Corina Hernández
Emilia Alduvín
Juan Almendarez Bonilla
José Antonio Zambrano
Jimena Bonilla
José Manuel Capellín
José Guadalupe Ruelas
José Sevilla
Julio Torres
Natalia Lozano
Omar Rivera
Olivia Valdivieso
Rigoberto Sandoval Corea
Suyapa Martínez
Sor Valdetta Wileman
Tito Estrada A.
Yolanda Domínguez
Wilfredo Méndez
Wilmer Vásquez

EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Mónica Bran
Celeste Gonzales
Alejandra Munguía
Jacky Espino
Christtel Cáceres

EQUIPO DE APOYO TÉCNICO

Lauren Ocampos
Edilberto Romero
Milton Reyes
Bayron Canales
Ricardo Medina

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

Ana A. Pineda H
Secretaria de Estado

Martha Savillón Castro
Sub Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos

Lolis María Salas Montes
Sub Secretaria de Estado en el Despacho de Justicia

Denis Alberto Gallegos
Secretario General

Arnoldo Moncada Sierra
Gerente Administrativo

DIRECTORES

Nelson Aristides Mejía Gonzáles
Director General de Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

Mario Alexis Morazán
Director General de Seguimiento y Cumplimiento de Compromisos Internacionales.

Yaxkin Rafael Ferrera
Director General de Difusión y Estudio del Ordenamiento Jurídico Nacional.

Maritza O'Hara Cárcamo
Directora General de Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz.

Kenia Carolina Irías Guzmán
Directora General de Análisis Mediación y Resolución de Conflictos con enfoque en Derechos Humanos.

Ronis Rodil Vásquez Florentino
Director General de Mecanismos de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales.

German McNeil
Director General de Difusión y Estudio del Ordenamiento Jurídico Nacional.

Rolando Alcides Sierra F.
Coordinador de la Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

UNIDADES DE APOYO

Sandra María Elvir
Unidad de Servicios Legales.

Gladys Carolina Cabrera Paz
Unidad de Comunicación Institucional.

Delia María Ordoñez
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.

Sayra Ninoska Hernández Escamilla
Subgerente de Presupuesto.

Marta Lastenia García
Subgerente de Recursos Humanos.

Isabel Cristina Navas
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Roberto Ulises Rodríguez
Auditoría Interna.

Eduardo Martínez Dubón
Unidad de Informática y Modernización.

INSTITUCIONES ESTATALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE CONSULTAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN POR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

- Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).
- Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
- Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN).
- Plataforma de Derechos Humanos de Honduras.
- Grupo de Sociedad Civil (GSC).
- Federación de Rehabilitación y Asistencia Penitenciaria.
- Mirador Electoral de Honduras.
- Federación Nacional de Organizaciones de Personas Discapacitadas de Honduras (FENOPDIH).
- Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH).
- Unión Nacional de Ciegos Hondureños (UNCIH).
- Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares (AHLMYS).
- Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL).
- Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APO-AUTIS).
- Asociación Nacional de Discapacitados de Honduras (ANADISH).
- Red de Mujeres con Discapacidad de Honduras (REMUDISH).
- Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc.
- Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH).
- Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH).
- Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras (RED - COMIFAH).
- Centro de Atención del Migrante Retornado (CAMR).
- Asociación LGTB Arcoíris de Honduras.
- Asociación Xibalba.
- Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras.
- Asociación Compartir.
- Asociación Para Una Vida Mejor De Personas Infechadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras.
- Observatorio de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual.
- Asociación de Gemelos Honduras.
- Asociación Kukulcán.
- Asociación Colectivo Violeta.
- Red Lésbica Cattrachas.
- Colectivo Trans Honduras.
- Coalición Patriótica de Solidaridad.
- Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción.
- Alianza por la Paz y la Justicia.
- Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
- Unión de Notarios de Honduras (UNH).
- Asociación de Fiscales de Honduras.
- Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (ASOJMAH).
- Foro Nacional de Sida. (FONASIDA).

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑAS

- Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH).
- Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).
- Coordinadora Nacional Ancestral de Derechos Indígenas Maya-Chortí de Honduras (CONADIMCH).
- Consejo Nacional Indígena Maya-Chortí de Honduras (CONIMCH).
- Federación Hondureña de Indígenas Lencas (FHONDIL).

- Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras (FETRIPH).
- Asociación de Comunidades Indígenas Tolupanes de la Montaña de la Flor (ACITMFM).
- Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
- Movimiento Indígena Lenca de Honduras (MILH).
- Organización de Desarrollo Étnico Comunitaria (ODECO).
- Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH).
- Red Indígena Urbana.
- Consejo Nacional de Mujeres Indígenas Lencas de Honduras (CONMILH).
- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
- Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI).
- Moskitia Asla Takanka/ Unidad de la Moskitia (MASTA).
- Grupo de Mujeres Pech.
- Enlace de Mujeres Negras de Honduras (ENMUNEH).
- Asociación de Mujeres Lencas de Piedra Rayada.
- Asociación de Mujeres Lencas de Monte Verde.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS, PRODUCTORES DE CAFÉ Y AGRÍCOLAS

- Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH).
- Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
- Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH).
- Organización Nacional de Desarrollo para la Mujer Rural (CONADEMUR)
- Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).
- Frente Nacional Campesino (FNC).

- Asociación Campesina Nacional (ACAN).
- Asociación para el Desarrollo Rural de Honduras (ADROH).
- Unión de Trabajadores del Campo (UTC).
- Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH).
- Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC).
- Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (FECORAH).
- Unión Nacional de Campesinos (UNC).
- Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE).
- Vía Campesina.
- Red de Comercialización Comunitaria Alternativa (Red Comal).
- Asociación Para el Desarrollo Campesino de El Progreso (ADCP).
- Unión de Mujeres Campesinas de Honduras. (UMCAH).
- Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA).

ORGANIZACIONES SINDICALES

- Central General de Trabajadores (CGT).
- Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA).
- Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).
- Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH).
- Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SITRASOPTRAVI).
- Sindicato de vendedores Libres de Honduras (SIVELIH).
- Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Fruit Company (SUTRAFICO).
- Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (SITRAIHSS).
- Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA).

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

- Partido Unificación Democrática (UD).
- Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
- Partido de Innovación y Unidad - Social Demócrata (PINU).
- Foro de Unidad Liberal (FUL).
- Partido Anticorrupción de Honduras (PAC).
- Frente Nacional de Juventudes en Resistencia (FNJR).
- Colectivo Los Necios.
- Alianza de Mujeres Políticas.

ORGANIZACIONES DE POBLADORAS Y POBLADORES URBANOS

- Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH).
- Red de Mujeres de la Colonia Ramón Amaya Amador.
- Red de Mujeres de Barrios y Colonias del Distrito Central.
- Patronato del Barrio El Manzanal (M.D.C.).
- Patronato de la Colonia Los Pinos (M.D.C.).
- Patronato de la Colonia Divina Providencia (M.D.C.).
- Patronato de la Colonia San Miguel (M.D.C.).
- Patronato del Barrio El Chile (M.D.C.).
- Patronato de la Colonia Altos de La Merriam (M.D.C.).
- Patronato Francisco Morazán (M.D.C.).
- Patronato de la Entrada, Copán.

ORGANIZACIONES MAGISTERIALES Y EDUCATIVAS

- Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH).
- Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOS).

- Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH).
- Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH).

COLEGIOS PROFESIONALES

- Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
- Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH).
- Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
- Colegio de Economistas de Honduras (CEH).

IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS

- Iglesia Episcopal de Honduras.
- Iglesia Evangélica Asambleas de Dios.
- Iglesia Evangélica de Cristo.
- Asociación de Pastores Evangélicos de Honduras.
- Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH).
- Red San Ignacio de la Iglesia Católica.
- Pastoral Social Caritas Honduras. (Caritas)
- Pastoral de Movilidad Humana (PMH).

SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

- Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE).
- Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL).
- Instituto para la Cooperación y Auto-Desarrollo (ICADE).
- Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH).
- Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (FECORAH).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ASOCIACIONES DE PERIODISTAS

- Asociación de Radios Católicas de Honduras (ARCAH).

- Asociación de Radios Comunitarias.
- Sindicato Independiente de Profesionales de Periodistas.
- Asociación de Periodistas Independientes.
- Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande.
- Radio Globo.
- Canal 45.
- Canal 6 (CBC).
- Canal 36 (CHOLUSAT SUR).
- Periódico El Libertador.
- Diario El Tiempo.
- Canal Television Educativa Nacional (TEN)
- Noticiero Abriendo Brecha.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO

- Red de Desarrollo Sostenible (RDS).
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de Honduras (CEPROD).
- Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER).
- Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS)
- Fundación Vida.
- Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-Participa).
- Foro Nacional de Convergencia (FONAC).
- Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM - H).
- Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
- Foro Mujeres por la Vida.
- Fundación Ambiente (Fundambiente).
- Programa de Seguridad Juvenil Honduras (PSJ-HN).
- Save The Children.
- Childfund Honduras.
- Asociación Visión Mundial Honduras (VMH).
- Asociación Médicos Sin Fronteras (MSF).
- Asociación Nuestros Pequeños Hermanos.
- Asociación de Scouts de Honduras.
- Plan de Honduras.
- Foro Permanente de la Juventud Hondureña.
- Casa Renacer Honduras.
- Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
- Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH).
- Pueblo Horizonte.
- Asociación Nacional del Adulto Mayor de Honduras (ANAMH).
- Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS).
- Cruz Roja Hondureña.
- Proyecto Aldea Global (PAG).
- Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER).
- Proyecto Alternativas y Oportunidades.
- Proyecto Victoria.
- Asociación Arte Acción Honduras.
- Asociación Cristiana de Jóvenes de Honduras (ACJ).
- Fundación Ayuda en Acción Honduras.
- Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles Honduras.
- Aldeas Infantiles SOS Honduras.
- Asociación Juventud Renovada (Proyecto Hogar Diamante).
- Centro de Desarrollo Humano (CDH) - Proyecto INFAR.
- Red de Jóvenes Transformadores del Futuro.
- Asociación de Jubilados y Pensionados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (JUBIPENIHSS).
- Red de Infancia, Adolescencia y Juventud del sector de El Carrizal.
- Centro Educativo Timoteo (CET).
- Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras.
- Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Liberadas de Honduras.
- Instituto Hondureño para el Desarrollo de las Comunidades Rurales (INHDECOR).
- Fundación Horizontes al Futuro (FHAF).

- Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).
- Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER).
- Movimiento Juvenil Hazte Notar.

ORGANIZACIONES E INSTANCIAS QUE PARTICIPARON EN CONSULTAS TERRITORIALES

ORGANIZACIONES EN CONSULTAS TERRITORIALES

- Programa Municipal de Infancia y Juventud, COMVIDA.
- Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE).
- Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán.
- Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Mangulile Olancho.
- Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Norte.
- Red de Mujeres de San Francisco de Opalaca.
- Red de Defensores del Ambiente de Atlántida.
- Socorro Jurídico de la Pastoral Social de Tocoa.
- Espacio Regional de Occidente (EROC).
- Patronato Regional de Occidente (PRO).
- Alianza de Mujeres Gestoras para el Desarrollo del Municipio del Distrito Central.
- Red Juvenil Sociocultural del Valle de Amaratéca.
- Instituto León Alvarado de Comayagua.
- Foro Social del Valle de Sula (FSVS).
- Asociación de Productores Campesinos Paraiseños (APROCAP).
- Red Defensora de Recursos Naturales de Santa Bárbara.
- Hogar de Ancianos de Santa Bárbara.
- Asociación de Productores Agrícolas de Comayagua (APROARCO).
- Red de Mujeres Cantarranas.
- Casa de Jóvenes Danlí.
- Red de Jóvenes Transformadores del Futuro de Orocuina y Apacilagua.
- Asociación Santabarbarenses Abriendo Puertas (ASAP).
- Acción Cultural Popular Hondureña, (ACPH).
- Pastoral Social de Tocoa, Colon.
- Asociación Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz (COMUCAP).
- Red Contra la Violencia de Márcala, La Paz.
- Red Contra la Violencia de Chinacla, La Paz.
- Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG).
- Movimiento de Mujeres Contra la Violencia.
- Colectivo Unidad Color Rosa.
- Consejo Regional de Desarrollo de la Biosfera de Río Plátano.
- Consejo regional de Desarrollo del Norte de Olancho.
- Consejo Regional de Desarrollo de la Cordillera Nombre de Dios.

GOBIERNOS MUNICIPALES

- Alcaldía Municipal de la Villa de San Francisco, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Cortés.
- Alcaldía Municipal de Cedros, Francisco Morazán.

- Alcaldía Municipal de Morocelí, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de Maraita, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule, La Paz
- Alcaldía Municipal de Guaimaca, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de Tatumbla, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de San Buena Ventura, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de Cantarranas, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho.
- Alcaldía Municipal de Yoro, Yoro.
- Alcaldía Municipal de Yorito, Yoro.
- Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz, Olancho.
- Alcaldía Municipal de Santa María del Real, Olancho.
- Alcaldía Municipal de Teupasenti, El Paraíso.
- Alcaldía Municipal de Potrerillos, El Paraíso.
- Alcaldía Municipal de Danlí, El Paraíso.
- Alcaldía Municipal de Jacaleapa, El Paraíso.
- Alcaldía Municipal de El Paraíso, El Paraíso.
- Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de San José de Colinas, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de Concepción del Norte, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de Azacualpa, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de San Nicolás, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de San Vicente Centenario, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de Petoa, Santa Bárbara.
- Alcaldía Municipal de Santa Rosa, Copán.
- Alcaldía Municipal de Santa Rita, Copán.
- Alcaldía Municipal de Bonito Oriental, Colón.
- Alcaldía Municipal de Tocoa, Colon.
- Alcaldía Municipal de Trujillo, Colon.
- Alcaldía Municipal de Santa Fe, Colon
- Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Aguan, Colon.
- Alcaldía Municipal de Márcala, La Paz.
- Alcaldía Municipal de Mercedes de Oriente, La Paz.
- Alcaldía Municipal de La Paz, La Paz.
- Alcaldía Municipal de Belén Gualcho, Ocotepeque
- Alcaldía Municipal de Sensenti, Ocotepeque.
- Alcaldía Municipal de La Masica, Atlántida.
- Alcaldía Municipal de San Lucas, El Paraíso.
- Alcaldía Municipal de la Lima, Cortés.
- Alcaldía Municipal de San Antonio, Cortés.
- Alcaldía Municipal de Lejamaní, Comayagua.
- Alcaldía Municipal de Siguatepeque, Comayagua.
- Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz.
- Alcaldía Municipal de Cedros, Francisco Morazán.
- Alcaldía Municipal de Erandique, Lempira.
- Alcaldía Municipal de Camasca, Intibucá.
- Comisionado Municipal de Siguatepeque, Comayagua.
- Consejo de Desarrollo Municipal de Danlí, El Paraíso.
- Consejo Regional El Paraíso.
- Gobernación de Juticalpa, Olancho
- Comisionado Municipal de Juticalpa, Olancho

- Oficina Municipal de la Mujer, Márcala, La Paz.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal Villa de San Antonio, La Paz.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Gracias, Lempira.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Siguatepeque, Comayagua.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Mangulile, Olancho.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Salamá, Olancho.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Juticalpa, Olancho.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Yorito, Yoro.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de Yorito, Yoro.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal Yoro.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Azacualpa, Santa Bárbara.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de San Vicente Centenario, Santa Bárbara.
- Oficina Municipal de la Mujer de Concepción de Norte, Santa Bárbara.
- Oficina Municipal de la Mujer de San Nicolás, Santa Bárbara.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal del Municipio de Santa Bárbara.
- Consejo Regional de Santa Bárbara.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Florida, Copán.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Copán Ruinas.
- Oficina Municipal de la Mujer, San Nicolás Copán.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de Florida, Copan.
- Comisionado Municipal de Derechos Humanos de Lepaera, Lempira.
- Oficina Municipal de la Mujer de Gracias Lempira
- Red de Mujeres, Unión Lempira.
- Mancomunidad de Erapuca, Lempira.
- Escuela de Conciliación de Lepaera, Lempira.
- Oficina Municipal de la Mujer de Trujillo, Colon.
- Oficina Municipal de la Mujer de Tocoa, Colon.
- Oficina Municipal de la Mujer, Santa Rosa de Aguan, Colon.
- Oficina Municipal de la Mujer de la Lima, Cortés.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal, San Marcos de Ocotepeque.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de San Marcos de Ocotepeque.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de Lucerna, Ocotepeque.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de San Jerónimo, Copán.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de Gracias, Lempira.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de La Jigua, Copán.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de San Antonio, Copán.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de Cantarranas, Francisco Morazan.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazan.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal San Buena Ventura, Francisco Morazan.
- Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral (CGSSI).
- Red de Defensores del Ambiente de Atlántida.
- Federación Olanchana de Mujeres Urbanas y Rurales (FOMUR).
- Consejo Regional de Desarrollo de Centro.
- Consejo Regional de Desarrollo de Valles de Olancho.
- Consejo Regional de Desarrollo de Occidente.
- Consejo Regional de Desarrollo de Valle Sula.

- Consejo Regional de Desarrollo de Valle Lean.
- Consejo Regional de Desarrollo de Valle del Aguan.
- Consejo Regional de Desarrollo de Rio Lempa.
- Consejo Regional de Desarrollo de Golfo de Fonseca.

- Consejo Regional de Desarrollo de Valle de Comayagua.
- Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal de Guinope, Francisco Morazán.

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN DE APOYO DIRECTO

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD).
- Cooperación Suiza en América Central (COSUDE) y cuerpo diplomático.
- Gobierno de Canadá.
- Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia (UNICEF).
- Embajada de España.
- Embajada de Canadá.

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN

- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERES).
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- ONUSIDA
- Federación Luterana Mundial (FLM).
- Programa de Gobernabilidad y Derechos Humanos (TROCAIRE).
- Embajada de Alemania.
- Embajada de México.
- Embajada de Italia.
- Embajada de Guatemala.
- Embajada de Francia.

- CHF Internacional.
- Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (Trocaire).
- Embajada del Perú.
- Embajada de Belice.
- Unión Europea (UE).
- Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS).
- Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).

ACADEMIA

- Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
- Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN - FM).
- Universidad Católica de Honduras (UNICAH).
- Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).
- Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC).
- Universidad Metropolitana de Honduras (UMH).
- Consultorio Jurídico de la Universidad Tecnológica de Honduras.
- Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Honduras.
- Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

- Doctorado de Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Maestría Latinoamericana en Trabajo Social.
- Instituto Abelardo Fortín.
- Escuelas Manos Felices.
- Asociación Nacional Para el Arte y la Cultura (CONARTE/UNAH).
- Carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Carrera de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Carrera de Derecho de Centro Universitario Tecnológico.
- Carrera de Derecho de la Universidad Católica de Honduras
- Instituto España Jesús Milla Selva.
- Instituto Jesús Aguilar Paz.
- Escuela Normal Pedro Nufio.
- Escuela José Santos Guardiola.
- Instituto León Alvarado.
- Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).
- Universidad Católica de Honduras (UNICAH).
- Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC).
- Universidad Metropolitana (UNIMET).
- Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN).
- Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH).
- Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
- Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA).
- Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.
- Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SDS).
- Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población (SEIP).
- Secretaría Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS).
- Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
- Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.
- Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes (SCAD).
- Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (SIC).
- Programa de Asignación Familiar (PRAF).
- Programa Nacional de Género, Salud y Desarrollo de la Secretaria de Salud.
- Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO).
- Dirección General Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP).
- Dirección General de Migración y Extranjería.
- Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN).
- Comisión Nacional de Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO).
- Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV).
- Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
- Instituto de Conservación Forestal (ICF)
- Instituto Nacional de la Mujer (INAM).

PODER EJECUTIVO

- Secretaria de Estado del Despacho Presidencial .
- Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores (SRE).
- Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
- Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG).
- Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).

- Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (IHNFA).
- Instituto Nacional de la Juventud (INJ).
- Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
- Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
- Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).
- Instituto Nacional Agrario (INA).
- Personal penitenciario y administrativo de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.
- Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras.
- Ministerio Público (MP).
- Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
- Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural.
- Fiscalía Especial de la Mujer.
- Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente.
- Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la Tercera Edad.

PODER JUDICIAL

- Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
- Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
- Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia.
- Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.
- Juzgado de Ejecución Seccional de Comayagua.
- Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa.
- Dirección Nacional de la Defensa Pública.
- Comisión de Derechos Humanos del Poder Judicial.

PODER LEGISLATIVO

- Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República.

ENTES ESTALES

- Procuraduría General de la República (PGR).
- Tribunal Supremo Electoral (TSE).
- Registro Nacional de las Personas (RNP).

PRESENTACIÓN

Con suma satisfacción presento la *“Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en derechos humanos en Honduras. 2013-2022”*, cometido que estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, una novel institución, cuya creación denota el compromiso del Presidente de la República, Lic. Porfirio Lobo Sosa con el respeto a los derechos humanos y una aspiración porque ello se convierta en una práctica extensiva al resto de las Secretarías e instituciones del Estado en complementariedad con la sociedad civil hondureña.

Una de las tareas fundamentales de esta Secretaría de Estado, ha sido la de trabajar simultáneamente en el quehacer fundacional como en su estructura orgánica, programática y presupuestaria, dando vida y dinamismo a la nueva Secretaría y a la vez cumpliendo con los compromisos nacionales e internacionales como pasos necesarios en la institucionalidad del país y particularmente en el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos.



En el marco de las atribuciones legales de esta Secretaría de Estado, se encuentra la de ser el órgano rector del diseño e implementación de la Primera Política Pública y Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, a través de un amplio e inclusivo proceso de participación social.

El diseño e implementación de la *“Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en Honduras”*, responde al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, y en la subsiguiente Declaración y Programa de Acción de Viena, donde los Estados asumen el compromiso de diseñar planes nacionales de acción que les permitieran identificar medidas para avanzar decididamente en la promoción y protección de los derechos humanos, en el entendido que sólo la acción de las políticas públicas facilitarían el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos.

El proceso de diseño de ambas herramientas ha sido construido pensando en la aspiración de tener una sociedad más igualitaria y equitativa, donde cobre plena vigencia la disposición del Artículo 59 de la Constitución de la República que señala *“La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado”*. Ello, sólo es posible si el Estado a través de sus agentes y la sociedad en general comprenden que los derechos humanos son el medio idóneo que permite colocar a la persona humana en el centro de la actividad del gobierno y del Estado en general.

Siendo que el ser humano es el titular de derechos humanos, el fin del Estado y el objetivo de la acción pública, es estar a su servicio, especialmente para atender las dimensiones de las obligaciones de reconocer, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Estos derechos están plasmados en nuestra Norma Fundamental y en diversos Tratados y Convenios Internacionales, de los cuales el Estado de Honduras es Alta Parte Contratante, mismos que tienen primacía sobre las normas internas de los Estados, según lo establecido en la Convención de Viena, conforme la cual, los

Estados adquieren obligaciones que deben ser cumplidas de buena fe sin invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplirlas.

La falta de voluntad política y de comprensión sobre la necesidad de diseñar e implementar este importante compromiso estatal, tardó 20 años en asumirse, hasta que el Presidente de la República, Lic. Porfirio Lobo Sosa en Consejo de Ministros aprueba el 22 de enero de 2013 la Primera Política Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM - 003 -2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,073 de fecha 12 de marzo de 2013.

El Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos, es la herramienta operativa y estratégica que permitirá la realización de la Política Pública Nacional de Derechos Humanos 2013-2022, que coincide con la Ley para el Establecimiento de la Visión de País y la Adopción del Plan de Nación que establece el principio de la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas como el eje de todas las políticas públicas y como fundamento del orden político democrático, para lo cual se crearon 16 zonas de desarrollo y sus correspondientes Consejos Regionales de Desarrollo Territorial.

Las acciones de consultas temáticas, sectoriales y regionales facilitadas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos para el diseño de la Política Pública de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, generó confianza no sólo para alcanzar este importante resultado sino para reencontrarse como Estado con la sociedad civil en un contexto reciente de confrontación y polarización como resultado de la crisis política institucional más grave de nuestra historia, a consecuencia de la ruptura del orden constitucional producido en junio de 2009.

El proceso de consulta sirvió para recoger un Diagnóstico Situacional sobre Derechos Humanos, a partir de la realidad nacional, de las problemáticas particulares y necesidades expuestas por las y los miembros de los grupos metas señalados en dichas herramientas, que permitió más adelante el análisis de la situación de los derechos humanos y la formulación de propuestas que ofrezcan soluciones factibles para remover de manera sistemática y adecuada los obstáculos que imposibilitan la realización de los derechos humanos en Honduras.

Este Diagnóstico Situacional fue enriquecido a partir de la revisión y análisis completo en el ámbito nacional, del catálogo de derechos regulados en la Constitución de la República, el ordenamiento jurídico nacional, las recomendaciones y propuestas de políticas realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, así como, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y Comisión de Verdad. Además se consideraron los estudios, diagnósticos, censos, políticas públicas sectoriales, planes de acción temáticos y en el ámbito internacional se recoge el catálogo de derechos contenidos en los diversos Instrumentos Internacionales en Derechos Humanos.

El proceso que conduce al diseño de estos instrumentos duró aproximadamente dos años y participaron 5,116 personas, representantes de 399 instituciones de gobierno y 968 organizaciones, grupos y sectores de la sociedad hondureña, del cual resultó un total de 2,607 recomendaciones que dieron lugar a 573 propuestas de la ciudadanía y de servidores públicos, 746 del Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos, 517 de informes y estudios especializados, 731 recomendaciones que se originan de 34 políticas públicas en diversos temas, mismas que se recogieron por primera vez en un esfuerzo nacional en una compilación que se anexará a la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, convirtiéndose en otro producto que facilitará el seguimiento del proceso de implementación de dichas herramientas.

Lo anterior, permite que ambas herramientas tengan un abordaje integral de los derechos humanos desde la óptica de los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales desde una visión intercultural y con un enfoque de género, que permita ser el horizonte de una nueva gestión gubernamental y estatal en el quehacer de construir y consolidar, como aspiración de la sociedad, una democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, la cual se reflejará en el corto, mediano y largo plazo en la medida que las Secretarías e Instituciones del Estado asuman la responsabilidad de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes.

La Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. 2013-2022 se construyó bajo cuatro lineamientos estratégicos: La Seguridad humana, Sistema de Justicia, Democracia y Grupos Colocados en Situación de Vulnerabilidad.

Cuenta con ocho componentes: a) La recepción de los derechos en la legislación; b) recepción de los derechos en las políticas públicas; c) cultura de los derechos humanos en las instituciones y servidores públicos; d) desarrollo de las capacidades en el Estado y adecuación de la estructura estatal; e) lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral; f) la Rendición de cuentas y transparencia sobre acciones y resultados; g) desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos; y, h) la promoción de una cultura de derechos humanos en la sociedad.

De acuerdo a circunstancias estructurales y de la situación de los derechos humanos se centró especial atención en los grupos colocados en posición de vulnerabilidad: Niñez y adolescencia, Jóvenes, Mujeres, Personas Privadas de Libertad, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Colectivos de la Diversidad Sexual, Personas Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Campesinos (a), Obreros (as) y Pobladores (as) Urbanos, resultando en conjunto un instrumento integrador, eficaz y sostenible en el tiempo para impulsar el goce y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales contenidos en la Constitución de la República, las Leyes y Tratados y Convenios Internacionales que desarrollan la dignidad del ser humano, la igualdad de derechos entre todas las personas y la no discriminación.

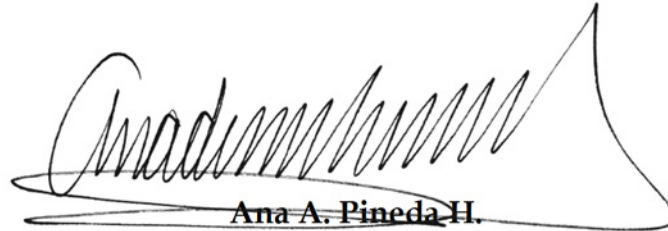
La Política Pública en Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, también contribuyen a mejorar la coordinación interinstitucional y la interacción entre las autoridades, la academia, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, demás organizaciones y sectores de la sociedad civil y la población en general sobre la base que los derechos humanos deben desarrollarse como valores inherentes a la persona humana y como límites del poder estatal.

Como titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y como ciudadana de una nación con enormes retos y desafíos en materia de justicia y derechos humanos, externo mi más especial agradecimiento a las y los participantes en las diferentes jornadas temáticas, sectoriales y territoriales; a las y los representantes de las organizaciones no gubernamentales, sectores y grupos de sociedad civil, de las Secretarías e Instituciones estatales; a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a la Cooperación Suiza en América Central y al Sistema de las Naciones Unidas en Honduras a través del concurso decidido del Coordinador Residente, Señor José Manuel Hermida; a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); al Gobierno de Canadá y al Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos, instancia conformada con representantes de las más prestigiadas y comprometidas organizaciones de sociedad civil por su permanente y decidido apoyo y acompañamiento por haber hecho posible el proceso de

construcción de este necesario e importante compromiso internacional e impulsar las acciones que hoy constituyen la Primera Política Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. 2013-2022.

Finalmente, con respeto exhorto al pueblo hondureño a mantener un monitoreo ciudadano sobre el proceso de implementación de estas herramientas, para hacer de ellas, un instrumento que haga posible de forma progresiva la mejoría en la situación de los derechos humanos de la población, pero también un instrumento perfectible y sujeto a los cambios requeridos por la ciudadanía y el contexto social, en vista de ser el medio idóneo para alcanzar un impacto real, visible y duradero en la condición de vida del ser humano y para la construcción de un Estado de Derecho y la institucionalidad democrática basados en el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas que habitan en Honduras.

“La defensa de los derechos humanos, debe asumirse con la misma propiedad, dentro o fuera del espacio público. Un defensor o defensora de los derechos humanos, que haga una defensa diferente por ostentar una posición pública, desdice su vocación y compromiso de tal.”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana A. Pineda H.', written over a horizontal line.

Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos.

CONTENIDO

PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS	20
Justificación	21
¿Por qué una política pública en derechos humanos?	21
Proceso Metodológico para la Elaboración de la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción En Derechos Humanos	21
Flujograma del proceso metodológico para el diseño de la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos	22
El contexto	27
¿De dónde partimos como país y cuáles son los retos del contexto?	27
Marco normativo de protección de los derechos humanos.....	30
Enfoque de derechos humanos en la gestión pública	31
¿Qué es un enfoque de derechos humanos en gestión pública y cómo se aplica a Honduras?	31
Lineamientos	35
Lineamiento Estratégico: Seguridad Humana	35
Lineamiento Estratégico: Sistema de Justicia	36
Lineamiento Estratégico: Democracia	37
Lineamiento Estratégico: Grupos de Población en Posición de Vulnerabilidad.....	40
Objetivos, componentes y tipo de acciones	42
¿Qué queremos lograr y cómo?	42
Objetivo general.....	42
Objetivos específicos.....	42
Componentes y tipo de acciones.....	42
Cumplimiento de objetivos.....	43
Instrumentos de implementación y monitoreo de la Política Pública en Derechos Humanos	47

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	50
Lineamiento Estratégico sobre Seguridad Humana	52
Derecho a la Educación	53
Derecho a la Salud.....	67
Derechos Sexuales y Reproductivos.....	91
Derecho a la Alimentación.....	116
Derecho al Trabajo	133
Derecho a la Vivienda Adecuada.....	151
Derecho al Agua	158
Derecho al Medio Ambiente Sano	169
Derecho a la Cultura	181
Lineamiento Estratégico sobre Sistema de Justicia.....	208
Derecho a la Vida	209
Derecho a la Seguridad.....	229
Derecho a la Integridad y Libertad Personal.....	252
Derecho a la Justicia	271
Derecho a la Verdad.....	294
Lineamiento Estratégico sobre Democracia.....	314
Derecho al Acceso a la Información.....	315
Derecho a la Libertad de Expresión.....	329
Derechos Políticos o de Participación de la Ciudadanía en los Asuntos Públicos	341
BIBLIOGRAFÍA	365
SIGLAS.....	377

PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS

JUSTIFICACIÓN

¿POR QUÉ UNA POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS?

El Estado ha asumido importantes responsabilidades en materia de derechos humanos a nivel internacional y con sus ciudadanos y ciudadanas, frente a la amplia gama de derechos reconocidos y su relación con buena parte de la gestión pública, que involucra a todas las instituciones del Estado y demanda acciones de planificación conjunta: Coordinación interinstitucional, elaboración de reportes y producción de información confiable, diálogo con la ciudadanía, desarrollo de capacidades de las instituciones públicas y en las organizaciones de sociedad civil, entre otras.

En atención a estos retos importantes, se requiere una política pública consensuada entre las y los actores participantes que tenga las siguientes características:

1. Sea una guía de trabajo para que el Estado de Honduras en su conjunto, cumpla de manera permanente, sistemática y progresiva con los compromisos en materia de derechos humanos a nivel internacional y nacional; y genere información confiable que le permita dar cuenta en forma apropiada ante cada uno de los órganos de seguimiento de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y, ante la población de las medidas que está realizando y de los resultados alcanzados.

Dicha guía debe partir de la identificación de los compromisos adquiridos, sistematizar las recomendaciones generadas por los diferentes órganos de tratado y mecanismos especiales de derechos humanos a nivel internacional y regional de los cuales el Estado de Honduras es Alta Parte Contratante, generar un mecanismo para que cada institución del Estado que tiene responsabilidad con el cumplimiento de dichas obligaciones, adquiera conciencia de las mismas y las introduzca en su quehacer institucional, realizando de manera simultánea acciones urgentes para hacer efectivos los derechos humanos.

2. Ofrezca un mecanismo ágil y flexible de coordinación interinstitucional entre las instituciones del Estado responsables de implementar las acciones de la Política y su respectivo Plan de Acción y de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
3. Ofrezca una agenda para el trabajo por los derechos humanos orientada a desarrollar valores para el respeto de los mismos y la democracia.
4. Permita que las y los ciudadanos se apropien del deber del Estado de reconocer, respetar, promover, proteger y garantizar sus derechos humanos.

PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA Y EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, incluye un diagnóstico situacional que identifica fortalezas y debilidades de las políticas públicas e identifica las principales

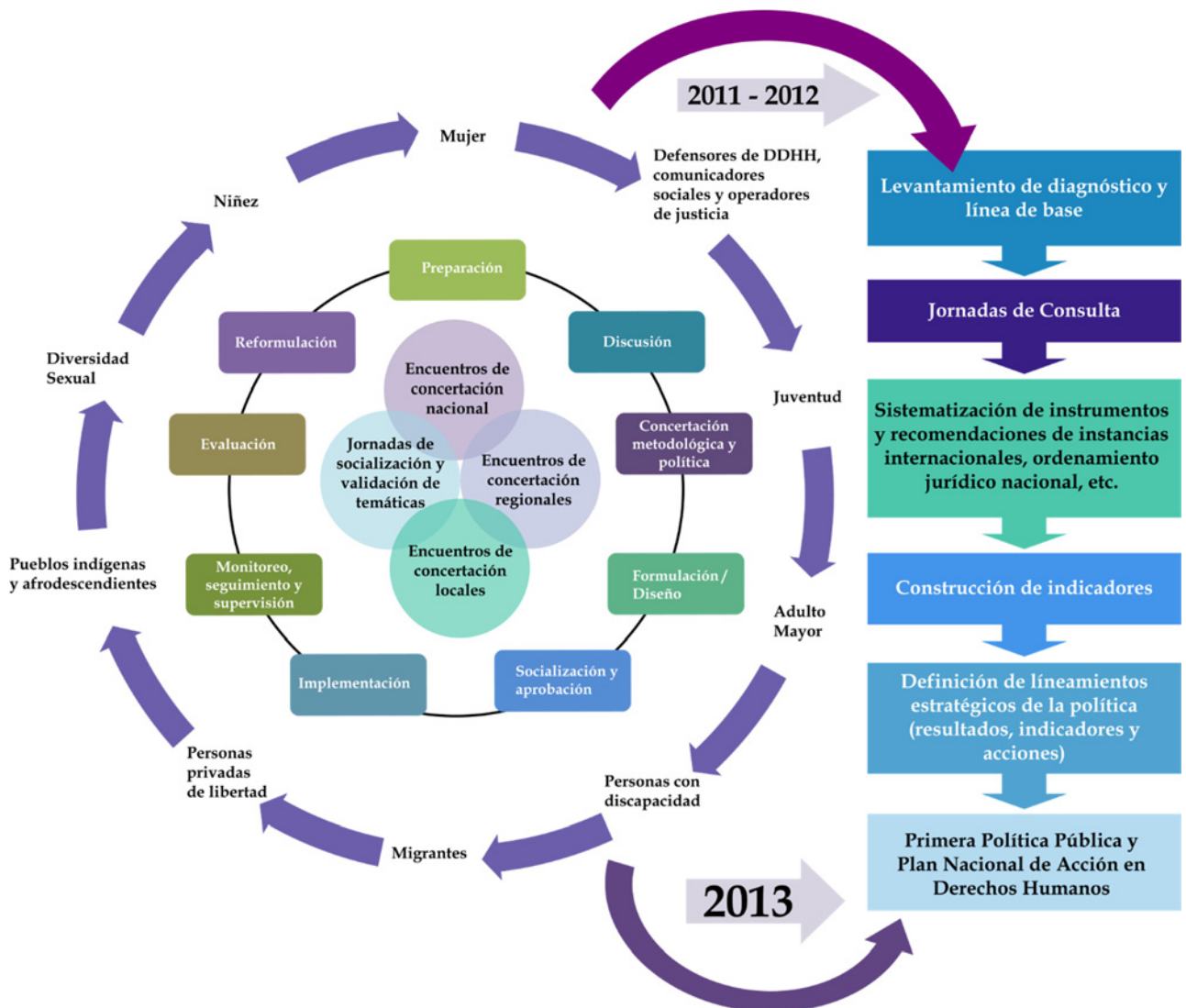
causas que generan las violaciones a los derechos humanos y los contextos en los que se presentan. Este diagnóstico situacional parte de la realidad nacional, de las problemáticas

particulares y las necesidades expuestas por las y los miembros de los grupos metas consultados, que permitió la formulación de propuestas que ofrezcan soluciones factibles para remover de manera sistemática y adecuada los obstáculos que imposibilitan la realización de los derechos humanos en el país.

líneas de acción, plazos y entes responsables, con enfoque de derechos humanos en la legislación, las políticas públicas, el presupuesto general de ingresos y egresos de la República y el presupuesto de cada institución estatal.

A partir de los obstáculos detectados, se proponen soluciones estableciendo estrategias,

FLUJOGRAMA DEL PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS



Fuente: SJDH.

El proceso metodológico de diseño de la Primera Política Pública y del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se concretizó a partir de las siguientes fases:

1. Preparación y discusión

De la reflexión y análisis realizado, se consideró pertinente combinar el esfuerzo de definición e implementación de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, con la definición de los lineamientos para formular dichas herramientas, considerándolos dos procesos paralelos e incluyentes, (2011-2012).

2. Concertación metodológica y política

El propósito de esta fase fue consensuar los contenidos y procedimientos generales, incluyendo los aspectos metodológicos necesarios, para formular la Política y el Plan de Acción en base al marco legal y político de la Secretaría.

Diseño operativo y formulación de la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos:

La Secretaría con el apoyo de consultores nacionales e internacionales, preparó un diseño operativo que describía la ruta de trabajo para llegar a la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, siendo los principales pasos los siguientes:

a. Levantamiento de diagnóstico situacional y línea de base con un sistema de indicadores

La Línea de Base establece un punto de partida que permite medir a través de indicadores

cuantitativos y cualitativos en una temporalidad determinada, el cumplimiento de los compromisos del Estado hacia la promoción y defensa de los derechos humanos de la población hondureña, para luego monitorear y evaluar con certeza y de forma sistemática la evolución de cada una de esos derechos en el período para el cual está formulado el Plan o para períodos intermedios de cumplimiento del mismo.

Para el desarrollo de la Línea de Base se integró un equipo técnico responsable del diseño inicial, quien además coordinó el levantamiento, recolección, procesamiento, sistematización y el diseño de un sistema de información temática.

b. Jornadas de consultas

Para alcanzar la legitimidad deseada, se programaron diferentes espacios de participación ciudadana, siendo las principales modalidades las mesas de trabajo, las consultas en jornadas temáticas. Las jornadas tuvieron como propósito principal lograr la participación activa democrática y real de diferentes expresiones locales, sectoriales y regionales de la sociedad civil en el proceso de diseño del Plan de Acción, propiciando el empoderamiento del mismo.

Las jornadas de consulta se desarrollaron en los siguientes niveles: Encuentros de concertación local, encuentros de concertación regional, encuentros de concertación nacional y jornadas de validación temática, totalizando 180 jornadas de consultas con la participación de 5,116 personas provenientes de espacios de la sociedad civil organizada, sectores, academia, instituciones y dependencias gubernamentales.

Evento	No de Jornadas	No. Instituciones Dependencias Gubernamentales	No. Organizaciones de Sociedad Civil	No. de Propuestas	No. de Participantes
Jornada de consulta sectorial	33	36	273	298	1,550
Jornada de consulta regional	14	187	338	132	720
Jornada de socialización y validación con tomadores de decisión	23	42	192	83	315
Otros Espacios de difusión y socialización	110	134	165	60	2,531
Total	180	399	968	573	5,116

Fuente: SJDH.

c. Sistematización de Instrumentos Internacionales y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y del ordenamiento jurídico nacional.

Los Instrumentos y recomendaciones de organismos internacionales, incluyen todo el marco jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras en materia de derechos humanos, los compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU), las recomendaciones de los Comités, Subcomités, las Relatorías Especiales y demás mecanismos y procedimientos temáticos de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Sistema

Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo acciones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas particulares. En el ámbito nacional, fueron objeto de revisión y análisis la Constitución de la República, los textos normativos del ordenamiento jurídico nacional, las políticas públicas, las recomendaciones y propuestas de políticas diseñadas por organizaciones de la sociedad civil, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de Verdad. Al respecto, se adjuntan como ilustración los cuadros siguientes:

1	Recomendaciones del Sistema de Internacional e Interamericano de Derechos Humanos (145 instrumentos)	746
2	Propuestas ciudadanas y de funcionarios públicos durante las consultas	573
3	Recomendaciones de informes sobre derechos humanos y estudios especializados	517
	Subtotal de recomendaciones	1,836
4	Políticas Públicas (34 instrumentos de política)	771
	Total	2,607

Fuente: SJDH.

Tipo de Documento	No. De Documentos	No. de Propuestas
Estudios, Diagnósticos y Censo	130	Datos
Políticas Públicas sectoriales, informes y planes diversos	34	771
Instrumentos Jurídicos nacionales	1,437	Datos
Instrumentos Jurídicos internacionales	145	746
Total	1,746	1,517

Fuente: SJDH.

La información obtenida de las diferentes fuentes, se organizó en matrices (cuadros analíticos) que presentan los principales compromisos del Estado en relación con cada uno de los apartados.

d. Construcción inicial de indicadores:

En esta fase se retomó aquellos indicadores ya construidos en las materias objeto del Plan, pero además, en la primera fase se construyeron nuevos indicadores en base a la información estadística oficial disponible, de manera especial del Instituto Nacional de Estadísticas, de la revisión de fuentes secundarias tales como diagnósticos y políticas públicas sectoriales, pero también de fuentes primarias, especialmente las originadas de las consultas ciudadanas realizadas a nivel nacional y de entrevistas con expertos y expertas.

e. Definición de Lineamientos Estratégicos de la Primera Política Pública y del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (resultados, indicadores y acciones):

Los Lineamientos Estratégicos:

Para el mejor abordaje metodológico se agruparon los derechos y grupos de población que se abordan en el Plan Nacional de Acción, en los Lineamientos Estratégicos siguientes: Seguridad Humana, Sistema de Justicia, Democracia, Derechos de Grupos de Población en Condiciones de Vulnerabilidad.

Los componentes:

Para el cumplimiento de los objetivos se han definido ocho componentes, que son grandes áreas que deben atenderse para que el país avance en un efectivo cumplimiento de los derechos humanos. La Política y el Plan de Acción trabajan en ocho grandes componentes que están orientados al cumplimiento de los

objetivos específicos y que son los receptores de las acciones estratégicas:

- 1) Recepción de los derechos en la legislación;
- 2) Recepción de los derechos en las políticas públicas;
- 3) Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos;
- 4) Desarrollo de capacidades en el Estado;
- 5) Lucha contra la impunidad de por violaciones de derechos humanos y derecho a la reparación;
- 6) Rendición de cuentas y transparencia;
- 7) Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos; y,
- 8) Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.

Los planes específicos:

El Plan de Acción a su vez contempla 27 planes específicos por derecho y por grupo de población agrupados en condición de vulnerabilidad asociados conforme los lineamientos estratégicos de la siguiente manera:

Lineamiento Estratégico: Seguridad Humana contempla:

- Derecho a la Educación;
- Derecho a la Salud;
- Derechos Sexuales y Reproductivos;
- Derecho a la Alimentación;
- Derecho al Trabajo
- Derecho a la Vivienda Adecuada;
- Derecho al Agua;
- Derecho al Medio Ambiente Sano; y,
- Derecho a la Cultura.

Lineamiento Estratégico: Sistema de Justicia

- Derecho a la vida;
- Derecho a la integridad y libertad personal;
- Derecho a la seguridad;

- Derecho a la justicia; y,
- Derecho a la verdad.

Lineamiento Estratégico: Democracia

- Derecho al Acceso a la Información;
- Derecho a la Libertad de Expresión; y,
- Derechos Políticos o de Participación de la Ciudadanía en los Asuntos Públicos.

Lineamiento Estratégico: Grupos de población en posición de vulnerabilidad:

- Niñez;
- Jóvenes;
- Personas Adultos Mayores;
- Pueblos Indígenas y Afrohondureños;
- Mujer;
- Migrantes;
- Diversidad Sexual;
- Personas con Discapacidad;
- Personas Privadas de Libertad en Centros de Reclusión; y,
- Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

EL CONTEXTO

¿DE DÓNDE PARTIMOS COMO PAÍS Y CUÁLES SON LOS RETOS DEL CONTEXTO?

Honduras es un país que ha experimentado grandes cambios en los últimos 30 años, el más importante de los cuales es la transformación democrática. No obstante, dicha transformación no se ha acompañado de mejoras significativas en el goce pleno de los derechos humanos por parte de la población; por el contrario, subsisten vacíos importantes en materia de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, derecho al medio ambiente sano y derecho al desarrollo. La crisis política-institucional que evidenció confrontación entre Poderes del Estado y que derivó en la ruptura del orden constitucional del año 2009 implicó, de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un golpe de Estado al Poder Ejecutivo, que no solo profundizó la violación de los derechos humanos, sino que evidenció factores estructurales que están en su base, como mostró dicho Informe y los Informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ello ha impuesto al Estado de Honduras el asumir acciones más proactivas en protección de los derechos humanos, como la creación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos en el año 2012, la invitación oficial a Relatores Especiales de Naciones Unidas para que visiten el país y formulen sus recomendaciones en retos claves en derechos humanos, la presentación voluntaria del Estado de Honduras ante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de Naciones Unidas para valorar la situación de los derechos humanos a nivel de los países y recomendar acciones, y finalmente la puesta en marcha de recomendaciones urgentes tanto de Relatores Especiales como del Examen Periódico Universal. Una de las recomendaciones más importantes del EPU y de la Alta Comisionada que se ha puesto en práctica y que ha implicado la voluntad política del Estado de Honduras en su conjunto, es la formulación, aprobación e inicio de la implementación de la presente

Política y su Plan Nacional de Acción en 2013. La recomendación en cuestión plantea lo siguiente: “Formular un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos en estrecha cooperación con el Sistema de las Naciones Unidas y con la participación activa de la sociedad civil, en el que se determinen y aborden los problemas estructurales con carácter prioritario” (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras. Noviembre de 2009).

El avance de los derechos humanos en Honduras.

La democracia debe ser un medio para lograr la satisfacción de los derechos humanos. El proceso de democratización permite una capacidad cada vez mayor del pueblo de exigir el pleno esfuerzo del Estado para garantizar sus derechos humanos. Por medio del ejercicio de los derechos humanos de libre asociación, libre expresión y participación, la gente comunica a sus gobernantes sus demandas en materia de derecho a la educación, salud, seguridad ciudadana, seguridad social, medio ambiente, derechos laborales y otros; y el Estado tiene obligaciones internacionales y nacionalmente asumidas para responder con mecanismos de protección y satisfacción.

El enfoque de la Primera Política Pública y su Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se basa en la profundización de estos procesos democráticos que institucionalicen y perfeccionen de manera permanente un enfoque de derechos humanos en toda la gestión pública.

La base o el piso desde el que se adopta el enfoque de derechos humanos en la gestión pública es el reconocimiento de los derechos humanos en el marco jurídico, a través de la ratificación por parte del Estado de los tratados o convenios internacionales que contemplan los

mismos, y su inclusión en la legislación primaria y secundaria. Corresponde al Estado armonizar su legislación interna para adecuarla a los compromisos asumidos en los tratados o convenios internacionales. Este marco jurídico establece un deber moral y legal por parte del Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y constituye el origen desde el cual se institucionaliza un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.

Un tema importante tanto del marco jurídico nacional e internacional como de las políticas públicas, es que deben desarrollar recursos legales y administrativos oportunos, creíbles e independientes para que él o la titular o portador(a) del derecho pueda reclamar su cumplimiento efectivo, proponer modalidades o mecanismos para su mejoramiento y, si fuera el caso, denunciar su violación, obtener una rápida restitución del mismo o la correspondiente reparación y la sanción penal o administrativa de las o los responsables. Sin recursos eficaces, ágiles y creíbles para garantizar el derecho frente a una posible limitación o violación del mismo, el derecho no está seguro. Parte fundamental de este proceso de institucionalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, es fortalecer los organismos públicos defensores de los derechos humanos para que sean accesibles, eficaces y eficientes, así como los procesos de vigilancia ciudadana sobre los mismos.

Los avances en la protección de los derechos humanos no se logran por sí mismos. La verdadera fuerza que impulsa estos cambios es la demanda y denuncia ciudadana. En primera instancia, el Estado otorga reconocimiento jurídico a los derechos humanos frente a la expectativa social, o a veces como respuesta a un movimiento ciudadano directamente organizado para lograr tal fin. También es necesario que continúe la atención y vigilancia ciudadana al proceso de institucionalización y protección de sus derechos humanos, una vez logrado el reconocimiento, exigiendo de los

gobiernos todos los esfuerzos necesarios para lograr su satisfacción plena.

Es ese sentido, y para efectos del diseño de la presente Política Pública, se ha retomado el amplio marco de diagnósticos, estudios, informes y recomendaciones tanto de los organismos internacionales como de las organizaciones nacionales de derechos humanos; así como los resultados de las consultas realizadas con instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos, grupos y sectores sociales en diferentes regiones del país.

Situaciones que impiden el goce pleno de los derechos humanos en el país

No obstante los avances en el campo institucional y legislativo en el período de transición a la democracia en Honduras desde 1981, las violaciones de derechos humanos se han caracterizado por la persistencia de episodios, con intensidad mayor o menor, pero con rasgos similares de motivación política e indefensión de las víctimas¹. Ello ha implicado que el Estado de Honduras haya sido objeto de condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La primera sentencia condenatoria ha sido en el caso de Manfredo Velásquez Rodríguez, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que fue asesinado y desaparecido por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras en 1981 y pasó a la historia por dar lugar a la primera sentencia dictada contra un Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988. La sentencia estableció que, entre 100 y 150 personas, fueron víctimas de desaparición forzada en Honduras en el período 1981-1984 como resultado de “una práctica sistemática estatal”.

El Estado de Honduras fue condenado y obligado a reparar a las víctimas y sus familiares en 1988 y de nuevo en 1989 por la desaparición

¹ Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR.

forzada del dirigente magisterial Saúl Godínez Cruz, el Estado de Honduras fue de nuevo condenado en 2003 por actos cometidos por las Fuerzas Armadas en 1992 siguiendo los mismos patrones que en la década anterior. En relación con este caso, el Ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, declaró ante la Corte Interamericana: “La politización del sistema judicial es lo que hace que el sistema todavía no funcione adecuadamente. La situación del sistema judicial fue de temor y de abdicar su obligación constitucional de investigar y juzgar esos crímenes. Hubo un temor generalizado, al punto que hasta hoy en día ninguno de los 184 casos analizados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha sido investigado y no se ha producido ninguna sentencia. Notoriamente, el sistema judicial fue ineficaz. Se interponían acciones en las instancias judiciales y las mismas no tenían efecto”.

La misma sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, definió la impunidad en los siguientes términos: “La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos”. Añadía esta sentencia que: “para cumplir con dicha obligación, el Estado tiene que combatir ésta por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.

A lo largo de los últimos 20 años, numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado la obligación de los Estados de combatir la impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos, habían alertado en sus informes recientes sobre el fenómeno de la impunidad. Específicamente y con respecto a la tortura, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, observó en mayo de 2009 sobre Honduras que “la impunidad generalizada cuya existencia ha reconocido el Estado Parte es una de las principales razones por las que no se ha logrado erradicar la tortura”, citando en particular casos relacionados con la Policía Nacional que no pasan de la etapa de investigación y presuntos criminales que permanecen en el ejercicio de sus funciones.

Parece claro que los precedentes de impunidad han contribuido a las violaciones recientes y que, tal y como muchos organismos internacionales han recomendado, el cumplimiento por el Estado de Honduras de su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar será la única manera de evitar “repetición crónica” de violaciones de los derechos humanos sufrida durante décadas.

El superar esta tendencia histórica de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Honduras y lograr fortalecerlos para su plena vigencia, es el desafío de la presente Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Por ello, para definir sus líneas estratégicas y áreas de acción, se han identificado una serie de factores y obstáculos que impiden revertir la impunidad en Honduras.

² Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 176.

MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Honduras ha ratificado una cantidad importante de Convenios o Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y sus respectivos Protocolos: Un total de 60 Tratados o Convenciones y 13 Protocolos Facultativos, incluidas las Convenciones más importante de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos³, que aluden a estos Instrumentos Internacionales.

El país ha recibido la visita y el correspondiente informe de por lo menos 17 instancias internacionales de derechos humanos, cuyas recomendaciones forman parte de la Normativa Internacional de Derechos Humanos en la cual se ha subrayado los retos y desafíos del país en esta materia. Sin desconocer vacíos al respecto, la legislación primaria y secundaria también ha incorporado una cantidad importante de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Lo anterior plantea una buena base para el reconocimiento de derechos humanos y para una agenda de trabajo orientada al cumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos, ámbito en el que los vacíos son mucho más profundos que el reconocimiento de los derechos humanos.

En materia institucional, hasta el año 2012, existían en el país dos instituciones con mandatos explícitos en materia de derechos humanos: La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio Público,

creada mediante Decreto Legislativo No. 228-93 del 13 de diciembre de 1993 y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), creado mediante el Decreto Legislativo No. 153-95 y se elevó a rango constitucional mediante el Decreto Legislativo No. 2-95.

El Decreto No. 2-95 del 7 de febrero de 1995 reformó el artículo 59 de la Constitución de la República en los términos siguientes: “Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una ley especial”. Por tanto, esta institución es la encargada de vigilar el respeto de los derechos y libertades fundamentales en Honduras.

Recientemente, mediante Decreto Legislativo No. 177-2010, se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, cuyo mandato es impulsar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo en materia de acceso a la justicia y derechos humanos, a través de la coordinación, formulación, promoción, implementación y evaluación de las Políticas Públicas en la materia, con el fin de generar una cultura de respeto a los derechos humanos, que se fundamente en el principio de la dignidad de

³ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; La Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, La Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo en materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, El Protocolo relativo a la Abolición de la Convención sobre Pena de Muerte, La Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.

la persona humana, como base del desarrollo social y democrático.

Una revisión de los compromisos adquiridos por el Estado de respetar, proteger y cumplir o hacer efectivos la amplia gama de derechos humanos que se ha reconocido en el marco jurídico internacional, así como la revisión de las competencias del conjunto de instituciones del Estado de Honduras, evidencia que corresponde a las mismas, y no solo a las instituciones denominadas de “derechos

humanos” asumir, en el marco de sus mandatos, tareas importantes para hacer efectivo el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Hay de por medio la necesidad de articular mecanismos que faciliten esta adopción de responsabilidades del conjunto de las instituciones públicas, la coordinación y diálogo entre ellas, la generación de reportes e información confiable y la planificación conjunta hacia el futuro. Éstas son áreas que la presente Política Pública pretende atender.

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA

¿QUÉ ES UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN GESTIÓN PÚBLICA Y CÓMO SE APLICA A HONDURAS?

La presente Política Pública y Plan Nacional de Acción parte del principio de que corresponde al Estado en su conjunto, y no solo a las instituciones denominadas de “derechos

humanos”, la realización de los derechos tal y como éstos están concebidos en la normativa internacional y nacional.

La única forma que tiene el Estado de Honduras para dar cumplimiento efectivo al conjunto de compromisos contraídos en materia de derechos humanos, es garantizando un enfoque de derechos en la totalidad de las instituciones públicas que, en atención a su mandato, asuman cada una las responsabilidades que le competen para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos; lo que supone, entre otras cosas, la incorporación formal del tema de los derechos humanos en la planificación y presupuestación institucional, así como en la interiorización de dicho enfoque por parte de las y los funcionarios públicos en todos los niveles de jerarquía estatal.

Entendemos por enfoque de derechos humanos en la gestión pública, un proceso de gestión pública centrada en las personas, que incorpora de manera explícita en las políticas públicas incluidos los presupuestos públicos y en la práctica cotidiana de las secretarías e instituciones y de las y los servidores y servidoras públicos en todos los niveles de la jerarquía estatal, las obligaciones contraídas por los Estados para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la población, siguiendo principios de máximo uso de recursos disponibles, realización progresiva, no regresión, equidad, igualdad y no discriminación, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, reconociendo y poniendo en práctica el carácter universal, inalienable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

La incorporación de este enfoque de derechos humanos de manera permanente, su institucionalización, perfeccionamiento y sostenibilidad en el tiempo, es el centro de la presente Política Pública en Derechos Humanos.

De acuerdo a la experiencia internacional, la incorporación del enfoque de derechos humanos en la gestión pública en estos términos implica lo siguiente⁴:

- 1) La identificación de los derechos reconocidos por el Estado y la definición

⁴ *Políticas Públicas y presupuestos con perspectiva de Derechos Humanos, Manual Operativo para servidoras y servidores públicos*, OACNUDH, México, 2010; y *20 Claves para*

conocer y comprender mejor los derechos humanos, OACNUDH, México, 2011.

precisa del contenido, alcance y atributos de cada uno de estos a fin de estar seguro de que se tiene una comprensión adecuada de lo que significa el derecho humano en cuestión. Los derechos humanos y su definición se encuentran por excelencia regulados en los Convenios o Tratados suscritos a nivel internacional, como en la Constitución de la República y otras leyes. No obstante, los contenidos de cada derecho humano también están desarrollados y tienen el mismo carácter vinculante que tienen los Tratados o Convenios las Observaciones Generales de cada uno de los Órganos del Tratado⁵, las Observaciones Finales e Informes de los Comités de Tratados, Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos específicamente realizadas al Estado de Honduras⁶, las sentencias de órganos jurisdiccionales sobre derechos humanos⁷, las resoluciones y las opiniones consultivas de las instancias internacionales de derechos humanos tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todo este cúmulo de instrumentos constituyen en su conjunto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La definición de los derechos humanos también implica la identificación de las personas que concretamente gozarán del derecho humano en cuestión, es decir, de las y los titulares o portadores de cada uno de los derechos humanos.

- 2) La definición detallada de las obligaciones que ha asumido el Estado en relación con cada uno de los derechos identificados. Las fuentes para este trabajo de definición son las mismas que las que se usan para

identificar las obligaciones: Los Convenios o Tratados suscritos por el país, las observaciones generales, las observaciones finales por país, sentencias, resoluciones y opiniones consultivas de las instancias internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

- 3) La definición de características específicas que deben adoptar cada uno de los servicios ofrecidos directamente por el Estado o a instancias de éste, y que implican la realización de los derechos humanos para que cumplan con criterios de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y aceptabilidad establecidos como elementos consustanciales de derechos humanos en base a la normativa internacional.
- 4) La identificación de procedimientos, dependencias y actores claves que intervienen, y que, por sus competencias, tienen responsabilidades directas en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos.
- 5) La traducción concreta de todos los elementos anteriores en los procesos de planificación, presupuesto, organización, instrumentación y evaluación de la gestión pública, de manera que puedan articularse en los planes o programas macro, como Visión de País, Plan de Nación, Plan de Gobierno, planes y programas plurianuales financiados con recursos nacionales o de la cooperación internacional, y más concretamente en los Planes Operativos Anuales de cada una de las secretarías e instituciones con sus respectivos presupuestos.

⁵ Ver compilación de las Observaciones de todos los Comités de Tratado (anexo 10: versión digital).

⁶ Ver recopilación de las Observaciones Finales e Informes de los Comités de Tratados, Relatores Especiales

y Grupos de Trabajo sobre Honduras (anexo 11: versión digital).

⁷ Ver recopilación de Sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra Honduras (anexo 12: versión digital).

Mediante los procesos anteriores, el enfoque de derechos humanos en la gestión pública busca imprimir las características siguientes:

- La gestión pública que define la realización de los derechos humanos como un objetivo central de todo el sector público y de sus procesos específicos: Políticas, programas, proyectos, presupuestos etc.
- La gestión pública reconoce como argumento intrínseco que el enfoque basado en los derechos humanos es el correcto desde el punto de vista jurídico.
- La gestión pública reconoce como argumento instrumental que un enfoque basado en los derechos humanos conduce a resultados mejores y más sostenibles en materia de desarrollo humano y del régimen democrático.
- La gestión pública asume plenamente las características de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y busca concretar estas características en los procesos, programas, proyectos, prácticas, planes y acciones institucionales.

Finalmente, un enfoque de derechos humanos que oriente la gestión pública y el proceso presupuestario lleva implícito el desarrollo de los principios siguientes:

- Principio de Máximo uso de recursos disponibles, lo que significa que el Estado debe realizar todo el esfuerzo que sea necesario para cumplir las metas planteadas con carácter prioritario en derechos humanos con todos los recursos que tenga a su alcance.

El argumento de la “insuficiencia” de recursos no exime al Gobierno de su

obligación de asegurar el disfrute más amplio posible de estos derechos. Adicionalmente, este principio pone bajo la lupa la priorización de las decisiones de Política Pública e implica el análisis del uso de los recursos, no solo en los sectores directamente relacionados con los derechos humanos, sino de toda la gestión pública.

- Realización progresiva, que establece para el Estado la obligación de mejorar la asignación presupuestaria para determinada necesidad o grupo social. Este principio reconoce que no todos los derechos humanos pueden ejercerse plenamente de inmediato, pero impone la obligación al Estado para que, de manera progresiva y lo más rápidamente posible, se avance hacia la plena realización de los derechos humanos y que las asignaciones presupuestarias sigan esta lógica.
- El principio anterior se relaciona con el de No regresión, implica que una vez conseguido el avance en un derecho humano no deben haber involuciones o retrocesos.
- No discriminación e igualdad, busca asegurar que los recursos presupuestarios sean asignados a programas específicos con el fin de avanzar hacia la igualdad y equidad y la no discriminación en la sociedad, lo cual es conocido como “acciones afirmativas”. Por otro lado, busca identificar dentro del presupuesto de un programa específico de gobierno, si sus recursos han sido asignados con criterios de equidad y además si, en el ejercicio de los recursos, se ha promovido la desigualdad o la discriminación para corregir tal situación.
- Transparencia, que implica que durante todo el proceso presupuestario

(formulación, aprobación, ejecución, evaluación, fiscalización y liquidación) exista información disponible que permita evaluar la asignación de los recursos, bajo todos los principios y consideraciones antes señalados, y lo más desagregado posible. Que a su vez, la información sea clara, oportuna, consistente, detallada y en formatos que permitan un genuino análisis.

- Rendición de cuentas, implica también que el Estado ofrezca explicaciones detalladas y fundamentadas para justificar sus acciones y decisiones presupuestarias durante todo el proceso.
- Participación ciudadana, implica que en el proceso presupuestario se ofrezca la oportunidad para que la ciudadanía interesada pueda tomar parte en las acciones y decisiones vinculadas al presupuesto y recoger de la manera más amplia posible, las propuestas e inquietudes de los diversos grupos de la sociedad. La participación no se reduce a consultas esporádicas que están diseñadas más para legitimar decisiones ya tomadas que para recibir y utilizar la
- Retroalimentación de la sociedad en función de sus necesidades y problemáticas particulares. Un proceso participativo lleva a mejores propuestas, a reflejar con mayor fidelidad las necesidades de la gente, a hacerla corresponsable de la toma de decisiones y a promover una mayor eficiencia del gasto.

Retomando los elementos anteriores, la presente Política Pública, a través de sus objetivos, componentes, lineamientos y acciones estratégicas, ofrece una ruta a seguir para incorporar un enfoque de derechos humanos en la gestión pública hondureña, como medio para hacer efectivos los derechos humanos de manera progresiva y sistemática.

LINEAMIENTOS

Para el mejor abordaje metodológico se agrupan los derechos humanos y grupos de población que son objeto de abordaje en el Plan, en lineamientos estratégicos, a fin de asumir la base teórica y conceptual necesaria que permita comparar obligaciones nacionales e internacionales suscritas por el Estado hondureño con su cumplimiento:

- **Lineamiento estratégico sobre Seguridad Humana:** Este lineamiento integra los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de dichos temas se encuentran el derecho al agua, vivienda adecuada, trabajo, seguridad social, desarrollo, cultura, educación, salud y derechos sexuales y reproductivos.
- **Lineamiento estratégico sobre Sistema de Justicia:** Integra los derechos a la vida, integridad y libertad personal, seguridad y el acceso a la justicia.

- **Lineamiento estratégico sobre Democracia:** Integra los derechos a la igualdad y a la no discriminación, acceso a la información pública, libertad de expresión y el derecho a la participación ciudadana.
- **Lineamiento estratégico sobre Grupos de Población en posición de vulnerabilidad:** Aborda los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, mujeres, migrantes, niñez, juventud, diversidad sexual, personas con discapacidad, juventud, defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, personas privadas de su libertad en centros de reclusión y personas adultas mayores.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: SEGURIDAD HUMANA

La seguridad humana se define como la necesidad “de evitar amenazas tales como la enfermedad, el hambre, el desempleo, el crimen, el conflicto social, la represión política y los riesgos ambientales”⁸. Significa crear las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir y desarrollarse en circunstancias acordes con su dignidad intrínseca y asegurar un nivel de vida adecuado. Fue reconocida por primera vez internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948⁹ e implica, de acuerdo con lo señalado en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, asimismo, tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el informe *Nuevas dimensiones de la seguridad humana* (1994)¹⁰, menciona cuatro características:

⁸ Devyani Mani, *Human Security and Local Development*, Centro de Desarrollo Regional de las Naciones Unidas.

⁹ La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948.

¹⁰ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Nuevas dimensiones de la seguridad humana*, Nueva York, 1994.

1. La seguridad humana es una preocupación universal. Se refiere a todas las personas, tanto de países ricos como pobres.
2. La seguridad humana tiene un carácter interdependiente. Cuando la seguridad de la población está amenazada en cualquier parte del mundo, es probable que todos los países se vean afectados.
3. Es más efectivo velar por la seguridad humana mediante la prevención temprana que con una intervención posterior.
4. La seguridad humana está centrada en el ser humano; se preocupa por la forma en que las personas viven en una sociedad, la libertad con que eligen diversas opciones a las oportunidades. Implica que las personas tengan opciones y ejerzan sus derechos en forma segura y libre, y que puedan confiar en que las oportunidades que tienen hoy no desaparecerán.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: SISTEMA DE JUSTICIA

En el Lineamiento Estratégico sobre el Sistema de Justicia se engloban los temas de control, prevención del delito y seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como del sistema penitenciario. Dichos temas contemplan el derecho a la libertad individual, seguridad e integridad personales, acceso a la justicia, debido proceso y los derechos de las personas privadas de su libertad.

El campo de la “justicia” es uno de los más importantes, en el que se define la vigencia de los derechos humanos, donde se prueba si las libertades y garantías reconocidas a las personas tienen o no aplicación real en las comunidades humanas¹¹.

El Estado debe organizar el aparato y estructura gubernamental de manera que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho humano conculcado y, en su caso, la

reparación de los daños producidos.¹² La relevancia del derecho humano de acceso a la justicia y debido proceso, radica precisamente en su carácter instrumental para la exigibilidad judicial del resto de los derechos humanos.

Las políticas y estrategias de control y prevención del delito y seguridad pública son también un medio para hacer efectivos los derechos humanos de las personas. En este sentido y desde una perspectiva democrática, de respeto a los derechos humanos, se hace referencia a la seguridad ciudadana en lugar de seguridad pública, pues se considera que el concepto de seguridad pública está vinculado a una visión del Estado que se preocupa más por garantizar el orden por el orden mismo; en cambio, la seguridad ciudadana remite a sistemas en los que se promueven modelos policiales acordes con la participación de la población y la ciudadanía. Además, ésta última no se limita solamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de todas las personas¹³.

¹¹ Juan E. Méndez, *El acceso a la justicia, un enfoque desde los derechos humanos, Acceso a la justicia y equidad. Estudios en siete países de América Latina*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Banco Interamericano de Desarrollo, San José, 2000. página 16.

¹² Cfr. corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C, núm. 4, párrafos 166-167-

¹³ Álvarez Icaza Emilio, “Seguridad pública, derechos humanos y cultura de la legalidad”, en *Seguridad Pública, prevención del delito y derechos humanos: construyendo alternativas desde la sociedad civil y los organismos públicos de*

Por lo anterior y debido a que el reto actual de los gobiernos democráticos es controlar el crimen y la violencia desde un enfoque de protección, respeto y plena vigencia de los derechos humanos, es necesario que se plantee el cambio de un modelo de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana. A partir de esto, se debe atender al fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas y de la sociedad civil para encontrar y poner en

práctica métodos y estrategias eficaces para controlar, prevenir y reducir la violencia.

El sistema de justicia se enfoca en el análisis de la seguridad ciudadana en base a los derechos humanos de: Integridad, libertad y seguridad personales y acceso a la justicia con fundamento en que las políticas de seguridad y prevención del delito tienen un efecto directo en estos derechos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DEMOCRACIA

Una democracia auténtica y estable necesita construir mecanismos formales e informales para impulsar la libertad de asociación y ampliar la libertad de expresión responsablemente. “Las demandas [de la democracia] no son sólo ideales participativos, sino también ideales sustantivos de la igualdad y su aplicación¹⁴.” Los derechos humanos que forman parte de este lineamiento estratégico son derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho al acceso a la información, derecho a la libertad de expresión, y derecho a la participación.

Estos derechos humanos dan contenido sustantivo y no solo formal a la democracia, y tienen una relación directa en la manera en que la ciudadanía se relaciona y convive entre sí y en cómo se relaciona con las instancias públicas y cómo éstas se relacionan con ella.

La no discriminación es una de las vías para alcanzar la igualdad, tanto formal como sustancial. Es, a la vez, un derecho en sí mismo y una condición previa al goce y ejercicio de los demás derechos humanos.

La eliminación de la discriminación tiene relación directa con la democracia y la participación activa. La Carta Democrática

Interamericana expresa que la “eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa [...] contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana¹⁵.”

Desde las instituciones públicas, la democracia se debe construir con base en el reconocimiento de derechos y libertades, y en la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia supone no solo un conjunto de acciones, normas y mecanismos, sino una cultura democrática de respeto a cada persona como sujeto de derechos, como principio y fin del Estado, y como mandante en relación con el mandatario.

El derecho a la información pública tutela el acceso que deben tener las y los gobernados, a la información veraz sobre la actuación de sus gobernantes. Es un derecho instrumental para el goce y ejercicio de otros derechos, pues posibilita su justiciabilidad y coadyuva al ejercicio de la democracia y la libertad de expresión¹⁶. Todos los presupuestos

derechos humanos, Fundar y Red de todos los Derechos para Todos, México, páginas 37-38.

¹⁴ Calsamiglia Alberto, “Constitucionalismo y democracia”, en Harold Hongju Koh y Ronald C. Slye

(comps.), *Democracia deliberativa y derechos humanos*, Barcelona, Gedisa, 2004.

¹⁵ Carta Democrática Interamericana, artículo 9, 2001.

¹⁶ Carbonell Miguel, “El derecho de acceso a la información como derecho fundamental”, en Sergio

democráticos necesariamente dependen en algún momento del cumplimiento del derecho de acceso a la información, entendido en sentido amplio. La democracia exige votos, voces, información veraz de los medios y acceso efectivo a la información pública¹⁷. En una interpretación amplia del derecho de acceso a la información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho a la verdad como el derecho de la sociedad a obtener y recibir información sobre las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro, así como el derecho de los familiares de las víctimas a una reparación integral.

Respecto del derecho humano a la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental inalienable e inherente a las personas. Este derecho conlleva los correlatos de buscar, recibir y difundir opiniones e ideas de todo tipo. Su importancia ha sido expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que es: “una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también *conditio sine qua non* para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre¹⁸”.

López-Ayllon (coord.), *Democracia, transparencia y constitución: propuestas para un debate necesario*, UNAM, México, 2006.

¹⁷ González Alcántara Juan Luis, “Transparencia y acceso a la información judicial”, en José Antonio Caballero Juárez, *El acceso a la información judicial en México: una visión comparada*, México, UNAM, Due Process of Law Foundation/Instituto de Investigaciones para la Justicia/Open Society Institute, México, 2005.

El pleno ejercicio de los derechos políticos contribuye a la igualdad de las y los ciudadanos en la esfera pública, en tanto que les da voz para que expresen sus demandas y participen en la solución de los problemas sociales, en diversas modalidades y con distintas intensidades, desde la discusión de los problemas de su lugar de residencia, el ejercicio del sufragio o la participación en partidos políticos y en cargos de representación o de toma de decisiones políticas.

El derecho a participar en los asuntos públicos se refiere a la posibilidad real de obtener información y de participar en la discusión de todo lo relativo al poder político e incluye el ejercicio de los tres poderes en los tres órdenes de gobierno¹⁹.

Es claro que la democracia no solo se construye mediante el respeto, la protección, promoción y la garantía de los derechos que se mencionan en este núcleo.

La seguridad humana mediante condiciones de vida digna, y la eficacia del sistema de justicia en su conjunto, son factores fundamentales para este derecho y, por ello, son tratados cada uno en una parte del presente Plan. La democracia se construye mediante el ejercicio de todos los derechos, y no será integral mientras no existan los mecanismos legales, políticos, económicos, sociales y culturales que la garanticen.

El lineamiento sobre Democracia, desarrollado en la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos entiende el

¹⁸ Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-5/85, de 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 70.9, Carta Democrática Interamericana, artículo 4, 2001.

¹⁹ Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación general número 25 de 12 de julio de 1996, sobre Derecho a participar en asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.

buen gobierno como una parte sustancial de la democracia. Sobre este particular, la Comisión de Derechos Humanos en la Resolución 2000/4 ha definido buen gobierno como “el ejercicio de la autoridad por medio de procesos políticos e institucionales transparentes y responsables que fomenten la participación ciudadana” y ha establecido como atributos del buen gobierno: La gestión transparente, responsable, consecuente, participativa y sensible a las necesidades y aspiraciones de la población.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su publicación *Prácticas de Buen Gobierno para los Derechos Humanos*, pág. 2. 2008, ha planteado el principio que: “si no hay buena gobernanza, los derechos humanos no

pueden ser respetados y protegidos de manera sostenible”.

En atención de lo anterior, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos incorpora el tema del buen gobierno en las acciones estratégicas del Plan a través de 8 componentes que responden a los atributos del buen gobierno planteados por el Consejo de Derechos Humanos, tal como se muestra en el siguiente cuadro que articula la vinculación de los atributos del buen gobierno, los componentes del Plan Nacional de Acción y las líneas de trabajo en cada componente.

Atributos de buen gobierno	Componentes del Plan Nacional de Acción en DDHH	No de Acciones del PNADH
Gestión transparente	Rendición de cuentas y transparencia	59
Gestión responsable y consecuente	Recepción de los derechos en la legislación.	175
	Recepción de los derechos en las políticas públicas.	349
	Desarrollo de capacidades en el Estado.	203
	Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.	79
	Lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos y reparación.	69
Gestión participativa, sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población	Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.	110
	Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.	101

Las principales acciones de buen gobierno en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos son las siguientes:

Gestión transparente y participativa y sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población:

1. Desarrollar una estrategia para empoderar a la ciudadanía sobre la información relativa a presupuestos públicos a fin de facilitar su aporte a los procesos de toma

de decisiones (Plan de Gobierno Abierto. 2012).

2. Establecer mecanismos permanentes de diálogo, control social y rendición de cuentas hacia las y los portadores del derecho y sus organizaciones, en relación con la planificación anual y sus indicadores.
3. Realizar una construcción participativa e interinstitucional de los indicadores para

respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos desarrollados en la presente Política que permita rendir cuenta de los avances

Gestión responsable y consecuente

1. Crear y fortalecer la carrera administrativa con base a méritos personales y profesionales que manda la Ley de Servicio Civil, de manera sólida, sistemática y progresiva. (S)
2. Ligar un porcentaje de la deuda política electoral a la puesta en marcha de programas de institucionalidad, de democratización interna de los partidos y de formación sobre los derechos políticos de las y los ciudadanos y su responsabilidad al respecto.
3. Monitorear y hacer transparentes los recursos económicos que administran los partidos políticos, así como sus programas de fortalecimiento y democratización.
4. Incorporar de manera explícita los derechos humanos, con procesos de participación activa de las y los titulares o portadores de derechos, en todas las políticas, programas, planes, proyectos y procesos de las Secretarías e instituciones, de manera particular en los POAS y presupuestos de cada una de las instituciones del Estado.
5. Instalar una comisión interinstitucional para armonizar la normativa interna con la normativa internacional en derechos humanos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: GRUPOS DE POBLACIÓN EN POSICIÓN DE VULNERABILIDAD

Este lineamiento propone abordar de manera especializada lo atinente a los grupos de población que se encuentran en situación de discriminación o vulnerabilidad a fin de analizar el estado de sus derechos y las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado de Honduras respecto a estos grupos de población a fin de generar una base mínima de condiciones de equidad, bajo los siguientes principios²⁰:

- **Universalidad.** Los derechos humanos son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual e identidad de género, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva, pues estos

derechos son de y para todas y todos. Esta característica también se refiere a que son derechos aceptados por todos los Estados.

- **Indivisibilidad e interdependencia.** Los derechos humanos están relacionados entre sí, de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al derecho a la salud y al derecho a la alimentación. Por lo anterior, los derechos humanos deben considerarse como un conjunto inseparable entre sí.
- **Realización progresiva de los derechos y no retroceso²¹.** Este principio exige al Estado asignar los recursos adecuados para

²⁰ Cfr. *Políticas Públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos, Manual Operativo para servidoras y servidores públicos*, OACNUDH, México, 2010; y *20 Claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos*, OACNUDH, México, 2011.

²¹ PIDESC, Artículo 2, párrafo 1, Directrices de Maastricht, párrafo 8 sobre “Margen de discreción” y párrafo 9 sobre “Niveles mínimos esenciales”. (Ver también la “Aplicación interna del pacto”).

el avance progresivo en el cumplimiento de los derechos, de acuerdo con el de máxima utilización de recursos disponibles. Este principio reconoce que la plena efectividad de todos los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales, no podrá lograrse en un breve período de tiempo. Sin embargo, obliga al Estado a que, de manera progresiva y lo más rápido posible, avance hacia la plena realización de los derechos por medio de la movilización de los recursos monetarios necesarios. Asimismo, el Estado está obligado a satisfacer, por lo menos, niveles mínimos esenciales de estos derechos. Una vez que se ha conseguido el avance de un derecho no hay cabida para un retroceso, es decir, el goce de éste debe mantenerse o elevarse.

- **No discriminación e igualdad**²². Este principio busca asegurar que los recursos presupuestarios sean asignados mediante criterios de equidad, de manera tal que promuevan la igualdad entre grupos que se encuentran en situación de discriminación y/o exclusión²³.

“El principio de igualdad y no discriminación implica también que se debe garantizar que las acciones y presupuestos asociados a éstas presten la debida atención a sectores y subsectores de actuación gubernamental que tengan particular relación y/o favorezcan a grupos e individuos en situaciones de exclusión y/o discriminación²⁴.” El principio de no discriminación y la ca-

racterística de universalidad no deben representar un impedimento para “reconocer ciertos grupos cuyos integrantes necesitan protección particular”²⁵. Por ello, existen numerosos instrumentos de derechos humanos enfocados a hacer visibles las necesidades específicas, por ejemplo, de las niñas y niños, de los pueblos indígenas, de las personas migrantes y refugiadas, de las personas con discapacidad, entre otros.

De esta manera, el Estado se obliga a implementar medidas especiales de carácter temporal para grupos específicos, “con el fin de corregir los efectos a largo plazo de una discriminación ejercida en épocas anteriores”²⁶ y con la finalidad de coadyuvar a garantizar de forma plena sus derechos humanos, siempre y cuando dichas acciones sean objetivas y debidamente justificadas para no correr el riesgo de que representen privilegios en detrimento de otros grupos²⁷. Por otro lado, una vez alcanzadas las condiciones de igualdad de oportunidades y trato respecto de los demás grupos, este tipo de medidas deben ser absueltas para evitar actos de discriminación.

- **La transversalidad e integralidad**. Este principio alude a la obligación del Estado de considerar que los derechos humanos son indivisibles, universales e interdependientes, lo cual implica que la perspectiva de derechos debe permear todas las estructuras gubernamentales.

²² PIDESC, Artículo 2, párrafo 2, CEDAW, *Directrices de Maastricht*, párrafo 12.

²³ ONU, *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo*, Nueva York, Ginebra, 2006, página 12.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ OACNUDH y Unión Interparlamentaria, *Derechos Humanos, Manual para Parlamentarios*, Francia, 2005, página 6.

²⁶ Para una mejor comprensión de las medidas temporales se puede consultar la recomendación general

número 25, de la CEDAW, que define estas medidas como un amplio universo de acciones que tienen impacto en los diversos órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), como los sistemas de cuotas de género, la etiquetación de presupuesto, la capacitación específica, entre otras.

²⁷ OACNUDH y Unión Interparlamentaria *Derechos Humanos, Manual para Parlamentarios*, Francia, 2005, página 8.

OBJETIVOS, COMPONENTES Y TIPO DE ACCIONES

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y CÓMO?

OBJETIVO GENERAL

Lograr el pleno goce de los derechos humanos de las personas en Honduras, atendiendo a las situaciones estructurales generadoras de violaciones de derechos humanos como la impunidad, la inseguridad ciudadana, la desigualdad, los vacíos históricos de gobernabilidad y la prevalencia de valores culturales contrarios a los derechos humanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Institucionalizar y fortalecer un enfoque de derechos humanos en la gestión pública que genere condiciones jurídicas, institucionales y socioculturales en la estructura del Estado de Honduras en su conjunto y en las y los servidoras públicas de todos los niveles para el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos.
2. Crear condiciones socioculturales a nivel de la ciudadanía en general, portadores o titulares de derechos humanos para un ejercicio pleno del derecho y deber de todos y todas de promover los derechos humanos.

COMPONENTES Y TIPO DE ACCIONES

Para el cumplimiento de los objetivos se han definido ocho componentes. Los componentes planteados en la presente Política se construyeron a partir de dos fuentes:

- La experiencia internacional que ha venido sistematizando los componentes y tipo de acciones que son relevantes para la formulación de políticas públicas y planes de acción en materia de derechos humanos²⁸.
- La sistematización de las recomendaciones de los Órganos y Comités de Tratados, Relatores Especiales y Grupos de Trabajo del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión de Verdad, recomendaciones de las jornadas de consulta para el diseño de la Política y el Plan, de otras instancias ciudadanas y las recomendaciones de informes y estudios sobre derechos y temas relacionados. En total se sistematizaron 1,700 recomendaciones de 170 documentos. Las 1,700 recomendaciones se vaciaron en 30 tipos de acción que finalmente se agruparon en los ocho componentes.
- Los componentes se definen como las grandes áreas que deben atenderse para que los países avancen en un efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Para el caso de Honduras se ha considerado pertinente trabajar en ocho grandes componentes que están orientados al cumplimiento de los objetivos específicos y que son los receptores de las acciones estratégicas:
 - 1) Recepción de los derechos en la legislación;
 - 2) Recepción de los derechos en las políticas públicas;

²⁸ Políticas Públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos, Manual Operativo para servidoras y servidores públicos, OACNUDH, México, 2010.

- 3) Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidoras y servidores públicos;
- 4) Desarrollo de capacidades en el Estado y adecuación de la estructura estatal;
- 5) Lucha contra impunidad por violaciones a los derechos humanos y reparación integral;
- 6) Rendición de cuentas y transparencia;
- 7) Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos humanos para conocer y demandar los derechos; y,
- 8) Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Los primeros seis componentes operativizan o dan cumplimiento al objetivo 1:

<p>Objetivo 1:</p> <p>Institucionalizar y fortalecer un enfoque de derechos humanos en la gestión pública que genere condiciones jurídicas, institucionales y socioculturales en la estructura del Estado de Honduras, en su conjunto y en las y los servidores públicos de todos los niveles para el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos.</p>	<p>Implica la realización de los Componentes siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Recepción del derecho en la legislación; 2) Recepción del derecho en las políticas públicas; 3) Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos; 4) Desarrollo de capacidades en el Estado y adecuación de la estructura estatal; 5) Lucha contra impunidad por violaciones a los derechos humanos y reparación integral; y, 6) Rendición de cuentas y transparencia.
--	--

La realización de actividades en los seis componentes tiene la intencionalidad de institucionalizar y fortalecer un enfoque de derechos humanos en la gestión pública de manera permanente y sistemática.

A continuación se presentan las acciones genéricas de cada componente. El Plan Nacional de Acción desarrolla estas actividades e incluye otras más específicas.

Componente: Recepción de los derechos en la legislación.	
<p>Definición: Este componente busca que los derechos humanos estén explícitamente contemplados y desarrollados en la legislación nacional, tanto en la legislación primaria como secundaria. Dicho desarrollo no debe ser contradictorio con la normativa internacional de derechos humanos ni debe tener estándares inferiores a los establecidos en dicha normativa.</p>	<p>Tipos de acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Suscripción de Tratados y Protocolos sobre derechos humanos; 2) Adecuación de normativa interna a los estándares internacionales de derechos humanos; 3) Nueva normativa interna para proteger o hacer efectivos los derechos humanos; y, 4) Cumplimiento de la legislación existente sobre aspectos particularmente importantes para los derechos humanos.

Componente: Recepción de los derechos en las políticas públicas.

Definición: Este componente busca que los derechos humanos estén explícitamente contemplados y desarrollados en la legislación nacional en diferentes instrumentos de la gestión pública: Políticas, programas, planes, proyectos, presupuestos, etc.

Tipos de acciones:

- 1) Planes, programas, proyectos y acciones para atender problemas específicos; y
- 2) Transversalización de derechos humanos en planes anuales y presupuestos de instituciones públicas.

Componente: Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.

Definición: Este componente busca que las instituciones públicas y las y los servidores públicos, no solo conozcan de manera programática los derechos humanos, sino que adquieran un compromiso ético con su puesta en marcha.

Tipos de acciones:

- 1) Capacitación y sensibilización sobre derechos humanos a servidores públicos;
- 2) Protocolos de atención al público garantizando derechos y eliminación de obstáculos; y,
- 3) Diálogo, trabajo conjunto ciudadanía-Estado.

Este componente implica un desafío importante en el proceso de formación sobre derechos humanos a las y los servidores públicos, ya que implica el deber de transmitir buenos contenidos pero también generar sensibilidad y compromisos a favor de los derechos humanos, lo que debe llevar a las y los servidores públicos a reflexionar y autocriticar su práctica personal e institucional y generar nuevas actitudes frente la población en calidad de portadora de derechos y no solo depositaria o usuaria de servicios.

Componente: Desarrollo de capacidades en el Estado y adecuación de la estructura estatal.

Definición: Este componente busca desarrollar las capacidades técnicas que requieren las instituciones públicas para hacer efectivos los derechos humanos, dependiendo de la situación de las instituciones en particular, de la magnitud de las tareas, y desde acciones para desarrollar capacidades de coordinación interinstitucional, asistencia internacional hasta procesos de depuración, modificación de la estructura institucional o creación de nuevas instituciones.

Tipos de acciones:

- 1) Coordinación interinstitucional e intersectorial;
- 2) Diagnósticos, informes, estudios e investigaciones;
- 3) Sistemas de información, monitoreo y evaluación;
- 4) Vigilancia y monitoreo de terceros especialmente sensibles para los derechos humanos;
- 5) Mecanismos de prevención de conflictos, altamente respetuosos de los derechos humanos y de las obligaciones del Estado;
- 6) Asistencia técnica internacional;
- 7) Fortalecimiento institucional;
- 8) Recursos técnicos, humanos, infraestructura y presupuesto; y,
- 9) Readecuación o transformación institucional.

Componente: Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.

Definición: Este componente también se refiere a la generación de capacidades del Estado en dos aspectos específicos, que por su importancia se han separado en otro componente: a) El desarrollo de mecanismos institucionales, cercanos al ciudadano(a), que hagan exigible el cumplimiento de un derecho o grupo de derechos en particular, incluidos los DESC, y se evite de esa manera llegar a una situación extrema de violación de derechos. b) El desarrollo de capacidades para que de ocurrir una violación, se sancione a las y los responsables y se repare integralmente a las víctimas y sus familiares.

Tipos de acciones:

- 1) Mecanismos de denuncia, reclamos o quejas;
- 2) Acciones para investigar, perseguir, enjuiciar y sancionar las violaciones de derechos humanos; y,
- 3) Reparación integral a víctimas y familiares, incluidos servicios de diferente tipo.

Componente: Rendición de cuentas y transparencia.

Definición: Este componente busca que las instituciones rompan la opacidad y transparenten su gestión, realizando acciones explícitas para informar sobre sus actuaciones y resultados orientados a hacer efectivos los derechos humanos y que estén en condiciones de responder ante cualquier solicitud de información sobre su gestión.

Tipos de acciones:

- 1) Preparación y difusión de informes ante los Comités de Tratados;
- 2) Publicación de información de oficio en forma permanente; y,
- 3) Respuesta a solicitudes de acceso a la información del público, prensa, organismos académicos, ONGs y otros.

Para operativizar el objetivo 2, se plantean dos componentes:

Objetivo 2:

Crear condiciones socioculturales a nivel de la ciudadanía en general, portadores o titulares de derechos para un ejercicio pleno del derecho y deber de todos y todas de promover y defender los derechos humanos.

- 1) Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos; y,
- 2) Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.

Componente: Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.

Definición: Este componente busca desarrollar e informar a las y los ciudadanos de su calidad de titulares de derechos y generar capacidades para una ciudadanía activa, informada y responsable. Se busca además que las organizaciones que trabajan temas de derechos humanos y que no se reconocen a sí mismas como organismos de derechos humanos lo hagan e incorporen el enfoque de derechos humanos en su trabajo, así como la vivencia de valores de derechos humanos en las prácticas institucionales y personales.

Tipos de acciones:

- 1) Capacitación hacia la población y organismos de ciudadanía;
- 2) Participación ciudadana y de la academia; y
- 3) Monitoreo o veeduría social de la gestión pública.

Este componente parte del principio de que la agenda de derechos da inicio en la ciudadanía a partir de demandas y necesidades que posteriormente se convierten en derechos, y que esta energía que empuja la agenda sigue siendo indispensable. Si bien, este componente forma parte sustancial de la política, una cantidad importante de las acciones serán ejecutadas de manera autónoma por las y los ciudadanos y sus organizaciones. El hecho que estas actividades formen parte de una política pública, no supedita en ningún sentido el actuar de las organizaciones ciudadanas con respecto a ninguna institución del Estado. El componente está abierto a un copatrocinio de las acciones que sea respetuoso del actuar de cada uno por parte de instituciones públicas organizaciones de sociedad civil y organismos de cooperación internacional.

Componente: Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.	
<p>Definición: Este componente permite revertir valores y prácticas culturales en la sociedad que son una fuente importante de violaciones a derechos humanos: autoritarismo, patriarcado, falta de respeto a las diferencias y al otro(a) en general, los valores pro violencia en cualquiera de sus forma, así como la equivalencia equívoca que hace el conjunto de la población, especialmente los sectores populares entre derechos humanos y la defensa de delincuentes.</p>	<p>Tipos de acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Investigación para saber qué está pasando en la construcción de valores en la sociedad, que permita orientar el trabajo de difusión masiva y de educación; 2) Difusión y sensibilización de ciudadanía sobre derechos humanos; 3) Incorporación de contenidos de derechos humanos en la currícula de la educación preescolar, primaria, media, superior, técnica y no formal; 4) Desmontaje por parte de los actores mismos de prácticas que contradicen los contenidos de derechos humanos en la institucionalidad pública a nivel de preescolar, primaria, media, superior, técnica y no formal; 5) Producción y distribución estratégica de material educativo promocional; y 6) Uso y promoción del arte como medio educativo.

INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS

Política Pública en Derechos Humanos:

Para su implementación y monitoreo, la Política Pública hará uso de los siguientes instrumentos:

1. Plan Nacional de Acción, que consta a su vez de 27 planes específicos por derecho y por grupo de población;
2. Planes Operativos Anuales de las Instituciones Públicas;
3. Comité Interinstitucional de instituciones públicas, responsable de favorecer la coordinación en la ejecución de la Política y Plan de Acción;
4. Consejo Consultivo Ciudadano de organizaciones de sociedad civil para asesorar y monitorear la ejecución de la Política y Plan de Acción;
5. Programas, proyecto y acciones de las organizaciones de sociedad civil que llevan adelante la agenda de derechos humanos en el país mediante las acciones que, en forma autónoma, realizan para apoyar directa o indirectamente la presente Política Pública;
6. Informe anual de cumplimiento con recomendaciones para los POA del próximo período de gobierno; y
7. Evaluaciones intermedias bianuales que den lugar a revisiones generales del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos:

El Plan Nacional de Acción es el principal instrumento de la presente Política. El Plan contempla 27 planes específicos por derecho y por grupo de población colocado en posición de vulnerabilidad agrupados por los lineamientos estratégicos de la siguiente manera:

El Lineamiento Estratégico sobre Seguridad humana comprende:

- Derecho a la Educación;
- Derecho a la Salud;
- Derechos Sexuales y Reproductivos;
- Derecho a la Alimentación;
- Derecho al Trabajo
- Derecho a la Vivienda Adecuada;
- Derecho al Agua;
- Derecho al Medio Ambiente Sano; y,
- Derecho a la Cultura.

Lineamiento Estratégico sobre Sistema de Justicia:

- Derecho a la vida;
- Derecho a la integridad y libertad personal;
- Derecho a la seguridad;
- Derecho a la justicia; y,
- Derecho a la verdad.

Lineamiento Estratégico sobre Democracia:

- Derecho al Acceso a la Información;
- Derecho a la Libertad de Expresión; y,
- Derechos Políticos o de Participación de la Ciudadanía en los Asuntos Públicos.

Lineamiento Estratégico sobre Grupos de población colocados en posición de vulnerabilidad:

- Niñez;
- Jóvenes;
- Personas Adultos Mayores;
- Pueblos Indígenas y Afrohondureños;
- Mujer;
- Migrantes;
- Diversidad Sexual;
- Personas con Discapacidad;

- Personas Privadas de Libertad en Centros de Reclusión; y,
- Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El Plan específico de cada derecho y grupo de población desarrolla los aspectos siguientes:

- 1) El marco jurídico internacional que incluye los Convenios o Tratados suscritos por el Estado de Honduras que amparan cada derecho, las obligaciones específicas del Estado en relación con cada derecho, los atributos y el alcance del derecho.

Dicho marco jurídico se ampara en una matriz que muestra los artículos de cada Convención relacionados al derecho en cuestión, los de la Constitución de la República que recogen el derecho, las instituciones públicas responsables de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho y las competencias legales de cada institución para asumir dichas responsabilidades;

- 2) Un diagnóstico corto de la situación de cada derecho; y,
- 3) Una matriz de planificación que define los resultados a esperar, acciones estratégicas, responsables, fecha e indicadores.

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO SOBRE SEGURIDAD HUMANA

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Marco Normativo

Marco Normativo Internacional

El reconocimiento del derecho humano a la educación aparece en una serie de instrumentos internacionales de manera implícita hasta su referencia explícita en la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las referencias sobre el derecho humano a la educación aparecen en los siguientes instrumentos:

- a. Declaración Universal de los Derechos Humanos: artículos 26 y 27 donde se declara el derecho a la educación y el derecho a la cultura como derechos humanos.
- b. Convención Americana de los Derechos Humanos: artículo 4, numeral 1; y artículo 26 sobre el derecho a la vida y la obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, respectivamente. Artículo 12 de su Protocolo Facultativo, conocido también como Protocolo de San Salvador.
- c. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: artículo 11, párrafo 1, donde se reconoce el derecho al nivel de vida adecuado; artículos 13 y 14, sobre el derecho a la educación; y artículo 15 sobre los derechos a la cultura y al beneficio del progreso científico.
- d. Convenio 169 de la OIT: artículo 2, numeral 2, literal b, sobre la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales; artículo 5 respecto de la aplicación del convenio y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales; artículos 22 y 23 sobre formación profesional culturalmente adecuada; artículos 26 al 31 sobre derecho a la educación, incluyendo la educación bilingüe.
- e. Literales G y H de la Observación General número 5 sobre derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad.
- f. Párrafos 36 al 42 de la Observación General número 6 sobre derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.
- g. Observación General número 13 del Comité sobre DESC.
- h. Párrafo 3 de la Observación General 17 del Comité de Derechos Civiles y Políticos sobre los derechos de los niños.
- i. Observación General 23 del Comité de Derechos Civiles y Políticos sobre derechos de las minorías.
- j. Observación General 23 del Comité de Derechos Civiles y Políticos sobre Igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
- k. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: artículo 1, donde define la discriminación contra la mujer; artículo 5, literal b, sobre educación familiar; artículo 10, sobre el derecho a la educación de la mujer; artículo 14, párrafo 2, inciso h, sobre el derecho de la mujer a gozar de condiciones de vida adecuadas.
- l. Convención sobre los Derechos del Niño: artículo 17 sobre acceso a la información y la cultura; artículo 6, párrafos 1 y 2; artículo 27, párrafos 1 y 2, literal c, sobre el derecho al más alto nivel de vida posible; artículo 23, sobre derechos de los niños con discapacidad; artículos 28, 29 y 30, sobre derecho a la educación, incluyendo la educación de niños de minorías étnicas.

En particular, el derecho a la educación está establecido en el párrafo 1 del artículo 13 referente al derecho a un nivel de vida adecuado del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)²⁹, donde se establece que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”.

Marco Normativo Nacional

En el derecho interno, el reconocimiento del derecho humano a la educación deriva de los derechos individuales y sociales reconocidos en la Constitución de la República³⁰ y derivada de ella en otros instrumentos legales secundarios.

- a) Constitución de la República: artículos 65 y 123, párrafo primero, 125, 141, 151 al 176.
- b) Ley Fundamental de Educación.
- c) Estatuto del Docente Hondureño.
- d) Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal.
- e) Reglamento para la administración de recursos del programa Matrícula Gratis.

Contenido del derecho

El derecho a la educación “es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a la niñez y a las y los adultos

marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico”³¹. La Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas precisa la fundamentación jurídica, el contenido normativo y las obligaciones del Estado y los agentes no estatales, en relación con el derecho a la educación. También en esta observación se identifican posibles violaciones en la materia, y se proponen medidas y estrategias para la aplicación de este derecho en el plano nacional.

Alcance del derecho

Los elementos del derecho a la educación implican que la misma debe: a) orientarse al desarrollo de la dignidad humana. b) capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. c) favorecer la comprensión entre todos los pueblos étnicos, y entre las naciones y los grupos raciales y religiosos.

En particular, el Comité sobre DESC establece cuatro características interrelacionadas como necesarias para el ejercicio pleno de este derecho³²:

- a) **Disponibilidad.** Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por

²⁹ El PIDESC fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; entró en vigor el 23 de marzo de 1971.

³⁰ Constitución de la República, decreto No. 131, 1981.

³¹ Comité DESC, Observación general núm. 13, 2002, párrafo 2.

³² *Ibidem*, párrafo 2.

ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos naturales, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información.

- b) **Accesibilidad.** Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todas las personas sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte.

La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:

- **No discriminación.** La educación debe ser accesible a todas las personas especialmente a los grupos vulnerabilizados y sin discriminación por ningún motivo.
- **Accesibilidad material.** La educación ha de ser accesible geográficamente moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización vecinal al núcleo poblacional; geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología o tecnológicamente, por medio de programas a distancia.
- **Accesibilidad económica.** La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior, mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que

implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.

- c) **Aceptabilidad.** La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para las y los estudiantes y, cuando proceda, para los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza.
- d) **Adaptabilidad.** La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de las y los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

Asimismo, la Observación General número 13 señala que en su implementación se debe “tener en cuenta ante todo los superiores intereses de las y los alumnos”. Asimismo reconoce que las personas “que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria” tienen derecho a la educación fundamental o a la enseñanza básica, conforme a la definición que figura en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos”.

Obligaciones del Estado ³³

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la educación impone obligaciones al Estado. Además de las obligaciones de efecto inmediato (obligación de no discriminación, de adoptar medidas y la progresividad)³⁴, el Estado tiene las siguientes obligaciones de carácter general³⁵:

³³ Los contenidos del presente apartado fueron retomados del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 2008.

³⁴ *Ibidem*, párrafos 17 a 19.

³⁵ *Ibidem*, párrafos 20 a 25.

- a) **Respetar:** El Estado debe abstenerse de obstaculizar o limitar el ejercicio del derecho a la educación. Por ejemplo, no debe proceder al cierre de centros escolares en funcionamiento o la interrupción del proceso formativo salvo por causa de fuerza mayor. Tampoco debe promover aumentos desproporcionados o discriminatorios en las matrículas que supongan un obstáculo insuperable para el acceso a diferentes niveles de calidad educativa.
- b) **Proteger:** El Estado debe impedir a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho a la educación. Por ejemplo, esta obligación implica la adopción de las medidas necesarias para impedir que particulares impidan el acceso a la educación de la población.
- c) **Cumplir:** Se subdivide en:
- a. **Facilitar:** El Estado debe adoptar medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer su derecho a la educación, incluyendo la educación intercultural y bilingüe y prestar asistencia para su realización.
 - b. **Promover:** El Estado debe adoptar medidas para que se difunda la educación universal, obligatoria y gratuita para todas las personas, incluyendo la generación y difusión de información adecuada sobre su ubicación, requisitos de admisión, derechos y obligaciones de las y los alumnos.
 - c. **Garantizar:** El Estado tiene la obligación de hacer efectivo el derecho cuando las personas no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos el derecho.
- d) **No discriminación:** Implica que en la realización del derecho no deben aplicarse medidas que excluyan del goce del mismo a personas o grupos de personas en razón de su condición social, étnica, género, preferencias religiosas, políticas, culturales, sexuales o de cualquier otra índole.

Diagnóstico sobre el derecho

La Educación en Honduras tiene como principal órgano rector a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, complementada -en el caso de la educación superior- por las Universidades Nacional Autónoma y Pedagógica de Honduras. Los principales instrumentos regulatorios los constituyen la Ley Fundamental de Educación, la Ley de Educación Superior y el Estatuto del Docente Hondureño.

Reconociendo importantes avances en la cobertura educativa en los últimos años, persisten desafíos en términos de cumplimiento efectivo del calendario escolar, el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación pública en el país.

De acuerdo con la Encuesta sobre prestación de servicios y seguimiento del gasto público (Educación y salud en Honduras)³⁶, presentada por el Banco Mundial en el período comprendido entre 1990 y 2007, el gasto del sector público en educación aumentó del 5% al 8,6% del PIB. El gasto total del Gobierno creció de un 17,3% en 1999 a un 32,5% en el 2007, casi duplicando en proporción el presupuesto total en casi más de ocho años. Hay más establecimientos escolares y más cantidad de alumnas y alumnos graduados. La cobertura creció a nivel de educación preescolar, media y terciaria. También, aumentó la proporción de niñas y niños matriculados en la escuela primaria que finalizan el sexto grado y bajó el

³⁶ Encuesta sobre prestación de servicios y seguimiento al gasto público en Educación y Vivienda en Honduras, Banco Mundial, 2010.

porcentaje de adultos que no pueden leer ni escribir. Asimismo, la producción de libros de texto aumentó y actualmente hay un programa de almuerzo escolar gratis en todas las escuelas del país.

El mismo estudio destaca que este incremento presupuestario en educación fue absorbido principalmente “por los salarios de los maestros”³⁷, y más allá de los incrementos -importantes- en materia de cobertura (14% en educación preescolar; 3.3% en educación primaria; 10% en educación básica; y 18% en

diversificado), no se observaron cambios sustanciales en los resultados en la enseñanza. Se señala en el mismo estudio que “los resultados de las evaluaciones estandarizadas en matemáticas e idioma español no han cambiado de modo significativo desde 1997. El o la alumna promedio de sexto grado obtenía un resultado de un 35% en matemáticas y de un 42% en idioma español en 1997. Los datos para el 2007 muestran una escasa mejora: 39% en matemáticas y un 45% en español” (Banco Mundial, 2008).

Porcentajes de cobertura en educación:

En términos de cobertura, desde el año 1990, Honduras ha mostrado progresos importantes tal como muestra el cuadro siguiente:

Año	Pre-Escolar	Primaria	Ciclo Común	Diversificado
1990	14.2	81.6	20.8	5.0
1991	21.3	86.8	24.2	6.8
1992	21.1	88.5	27.7	8.2
1993	21.3	86.5	26.6	7.6
1995	21.2	86.0	25.7	9.5
1996	25.3	86.3	25.9	8.8
1997	26.4	85.5	29.3	7.9
1998	26.3	87.0	31.2	9.2
1999	28.7	86.5	33.3	10.6
2001	37.3	88.3	37.2	11.3
2002	31.3	87.7	31.3	15.3
2003	23.3	81.1	34.3	19.0
2004	36.0	89.3	38.3	21.6
2005	34.3	89.4	39.0	22.8
2006	41.0	89.6	39.4	24.1
2007	40.0	88.8	39.2	25.9
2008	43.5	89.5	39.0	25.7
2009	44.5	89.5	38.4	26.2
2010	44.5	89.6	39.5	27.6
2011	45.7	88.1	39.2	27.8

Fuente: INE, serie asistencia escolar 1990-2011

³⁷ En 2009, los salarios y beneficios de educación llegaban a los 17,000 millones de Lempiras (USD 0,9 mil millones), o cerca del 84% del presupuesto de educación para dicho año. Esto implica un 58% de la masa salarial total del

Gobierno Central. En el año 2000 los salarios y beneficios comprendían cerca de 3.7 mil millones de Lempiras (USD 0,25 mil millones) o un 47% de la masa salarial total del Gobierno Central.

Estas cifras contrastan considerablemente con la información que arroja el Sistema de Indicadores Estadísticos Educativos³⁸ de la Secretaría de Educación, que reporta para el año 2012 índices de cobertura muy superiores, tal como se muestra a continuación:

Año	Pre-Escolar	Primaria	Ciclo Común	Diversificado
2012	78.3	98.92	59.84	31.62

Estos avances también se reflejan en la reducción de la tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años³⁹, del 25.4 en 1990 al 14.9% en el año 2011. Sin embargo, preocupa el incremento en términos absolutos, ya que de 629,790 personas analfabetas se ha pasado a 804,600 personas en la misma condición, de los cuales el 76% se encuentra en el área rural.

La gobernabilidad en el sistema de educación:

La tasa de repitencia en la educación primaria ha mostrado una tendencia a la reducción pasando de 12% en el año 2004 a 9.6% en el año 2011. Esta tasa es mayor en el primer y segundo grado (hasta 17.3%) y se reduce sensiblemente hacia el sexto grado (1.3%).

De acuerdo con los resultados de la evaluación cualitativa sobre gobernabilidad del sector educación realizada por el Banco Mundial⁴⁰, los principales problemas que afectan la buena gobernabilidad en el sistema de educación en Honduras, incluyen:

- a. Ausencia de rendición de cuentas de los distintos responsables dentro del Sistema Educativo tanto de las y los funcionarios públicos como de las y los maestros, de sus agremiaciones y de los donantes que intervienen en educación.
- b. Poco compromiso de las y los funcionarios y docentes, que se traduce en falta de voluntad política para solucionar los problemas de calidad de la educación, desinterés, poca disponibilidad e inasistencia a clases.

- c. Indebida interferencia de intereses partidistas o gremiales en el diseño, gestión y seguimiento de las políticas educativas, la cual desvirtúa el interés general y favorece intereses particulares (se mencionó en particular, la preocupación por la presencia de corrupción).
- d. Desorden y debilidad en la gestión administrativa desde la Secretaría de Educación a todo nivel (algunos ejemplos: poca coordinación, débil liderazgo, baja capacidad de gestión de las gerencias, desarticulación con las instituciones de capacitación de maestras y maestros, ausencia de un plan maestro de adquisiciones y distribución de textos, falta control de inventarios).
- e. Mala gestión, en todos los aspectos, de los recursos humanos docentes por parte de la Secretaría de Educación. Este es quizá uno de los puntos de mayor consenso a nivel regional y nacional. Se profundizó en cuatro aspectos:
 - (i) pobre formación inicial de las y los maestros.
 - (ii) inadecuados sistemas de selección y promoción de maestras y maestros.
 - (iii) precaria o casi nula capacitación del recurso docente -en general para actualizarlo, y en particular frente a las disposiciones del nuevo currículo nacional básico o del manejo del aula multigrado.
 - (iv) ausencia de supervisión, evaluación y sanción, agravada por la desconcentración de funciones, que hace que en los entornos cercanos al aula se priorice como principal problema la inasistencia de los

³⁸ Fuente: <http://190.5.81.199/SIEE/indicadoresDeCoberturaCalidad.php>.

³⁹ INE, Tasa de analfabetismo población de 15 años y más, 1990-2011.

⁴⁰ Informe de evaluación cualitativa de la gobernabilidad en el sector educación en Honduras, Banco Mundial. S.F.

- maestros y maestras a clases, la falta de supervisión y la absoluta impunidad frente a ello, y (v) la ausencia de rendición de cuentas al respecto.
- f. Insuficiencia de recursos de todo orden para el buen funcionamiento de la Educación: presupuesto, docentes, infraestructura, información, capacitación, pero, sobre todo, carencia de materiales educativos en las aulas.
 - g. Falta de seguimiento y evaluación al Sistema Educativo como tal. Implica desde incapacidad para aplicar el sistema nacional de evaluación de la calidad tanto en docentes como alumnado, la ausencia de mecanismos para aprender e institucionalizar los avances que se van logrando a nivel puntual, hasta la imposibilidad de legitimar ante el público decisiones políticas por la ausencia tanto de indicadores simples y pertinentes como de información oportuna y suficiente sobre el desempeño de los mismos.
 - h. Ausencia de monitoreo desde la sociedad civil al funcionamiento y desempeño del Sistema Educativo en Honduras, tanto a nivel de la escuela, como en los ámbitos regionales y nacional. Las distintas organizaciones e instituciones de la sociedad civil tienen importantes limitaciones para hacer de la educación en Honduras un tema sistemático de incidencia y propuesta. Se insistió en: (i) ausencia de información y rendición de cuentas por parte de las autoridades y gremios. (ii) débil comprensión y por ende aportes a la construcción de lo público en educación, que hace más difícil la definición y movilización de una agenda común a mediano y largo plazos. (iii) falta de recursos de todo orden para fortalecer y movilizar la participación de la sociedad civil organizada. (iv) la desconfianza generalizada entre actores, entre organizaciones y entre quienes actúan en el nivel nacional y quienes lo hacen en el nivel local o regional, y (v) ausencia de espacios efectivos de

encuentro entre la sociedad civil y las autoridades.

- i. Ausencia de la universidad y los medios de comunicación en la investigación y el debate público sobre la situación de la educación en Honduras, de tal manera que se enriquezca el manejo del mismo.
- j. Necesidad urgente de construir una noción de educación que se vincule de manera expresa con conceptos como: (i) vigencia de los derechos humanos fundamentales, incluyendo por supuesto el derecho a la educación. (ii) desarrollo con rostro humano. (iii) la violencia al interior de las familias y en el entorno comunitario y de la escuela. (iv) perspectiva de género. (v) atención a la diversidad cultural, y (vi) responsabilidad del Estado de no delegar sus funciones en educación.

Matriz sobre el derecho a la educación

Resultados de impacto

1. Incrementada la cobertura educativa en los distintos niveles (educación preescolar, básica y secundaria) a nivel nacional incorporando medidas de aseguramiento de la permanencia y aprobación.
2. Mejoradas las condiciones pedagógicas y curriculares para la calificación de la educación pública.
3. La población, las y los funcionarios públicos conocen los alcances, límites, obligaciones y responsabilidades inherentes a los derechos humanos y en especial del derecho a la educación.

Indicadores de impacto

1. Al finalizar el año 2020 se ha elevado la cobertura efectiva de educación pública hasta el 97%.
2. A partir del año 2015 se implementan currículos educativos actualizados y adecuados a los desafíos políticos,

económicos, sociales y culturales de la sociedad hondureña con enfoque de derechos humanos, y

3. Al menos el 50% de la población ha recibido información sobre derechos, obligaciones y responsabilidades establecidos en los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.

Indicadores estructurales

1. Al finalizar el año 2015 Honduras ha adecuado su legislación interna para la incorporación de los contenidos y alcances del derecho a la educación.
2. Para el año 2020 se ha incrementado la cobertura de educación pública en los niveles de educación preescolar, básica y secundaria y se estimula la calidad de la educación y la permanencia y culminación de la matrícula.

Indicadores de proceso

1. A partir del año 2013 se han diseñado e implementan políticas públicas orientadas al mejoramiento de calidad y los resultados de la educación pública.
2. A partir del año 2013 se incrementa la cobertura de la educación intercultural bilingüe.
3. A partir del año 2013 se impulsa un plan de mejoramiento de las condiciones físicas, pedagógicas y de seguridad de los centros educativos públicos.
4. A partir del año 2013 y en forma progresiva se implementan unidades de formación en

derechos humanos, equidad de género, salud sexual y reproductiva en los currículos de la educación primaria y secundaria.

5. A partir del año 2013 la SJDH ha diseñado e implementa un plan de formación en derechos humanos dirigido a las y funcionarios públicos, así como empleadas y empleados de gobierno en forma diferenciada de acuerdo con sus mandatos.
6. Para el año 2020, las instituciones públicas obligadas, colegios magisteriales y organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la cooperación internacional han desarrollado acciones coordinadas para la realización del derecho a la educación.
7. Para el año 2020, la ciudadanía ha recibido formación e información calificada sobre sus derechos y obligaciones en materia de derechos humanos en general y derecho a la educación en particular.
8. A partir del año 2013 se pone a disposición de la ciudadanía información sobre los límites de sus derechos y sus obligaciones respecto del Estado y de la población en general para la realización del derecho a la educación.
9. Las instituciones del Sistema de Justicia incorporan el conocimiento de casos de violaciones al derecho humano a la educación y sancionan administrativa o penalmente a las y los autores de las mismas.
10. Las autoridades de centros educativos, municipales, departamentales y nacionales del sistema educativo elaboran y difunden informes anuales de gestión.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la educación en la legislación.				
1	Homologar la legislación nacional a los Convenios y Tratados internacionales en la materia (RI).	2014-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Educación.
2	Ajustar las leyes educativas para la rotación de los puestos de dirección de Centros Escolares,	2014-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Educación

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	formación y actualización docente, incluyendo la supervisión, evaluación y actualización temática y pedagógica de las y los docentes.			
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Mejorar la calidad y pertinencia de la educación media y superior para adecuarla a los nuevos desafíos políticos, económicos, sociales y culturales.	2015-2015	Secretaría de Educación	Consejo de Educación Superior, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM , Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO , Colegios Magisteriales
2	Cumplir con los planes de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas y afro hondureños (RI).	2014-2014	Secretaría de Educación	Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños- SEDINAFROH , Secretaría de Finanzas
3	Mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas en las zonas rurales y alejadas y eliminar las disparidades de acceso a la educación entre las zonas urbanas y rurales, incluyendo condiciones de accesibilidad para niños y niñas con necesidades especiales (RI).	2013-2015	Secretaría de Educación	Fondo Hondureño de Inversión Social - FHIS , Secretaría de Finanzas , Secretaría de Estado para el Desarrollo de los pueblos indígenas y afro descendientes - SEDINAFROH , Dirección General de Personas con Discapacidad
4	Diseñar un plan nacional de calidad educativa, con criterios selectivos de asignación de recursos (RI).	2013-2015	Secretaría de Educación	
5	Implementar un plan nacional de calidad educativa, con criterios selectivos de asignación de recursos.	2015-2020	Secretaría de Educación	
6	Incorporación de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en los procesos educativos en los distintos niveles educativos.	2013-2013	Secretaría de Educación	Consejo de Educación Superior , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM , Colegios Magisteriales
7	Incorporar la orientación vocacional desde la enseñanza primaria.	2013-2013	Secretaría de Educación	Consejo de Educación Superior , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM , Colegios Magisteriales
8	Impulsar la investigación científica en todos los niveles del,	2014-2014	Secretaría de Educación	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	sistema incluyendo la asignación de recursos específicos para ello.			Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM , Secretaría de Finanzas
9	Masificar la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua.	2014-2014	Secretaría de Educación	Secretaría de Finanzas
10	Implementar un sistema de educación de adultos que incluya la alfabetización y la habilitación de capacidades para la generación de ingresos.	2013-2013	Secretaría de Educación	Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO, Secretaría de Desarrollo Social
11	Asegurar la eficiente prestación de servicios de salud integral, de óptima calidad, a las madres embarazadas, niñas, niños y jóvenes, priorizando en materia de seguridad alimentaria y nutricional, y en programas educativos de prevención (Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud, Honduras 2010-2015).	2014-2018	Secretaría de Salud	Gobiernos Locales
12	Establecer centros educativos pilotos para la atención de las y los alumnos con desarrollos especiales.	2015-2015	Secretaría de Educación	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Dirección General de Personas con Discapacidad
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Rediseñar en forma participativa y con asistencia técnica internacional la currícula de la educación policial a nivel de escala básica y de oficiales, a fin de incorporar los derechos humanos como eje transversal del proceso formativo.	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad , Secretaría de Educación , Consejo de Educación Superior , Universidad Policial, Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
2	Diseñar e implementar un proceso amplio de formación policial y militar sobre la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.	2014-2017	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Instituto Nacional Penitenciario, Comisión de Transición del Sistema Penitenciario, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV, Secretaría del Interior y Población
3	Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de capacidades dirigido a maestros y maestras con énfasis en la calidad de la	2013-2018	Secretaría de Educación	Colegios Magisteriales, Direcciones Departamentales y Distritales de Educación , Alcaldías Municipales, Secretaría de Justicia y Derechos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	educación, el desarrollo de habilidades y competencias y respeto de los derechos de las y los niños (RI).			Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos-CONADEH
4	Revisar, actualizar y reforzar la capacitación del personal docente desde la formación magisterial hasta la capacitación de las y los maestros en activo. Para el año 2015, todos los programas de formación y actualización magisterial bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación, habrán incorporado los contenidos del nuevo currículo de educación integral en sexualidad. (Declaración Ministerial "Prevenir con Educación", 2008)	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Revisión y ajuste de los procesos y controles administrativos para optimizar el gasto en el sistema de educación.	2015-2017	Secretaría de Educación	Secretaría de Finanzas , Tribunal Superior de Cuentas - TSC , Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP
2	Crear un incentivo educativo instaurando el premio a la excelencia académica (hacia las y los alumnos) y educativa (hacia las y los educadores).	2014-2014	Secretaría de Educación	Colegios Magisteriales
3	Desarrollar un mecanismo ágil de prevención y resolución de conflictos que puedan producir violaciones a derechos de los niños y las niñas respetando los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y que estimule la rendición de cuentas y responsabilidades cívicas de éstos frente a la ciudadanía.	2013-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Trabajadores de la Educación
4	Integrar un sistema de coordinación interinstitucional e intersectorial del Sistema Educativo hondureño con amplia participación de los distintos sectores sociales.	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN , Consejo de Educación Superior , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM , Colegios Magisteriales
5	Realizar una evaluación de la situación actual del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, con amplia participación de los	2013-2013	Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	pueblos, que permita extraer lecciones aprendidas e identificar y priorizar los compromisos del Estado de Honduras que están pendientes de cumplimiento.		Indígenas y Afrohondureños-SEDINAFROH	Morazán - UPNFM, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
6	Definir las necesidades reales de desarrollo del sistema educativo (E).	2015-2015	Secretaría de Educación	Direcciones Departamentales y Distritales de Educación , Alcaldías Municipales
7	Implementar un plan de equipamiento y tecnificación de los centros educativos del país.	2013-2020	Secretaría de Educación	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN, Secretaría de Finanzas.
8	Diseño de un sistema de monitoreo de cumplimiento del derecho a la educación, para la valoración efectiva de los avances en la satisfacción del derecho.	2014-2014.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Educación, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, Alcaldías Municipales
9	Implementar un sistema de monitoreo de cumplimiento del derecho a la educación, para la valoración efectiva de los avances en la satisfacción del derecho.	2015-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Educación, Colegios Magisteriales, Direcciones Departamentales y Distritales de Educación , Alcaldías Municipales
10	Diseñar un sistema de evaluación estandarizada y armonizada con estándares internacionales que permita la valoración de los avances del país en materia educativa y de cumplimiento de derechos con los avances de otros países.	2014-2014	Secretaría de Educación	Direcciones Departamentales y Distritales de Educación , Alcaldías Municipales , Colegios Magisteriales

Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.

1	Abrir y desarrollar espacios para la participación ciudadana y la auditoría social en los procesos de compras y contrataciones, aplicación de exámenes de admisión, concesión de becas y en general en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de educación. Avanzar la auditoria social hacia el establecimiento de observatorios ciudadanos permanentes.	2015-2022	Secretaría de Educación	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP -Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM , Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Integración de un sistema de auditoría social del cumplimiento de calidad y derecho a la educación. Instalación de un Observatorio Ciudadano del Derecho a la Educación.	2014-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Alcaldías Municipales
3	Instalación de mecanismos efectivos y ágiles para que la	2015-2022	Secretaría de Educación	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH,

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	población reciba información y para su participación en la toma de decisiones sobre el derecho a la educación y su cumplimiento.			Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
4	Instalación y fortalecimiento de la figura de procuradores estudiantiles en derechos humanos.	2014-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
5	Diseñar en forma participativa un acuerdo integral de cumplimiento del derecho de las y los alumnos a la educación y de las y los docentes sobre sus derechos laborales (PC).	2013-2013	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Colegios Magisteriales
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Desarrollar un plan de información sobre el derecho a la educación.	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Organizaciones Ciudadanas
2	Desarrollar campañas contra el acoso y abuso y cualquier otra forma de violencia contra niños y niñas en escuelas y colegios.	2015-2022	Secretaría de Educación	Organizaciones Ciudadanas , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Instituto Nacional de la Juventud - INJ , Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA
3	Desarrollar un plan de sensibilización sobre valores sociales y derechos humanos.	2013-2018	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Educación , Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO , Secretaría de Desarrollo Social.
4	Incorporar a los currículos de la educación primaria y secundaria y superior contenidos para la educación en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, equidad de género e interculturalidad, obligaciones y responsabilidades inherentes.	2014-2015	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
5	Incorporar en los currículos de la educación primaria y secundaria una unidad sobre derechos humanos, el contenido del derecho y las obligaciones del Estado y de terceros para respetarlo y hacerlo efectivo.	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
6	Revisión curricular para la incorporación de unidades de formación en derechos humanos, salud sexual y reproductiva, equidad de género e interculturalidad.	2014-2022	Secretaría de Educación	Direcciones Departamentales, Colegios Magisteriales, Organizaciones Ciudadanas
Componente: 7 - Lucha contra impunidad de violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Aplicar sanciones administrativas o penales en casos de violación del derecho a la educación.	2014-2022	Ministerio Público	Secretaría de Educación, Ministerio Público
2	Investigar casos de discriminación y violación del derecho a la educación.	2014-2022	Ministerio Público	Secretaría de Educación, Ministerio Público
3	Sancionar casos de discriminación y violación del derecho a la educación.	2014-2022	Ministerio Público	Secretaría de Educación, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia
4	Investigar y sancionar los casos de corrupción en el sistema educativo, incluyendo la manipulación de los procesos de selección y contratación de personal.	2014-2022	Secretaría de Educación	Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas - TSC , Corte Suprema de Justicia
Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.				
1	Emisión de informes municipales, departamentales y nacionales sobre situación, avances y desafíos en el cumplimiento del derecho a la educación.	2014-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Corporaciones Municipales (Cabildos abiertos), Secretaría de Desarrollo Social , Instituto Nacional de Estadística - INE
2	Emisión y presentación de informes de rendición cuentas en centros educativos.	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Revisión curricular para la incorporación de unidades de formación en derechos humanos, salud sexual y reproductiva, equidad de género e interculturalidad.	2014-2022	Secretaría de Educación	Direcciones Departamentales, Colegios Magisteriales, Organizaciones Ciudadanas
2	Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de capacidades dirigido a maestros y maestras con énfasis en la calidad de la educación, el desarrollo de habilidades y competencias y respeto de los derechos de las y los niños (RI).	2013-2018	Secretaría de Educación	Colegios Magisteriales, Direcciones Departamentales y Distritales de Educación , Alcaldías Municipales, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos-CONADEH

DERECHO A LA SALUD

Marco Normativo

Desde la conformación de la Organización Mundial de la Salud en 1946, y posteriormente con la proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derechos Universales del Hombre en 1948, la salud ha sido objeto de preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos. Su significado como derecho humano debe entenderse en lo relativo a la protección de la salud y a la igualdad de oportunidades para acceder del más alto nivel posible de salud. Esta acepción, por su misma complejidad, es difícil de precisar en su contenido y alcance, así como de garantizar su cumplimiento a plenitud.

El derecho del ser humano a la salud se reconoce en el inciso iv, del apartado e, del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965; en el apartado f, del párrafo 1, de los artículos 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Análogamente, el derecho a la salud ha sido reconocido en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Declaración y Programa de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, que contienen definiciones de la salud reproductiva y de la salud de la mujer.

El primer reconocimiento se hizo en el párrafo 1, del artículo 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos⁴¹, establece que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

De igual manera, el derecho a la salud figura en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) que la define en su artículo 12 como: “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Dicho Pacto es de carácter vinculante para los Estados firmantes⁴² y plasma su contenido normativo y los componentes que lo integran en el comentario 14 del PIDESC, emitido en el año 2000.

Contenido del derecho a la Salud

La Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), precisa el contenido normativo del derecho a la salud, identificando los siguientes elementos esenciales e interrelacionados que componen ese derecho⁴³:

1. **Disponibilidad.** El Estado deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de salud, así como de programas, en particular programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y medidas para proteger a todos los grupos en situación de vulnerabilidad,

⁴¹ La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A 8III.

⁴² Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y

Organización Mundial de la Salud (OMS), *El derecho a la salud*, Geneva, 2008.

⁴³ Comité de los DESC, Observación general No. 14, *El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: 11/08/2000, E/C.12/2000/4 (General Comments)*, párrafo 12, 2000.

especialmente las mujeres, las y los niños y jóvenes y las personas adultas mayores. Esos establecimientos y servicios deberán estar en condiciones sanitarias adecuadas, contar con personal médico y profesional capacitado y bien remunerado, así como con los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

2. **Accesibilidad.** Se basa en cuatro principios que se complementan:

a. **No discriminación.** Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos como origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud.

b. **La accesibilidad física.** Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial de los grupos vulnerabilizados, como las poblaciones indígenas y afrohondureñas, las mujeres, las y los niños y jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las personas con VIH/SIDA.

c. **La accesibilidad económica (asequibilidad).** Los pagos por servicios de atención de la salud y otros servicios relacionados deberán basarse

en el principio de equidad⁴⁴, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos y todas, incluidos los grupos en situación de pobreza.

d. **El acceso a la información.** Comprende el derecho de buscar, solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud en general o a título personal.

3. **Aceptabilidad.** Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades y, a la par, sensibles a los requisitos del género y del ciclo de vida y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de todas las personas.

4. **Calidad.** Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia, potable y condiciones sanitarias adecuadas⁴⁵.

La relación entre derecho a la protección de la salud y el derecho a la asistencia sanitaria no es de identidad, dado que son derechos diferentes. El derecho a la salud es una prioridad, con respecto al derecho a la atención no es solamente su operacionalización. Los indicadores que corresponden al derecho a la salud contemplan muchos de los llamados determinantes de la salud, que son igualmente

⁴⁴ Comité DESC, observación general No. 14 (2000), párrafo 12.

⁴⁵ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general No. 3 sobre la naturaleza de las

obligaciones de los Estados partes, 1990; y Comité de los DESC, observación general No. 14, *El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud*:11/08/2000. E/C.12/2000/4 (General Comments), 2000.

identificados en el comentario 14 de los DESC⁴⁶, cuya responsabilidad para su cumplimiento es señalada como parte de las obligaciones mínimas de los Estados, las cuales no están sujetas a la disponibilidad de recursos, de manera que son de inmediato cumplimiento.

Los aspectos determinantes de la salud son:

1. Garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud sin discriminación y en especial con relación a grupos marginados.
2. Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima.
3. Garantizar la vivienda y el suministro de agua.
4. Facilitar medicamentos esenciales, y
5. Adoptar un plan de acción nacional de salud pública.

Para la objetivación del derecho a la salud, el Comité de los DESC aporta una serie de ilustraciones de acciones concretas, que se ubican en los siguientes cuatro atributos:

1. **El derecho a la salud materna, infantil y reproductiva.** La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, así como el sano desarrollo de las y los niños adoptando medidas para el mejoramiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de planificación familiar, control prenatal y obstétricos.
2. **El derecho a la higiene del trabajo y del medio ambiente.** A través de la adopción de medidas preventivas sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales, condiciones laborales mínimas en suministro de agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, protección a la exposición de sustancias nocivas, condiciones de trabajo y de bioseguridad apropiadas, así como de la disuasión del

uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y demás sustancias nocivas a la salud.

3. **El derecho a la prevención, tratamiento y control de enfermedades:** A través de la existencia de programas de prevención y educación, incluyendo al VIH/SIDA, que se promuevan los factores determinantes de una buena salud, como la seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género.

La creación de un sistema de atención médica urgente en caso de accidentes, epidemias, y la ayuda humanitaria en emergencias por desastres. La lucha contra las enfermedades, incluyendo la facilidad de tecnologías pertinentes, el empleo y mejora de la vigilancia epidemiológica, la ejecución y ampliación de programas de vacunación y otras estrategias.

4. **El derecho a establecimientos, bienes y servicios de salud:** Que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, tanto física como mental; incluye acceso igual y oportuno a servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades, y al suministro de medicamentos esenciales. Es importante la mejora y el fomento de la participación de la población en la organización del sector salud en particular en las decisiones políticas relativas al derecho a la salud, adoptadas a nivel comunitario y nacional⁴⁷.

Obligaciones del Estado

El derecho a la protección de la salud es un derecho inclusivo, esto quiere decir que comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana,

⁴⁶ Comité de los DESC, 2000.

⁴⁷ Comité de los DESC, observación general No. 14, 2000, párrafos 14-17.

denominados por el PIDESC como factores determinantes básicos de la salud, entre los que se cuentan: disponibilidad de agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo, nutrición y vivienda adecuadas, condiciones de trabajo y un medio ambiente salubre, educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud e igualdad de género⁴⁸.

El mismo carácter inclusivo explica el derecho a la salud como contenido de libertades como la de no ser sometido a tratamientos e investigaciones médicas sin el propio consentimiento. También esta característica muestra que el derecho a la salud comprende otros derechos como el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todas las personas iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud, el derecho a la prevención y al tratamiento de las enfermedades, acceso a medicamentos esenciales; la salud materna, infantil y reproductiva; el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos; el acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud y la participación de la población en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional⁴⁹.

Con relación a los deberes para el cumplimiento del derecho a la salud, el PIDESC establece que son los Estados Partes los que tienen el deber de aplicarlo, específicamente a través de obligaciones legales, de carácter general y específico. Entre las primeras, destaca la obligatoriedad de aplicar medidas deliberadas y concretas para la realización progresiva del derecho a la salud; así como la no permisividad de medidas regresivas que signifiquen la pérdida de los avances obtenidos para la realización plena del derecho a la salud. Por su parte, las

obligaciones de carácter específico son tres: respetar, proteger y cumplir los derechos manifestados, mediante una serie de acciones concretas.

La obligación de respetar, demanda que el Estado se abstenga de interferir directa o indirectamente en el derecho a la salud. La obligación de proteger exige que los Estados impidan que terceros interfieran en el ejercicio del derecho a la salud, refiriéndose con ello, entre otras cosas, a que los agentes privados cumplan las normas de derechos humanos al prestar atención sanitaria u otros servicios de salud. La obligación de cumplir se refiere a la exigencia de que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otro tipo para la realización plena del derecho a la salud, incluyendo la existencia de sistemas de salud efectivos e integrados que comprendan la atención sanitaria y los factores determinantes básicos de salud.

En el marco jurídico nacional, el derecho a la salud está expresado en la Constitución de la República de 1982, en su artículo 145: “El derecho a la protección de la salud [...] es deber de todos participar en la protección y preservación de la salud personal y de la comunidad. [...] El Estado conservará el medioambiente adecuado para proteger la salud de las personas”. A su vez, en el artículo 149, se estipula que “el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinará todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados de dicho sector, mediante un plan nacional de salud, en el que dará prioridad a los grupos más necesitados”⁵⁰.

Por su parte, el Código de Salud señala en su artículo 1 lo siguiente: “La salud considerada

⁴⁸ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Organización Mundial de la Salud (OMS). *El derecho a la salud*. Ginebra.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ República de Honduras. Asamblea Nacional Constituyente, *Constitución de la República*, decreto No. 131 del 11 de enero de 1982. Tegucigalpa, 1982.

como un estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico, es un derecho humano inalienable y corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación". En tanto que en el artículo 8 establece que: "toda persona tiene derecho a la asistencia, rehabilitación y prestaciones necesarias para la conservación, promoción, recuperación de su salud personal y familiar; y el deber correlativo de contribuir a la salud de la comunidad, evitando acciones y omisiones judiciales y cumpliendo estrictamente las disposiciones de este Código y de las demás normas de salud"⁵¹.

Esta idea de responsabilidad compartida, o corresponsabilidad, es reforzada también en el artículo 9, que reza así: "Toda persona tiene el derecho a vivir en un ambiente sano, en la forma como este Código y las demás normas lo determinen y el deber correlativo de proteger y mejorar el ambiente que lo rodea. La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud tiene bajo su responsabilidad velar para que se le den las condiciones ambientales, para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo"⁵².

Con respecto a las competencias institucionales judiciales para la garantía y seguridad jurídica del derecho a la protección de la salud, éstas se encuentran en el marco legal del país y señalan una visión de la salud pública basada en principios de justicia social y equidad, las cuales, a la fecha no son coherentes con el sistema legal hondureño debido a que la norma jurídica hondureña y sus correspondientes dispositivos normativos en materia de salud, se refieren primordialmente al efecto final de los procesos de enfermedad; situación que se origina y al mismo tiempo refuerza el enfoque biológico del proceso salud-enfermedad⁵³.

Las acciones de protección y promoción a la salud, de hecho, no son función de los órganos

administrativos jurídicos en salud ni del mismo sistema de salud. Éstos actúan dentro de perspectivas de abordaje, en los efectos mediatos, en áreas de intervención sobre la problemática de salud, centrando la toma de decisiones y la planificación para enfrentar los problemas sin la participación democrática, desestimando de esta forma lo que expresa el marco constitucional que debiera darse, al señalar la incorporación de los individuos y de la comunidad en las acciones de protección social.

Este aspecto adquiere importancia desde la promoción de la cultura de derechos humanos en la sociedad, ya que configura los alcances del entendimiento del derecho a la salud en términos del correlato existente a los derechos, es decir, el de los deberes desde el punto de vista de la corresponsabilidad que debe existir y en cómo esta es concebida y fomentada desde las entidades responsables del cumplimiento del derecho a la salud.

Frecuentemente, el concepto de responsabilidad se ha distorsionado y minimizado al volverse los sistemas sociales burocratizados, paternalistas y autoritarios, frenando y algunas veces excluyendo la expresión de las potencialidades de la responsabilidad individual y colectiva.

Diagnóstico sobre el derecho a la protección de la salud

Honduras es un país calificado oficialmente como de ingreso medio bajo. Con una población de 8, 045,990 habitantes; de éstos el 50.7% pertenecen al sexo femenino y 49.3% al masculino. El 55.5% de la población radica en áreas rurales, en tanto que el 44.5% lo hace en zonas urbanas; en su población predomina la

⁵¹ Congreso Nacional de la República de Honduras, *Código de Salud y Reglamento General de Salud Ambiental*, decreto No. 65-91; Tegucigalpa, 1999.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ A. Altamirano, *La garantía y seguridad jurídica del derecho a la protección de la salud en Honduras*. Tesis previa a la opción del grado de magíster en Salud Pública. POSAP-UNAH, Tegucigalpa, 2003.

raza mestiza y coexisten nueve etnias que representan el 7% de la población⁵⁴.

La pirámide poblacional hondureña se sustenta en una amplia base joven. De acuerdo a la CEPAL, los menores de 18 años representan el 47% de la población, mientras los adultos mayores de 60 años representan el 5.7%. El crecimiento poblacional se mantiene, habiéndose logrado en el año 1980 la reducción de la tasa global de fecundidad, de seis hijos y/o hijas por mujer a 3.3 en la actualidad⁵⁵.

Honduras exhibe uno de los coeficientes de Gini⁵⁶ más altos de América Latina (0.580), lo que indica que es uno de los países con mayor inequidad en la distribución de los ingresos en la región⁵⁷; así se sitúa en el lugar 121, de entre 187 países analizados en 2011⁵⁸.

El país continúa siendo uno de los países con menor nivel de desarrollo humano. En la región de América Latina y el Caribe, Honduras ocupa la posición 29 en desarrollo humano de 32 países. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, el país presenta un Índice multidimensional de pobreza (IPM) con un valor de 0.159, el cual se manifiesta en que el 27.4% de la población vive en hogares con tres o más carencias básicas y que carecen, en promedio, el 57.9% de los indicadores básicos de salud, educación y nivel de vida.

La comparación de este índice a nivel mundial revela que Honduras, en una clasificación del más al menos pobre, ocupa la posición 47 de 103 países del mundo en desarrollo. En la región de América Latina y el Caribe,

Honduras es el cuarto país más pobre, de un total de 18 países para los que se calculó el índice.

El patrón de brechas territoriales en el desarrollo humano de Honduras persiste concentrando el mayor nivel de pobreza en el departamento de Lempira, con un IPM de 0.394, con un porcentaje de 61.3% de pobreza en su población; en contraste, el departamento con menor IPM es Cortés, con un índice de 0.057, en donde la pobreza incide en un 10.7% de la población. Obviamente, existe una correlación entre pobreza y nivel de desarrollo humano, en la que a mayor nivel de pobreza, menor nivel de desarrollo y viceversa⁵⁹.

El modelo de desarrollo se caracteriza por indicadores de desigualdad y exclusión, con una política tributaria regresiva, en la cual el Estado obtiene más impuestos provenientes de los segmentos de menores ingresos, que de los sectores más favorecidos de la población; el crecimiento de la deuda externa y del servicio de la deuda ocupó el 21% del PIB en el 2008.

El porcentaje creciente de personas migrantes que envían remesas a nuestro país se estima en 8.7%, constituyendo uno de los principales indicadores de crecimiento del PIB, pilar principal de la economía hondureña. En el año 2010, los ingresos por remesas sumaron 1,446.5 millones de dólares. Se estima que la migración externa a Estados Unidos y España es de tres personas por minuto, en busca de mejores condiciones de vida, situación que impacta en

⁵⁴ Instituto Nacional de Estadísticas, *Proyecciones poblacionales*, Tegucigalpa, 2009.

⁵⁵ Comisión Económica para América Latina (CEPAL). *América Latina: tasas globales de fecundidad según quinquenios por países*, en *Estadística e indicadores demográficos y sociales*.

⁵⁶ Una de las medidas más conocidas para analizar la inequidad en la distribución de los ingresos es el coeficiente de Gini, el cual se expresa como un número ubicado entre cero y uno. El cero representa la perfecta igualdad (todos los habitantes del país tienen el mismo ingreso) y el uno representa la total inequidad (una

persona tiene todo el ingreso y los demás no tienen nada), PNUD, *Informe del Índice de Desarrollo Humano Honduras*, Tegucigalpa, 2011.

⁵⁷ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano. Honduras 2011. Reducir la inequidad: un desafío impostergable*, Tegucigalpa, 2012.

⁵⁸ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano. Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos*, Nueva York, 2011.

⁵⁹ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano. Honduras 2011. Reducir la inequidad: un desafío impostergable*, Tegucigalpa, 2012.

la desintegración familiar, trabajo infantil y sobrecarga del rol de la mujer⁶⁰.

La violencia se ha establecido como el principal problema social del país; el registro de la incidencia de delitos de mayor impacto social como los delitos contra la vida, integridad personal y la propiedad, evidencia que el total de personas fallecidas en el año 2012 por homicidio fue de 7,104; de los cuales 6,009 fueron cometidos con armas de fuego. De este total, 5,597 víctimas fueron del sexo masculino y 412 del sexo femenino.

El 75.78% de la población afectada por la violencia es menor de 40 años; el 19.37% está entre los 40 y 59 años y el 3.37% es mayor de 60 años. Asimismo, se registró una tasa de 73.14 muertes por arma de fuego por cada 100,000 habitantes.

Diversos estudios demuestran que los factores de riesgo en la violencia armada se deben a la fuerte actividad del crimen organizado en el país y a la gran disponibilidad de armas, especialmente en la población del sexo masculino que está entre los 15 y 45 años⁶¹.

Este panorama exige ser abordado conceptual, estructural y metodológicamente desde enfoques combinados que expliquen, por una parte, que el ambiente físico, social, económico y cultural constituyen un determinante potente del estado de salud y bienestar; y por otra parte, que las políticas sociales para impactar en la situación de inequidad deben actuar sobre estos factores de manera interactiva.

El enfoque de los determinantes sociales de la salud evidencia, además, que el medioambiente físico, social, económico y cultural desgasta de manera diferencial la vida de las personas, familias y colectividades; es

decir, que existen desigualdades frente a la salud y que los procesos patógenos se conjugan produciendo vulnerabilidad en las personas, familias y comunidades, formando así cadenas complejas en las que actúan los factores ambientales, biológicos, psicológicos, culturales y económicos⁶².

La estratificación social, determinada estructuralmente, ha configurado la llamada exclusión social, representando una fuerte amenaza a la organización y cohesión de la sociedad. Suele ser abordada a través de políticas y programas dirigidos al combate de la pobreza, aislándola de las condiciones que la producen, con respuestas y estrategias focalizadas en los más pobres y no en la pobreza como tal.

El perfil de salud en Honduras se caracteriza por una situación de transición epidemiológica, en la que coexisten enfermedades endémicas (infecciosas, parasitarias y vectoriales) con las enfermedades emergentes (VIH/SIDA, crónico degenerativas, tuberculosis, malaria, lesiones y accidentes).

Las principales causas de morbilidad y mortalidad en enfermedades transmisibles son el dengue clásico y hemorrágico (2,3% de letalidad en los últimos 10 años), la influenza A H1N1 en todo el país, con 631 casos con 16 muertes en 2009; tuberculosis, con una tasa de 26.4 por cada 100,000 habitantes. La tasa de incidencia de VIH/SIDA es de 0.68% en la población general y del 12% en ciertas poblaciones estudiadas. Existen en el país zonas endémicas de malaria, leishmaniosis y chagas⁶³.

La salud materna e infantil revela altas tasas de mortalidad materna (108 por cada 100,000

⁶⁰ Foro Nacional de Migraciones de Honduras, *Los efectos de la crisis política y la migración*, Tegucigalpa, 2010.

⁶¹ UNAH-IUDPAS (marzo de 2012). Observatorio de la Violencia. *Boletín enero-diciembre* (24).

⁶² Organización Mundial de la Salud, Comisión sobre determinantes sociales de la salud. *Subsanar las*

desigualdades. Resumen analítico del informe final. Ginebra, 2008.

⁶³ Secretaría de Salud, *Plan Nacional de Salud 2010-2014*, Tegucigalpa, 2010.

nacidos vivos) atribuibles a causas evitables en el parto y puerperio inmediato; entre estas causas sobresale la hemorragia con un 57%, trastornos de hipertensión del embarazo con 23% y la sepsis con 10%⁶⁴.

La mortalidad infantil también está condicionada por causas evitables y asciende a la tasa de 23 por cada 1,000 nacidos vivos; la mitad de las muertes infantiles (61%) son neonatales, vinculadas a la calidad de atención durante el parto. La mortalidad pos neonatal es de 9 por cada 1,000 nacidos vivos y en el grupo de edad de 1-4 años de 7 por cada 1,000 nacidos vivos; siendo las principales causas prevenibles, la diarrea y las enfermedades respiratorias⁶⁵.

La disponibilidad y acceso físico, económico y social a una alimentación saludable se relaciona con la pobreza extrema. Esta asociación depende de diversas condiciones de desarrollo en general, pues la incapacidad para que los hogares y los individuos accedan a los alimentos, así como las deficiencias en la disponibilidad de alimentos, tanto en la producción o importación, son efectos de una situación de subdesarrollo. En este contexto, la inseguridad alimentaria puede ser una situación crónica que mantiene una condición de subalimentación⁶⁶. La manifestación visible de esta situación es la desnutrición en los grupos de población más vulnerables, la cual ha mantenido una relativa estabilidad de alrededor del 30% de la población infantil en las últimas décadas.

La salud está condicionada por múltiples determinantes sociales cuya ausencia o presencia delimita, a su vez, la existencia de vulnerabilidades que afectan a grupos poblacionales históricamente excluidos en el país: niñez, mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad y personas adultos mayores.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ INCAP-OPS, *Análisis de la situación alimentaria en Honduras*, Tegucigalpa, 2012.

Una breve exposición de la situación actual de estos grupos se presenta a continuación.

En Honduras, las mujeres representan el 51% de la población, aunque su participación en los espacios públicos y privados revela características discriminatorias. Un ambiente que ha ocupado esfuerzos para superar estas desigualdades es el contexto laboral como medio para asegurar la equidad entre los géneros, no obstante, la mujer continúa enfrentando obstáculos para su plena integración en la actividad económica, puesto que la tasa de participación laboral de la mujer es del 33% y en el área rural es apenas del 23.6%.

Por otra parte, la tasa de desempleo abierta es de 8.3% entre las mujeres, frente a un 4.7% entre los hombres. Además, las mujeres perciben menos ingresos del total generado en la economía (29.6%), con relación a los hombres ocupados, que en promedio es 1.15 veces superior al de las mujeres ocupadas. En contraste, el trabajo de la mujer en el espacio familiar y comunitario sigue perpetuando los estereotipos de género que refuerzan la discriminación de la mujer. En el área rural la situación de la mujer se agrava más, ya que es la mujer más joven la encargada de realizar las tareas de la casa y del campo y a menudo tiene por obligación cuidar de la familia, compuesta por varias generaciones⁶⁷.

La violencia alcanza grandes dimensiones y la mayor parte de actos de violencia sexual acontece contra niñas y mujeres, cuyo rango de edad se ubica entre los cinco a 24 años, concentrándose un 38.77% en el rango de 10 a 14 años. De 2006 al 2009, el número de eventos denunciados en este tipo de delitos aumentó en un 74.35%; cuando de 1,111 casos en el 2006 se pasó a 1,937 en el 2009. En este mismo período, el promedio de mujeres víctimas de actos de

⁶⁷ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano. Honduras 2011. Reducir la inequidad: un desafío impostergable*. Tegucigalpa, 2012.

violencia sexual fue de un 83.6%, el porcentaje restante corresponde a los niños.

Otro elemento es la violencia doméstica, que en el año 2009 alcanzó el 12.4% de la incidencia delictiva nacional; ante este problema, la respuesta institucional es aún débil. Para el caso, al Plan Nacional contra la Violencia (2006-2010) no le fue asignado presupuesto para su implementación, no existen refugios estatales para proteger la vida de las mujeres en casos de emergencia, los juzgados de violencia doméstica solo existen en dos ciudades del país; éstas, entre otras, son las limitaciones que afectan el acceso a la justicia de las mujeres que sufren de violencia.

En el año 2000 se efectuó una estimación sobre la tasa de mortalidad materna realizada por el INE (119 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos). No obstante, Honduras no cuenta con datos recientes sobre dicho problema, lo cual dificulta comprobar el cumplimiento de la meta 5-A de los ODM, que se refiere a la reducción de la mortalidad materna.

Con relación al grupo poblacional de la niñez, el 49% de la población hondureña es menor de 18 años, estimándose que el 66% de ellos se encuentra bajo la línea de pobreza. Las mayores vulnerabilidades de la niñez son su exposición temprana al trabajo y el desarrollo de las peores formas de trabajo infantil; la falta de acceso a educación de calidad y la ampliación de la cobertura, principalmente en el nivel de pre básica y secundaria, así como la violencia contra la niñez en sus distintas manifestaciones.

Entre los hijos e hijas de madres sin ninguna educación y los de madres que tienen educación superior, existe una brecha de 40.3 puntos porcentuales en el nivel de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de cinco años. La diferencia es también significativa si

se toma en cuenta el quintil socioeconómico, registrándose una diferencia de 38.2 puntos porcentuales entre el primero y el quinto quintil de riqueza. De igual manera, la desigualdad en la desnutrición global es mucho menor que la brecha en desnutrición crónica; sin embargo, continúa siendo relevante, alcanzando los 21.2 puntos porcentuales entre los menores de cinco años hijos e hijas de madres sin educación formal y los de madres que poseen educación superior. Asimismo, el nivel de desnutrición global presenta una desigualdad entre el primero y el último quintil socioeconómico de 19.5 puntos porcentuales⁶⁸.

Entre los quinquenios de 1991-1996 y 2001-2006, la mortalidad de la niñez se redujo en 18 puntos porcentuales, a un promedio de 1.2 por año; lo que significa que, a este ritmo, es poco probable que se logre la meta al 2015 de 16 por cada 1,000 nacidos vivos. Lo propio ha ocurrido con la tasa de mortalidad infantil, que experimentó durante el mismo período una reducción de 12 puntos a un promedio anual de 0.8 puntos. El cumplimiento de la meta de 12 puntos para el 2015 es igualmente improbable, ya que habría que reducir la tasa de mortalidad infantil en un poco más de la mitad⁶⁹.

Durante el quinquenio 2001-2006, la tasa de mortalidad infantil fue de 23 puntos. Al respecto, importantes logros se han obtenido en la vacunación contra el sarampión en niños y niñas menores de un año. Sin embargo, la cobertura de vacunación de niños y niñas menores de un año ha sido fluctuante. En la década del noventa, se mantuvo una tendencia casi constante a la alza, llegando al 98% en el año 2000. En 2005 y 2007, la tendencia fue hacia la baja, hasta volver a recuperarse a partir de

⁶⁸ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano. Honduras 2011. Reducir la inequidad: un desafío impostergable*. Tegucigalpa, 2012.

⁶⁹ Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tercer informe de país*, Honduras, 2010.

2008; en este último año, el porcentaje de vacunación fue del 95%⁷⁰.

La pertenencia a un grupo étnico minoritario es un determinante social que incrementa la vulnerabilidad en el país. La desvalorización del patrimonio cultural y la pobreza en que estos pueblos viven, se arraiga por la carencia de empleo productivo e inseguridad de sus tierras; a ello se suma la escasa disponibilidad y acceso a servicios de salud, educación, saneamiento básico y acceso geográfico, condiciones que provocan altas tasas de enfermedades contagiosas e infecciosas, incluyendo la alta incidencia del VIH/SIDA.

Se calcula que habitan en el país 493,146 personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos. De ellos, aproximadamente el 60% vive en zona rural. Las condiciones de vida de estas poblaciones difieren notablemente a las del resto de la población. El 13.2% de los grupos étnicos corresponden al quintil de mayor nivel socioeconómico, en contraposición al 21% de los no étnicos. En el otro extremo, el 35.6% de los hogares étnicos pertenecen al quintil más pobre y el 17.5% de grupos no étnicos se ubica en el mismo quintil⁷¹.

Otro segmento de la población considerado vulnerable son las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Según datos de 2002 del Instituto Nacional de Estadísticas, en el país viven 177,516 personas con discapacidades; de ellas, 50,304 se estimaron en edad productiva⁷²; pero, estas personas se enfrentan con escasas oportunidades de incorporarse al mundo del trabajo. Aunque este grupo poblacional ha sido identificado como prioritario en las políticas sociales del país, no se cuenta con indicadores que permitan constatar avances en este grupo.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano. Honduras 2011. Reducir la inequidad: un desafío impostergable*. Tegucigalpa, 2012.

⁷² Instituto Nacional de Estadísticas, *La discapacidad en Honduras*. Análisis de los resultados de la XXVI encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, Tegucigalpa, 2002.

Frente a esta compleja situación social y de salud, es importante analizar la pertinencia de las políticas y programas del Estado para cumplir con el derecho a la salud, así como el modelo de organización del sistema de salud, unido a las percepciones de la sociedad y usuarios del mismo.

Un rubro a examinar es la inversión del Estado en protección social y a la salud. Según un estudio reciente en el tema, en Honduras el gasto público en protección social asciende a un total de 31,000 millones de Lempiras, correspondiente al 41% del total del presupuesto del gobierno central, al 23.2% del presupuesto de todo el sector público y al 10.6% del PIB de 2010. De este gasto se destaca el de salud, seguridad social y previsión, con un 87.6% del total estimado. La distribución del gasto en salud revela un porcentaje de 35.80% para la Secretaría de Salud⁷³.

Honduras se encuentra en el grupo de países con las más bajas coberturas en la seguridad social, a pesar de los enormes esfuerzos realizados en los últimos cinco años, durante los cuales casi se duplicó el número de afiliados, pasando de 372,000 a 621,000. No obstante, este crecimiento de la cobertura de 12% al 21% de la población general, no es congruente con la alta tasa de natalidad⁷⁴.

El sistema de servicios de salud es el subconjunto institucional del sector salud, por lo tanto forma parte de este. También es llamado sistema de atención sanitaria, es la expresión material y concreta de cómo se organiza la atención en salud de un país. El objetivo primordial del sistema sanitario es la salud a través de diferentes intervenciones o formas de ser realizada y comprende acciones

⁷³ Programa Regional de Salud y Protección Social del Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOS-Bélgica) en Centro América, *La protección social en salud en Honduras, presente y desafíos*, Tegucigalpa, 2012.

⁷⁴ Programa Regional de Salud y Protección Social del Fondo de Cooperación al Desarrollo, 2012.

de promoción, protección, recuperación y atención.

La relación entre sector salud y sistema de salud lleva a la consideración de que son varios los agentes de salud públicos, estatales y privados que se involucran en ese propósito; o sea, para que un sistema sea capaz de velar por la salud se requieren varios componentes como valores, principios y propósitos que configuran la política de salud. Estos tres elementos reflejan la concepción ética, ideológica, política y jurídica que sustenta el sistema de salud.

La organización del sistema de salud de Honduras es tradicional, bajo la forma de un sistema mixto conformado por tres subconjuntos: público, seguridad social y privado. La Secretaría de Salud representa al primer subconjunto y es la entidad rectora del sistema, aunque sin enlace funcional entre todos los subconjuntos. Es el principal proveedor y responsable de atender a la población nacional y brindar los servicios de salud de manera gratuita a la población de escasos recursos. Se estima que brinda servicios al 60% de la población nacional a través de la mayor red de establecimientos de servicios en el país.

El modelo de financiamiento global en salud se asienta en el 56% del gasto proveniente de los hogares. El presupuesto de la Secretaría de Salud tiene estas fuentes: transferencias del Estado sobre una base histórica (76%), asistencia técnica basada en créditos externos (11%), donaciones (9%) y alivio la deuda nacional (4%)⁷⁵.

La Secretaría de Salud ofrece servicios a través de 28 hospitales agrupados a nivel nacional, regional y de área; 32 clínicas materno infantiles (CMI), 252 centros de salud con

médico y odontólogo (CESAMO), 1,058 centros de salud rurales (CESAR), cuatro clínicas periféricas de emergencia (CLIPER) y 14 consejerías de familia especializadas en el manejo de la violencia intrafamiliar⁷⁶.

Tanto el primer como el quinto quintil hacen uso de los hospitales del Estado. Entre uno y otro, existe una diferencia de 11.5 puntos porcentuales a favor de los más pobres. El 58.9% de los hogares del primer quintil socioeconómico usan los CESAR y CESAMOS, mientras que solamente el 5.8% del quinto quintil hace uso de estos servicios. Los CESAR y los CESAMOS atienden fundamentalmente personas del área rural. Un (a) auxiliar de enfermería atiende los CESAR y un médico y un odontólogo están a cargo de los CESAMO. Solamente el 5.6% de los hogares del primer quintil hicieron uso de hospital y clínica privada, mientras que el 55.7% de los del quinto quintil se acogieron a este tipo de servicios. Esto muestra una evidente segmentación producto de la inequidad territorial, socioeconómica y educativa: la obtención de servicios de salud en el mercado es básicamente privilegio de las personas que tienen suficientes ingresos, educación y residen cerca de los centros de salud⁷⁷.

La cobertura brindada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es equivalente al 39% de las personas empleadas en el sector público y privado. No obstante, cerca del 68.3% del total de la población no tiene cobertura, mientras que cerca del 30.1% carece de acceso a los servicios de salud⁷⁸.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se financia a través de las aportaciones sobre el salario de las y los afiliados trabajadores del sector formal. Cubre poco más del 18% de la población a través de un seguro

⁷⁵ República de Honduras, Secretaría de Salud, *Plan Nacional de Salud 2021*. Tegucigalpa, 2005.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2011. Reducir la inequidad: un desafío impostergable*. Tegucigalpa, 2011.

⁷⁸ BCIE, Ficha estadística de Honduras, Tegucigalpa, 2010.

por enfermedad y maternidad y de un seguro por vejez, invalidez y muerte. Es una institución descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio, recauda y administra los recursos provenientes de trabajadores y empleadores del sector productivo formal. Las cotizaciones son tripartitas, con el 5% proveniente del patrono, un 2.5% de los trabajadores y un 0.5% directamente del Estado. Esta última aportación, históricamente, ha sido objeto de una deuda acumulada hacia la institución.

El subsistema privado cubre un 17% de la población y está constituido por 1,133 establecimientos con fines de lucro; existen 43 establecimientos que pertenecen a organizaciones no gubernamentales y 10 aseguradoras privadas con un 80% de reembolso y de muy baja cobertura en el país. Además, hay organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro cuyo financiamiento proviene principalmente de fondos externos de donación, subsidios gubernamentales y donaciones de empresas y personas naturales⁷⁹.

La relación entre exclusión social y exclusión en salud permite afirmar que el sistema de salud es un determinante importante de la exclusión e inequidades. El estudio sobre la exclusión en salud de la OPS, realizado en 2003, mostraba que en la respuesta del sistema de salud, un 66.3% de la población aparecía sin acceso a los servicios de salud y un 30.6% que no recibía atención a la salud. Se estimó, en dicho estudio, que el 83% de la población se encuentra sin protección de seguro de salud. La falta de acceso a la salud implica, además del incumplimiento del derecho a la salud, la dignidad de la persona humana y de la sociedad de que forma parte⁸⁰.

⁷⁹ CEPAL, *La reforma de salud en Honduras*, Tegucigalpa.2005.

⁸⁰ Organización Panamericana de la Salud, *Exclusión en salud en países de América Latina y el Caribe*. Washington D.C., 2003.

⁸¹ Entre ellos se destacan: Secretaría de Salud, *Plan Nacional de Salud 2021*. Tegucigalpa, 2005; Secretaría de

En Honduras se experimenta una transición entre un sistema caracterizado como ineficiente, con limitada capacidad de gestión, fragmentado y de débil rectoría, que demanda cambios a la luz de los hallazgos y tendencias en el contexto internacional; y de los procesos de participación y debate nacional.

La autoridad sanitaria nacional planifica actualmente una propuesta cuyos componentes básicos de reforma son la separación de funciones y el fortalecimiento del rol rector y regulador. Los planes nacionales de salud de los últimos gobiernos han coincidido en el agotamiento del modelo de atención vigente que funciona con enfoque curativo, centrado en el daño y en la enfermedad y con escasa participación social, con el agravante de estar financiado de manera inequitativa, es decir, que la población con menor capacidad de pago aporta más que la población con mayores ingresos.

Ante la problemática, se han formulado varios documentos sobre política sanitaria, así como también sobre el proceso de reforma del sector salud⁸¹, los cuales suman más de dos décadas y que se resumen en la afirmación de que no se ha avanzado en la garantía del derecho a la salud; por el contrario, muchos de los indicadores exhiben violación a este derecho. Desde el enfoque de equidad, las estrategias de reforma implementadas no han logrado impactar en los determinantes de las inequidades y, en algunos casos, los datos muestran que los mecanismos introducidos han implicado una regresión en el camino a la equidad, es decir, la lógica de las acciones promovidas en la reforma es antagónica con la del derecho a la salud⁸².

Salud, *Marco conceptual, político y estratégico de la reforma del sector salud*, Tegucigalpa, 2009.

⁸² S. Forti, *Cambios en la política de salud y continuidad en la denegación del derecho a la salud en Honduras (1993-2006)*. Tesis previa a la opción del grado de PhD en Salud Comunitaria. Universidad de Laval, Canadá, 2010.

Nos encontramos ahora frente a respuestas con una lógica de lo mínimo posible, que actúan sobre determinantes sociales de salud que han mejorado los indicadores promedio de salud del país, sin alterar el tamaño de las desigualdades entre los grupos sociales con mayores ventajas y los menos favorecidos. Las políticas de salud son un instrumento potente que bien puede promover la equidad y el derecho a la salud, o limitarlo.

Bien diseñadas, las políticas pueden guiarse por los principios de universalidad y equidad, con acciones integrales en donde toda la población pueda disfrutar de los beneficios sociales como un derecho básico e inalienable.

Matriz sobre el derecho a la protección de la salud

Resultados de impacto

1. Implementado un modelo de atención, gestión y financiación de la salud con un enfoque de derechos humanos.
2. Desarrolladas las competencias de las y los servidores públicos para la atención de la salud integral con un enfoque de derechos humanos.
3. Instalado el Foro Nacional de Salud como espacio de debate y consenso para la implementación de políticas públicas de salud con un enfoque de derecho a la salud, y
4. Promovida la planificación y presupuesto intersectorial en salud con un enfoque de derechos humanos.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la protección de la salud en la legislación.				
1	Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional [Alta Comisionada, 2011 (RI)].	2014-2017	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN
2	Actualización del Código de Salud y Reglamento de Salud acorde a los tratados internacionales suscritos por Honduras y documentos conceptuales sobre el derecho a la salud (DAS) (S).	2014-2017	Secretaría de Salud	Congreso Nacional de la República, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
3	Examinar la legislación nacional para garantizar el goce pleno y sin restricción del derecho a la salud por todas y todos los miembros de la sociedad (S).	2014-2017	Secretaría de Salud	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
4	Actualización del Código de Salud y Reglamento de Salud acorde a los últimos documentos sobre el derecho a la salud (DAS) (S).	2013-2014	Secretaría de Salud	Congreso Nacional de la República, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
5	Armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales para la protección ambiental y manejo de desechos tóxicos (UNEP, Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, 2002).	2014-2017	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
6	Garantizar la transparencia y acceso a la información de la documentación de las instituciones públicas del Estado, a través de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (S).	2014-2022	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
7	Garantizar el cumplimiento de las instituciones públicas y privadas para la aplicación de normas para el manejo de desechos sólidos y contaminantes en las industrias (UNEP, Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, 2002).	2015-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Salud, Procuraduría General del Ambiente, Fiscalía Especial de Medio Ambiente
8	Mejorar la aplicación de la legislación nacional y de los Convenios y Tratados en derecho ambiental, , como mecanismo del cumplimiento del derecho a la higiene del medio ambiente [A/HRC/WG.6/9/HND/1; (RI); Comentario 14, PIDESC, 2000.9].	2013-2015	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Procuraduría General del Ambiente, Fiscalía Especial de Medio Ambiente, Corte Suprema de Justicia

Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.

1	Establecer planes para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles del sistema, incluyendo contenidos relacionados con promoción de la salud, estilos de vida saludables y salud sexual y reproductiva (S).	2014-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud
2	Generar políticas de fomento del empleo dirigidas hacia la juventud para mejorar su calidad de vida y reducir los índices de desempleo y violencia (S).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Educación, Instituto Nacional de la Juventud - INJ , Secretaría de Desarrollo Social

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Asegurar el acceso al primer nivel de atención como entrada al sistema que integra y coordina el cuidado de salud y resuelve la mayoría de necesidades de salud de la población (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud).	2014-2022	Secretaría de Salud	Gobiernos Locales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
4	Contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas e instalaciones que cuenten con agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado; así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS, con prioridad en las áreas más postergadas del país [(RI) OACNUDH, comentario 14, PIDESC, 2000].	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Finanzas, Gobiernos Locales, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados-SANAA
5	Asegurar que todas las niñas y los niños del país dispongan de atención y servicios de salud básica de modo que mejoren la calidad y la disponibilidad de los servicios [Doc. 143, 59; Tipo Doc. Internacional (RI); Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, mayo de 2007].	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Gobiernos Locales, Secretaría de Desarrollo Social
6	Asegurar la eficiente prestación de servicios de salud integral, de óptima calidad, a las madres embarazadas, niñas, niños y jóvenes, priorizando en materia de seguridad alimentaria y nutricional, y en programas educativos de prevención (Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud, Honduras 2010-2015).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA, Gobiernos Locales
7	Desarrollar programas gratuitos de salud específicos para las personas adultas mayores, que atiendan las patologías más prevalentes de este grupo poblacional (Resolución CE130.R19 sobre la salud y el envejecimiento de la OPS, 2002) (RI).	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
8	Promover el uso de fogones mejorados para evitar daños humanos y en el ambiente (UNEP, Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, 2002).	2016-2022	Secretaría de Salud	Gobiernos Locales, Fondo Hondureño de Inversión Social - FHIS, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
9	Adoptar medidas inmediatas para contrarrestar los efectos negativos que tienen en el medio ambiente y la salud los contaminantes y las sustancias tóxicas empleadas en sectores específicos de la agricultura y la industria, como el cultivo del banano y la extracción de oro, a través de mecanismos y tecnologías mediante los cuales se puedan examinar con eficacia los efectos en el medio ambiente (Recomendaciones de DDHH Naciones Unidas, 2000-2009; S).	2015-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Gobiernos Locales, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Procuraduría General del Ambiente
10	Atender las medidas de seguridad ambiental en el manejo de gases de uso hospitalario (UNEP, Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, 2002).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Recursos Naturales y Procuraduría General del Ambiente
11	Desarrollar procesos de comunicación del riesgo orientados a la prevención de la contaminación y para el manejo de sustancias nocivas en la agricultura, industria y la comunidad (UNEP, Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, 2002).	2015-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Salud, Procuraduría General del Ambiente
12	Brindar servicios integrales de salud, para las personas que presentan distintos tipos de discapacidades (S).	2014-2022	Secretaría de Salud	Secretaría del Interior y Población - SIP Secretaría de Educación, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social
13	Aumentar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud integral, de óptima calidad, a las madres embarazadas, niñas, niños y jóvenes, priorizando las materias de seguridad alimentaria y nutricional, y en programas educativos de prevención en salud (doc. 27, Pág. 13) (1, 2, 3, 6)	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Fianzas, Gobiernos Locales, Instituto de la Juventud

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
14	Implementar el programa y plan de trabajo sobre áreas protegidas, como mecanismo para garantizar el derecho a la higiene del medio ambiente [A/HRC/WG.6/9/HND/; (RI); Comentario 14, PIDESC].	2013-2018	Instituto de Conservación Forestal - ICF	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA
15	Avanzar en los procesos de licenciamiento de las instalaciones de salud, comenzando con las instalaciones hospitalarias (S).	2015-2018	Secretaría de Salud	Secretaría de Finanzas
16	Planificación intersectorial con un enfoque de derechos humanos que contenga aspectos relacionados con los determinantes sociales de la salud: educación, vivienda, empleo, agua, ambiente, DDHH (S).	2014-2019	Secretaría de Salud	SEPLAN, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Nacional de la Juventud - INJ Instituto de Conservación Forestal - ICF Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - Procuraduría General del Ambiente
17	Adecuar la Política y Plan Nacional de Salud a un enfoque de derechos humanos y derecho a la salud (S).	2014-2017	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN
18	Asignar prioridades a los derechos haciendo elecciones de política y adoptando decisiones de asignación de recursos dentro de un marco de derechos humanos (ODM).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación
19	Considerar las determinantes sociales salud en la concepción, aplicación, supervisión y evaluación de políticas y programas relacionados con la salud armonización, alineamiento y enfoque intersectorial (no solamente sectorial) (S).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Despacho Presidencial, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
20	Institucionalizar el Sistema Integral de Atención Primaria en Salud Familiar-Comunitario en el marco del proceso de vinculación UNAH/Sociedad. Profundizar el enfoque de derechos humanos del sistema (Presidencia de la República, Decreto Ejecutivo No. PCM-025-2012).	2014-2022	Secretaría de Salud	Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH , Gobiernos Locales, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y en las y los servidores públicos.				
1	Capacitar de manera integral a los recursos humanos en salud para convertirlos en elementos estratégicos de cambio en el sistema de salud (Forti, S., "Reforma de salud y equidad en Honduras: agenda, actores y alternativas").	2013-2015	Secretaría de Salud	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Formación de los recursos humanos en derechos humanos, derecho a la salud y deberes de las instituciones públicas y de los funcionarios de las mismas (S).	2013-2015	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH
3	Obligatoriedad de procesos de inducción de las y los funcionarios públicos en temas de derechos humanos y de derecho a la salud (S) (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de la Presidencia, Dirección General de Servicio Civil
4	Capacitación para el manejo adecuado de desechos tóxicos y biológicos (Reporte de CA y del Caribe. PNUD, Medioambiente, 2002).	2013-2015	Secretaría de Salud	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Procuraduría General del Ambiente
5	Reformar las normas de salud de los programas para garantizar una atención intercultural. Desarrollar un protocolo al respecto (Doc. 67, p. 5; Acta de compromisos entre Gobierno de la República y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Doc. Consulta SJDH).	2015-2017	Secretaría de Salud	Secretaría de Estado de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH
6	Promover la calidad de los servicios de salud mediante la adopción de	2014-2022	Secretaría de Salud	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	protocolos de atención de fácil comprensión y que recuperen las nociones de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y aceptabilidad y ampliamente difundidos de atención a las y los portadores del derecho a la salud (S).			CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Disminuir la fragmentación y descoordinación del sistema de salud con la población/territorio asignado y actualizar el conocimiento de las necesidades de salud para la oferta de servicios de salud (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud).	2015-2022	Secretaría de Salud	Gobiernos Locales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN
2	Implementar mecanismos de coordinación a lo largo de todo el continuo de servicios de salud, a través del sistema de referencia y contra referencia de usuarios (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud).	2014-2022	Secretaría de Salud	Gobiernos Locales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
3	Aumentar las asignaciones presupuestarias para los sectores de la educación y la salud (Doc. 152, pp. 82-105; Examen Periódico Universal, 2011).	2015-2022	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Finanzas, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud
4	Fortalecer técnica y financieramente a la Secretaría de Salud para que cumpla a cabalidad con el Plan de Salud para 2021 y demás planes y programas estratégicos del sector. (doc. 27, Pág. 13) (1, 2, 3, 6)	2016-2022	Secretaría de Finanzas	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Salud
5	Garantizar la estructura hospitalaria apegada a la normativa internacional para el manejo de desechos y sustancias tóxicas (UNEP, Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, 2002).	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Recursos Naturales, Secretaría de Finanzas y Procuraduría General del Ambiente
6	Establecer mecanismos para evaluar el mejoramiento de la calidad y el desempeño de los servidores públicos, en especial los del sector salud (S).	2015-2022	Secretaría de Salud	
7	Garantizar que los indicadores tengan siempre presentes los derechos	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Instituto

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	humanos a través del desarrollo de un sistema de información en salud ágil, eficaz, amigable y transparente.			Nacional de Estadística - INE , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Desarrollo Social
8	Definir agendas de investigación y evaluación en salud para tomar decisiones oportunas enmarcadas en los DDHH (S).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
9	Mejorar la recopilación, consolidación y disponibilidad de la información, particularmente información acerca de: (i) fuentes de fondos; (ii) gastos en salud, desagregados por agencias y niveles de facilidad; (iii) producción de servicios, y (iv) personal de servicios de salud a nivel de establecimientos (S-65. Encuesta sobre prestaciones de servicios y seguimiento del gasto público. Educación y salud en Honduras. Banco Mundial).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Finanzas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística -INE, Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP
10	Desarrollar un sistema de información integral en salud, homogéneo y validado con los diferentes sectores que identifique los indicadores de proceso y de impacto sobre derecho a la salud, que publique periódica y ampliamente la información que procesa(S).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Instituto Nacional de Estadística - INE
11	Definir y sostener técnicamente las prioridades de desarrollo nacional y derecho a la salud ante la cooperación externa con equipos técnicos interdisciplinarios de alto nivel (S).	2016-2018	Secretaría de Salud	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa- SEPLAN
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Concertar un nuevo modelo de salud, en el que se asegure la participación de la población. (Informe general de las consultas regionales en el marco del proceso de diseño de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, 2011.	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Gobiernos Locales

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Planificar y generar presupuestos participativos en las instituciones del Estado que se vinculan con el mantenimiento de la salud (S).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa -SEPLAN, Secretaría de Finanzas, Consejos de Desarrollo Regional, Gobiernos Locales
3	Promover la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario, nacional e internacional ("La Salud de los Hondureños en los Años de la Reconstrucción y Transformación Nacional", S-57).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Educación, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
4	Integrar una comisión de transparencia para el monitoreo de servicios de salud, que asegure la documentación de casos relacionados con negligencia médica, una prestación de servicios acorde con criterios de derechos humanos. Desarrollar en este marco un observatorio ciudadano de la salud como derecho humanos (Doc. 203, pp. 3-9; Informe general de las consultas regionales, en el marco del proceso de diseño de la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción Derechos Humanos).	2014-2018	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH	Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas-TSC, Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP
5	Integrar una comisión de monitoreo social para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de Estado con respecto al derecho a la salud, incluido casos relacionados con negligencia médica (Doc. 203, pp. 3-9; Informe general de las consultas regionales, en el marco del proceso de diseño de la primera política pública y plan nacional de acción en justicia y derechos humanos).	2015-2022	Organizaciones Ciudadanas	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Consejos Regionales de Desarrollo, Gobiernos Locales
6	Promover la organización de los usuarios de los servicios de salud para el reclamo sobre el mejoramiento de la calidad de los servicios y el respeto del derecho a la salud, mediante procesos de auditoría social a la calidad de los servicios con criterios de derechos humanos y el cumplimiento de los	2014-2022	Organizaciones Ciudadanas	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Salud, Consejos Regionales de Desarrollo, Gobiernos Locales

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	protocolos e atención a las y los portadores del derecho a la salud (S).			
7	Promover la organización de los usuarios de los servicios de salud para el reclamo sobre el mejoramiento de la calidad de los servicios y el respeto a la garantía del derecho a la salud (S).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Consejos Regionales de Desarrollo, Gobiernos Locales
8	Inclusión de organizaciones de la sociedad civil en espacios de deliberación y de decisión sobre políticas y servicios de atención en salud (Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos 21.º período de sesiones. Temas 2 y 3 de la agenda 2 de julio de 2012).	2014-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Consejos Regionales de Desarrollo, Gobiernos Locales
9	Implementar mecanismos de organización y participación de los usuarios de los servicios de salud en su calidad de portadores y portadoras de derecho a la salud (S).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Consejos Regionales de Desarrollo, Gobiernos Locales, Organizaciones Ciudadanas
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Promover espacios de diálogo sobre el derecho a la salud en los medios de comunicación (S).	2014-2015	Secretaría de Salud	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Entidades Académicas, Medios de Comunicación, Asociaciones de Medios, radios comunitarios, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Divulgación a través de los medios y del sistema educativo del concepto y atributos del derecho a la salud y de la atención en salud (S).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Desarrollo Social
3	Sistematizar el Sistema Integral de Atención Primaria en Salud Familiar-Comunitario en el marco del proceso de	2015-2022	Universidad Nacional Autónoma de	Secretaría de Salud, Gobiernos Locales, Consejos Regionales de Desarrollo

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	vinculación UNAH/Sociedad y generar una discusión pública sobre las buenas practicas del sistema y sobre modelos de salud y derechos humanos (Presidencia de la República, Decreto Ejecutivo No. PCM-025-2012).		Honduras - UNAH	
4	Revisión del Modelo Educativo en la Educación superior para la incorporación del enfoque de derechos humanos (Modelo Educativo de la UNAH, Serie de Publicaciones de la Reforma Universitaria No. 3. 2009).	2014-2015	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH	Comisión Nacional de Recursos Humanos en Salud, Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo de Educación Superior
5	Incorporación de temas de derechos humanos y de derecho a la salud en el sistema educativo formal (S).	2013-2018	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -CONADEH,
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Investigar y deducir responsabilidades a los funcionarios de las instituciones de salud que incumplan con sus deberes de garantizar una atención libre de maltrato y discriminación (S).	2015-2022	Ministerio Público	Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Salud, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud).	2014-2015	Congreso Nacional de la República	Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores
2	Elaborar o actualizar lineamientos de: i) atención a pacientes en servicios de emergencia; ii) bioseguridad en servicios ambulatorios; iii) manejo integral ambulatorio infantil; iv) buenas prácticas de laboratorio. Traducir los lineamientos en un Protocolo de Atención de fácil comprensión y que recuperen las nociones de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y	2015-2016	Secretaría de Salud	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	aceptabilidad y ampliamente difundidos de atención a las y los portadores del derecho a la salud.			
3	Implementar la política nacional de abastecimiento y distribución de medicamentos y reestructurar el sistema de adquisición de medicamentos de las instituciones públicas de salud a fin de evitar el desabastecimiento de medicamentos y suministros esenciales y la falta de tratamientos médicos y prevenir la corrupción.	2014-2022	Secretaría de Salud	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Comisión Nacional de Compras de Medicamentos, Tribunal Superior de Cuentas-TSC
4	Realizar acciones de investigación sobre procesos irregulares o poco transparentes de los procesos de adquisición y distribución de medicamentos. Llevar los procesos hasta la deducción de responsabilidades administrativas o penales según corresponda y aplicar mecanismos novedosos de reparación de las víctimas.	2014-2022	Ministerio Público	Secretaría de Salud, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia)

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Marco Normativo

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que, de acuerdo con el principio de integralidad, están relacionados con otros, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la salud, a la información, a la igualdad, a la educación, a la intimidad, a una vida libre de discriminación y de violencia, y a disfrutar del progreso científico, entre otros, todos contenidos en distintos instrumentos internacionales.

El reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es resultado de la lucha de diferentes organizaciones y movimientos sociales como el feminista y amplio de mujeres y el movimiento LGBTTI (lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, travestis, transexuales y Intersexuales), así como de los estudios en diversos campos (población, salud, estudios culturales, sexualidad) por lo que el surgimiento de unos y otros es indisoluble⁸³.

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos abarcan principios básicos de derechos humanos. Los tratados internacionales son la base para el reconocimiento y protección de los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción. Algunos de estos instrumentos son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

La definición de derechos sexuales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,

⁸³ Roger Raupp Ríos, *Apuntes para un derecho democrático de la sexualidad*, Universidad de Columbia, 2003.

⁸⁴ Marusa López Cruz y Luz Maceira Ochoa, *Manual para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y*

establece el derecho de todas las personas, libres de coerción, discriminación y violencia a: el más alto estándar de salud sexual, incluyendo el acceso a servicios de cuidado a la salud sexual y reproductiva; la búsqueda, recepción y otorgamiento de información relacionada con la sexualidad; la educación sobre la sexualidad, el respeto por la integridad física, escoger a una pareja, decidir ser sexualmente activo o no, al matrimonio consensuado, a decidir tener o no hijos e hijas y cuándo, y a ejercer una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.

En 1979, con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se avanzó en el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres, relacionados algunos con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que significan igualdad de hombres y mujeres en las decisiones reproductivas y la responsabilidad compartida que implican las y los hijos, entre otras⁸⁴.

Contenido de los derechos sexuales y reproductivos

Según quedó definida en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, en 1994, la salud reproductiva se concibe como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. [...] Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a

los jóvenes, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. México, 2003.

obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. [...] Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual”⁸⁵.

En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en 1995, se sentaron importantes precedentes para los derechos sexuales y los derechos reproductivos, al reconocer que “los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente al respecto sin coerción, discriminación, ni violencia”⁸⁶.

Los derechos reproductivos implica dos correlatos:

1. **El derecho a la salud reproductiva:** El cual implica la obligación gubernamental de garantizar la disponibilidad de servicios de salud reproductiva, así como remover las barreras legales para esa prestación.
2. **El derecho a la autodeterminación reproductiva:** Este se basa en el derecho a planificar la familia, a estar libre de interferencias en las decisiones reproductivas, así como a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afectan la vida sexual o reproductiva de las mujeres⁸⁷.

⁸⁵ Organización de las Naciones Unidas, *Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo*, El Cairo, 5 al 13 de septiembre de 1994.

⁸⁶ *Plataforma de Acción de Beijing*, Párrafo 96.

Además de la mención explícita en las dos Conferencias ya mencionadas, la salud sexual y reproductiva y su vinculación con otros derechos ha estado de alguna manera implícita desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948, así como en otros marcos normativos internacionales, como los dos Pactos Internacionales que entraron en vigencia en 1976, el de los Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, el cual menciona en su artículo 12, de manera precisa, el derecho a la salud como “el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”; definición que fue desarrollada posteriormente en el comentario No. 14 de los DESC, emitido en 2000⁸⁸.

De igual manera, han abonado al entendimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, desarrollada en 1993, al afirmar explícitamente que los derechos de la mujer son derechos humanos; así como las reuniones de seguimiento en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en 1999; y las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre las que originalmente se encontraba lograr para el 2015, la meta 5, referida a la reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes; y la meta 6-A: haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA. Para el 2008, fueron incluidos también de manera explícita, como meta 5-B: “lograr, para el año 2015, el acceso universal a la atención de la salud reproductiva” y como meta 6-B “lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten”.

⁸⁷ Centro por los Derechos Reproductivos, *Gaining Ground, A Tool for Advancing Reproductive Rights Law Reform*, Nueva York, 2006.

⁸⁸ UNFPA, *Estado de la Población Mundial 2012. Sí a la opción, no al azar*. Nueva York, 2012.

Según Chiarotti (2005), el goce de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos se relaciona directamente con tres aspectos fundamentales:

1) derecho a la atención en todo lo relacionado con la salud reproductiva. 2) el derecho a no recibir trato discriminatorio de parte del Estado y sus representantes. 3) el derecho a tener autodeterminación reproductiva. Por tanto, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, para las mujeres, el ejercicio de sus derechos equivale a decidir ética y responsablemente sobre sus cuerpos en el sentido de libre ejercicio de su sexualidad y de su reproducción⁸⁹.

Obligaciones del Estado

Como todo derecho humano, los derechos sexuales y los derechos reproductivos implican para el Estado, las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. Las dos primeras obligaciones, conocidas como negativas, se objetivan en el papel del Estado y sus funcionarios y funcionarias, al no interferir, no discriminar y no ejercer coerción a los titulares de derechos. La obligación de cumplir, por su parte, se relaciona con la creación y mantenimiento de políticas públicas, servicios y suministros en el campo de la salud sexual y reproductiva, y se conocen como obligaciones positivas.

Ambos derechos poseen ciertos atributos. Los atributos de los derechos reproductivos comprenden, los derechos individuales y de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos; disponer de información y de los medios para ello, alcanzar el nivel más elevado de salud reproductiva, controlar sus propios cuerpos,

tener relaciones sexuales consensuadas, sin violencia ni coerción; contraer matrimonio con el consentimiento libre y pleno de ambos contrayentes.

Por su parte, los atributos de los derechos sexuales que se contemplan son: el nivel más alto disponible de la salud sexual, incluyendo el acceso a servicios de atención a la salud sexual y reproductiva; acceso a la educación sexual de manera integral, laica y científica; el pleno respeto a la integridad física del cuerpo; escoger ser sexualmente activo(a) o no serlo; tener relaciones sexuales que sean consensuales; contraer matrimonio con el pleno y libre consentimiento de ambas personas; ser libre y autónomo(a) en la escogencia de la pareja; insistir en el sexo seguro y a practicarlo para la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH; acceso a toda una gama de información sobre sexualidad y salud sexual, educación y servicios confidenciales de la más alta calidad posible⁹⁰.

Bajo dicho entendimiento, algunas de las obligaciones concretas de los Estados firmantes buscan la igualdad y equidad sexual, el derecho a estar libres de toda forma de discriminación, el respeto a la diversidad, el derecho de toda mujer a decidir sobre su maternidad, el acceso a información objetiva, veraz y oportuna, basada en argumentos científicos; a expresar la preferencia sexual y a tener relaciones consensuadas, el respeto a la intimidad y la vida privada, incluyendo el respeto a la confidencialidad; el acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y adecuados; servicios de salud integrales y de calidad, educación sexual integral, laica y científica; el respeto a ejercer la sexualidad libre de violencia, torturas,

⁸⁹ S. Buglione, y V. Feix, *Sistematización y análisis de leyes de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe*. Brasil, 2006.

⁹⁰ La conceptualización enriquecida sobre derechos sexuales y derechos reproductivos proviene de la

Consulta Técnica sobre Salud Sexual realizada en 2002 por la OMS.

coerción, explotación, abusos sexuales y cualquier otro tipo de violencia; entre otras⁹¹.

La salud reproductiva es un aspecto fundamental en el bienestar de las personas en general y muy especialmente de las mujeres, quienes llevan la carga biológica de la reproducción. No contar con acceso regular a servicios seguros y de calidad ocasiona que las mujeres sean vulnerables a un sinnúmero de complicaciones de la salud, que incluso pueden llegar a la muerte o a consecuencias nocivas para su salud.

La obligación de los Estados de suministrar servicios de salud reproductiva, surge como resultado de la obligación de proteger la vida y la salud de toda persona sin discriminación basada en el sexo. Por esta razón: “Los Estados deben tomar en cuenta las necesidades particulares de salud tanto de las mujeres como de los hombres, y dado que la salud reproductiva es fundamental para el bienestar de las mujeres, los Estados deben tomar medidas afirmativas para garantizar que la atención a la salud reproductiva esté a disposición y al alcance de todas las mujeres, asimismo, deben garantizar que la información y los servicios para la atención a la salud sexual y reproductiva estén disponibles, sean accesibles y asequibles, y que sea eliminado cualquier obstáculo legal o informal que exista para el acceso a los mismos⁹²”.

Los Estados también están obligados a eliminar las barreras legales y jurídicas de la atención en la salud reproductiva. Estas barreras pueden ser, restringen la publicidad de los anticonceptivos, exigen el consentimiento del esposo para obtener anticonceptivos y

penalizan la esterilización voluntaria entre otras.

En Honduras, desde 1999, la Secretaría de Salud emitió el documento *Políticas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva*, el cual pretendió, en su momento, convertirse en el marco conceptual, estratégico y operativo para la implementación de la temática sexual y reproductiva de la institución rectora de salud en el país. Sus principios y estrategias fueron concebidos de forma amplia e integral, incluyendo la equidad, las diferencias culturales y étnicas, la óptica de proceso durante el ciclo de vida y la promoción de comportamientos saludables; no obstante, los logros obtenidos en el plano operativo han sido limitados.

En consecuencia, se demanda de mayores esfuerzos en cuanto a descentralización y mejoramiento de la calidad de los servicios, el desarrollo de recursos humanos sensibles y competentes en relación con un enfoque de derechos, una mayor coordinación interinstitucional e intersectorial; así como el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación de las acciones⁹³.

Diagnóstico de los derechos sexuales y reproductivos

A partir de las definiciones sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, las obligaciones que le corresponden al Estado hondureño son múltiples y, por esta misma razón, no se concentran en un solo sector institucional, sino que por su misma definición, abarca múltiples sectores, instituciones, servidores públicos y disciplinas, para poder

⁹¹ Marusa López Cruz y Luz Maceira Ochoa, *Manual para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes*, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. México, 2003.

⁹² Centro de Derechos Reproductivos, *Haciendo de los derechos una realidad. Un análisis del trabajo de los comités de monitoreo de la ONU sobre derechos reproductivos y sexuales*, 2003. Fuente:

www.reproductiverights.org/pdf/bo_hacinedo_body.pdf (consultada el 9 de julio de 2007).

⁹³ M. Carías, *Análisis de situación de población en Honduras*, Cuaderno 2, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Tegucigalpa, 2009.

dar una respuesta congruente con los atributos descritos.

En este sentido, tanto las dependencias del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial y el Legislativo, devienen actores principales para el respeto, protección y cumplimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, desde sus respectivos ámbitos de competencia.

Para el caso, las diversas instituciones que conforman el Poder Ejecutivo, comenzando pero no agotándose en las instituciones del sector salud, deben complementarse con otras que pertenecen al sector social: Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social; Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad, sus dependencias y la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes. Igualmente, se demanda el concurso de otras instituciones, como el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, por mencionar las más vinculadas.

Por su parte, el Poder Legislativo, que en Honduras se concentra en el Congreso Nacional de la República, es directamente titular de deberes en lo atinente a crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que, en cada caso particular, ayuden a respetar, proteger y cumplir los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las hondureñas y hondureños.

Por último, el Poder Judicial y sus dependencias, deviene igualmente titular de deberes en lo concerniente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de hondureñas y hondureños, a través de su mandato de impartir justicia de manera gratuita, en nombre del Estado, por magistrados y magistradas, jueces y juezas independientes, únicamente sometidos a la

Constitución y a las Leyes. Es importante mencionar también que para un adecuado abordaje en el tema de derechos sexuales y reproductivos, se necesita del concurso decidido de las autoridades que representan a los gobiernos locales, así como del apoyo técnico y financiero de las agencias multilaterales y bilaterales de cooperación externa.

Esta situación ideal planteada, contrasta en la realidad hondureña, con instituciones muy tímidas en su accionar en el tema. Las instancias del Estado que se involucran para aportar al reconocimiento y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, tradicionalmente se ha reducido a las acciones que se realizan desde la Secretaría de Salud en los temas de control del embarazo, al aumento en la cobertura del parto limpio e institucional, a la atención puerperal, a la disminución de las altas tasas de mortalidad materna, a la prevención del VIH, a la prevención del embarazo en adolescentes mediante la postergación de las relaciones sexuales y el mejoramiento de la salud reproductiva de las mujeres mediante el espaciamiento de los embarazos a través de métodos anticonceptivos artificiales⁹⁴.

En los últimos años se han afianzado otras áreas de trabajo en derechos sexuales y reproductivos, dirigidas hacia la prevención del embarazo en adolescentes en general, a la promoción de los derechos de las personas infectadas con el virus del SIDA, la prevención y atención a la violencia sexual, especialmente en niñas y niños, y la necesidad de instituir la educación sexual dentro de la educación formal del país. Todas estas áreas de trabajo, no obstante, se han desarrollado desde una óptica focalizada, en la que no ha primado un trabajo multisectorial ni interdisciplinario.

El desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos es muy incipiente en Honduras

⁹⁴ A. Ramírez y M. A. Martínez, *Diagnóstico nacional: los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Honduras*, CLADEM-Honduras, 2003.

y el estado actual de sus alcances se debe a las acciones, a veces aisladas, a veces sistemáticas, de las organizaciones de mujeres del país y principalmente al trabajo de algunas instituciones de salud, a través de su personal técnico con un apoyo no siempre continuo de parte de sus autoridades; así como de organismos de cooperación, tanto multilaterales como bilaterales, que han apoyado técnica y económicamente para el desarrollo de la salud sexual y reproductiva en el país⁹⁵. No obstante, el reconocimiento de estos temas desde un enfoque de derechos, se encuentra aún en un nivel de proyecto.

Hasta ahora, las medidas de políticas sobre derechos sexuales y reproductivos que ha enfatizado el Estado hondureño, han estado enfiladas al mejoramiento del acceso a los servicios dirigidos al control prenatal y atención institucional del parto, con el propósito de reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Los compromisos contraídos por el Estado, sobre todo los que se refieren a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, han demandado medidas concretas de parte de la Secretaría de Salud, como el lanzamiento del proceso Reducción acelerada de la mortalidad materna y de la niñez 2008-2015, parte de cuyas metas son la reducción de la mortalidad materna a 45 por cada 100,000 y el incremento del parto institucional a 85%⁹⁶.

Actualmente, los datos disponibles sobre mortalidad materna datan de los años 1990 y 1997, años en los que Honduras obtuvo una reducción de 74 puntos porcentuales, ubicando la tasa de mortalidad materna en 108 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Las principales causas identificadas son las hemorragias, trastornos hipertensivos y las infecciones; todas ellas, en gran medida, evitables al mejorarse el número de controles prenatales

recibidos. Honduras ha mejorado también entre 1990 y 2006 en la atención de partos institucionales, con recursos humanos calificados. Pero, aún persiste un sector importante de la población, de alrededor del 30% de mujeres embarazadas, que no tienen acceso a la atención institucionalizada, sobre todo aquellas ubicadas en el quintil de riqueza más bajo⁹⁷.

El desmantelamiento de la responsabilidad social del Estado hondureño de garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas calidad y cobertura de los servicios sociales, ha traído como consecuencia el desamparo institucional, donde la mayoría de la población, en especial las mujeres en el área rural, no cuentan con oferta de servicios en la área de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el VIH⁹⁸.

Una área de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos que se encuentra particularmente desatendida es la que se refiere al embarazo en adolescentes. Visto como indicador de país, una alta tasa de embarazo en adolescentes nos habla doblemente mal de las obligaciones de un Estado; por un lado, la desatención a los derechos sexuales y reproductivos y por otro, la desatención a los derechos de la niñez.

Las últimas cifras disponibles de la ENDESA 2005-2006, reportan un 22% de adolescentes que eran madres o estaban embarazadas al momento de realizarse la encuesta, oscilando entre 14% en áreas urbanas y 31% en áreas rurales; en tanto que por quintil de riqueza, la distribución es de 10% en el quintil superior y de 31% en el quintil inferior. De manera similar, el porcentaje total de partos atendidos en niñas entre 10 y 19 años era de 21.82%⁹⁹.

Con relación al uso de anticonceptivos, los datos reportados por la ENDESA 2005-2006,

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ Secretaría de Salud de Honduras, *Reducción acelerada de la mortalidad materna y de la niñez 2008-2015*, Tegucigalpa, 2008.

⁹⁷ Gobierno de Honduras, *Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer informe de país*, Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tegucigalpa, 2010.

⁹⁸ M. E. Méndez y Cols, *Análisis de las políticas nacionales de ITS y VIH/SIDA desde un enfoque de género*, CEM-H/UNIFEM, Tegucigalpa, 2003.

⁹⁹ Datos de ENDESA Honduras 2005-2006.

muestran que la población adolescente está desatendida, ya que solamente un 11.5% de las adolescentes sexualmente activas reportó su uso. En lo que respecta a la población general, el uso de métodos anticonceptivos no ha variado sensiblemente en la última década, manteniéndose alrededor de dos tercios de las mujeres unidas. Sin embargo, se ha reportado una variación en la preferencia del método anticonceptivo, de la píldora a la inyección, en las mujeres adolescentes¹⁰⁰.

El VIH constituye la primera causa de muerte en mujeres en edad reproductiva, con una tasa de 250 por cada 100,000 mujeres. La feminización de la epidemia ha sido una constante en Honduras, por contagio heterosexual¹⁰¹. Otro de los problemas de salud relacionados con el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos son los tumores, principalmente de mama y del cuello del útero; resaltando el dato de que solamente un tercio de las mujeres que han obtenido resultados positivos en las respectivas citologías, han recibido consulta de seguimiento a su condición¹⁰².

El Estado hondureño ha mostrado avances en la atención a las personas viviendo con VIH, según se reporta bianualmente ante la Asamblea de las Naciones Unidas, a raíz de la declaración de compromiso que se firmó en el año 2001. Los mayores avances se han realizado en lo concerniente a la construcción de centros de atención integral, de los cuales el país cuenta con 39 en todo el territorio nacional; también en la captación de personas que requieren tratamiento antirretroviral y en el seguimiento que se da a estos casos. Las cifras reportadas en los informes correspondientes revelan que el porcentaje de PVIH que recibe terapia antirretrovírica ha ido incrementándose del 36.45% en 2005, a 48% en 2006 y a 56% en 2007; aunque dicha cifra descendió en los años 2010 y 2011,

reportándose 41.1% y 43.8%, respectivamente¹⁰³.

Se ha incrementado también la atención a mujeres embarazadas viviendo con VIH, a quienes se ha captado para iniciar tratamiento antirretroviral, contribuyendo así a frenar la transmisión del VIH de madre a hijo(a). Las cifras que el Estado hondureño ha reportado al respecto, muestran una ampliación desde un 2% en 2003, 3.37% en 2005, 21% en 2008, 22.4% en 2010 y 21.6% en 2011. Como puede observarse, la cobertura se extendió en los primeros años, pero ha tendido a estabilizarse, en una cifra que deja por fuera de tratamiento a más de las tres cuartas partes de la población de embarazadas y de niños(as) por nacer que necesitan del tratamiento¹⁰⁴.

Honduras cuenta desde el año 1998 con una Ley contra la Violencia Doméstica, como respuesta ante las demandas de grupos feministas para detener cualquier forma de violencia física, emocional, sexual y económica causada por la pareja sentimental. En su versión original, la Ley adolecía de fallas y debilidades en sus procedimientos de aplicación, que impedían una correcta aplicación o dejaban a las víctimas desprotegidas ante futuros hechos de parte de los perpetradores de violencia.

Con las reformas aprobadas en 2005, se introdujeron significativos avances en la Ley, entre ellos, la sanción del acto que motiva la denuncia de violencia doméstica, la introducción de mecanismos de coordinación y seguimiento, el aumento del período de imposición de las sanciones y otros más, cuya debida aplicación dependerá de la voluntad de las instituciones del Estado sobre las que recae la responsabilidad de contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

¹⁰⁰ Secretaría de Salud de Honduras, *Reducción acelerada de la mortalidad materna y de la niñez 2008-2015*, Tegucigalpa, 2008.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Informes de país para UNGASS 2003, 2005, 2008 y 2012.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

Podemos concluir que la Ley contra la Violencia Doméstica es una de las leyes que establece y expresa claramente la protección hacia las mujeres de conformidad a teleología de las convenciones paradigmáticas en la protección de los derechos humanos de las mujeres, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Para) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)¹⁰⁵.

No obstante estos avances, en otros ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras la desatención es mayor, como muestra el incremento en los datos sobre violencia doméstica que se registran en el país. Las cifras reportadas durante los últimos años por el Observatorio de la Violencia, dependiente del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, muestran que entre 2008 y 2011 los casos de mujeres agredidas se han prácticamente duplicado, en tanto que el número de niñas víctimas de violación se ha cuadruplicado¹⁰⁶.

En un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2003 sobre la situación de atención a víctimas de violencia sexual, se encontró que la respuesta brindada a dicha población adolecía de una adecuada coordinación entre las diferentes instancias participantes: fiscalías, clínica forense, centros de salud, clínicas de consejería familiar y otros involucrados; y que el apoyo que se daba a la víctima y sus familiares no les permitían acceder a los mecanismos de justicia.

Igualmente, dicho estudio pudo documentar que no existe conocimiento sobre todo en lo que concierne a temáticas sobre género y las de tipo jurídico, ligadas a la respuesta necesaria; tampoco existe conciencia de parte de ciertos

profesionales que laboran en la Secretaría de Salud sobre la importancia de denunciar los casos de víctimas de violencia sexual, es decir, de su rol como titulares de deberes, presumiblemente por temor a represalias y por la falta de garantías a su seguridad personal. Se pudo constatar también que no existe la suficiente divulgación sobre los mecanismos que debe seguir la población general y las víctimas de violencia en particular, para acceder a una adecuada respuesta de parte de las instancias correspondientes¹⁰⁷.

Otro de los ámbitos en los cuales el Estado hondureño ha venido incumpliendo sus obligaciones respecto a los derechos sexuales y reproductivos de la juventud, se refiere a los escasos avances que ha tenido en relación a la cobertura de la información y educación sexual que debe brindarse a los jóvenes en el sistema escolar formal y que según se estipula en la Ley Especial de VIH, vigente en el país desde 1999, se le asigna a la Secretaría de Educación.

A pesar de dicha obligatoriedad, hasta el año 2009 Honduras no había definido de manera oficial una estrategia de educación sexual en el sector educativo, dirigida hacia la juventud; tampoco se había iniciado un proceso de capacitación masiva para el personal docente encargado de su implementación, ni tampoco se habían consensuado los materiales educativos para desarrollar la estrategia. El incumplimiento del derecho a la información atentan también de manera directa sobre los derechos sexuales y reproductivos de la juventud.

Por su parte, el Poder Legislativo, lejos de cumplir con la obligación de respetar lo que el mismo Congreso Nacional de la República había legislado en 1999, en la práctica designa de manera improcedente comisiones para emitir dictámenes sobre las guías de educación

¹⁰⁵ República de Honduras, *Ley contra la Violencia Doméstica y sus reformas*. Instituto Nacional de la Mujer, Tegucigalpa, 2005.

¹⁰⁶ Cifras tomadas de los boletines números 11, 16, 19 y 20 del Observatorio de la Violencia. Instituto

Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS-UNAH.

¹⁰⁷ E. Alduvín, *Diagnóstico situacional de la atención a víctimas de violencia sexual Honduras*, OPS, Tegucigalpa, 2003.

sexual, obstaculizando con este proceder las labores correspondientes al Ministerio de Educación.

El Congreso Nacional también ha emitido el Decreto Legislativo No. 54-2009, que prohíbe, e incluso penaliza, el uso de la llamada píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).

En consonancia con este hecho, en 2011, el entonces titular de la Secretaría de Salud, suscribió un Acuerdo Ejecutivo para prohibir la promoción, comercialización y uso de la PAE. Desde entonces, las organizaciones feministas han venido exigiendo la derogación de dicho Acuerdo y del Decreto Legislativo correspondiente, por considerárseles actos que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las hondureñas¹⁰⁸.

En Honduras, el debate sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos se ha sido limitado a pocos temas: mortalidad materna, planificación familiar y embarazo adolescente, violencia sexual, VIH, educación sexual; todos relacionados entre sí. Las voces en contra de estos derechos han provenido principalmente de grupos ligados a las Iglesias o vinculados a la clase política y al poder económico del país. Su oposición se centra fundamentalmente en el derecho de las mujeres a decidir sobre el ejercicio de su propia sexualidad.

Las voces disonantes a este discurso, es la de los movimientos de mujeres, los cuales han tenido poco peso frente a posiciones fundamentalistas religiosas. Igualmente, las acciones realizadas por estos grupos son, en muchos casos, coyunturales lo cual no genera impactos sociales importantes¹⁰⁹.

Finalmente, el papel que el Estado en su conjunto ha desempeñado en la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras ha sido

parcial, tímido y carente de horizontalidad y peso en las políticas públicas del país. Su casi exclusivo accionar alrededor de los temas de salud, no deja de ser la consecuencia de visibilizar a las mujeres, más que como sujetos de derecho, como organismos reproductivos de la sociedad. Se percibe que no ha habido la suficiente voluntad política para incorporar otros temas en los presupuestos nacionales para llevar a la práctica los compromisos internacionales adquiridos.

Entre los factores que se pueden identificar para el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, puede mencionarse cierta tendencia a que algunos poderes del Estado que se arroguen competencias de otros poderes del Estado, como es el caso del proceso de validación de las llamadas guías de educación sexual, labor que le corresponde a la CONASIDA y a la Secretaría de Educación, pero que asumida por el Congreso Nacional de la República. El mismo Congreso Nacional ha no se le ha estipulado dentro del presupuesto general de la República, la correspondiente asignación para que la CONASIDA que pueda funcionar de manera regular.

Otro tipo de factores tienen que ver con el estilo de trabajo que se ha acostumbrado en la Secretaría de Salud, el cual ha estado supeditado a los ritmos y demandas de la cooperación internacional, a través de proyectos que les son financiados. Este estilo de trabajo se caracteriza por el énfasis en la ejecución de proyectos específicos y no de programas de carácter permanente; la valoración preferente de los porcentajes de ejecución física, más que el impacto obtenido; la duplicidad en las intervenciones realizadas por programas y proyectos paralelos; la excesiva dependencia de la cooperación externa para el financiamiento de programas y

¹⁰⁸ Centro de Derechos de Mujeres, *Sobre la anticoncepción de emergencia las mujeres exigimos una respuesta ya*, Comunicado de prensa, Tegucigalpa. 16 de mayo de 2012.

¹⁰⁹ A. Ramírez y M. A. Martínez, *Diagnóstico nacional: los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Honduras*, CLADEM-Honduras, 2003.

proyectos; así como la existencia de múltiples contrapartes de cooperación.

Existen también prácticas en la administración pública ligadas al clientelismo político, que repercuten en la fuga de los recursos humanos mejor capacitados por mejores oportunidades fuera del sistema gubernamental y el nombramiento de recursos humanos atendiendo a razones de carácter político-patrimonial y no de tipo técnico-profesional. Si a lo anterior añadimos la afectación que tienen los servicios de atención por las continuas huelgas de las y los trabajadores de salud de las instituciones del Estado, argumentando incumplimiento en el pago de las obligaciones contractuales por parte del mismo, podemos concluir que la población se ve doblemente afectada en sus derechos.

Se puede mencionar también el estilo de gerencia en la administración pública, en la cual es una constante la incongruencia entre los instrumentos y herramientas de planificación, concretamente entre planes, programas, proyectos y mecanismos presupuestales; así como la generalizada debilidad de los mecanismos de monitoreo y evaluación institucionales y la carencia de un adecuado sistema de petición y rendición de cuentas entre las instituciones del Estado y las organizaciones de sociedad civil. Estos últimos dos factores pueden facilitar actos de corrupción y de impunidad.

La corrupción, como factor que incide en el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, si bien es difícil de probar de manera judicial, existe la percepción dentro de la ciudadanía de que hay actos de corrupción en las instituciones del Estado¹¹⁰. Particularmente sobre la Secretaría de Salud son cuestionables los procedimientos para la adquisición de medicamentos y otro tipo de insumos, en los cuales se acude de manera reiterada e injustificada a las compras directas “de emergencia” sin los debidos procesos de

licitación e, incluso, en la adquisición de lotes de medicamentos con fechas próximas a vencimiento.

Desde el año 2006 esta situación había sido objeto de preocupación y se procedió a conformar mediante el Decreto Ejecutivo PCM-10-2006, la Comisión Interinstitucional de Medicamentos, integrada por varios sectores, incluyendo representantes de la sociedad civil y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de velar por la transparencia de dichos procesos. Desde su inicio, dicha Comisión recibió el malestar y limitado apoyo logístico de parte de los técnicos encargados de la Secretaría de Salud. Si bien dicha Comisión obtuvo resultados positivos para la adquisición oportuna y ahorros significativos para el Estado; resultados que se tradujeron en un abastecimiento de la red de servicios de más de un 80% y un ahorro de casi 30 millones de lempiras en las compras realizadas mediante licitaciones. Dicho proceso no tuvo la deseada continuidad debido a diversas razones de tipo político.

La falta de medidas de control y de las sanciones correspondientes a los responsables, constituye una falta de responsabilidad del Estado hondureño que se constituye en una violación de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Esta situación de desabastecimientos crónicos, licitaciones y mecanismos de compras dudosos ha sido denunciado de parte del Tribunal Superior de Cuentas, en 2012; situación que obligó al Poder Ejecutivo a decretar emergencia en el Hospital Escuela, principal centro hospitalario del país, debido a la situación de crisis alcanzada este año¹¹¹.

Por otro lado, las instancias de justicia difícilmente pueden dar seguimiento y resolución a las denuncias de violaciones de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, debido a que las y los operadores de

¹¹⁰ PNUD, *Informe Nacional de Desarrollo Humanos 2006. Hacia la expansión de la ciudadanía*, Tegucigalpa, 2006.

¹¹¹ Decreto ejecutivo Número PCM-024-2012, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* el 13 de julio 2012.

justicia revictimizan a la mujer que sufre actos de violencia sexual¹¹². A su vez, el escaso apropiamiento de las y los titulares de derechos sobre su condición, impide que se genere una cultura de respeto hacia ellos y ellas por parte de los y las operadores de justicia.

Igualmente, existe muy poca conciencia de los derechos sexuales y reproductivos que les asisten a hombres y mujeres, sobre todo los más jóvenes. Esto se ve reflejado en la escasa denuncia sobre la falta de cumplimiento del derecho a la información y educación integral de la sexualidad de parte de las y los jóvenes en el sistema escolar. También existe una escasa conciencia de parte de las mujeres que son discriminadas o mal atendidas en los servicios de salud, por razones de edad, estado civil, condición educativa o étnica.

Con la reciente declaratoria de parte del Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Babatunde Osotimehin, en noviembre del 2012, instando a los gobiernos a mostrar buena voluntad hacia los servicios de planificación familiar, para que se constituyan en una de sus prioridades, ya que se considera que el acceso

al control de la natalidad es un derecho humano esencial que ayuda además al desarrollo económico¹¹³; de esta manera se espera que cada vez más los gobiernos refuercen estos servicios y se concientice a la ciudadanía para la exigencia de tales derechos, le lleve a tener una mejor calidad de vida, basada en sus propias elecciones y decisiones.

Matriz sobre los derechos sexuales y reproductivos

Resultados de impacto

1. Garantizar a las mujeres una maternidad sin riesgos a través de servicios de salud sexual y reproductiva que se reflejen en la reducción de los índices de mortalidad materna y mortalidad infantil.
2. Garantizar la decisión libre y responsable de las mujeres y parejas sobre el número de hijos e hijas y del espaciamiento e intervalo de nacimientos, entregando servicios y productos para la planificación familiar.
3. Reducir la propagación de las ITS, incluyendo el VIH y garantizar el tratamiento integral a todas las personas que lo necesiten.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción de los derechos sexuales y reproductivos en la legislación.				
1	Reformar la Ley Especial de VIH/SIDA y sus reglamentos para superar los vacíos de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, y para facilitar la rotación en la presidencia de la CONASIDA, a fin de darle un verdadero enfoque de DDHH y de intersectorialidad a su trabajo (Foro Nacional de SIDA).	2014-2015	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Organizaciones Ciudadanas

¹¹² E. Alduvín, *Op. Cit.*, 2003.

¹¹³ Discurso del Director Ejecutivo del UNFPA, en la presentación del Informe Mundial de Población 2012, *Por elección, no por azar*, Londres, el 14 de noviembre de 2012.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Que el Congreso Nacional de la República no retome la discusión y aprobación constitucional del Decreto Legislativo No. 54-2009, que fuere vetada su aprobación por el Presidente de la República, y que prohíbe y penaliza el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), en consonancia con la Constitución de la República y los mandatos de los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Honduras (Centro de Derechos de Mujeres).	2014-2015	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Salud
3	Reformar la Ley de VIH-SIDA y elaborar y aprobar un marco normativo nacional claro y coherente para evitar la transmisión del VIH en la niñez, armonizado a las directrices internacionales en el tema e incluyendo un capítulo específico para la niñez, con medidas sobre el acceso a retrovirales, a nutrición adecuada, prevención de la transmisión, erradicación del estigma y la discriminación, educación para la prevención y situación de la niñez huérfana a causa del VIH (E/CN.4/1997/37) (doc. 143, Pág. 63, Observación general No. 3).	2013-2015	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Salud, Organizaciones Ciudadanas, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA, Secretaría de Desarrollo Social
4	Impulsar la aprobación de una Ley sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, a fin de que el Estado garantice a todas las mujeres y jóvenes la información y la disponibilidad de servicios accesibles, asequibles y de calidad sobre su salud sexual y reproductiva (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud).	2015-2016	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Salud
5	Mejoramiento de los procesos realizados por los operadores de justicia en la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica en lo atinente a coordinación, unificación de criterios e imparcialidad jurisdiccional, para el logro de la equidad en la impartición de justicia (UNFPA 2010. Looking Back, Moving Forward. Results and recommendations from the ICPD-at-15 process) (Centro de Derechos de Mujeres-Honduras. Denuncia presentada al Poder Judicial por debilidades en la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica. Fecha de publicación: 3 de mayo de 2012).	2014-2022	Corte Suprema de Justicia	Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Operadores de Justicia, Instituto Nacional de la Mujer-INAM
6	Incorporar en la Agenda del Ministerio de Educación, acciones efectivas que posibiliten la educación integral para la sexualidad y la	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud , Entidades Académicas,

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	reproducción establecidas en la legislación al respecto (Ley Especial de VIH/SIDA, 1999 y sus Reglamentos) (UNFPA 2010, Looking Back, Moving Forward. Results and recommendations from the ICPD-at-15 process).			Organizaciones Ciudadanas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM,
7	Garantizar que las políticas y decisiones públicas del Estado hondureño sean acordes con el principio de laicidad del Estado establecido en la Constitución de la República (Naciones Unidas Derechos Humanos. Recomendaciones de Derechos Humanos 2000-2009 Honduras).	2014-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA, Instituto Nacional de la Mujer - INAM,
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Incorporar en la planificación y presupuesto del Estado, procesos de implementación de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva que han sido aprobadas, pero que aún no se ha logrado su cumplimiento de manera sostenida a través de los diferentes administraciones de Gobierno (CONADEH Informe Anual 2010).	2014-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Desarrollo Social
2	Fortalecer la atención integral de las y los huérfanos afectados e infectados por el VIH, contemplando mecanismos para el pleno respeto de sus derechos humanos y no discriminación, por medio de: i) promoción de la salud sexual y reproductiva para la prevención del VIH; ii) atención integral; iii) protección y cuidado de la niñez huérfana y vulnerable por el VIH (doc. 9, p. 32, Plan de Oportunidades para la Niñez y la Adolescencia 2005-2015).	2015-2022	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA	Secretaría de Salud , Secretaría de Desarrollo Social
3	Ampliar las opciones de proyectos de vida para las y los adolescentes, especialmente para prevenir los embarazos en esta población:: i) Ampliar el conocimiento sobre sus determinantes socioculturales; ii) Promover la educación universal y de calidad, que incluya la educación sexual integral en las escuelas y en los espacios de encuentro juvenil;	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	iii) Seguir fortaleciendo la prevención de un segundo embarazo; y, iv) Garantizar la permanencia escolar de las madres adolescentes y embarazadas (Entre los progresos y las asignaturas pendientes: Quince años del Programa de Acción de El Cairo en América Latina y el Caribe, con énfasis en el período 2004-2009):			
4	Seguir aplicando su política de salud reproductiva, centrada en particular en las y los jóvenes, y que ponga en marcha programas de capacitación y servicios de asesoramiento sobre este particular tanto para hombres como para mujeres (Naciones Unidas Derechos Humanos, Recomendaciones de Derechos Humanos 2000-2009 Honduras).	2014-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de Seguridad Social-IHSS, Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH
5	Reforzar la promoción, las políticas y los vínculos en materia de: a) Programas en las respuestas frente al VIH; b) La tuberculosis; c) Servicios de atención primaria de la salud; d) Salud sexual y reproductiva; e) Salud materno-infantil; f) Hepatitis B y C; g) Farmacodependencia; h) Enfermedades no transmisibles; y, i) Sistemas de salud en general.	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de Seguridad Social-IHSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH
6	Garantizar la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgos a través de servicios de calidad y calidez que contemplen la asistencia durante el embarazo, incluyendo la atención obstétrica de emergencia, el parto y el puerperio, otorgándolos de manera gratuita cuando sea necesario (Observación No. 14 del PIDESC).	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de Seguridad Social-IHSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH
7	Garantizar el respeto a la elección voluntaria en materia de planificación de la reproducción y asegurar los medios, incluyendo los servicios médicos, para asegurar el derecho a decidir de todas las personas (Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo).	2015-2022	Secretaría de Salud	Asociación Hondureña de Planificación Familiar-ASHONPLAFA, Instituto Hondureño de Seguridad Social-IHSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH
8	Garantizar el acceso a tratamiento, atención integral, con enfoque de derechos humanos, no	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de Seguridad Social-

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	discriminación y de género a personas que padecen ITS, entre ellas el VIH, VPH y hepatitis C. (Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo).			IHSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH
9	Incremento del acceso a controles prenatales, atención del parto, posparto y postaborto; aumento del porcentaje de partos institucionales, y especialmente, del mejoramiento de los servicios de prevención de embarazos tempranos, prevención de segundo embarazo en adolescentes, atención a jóvenes embarazadas en el marco de un eficiente Programa de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud, Honduras 2010-2015).	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de Seguridad Social-IHSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH, Secretaría de Educación, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Instituto Nacional de la Mujer - INAM
10	Ampliar la cobertura de los programas de: a) Prevención del VIH, incluyendo los orientados a prevenir la transmisión madre-hijo/a, y demás infecciones de transmisión sexual; y, b) Prevención del abuso de tabaco, alcohol y otras drogas.	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Educación, Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia-IHADFA, Instituto Nacional de la Juventud - INJ
11	Desarrollar las competencias de los recursos humanos en el nivel de atención primaria en salud, para la atención de: a) Servicios de emergencia obstétrica ; b) Tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH a través de la consejería y prueba rápida ; c) Planificación familiar; d) Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia ; e) Sistema de monitoreo y evaluación basado en evidencia ; Brindar estos servicios haciendo énfasis en la sensibilidad cultural, el respeto y la eliminación de la discriminación y el estigma hacia las y los usuarios por cualquier motivo o razón, (UNFPA 2010, Looking Back, Moving Forward. Results and recommendations from the ICPD-at-15 process).	2016-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de Seguridad Social-IHSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Gobiernos Locales
12	Reconocer plenamente la meta del acceso universal a la salud sexual y reproductiva	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de Seguridad Social-

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	mediante las siguientes acciones: i. Consolidar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva en el marco de la transformación y fortalecimiento de su sistema de salud; ii. Fortalecer las estrategias nacionales e incrementar la financiación internacional para disponer de insumos esenciales; iii. Garantizar el acceso equitativo a la atención obstétrica y neonatal de emergencia; y, iv. Suprimir las barreras que dificultan el acceso de las y los adolescentes y los jóvenes a la educación sexual y a los servicios de salud sexual y reproductiva. (Entre los progresos y las asignaturas pendientes: Quince años del Programa de Acción de El Cairo en América Latina y el Caribe, con énfasis en el período 2004-2009).			IHSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH, Gobiernos Locales
13	Ampliar las opciones de proyectos de vida para las y los adolescentes orientados a prevenir todo tipo de presión y abuso sexual, además de la explotación. Prestar especial atención a las adolescentes menores de 15 años, que no aparecen en las encuestas, cuyo embarazo es, con frecuencia, producto de relaciones sexuales en el marco del abuso, la violencia o la coerción. (Entre los progresos y las asignaturas pendientes: quince años del Programa de Acción de El Cairo en América Latina y el Caribe, con énfasis en el período 2004-2009).	2015-2022	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Salud , Instituto Nacional de la Juventud - INJ , Instituto Nacional de la Mujer - INAM
14	Utilizar los servicios de atención de la salud para impedir la transmisión del VIH de madre a hijo; reforzar la conexión entre los servicios relativos al VIH, la atención de la salud sexual y reproductiva y los servicios de salud conexos y otros servicios de salud, incluida la salud materno-infantil; eliminar sistemas paralelos de servicios e información relacionados con el VIH (Resolución 65/277 NNUU, Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA, 2011) (Observación No. 14 del PIDESC).	2015-2022	Secretaría de Salud	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Finanzas
15	Generar un programa de mercadeo social de condones.	2016-2022	Instituto Nacional de la Juventud - INJ	Secretaría de Salud, Organizaciones Ciudadanas
16	Fortalecer las instancias de representatividad de género en el CONASIDA, para garantizar	2013-2013	Secretaría de Salud	Instituto Nacional de la Mujer-INAM

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	una mayor participación de las y los involucrados en la toma de decisiones y garantizar el uso adecuado, equilibrado y transparente en la distribución y asignación de recursos con estrategias claras y prioritarias, considerando las necesidades diferenciadas de género al igual que la calidad y cobertura de los servicios (doc. 35, Análisis de las Políticas Nacionales de ITS, VIH desde un enfoque de Género, 2003).			
17	Promoción de la salud sexual y reproductiva, retomándose algunos elementos conceptuales planteados en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo; Ética, Deberes y Derechos Humanos, encaminados a fortalecer la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH [II Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA (PENSIDA 2003-2007)].	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Educación, Gobiernos Locales
18	Realizar un proceso de planificación y presupuestación participativa, intersectorial y con enfoque de género (Declaración de Roma sobre Armonización, 2003).	2015-2022	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN	Secretaría de Finanzas, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Fortalecer las capacidades técnicas de los recursos humanos de la Secretaría de Salud en todos sus niveles para desarrollar una visión comprensiva para la operacionalización de una política integral de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, para generar mayor responsabilidad de parte de ellos para la prevención de las ITS/VIH y los embarazos no deseados (doc. 35, Análisis de las políticas nacionales de ITS, VIH-SIDA desde un enfoque de Género, 2003).	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
2	Desarrollar procesos de inducción, sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos de salud y operadores de justicia en temas de Derechos Humanos y de Derechos Sexuales y Reproductivos, que parta de la identificación de los titulares de derechos (y sus derechos legales y reglamentarios) y a los titulares de deberes (y sus obligaciones).	2016-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Salud, Secretaría de la Presidencia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	(Naciones Unidas, El Desarrollo Basado en un Enfoque de los Derechos Humanos, 2005).			
3	Implementar el Diplomado: “Estudio y Promoción de los Derechos de la Niñez y Juventud en la Política Pública de Educación” dirigido a docentes, educadoras, educadores, procuradoras y procuradores de organismos de derechos humanos, a fin de fomentar las competencias necesarias en derechos humanos. (Convenio SJDH/SE/UNAH 2012).	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Educación
4	Implementar diplomados sobre derechos de la niñez y juventud y política pública de educación dirigido a docentes, educadoras y educadores a fin de fomentar las competencias necesarias en derechos humanos (Convenio SJDH/SE/UNAH 2012).	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Educación, Entidades Académicas
5	Reformar la normativa y los procedimientos institucionales de programas para garantizar la atención intercultural y con enfoque de género. Generar protocolos de atención que incluyan procedimientos específicos al respecto. (Observación No. 14 del PIDESC).	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Secretaría de Estado para el Desarrollo de los pueblos indígenas y afro descendientes - SEDINAFROH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
6	Asegurar que los servicios de salud para las y los jóvenes sean amigables y se presten con pleno respeto a la dignidad humana y que atiendan necesidades y demandas específicas de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes y jóvenes. (Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 2008).	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto Nacional de la Juventud - INJ
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Reconocer la jerarquía institucional y fortalecer técnica y financieramente a la Comisión Nacional de SIDA- CONASIDA (Ley Especial de VIH/SIDA, 1999).	2014-2019	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Secretaría de Salud
2	Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, para garantizar los derechos laborales y el derecho al empleo de las mujeres y de las personas con VIH (doc. 35, Análisis de	2016-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Organizaciones de Sociedad Civil

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	las políticas nacionales de ITS, VIH-SIDA desde un enfoque de Género).			
3	Reestructuración de los modelos de atención en el marco de la reforma del Sistema de Salud para la construcción de un nuevo Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010, Tercer Informe de País).	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Desarrollo Social
4	Transformar el Modelo de Salud, con recursos interdisciplinarios y basados en un enfoque de Atención Primaria en Salud y de DDHH (Declaración de Alma-Ata) (Comentario No. 14 de los DESC).	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN, Secretaría de Desarrollo Social
5	Implementar y/o fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluya la prevención del VIH e ITS y en las que se complementen los esfuerzos que en el ámbito de las respectivas responsabilidades y atribuciones de las instituciones del sector público Declaración Ministerial "Prevenir con Educación", 2008).	2015-2022	Secretaría de Educación	Entidades Académicas, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Secretarías que integran el Gabinete Social
6	Fortalecer los procesos de alianza y vinculación del tema de VIH en el contexto mayor de los derechos sexuales y reproductivos ante las entidades del Estado, miembros de la sociedad civil y de la Cooperación Internacional (doc. 35, Análisis de las políticas nacionales de ITS, VIH-SIDA desde un enfoque de Género, 2003).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Educación, Secretarías de Estado (varias)
7	Fortalecer financiera y logísticamente a las unidades especializadas que dan tratamiento a las personas con VIH (Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud, Honduras 2010-2015).	2015-2022	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Salud
8	Estimular un proceso de armonización, alineamiento, enfoque intersectorial y de derechos humanos por parte de las agencias de cooperación externa en base a prioridades nacionales (Declaración de Roma sobre Armonización, 2003).	2015-2022	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN	Secretaría de Finanzas, Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Realizar actividades de concienciación y capacitación a jóvenes para el monitoreo de acciones y una demanda calificada de calidad en los servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a condones, anticonceptivos, AOE;	2015-2015	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Organizaciones Ciudadanas
2	Capacitaciones a padres y madres para mejorar sus diálogos sobre sexualidad con sus hijas/os y defender los derechos sexuales y reproductivos de sus hijas/os con equidad de género.	2015-2015	Secretaría de Salud	Organizaciones Ciudadanas, Secretaría de Educación
3	Ampliar los cursos de educación sexual focalizados en los niños de ambos sexos, con especial hincapié en la prevención del embarazo en la adolescencia.	2014-2018	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Nacional de la Juventud - INJ
4	Ampliar y mejorar la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes y jóvenes, incluyendo la educación sexual, los servicios adecuados a las necesidades de este grupo desarrollados en consulta con ellos y el derecho a la privacidad/confidencialidad en su acceso y consulta (CELADE-UNFPA América Latina: avances y desafíos de la implementación del Programa de Acción de El Cairo, con énfasis en el período 2004-2009).	2014-2022	Secretaría de Salud	Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Secretaría de Educación
5	Realizar un trabajo sistemático de abogacía en el tema de VIH en el contexto de derechos sexuales y reproductivos con las autoridades de los diferentes poderes del Estado, para la concienciación sobre las consecuencias económicas y políticas de la desatención del fenómeno y sobre el ejercicio de los derechos y los deberes ciudadanos (doc. 35, Análisis de las	2015-2022	Organizaciones Ciudadanas	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Comisionado Nacional de los

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	políticas nacionales de ITS, VIH-SIDA desde un enfoque de Género, 2003).			Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
6	Instalar mecanismos formales de referencia para reportar acciones de discriminación por parte de los servicios educativos, de salud y otros servicios vinculados a derechos humanos, gubernamentales y privados, y trabajar de forma proactiva para identificar y corregirlas, en instancias tanto de gobierno como de la comunidad, incluyendo a las Defensorías de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y otros órganos afines (Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 2008).	2015-2022	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH	Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Organizaciones de Sociedad Civil, Organizaciones Ciudadanas, Secretarías de Estado (varias)
7	Desarrollo de procesos de control social para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de Estado con respecto a los derechos sexuales y reproductivos (Observatorios; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2006; Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud, IHDES).	2015-2022	Organizaciones Ciudadanas	Entidades Académicas
8	Fomentar una amplia participación de la comunidad y de las familias, incluidos adolescentes y jóvenes, en la definición de los programas de promoción de la salud, para reconocer sus necesidades y aspiraciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como de prevención de VIH y fomentar su involucramiento en el desarrollo e implementación de respuestas apropiadas (Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 2008).	2015-2015	Secretaría de Salud	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA, Instituto Nacional de la Juventud - INJ
9	Empoderamiento de las/los jóvenes en todos sus derechos humanos, incluyendo los derechos relativos a la sexualidad humana, para que puedan promover una demanda calificada para el mejoramiento de los sistemas educativo y de salud en el logro del mejor nivel posible de salud sexual y reproductiva y en el control de la epidemia del VIH y mejores niveles de desarrollo (doc. 206, Política Nacional de Juventud 2010-2014, 2010).	2014-2014	Organizaciones Ciudadanas	Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
10	Fortalecer las alianzas encaminadas a establecer instancias de coordinación y	2015-2022	Organizaciones Ciudadanas	Universidad Nacional Autónoma de

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	cooperación mutua con el movimiento social, organizaciones de mujeres y de jóvenes, para integrar en los currículos de formación profesional, académica y técnica, contenidos referidos a la salud sexual y reproductiva (doc. 35, Análisis de las Políticas Nacionales de ITS, VIH-SIDA desde un enfoque de Género, 2003).			Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Entidades Académicas, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
11	Fortalecer grupos de auto apoyo de jóvenes en salud reproductiva y VIH (doc. 206, Política Nacional de Juventud 2010-2014, 2010).	2016-2022	Instituto Nacional de la Juventud - INJ	Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Organizaciones de Sociedad Civil
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Difundir información laica, objetiva, veraz y oportuna mediante el desarrollo de programas de prevención en materia de salud sexual y salud reproductiva (Resolución 65/277 NNUU, Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA, 2011).	2014-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud
2	Finalizar proceso de revisión y socialización de la política de Salud Sexual y Reproductiva con actores involucrados (Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010, Tercer Informe de País).	2015-2022	Secretaría de Salud	
3	Mejorar la información sobre la salud reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos para las y los adolescentes, y a que se universalice la educación sexual, con especial hincapié en la prevención del embarazo en las adolescentes (doc. 144, Pág. 25).	2015-2022	Secretaría de Salud	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Educación
4	Generar una respuesta nacional ampliada, coordinada, eficaz, eficiente, solidaria, transdisciplinar, con equidad, calidad y calidez, propiciando un ambiente sociocultural favorable que contrarreste la diseminación de la pandemia, la discriminación y estigmatización relacionadas con el VIH, a través de la atención integral, la	2016-2016	Secretaría de Salud	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	multisectorialidad de las acciones, la descentralización de los servicios y una amplia participación social (II Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA PENSIDA 2003-2007).			
5	Mejorar la información sobre la planificación de la familia y los servicios conexos para las mujeres y las niñas, en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles.	2014-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Educación, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Instituto Nacional de la Mujer-INAM
6	Diseñar y ejecutar, como expresión de ciudadanía, campañas de divulgación y comunicación para mantener la problemática en el debate público, e incidir en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (doc. 35, Análisis de las Políticas Nacionales de ITS, VIH-SIDA desde un enfoque de Género, 2003).	2015-2022	Organizaciones Ciudadanas	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Entidades Académicas, medios de comunicación
7	Desarrollar programas creativos de educación, capacitación y comunicación diseñados para contrarrestar y revertir actitudes de discriminación y estigmatización contra el VIH en actitudes de comprensión y aceptación (ACNUDH/ONUSIDA, El VIH/SIDA y los Derechos Humanos: Directrices Internacionales, 2006).	2016-2022	Secretaría de Salud	Organizaciones Ciudadanas, medios de comunicación
8	Promover el trabajo con los medios de comunicación y la sociedad civil para mejorar la calidad de la información y los mensajes que se difunden y para que sean consistentes con los contenidos de educación integral en sexualidad y de promoción de salud sexual (Declaración Ministerial "Prevenir con Educación", 2008).	2017-2022	Secretaría de Salud	Organizaciones Ciudadanas, medios de comunicación, Entidades Académicas
9	Crear y potenciar espacios de debate sobre salud sexual y reproductiva VIH desde una perspectiva de género que permita revisar conceptos, enriquecerlos, ampliarlos, considerando la sabiduría y conocimientos desde la diversidad de las mujeres, por su condición de clase y etnia (doc. 35, Análisis de las Políticas Nacionales de ITS, VIH-SIDA desde un enfoque de Género, 2003).	2016-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Estado de los Pueblos Indígenas y afrohondureños - SEDINAFROH, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH,

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				Organizaciones Ciudadanas
10	Realizar procesos de educación en el sistema formal y no formal de educación sobre sexualidad con una perspectiva basada en los derechos humanos y en el respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente para promover entre los jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas con relación al inicio de sus relaciones sexuales (Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 2008).	2015-2022	Secretaría de Educación	Entidades Académicas, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Secretaría de Salud, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
11	Transversalizar la educación sexual en el sistema educativo formal e informal a través de la capacitación en los conceptos básicos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, con información veraz, científica, oportuna, libre de discriminación y sin prejuicios (Ley Especial de VIH/SIDA, 1999 y sus Reglamentos) (UNFPA 2010, Looking Back, Moving Forward. Results and recommendations from the ICPD-at-15 process).	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Salud, Entidades Académicas, Organizaciones Ciudadanas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Designar delegados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para realizar inspecciones en las Unidades de Salud de los servicios que presta el Estado para fomentar el mejoramiento de la atención de los pacientes, acorde con los niveles de calidad requeridos por los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la atención a las y los adultos mayores, pueblos indígenas y afro descendientes, población con discapacidad y LGBTTI (CONADEH, Informe Anual 2011).	2015-2022	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH	Operadores de Justicia, Secretaría de Salud, Colegios Profesionales
Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.				
1	Poner a disposición del público toda información pública, archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico,	2015-2022	Secretaría de Salud	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	electrónico o de otro tipo que no haya sido previamente clasificado como reservado, que se encuentre en poder de las instituciones obligadas, y que pueda ser reproducida sobre el derecho a la salud y los derechos sexuales reproductivos (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2006).			
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Promover el diálogo entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado para la elaboración y sometimiento a aprobación de una Ley sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud, IHDES; Centro de Derechos de Mujeres).	2015-2022	Organizaciones Ciudadanas	Congreso Nacional de la República
2	Legitimar y fortalecer la Comisión Nacional de SIDA- CONASIDA (Foro Nacional de SIDA).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Comisión Nacional de SIDA - CONASIDA
3	Que el Congreso Nacional de la República no retome la discusión y aprobación constitucional del Decreto Legislativo No. 54-2009, que fuere vetada su aprobación por el Presidente de la República, y que prohíbe y penaliza el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), en consonancia con la Constitución de la República y los mandatos de los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Honduras (Centro de Derechos de Mujeres).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Organizaciones de Sociedad Civil, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
4	Derogación por parte de la Secretaría de Salud del Acuerdo Ejecutivo No. 2744 que prohíbe el uso de las PAE (Centro de Derechos de Mujeres CDM).	2014-2015	Secretaría de Salud	

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Marco Normativo¹¹⁴

El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido por las normas internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación (artículo 25).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, tal como lo establecen los incisos de su artículo 11:

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las

medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

- a. Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.
- b. Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.

Se reconoce también el derecho a la alimentación en otros convenios internacionales que protegen a grupos especiales, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)¹¹⁵, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)¹¹⁶ y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)¹¹⁷. Asimismo, admite el derecho a la alimentación en algunos instrumentos regionales, como en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y

¹¹⁴ Los contenidos del presente apartado fueron retomados del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 2008.

¹¹⁵ La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el párrafo 2 del artículo 12, reconoce el derecho a la nutrición de las mujeres durante el embarazo y la lactancia, en el contexto de la protección de la maternidad.

¹¹⁶ La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños a la alimentación adecuada en los

acápites c) y e) del párrafo 2, del artículo 24, en el contexto del derecho a la salud; y en el párrafo 3, del artículo 27, en el contexto del derecho a un nivel adecuado de vida.

¹¹⁷ La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la alimentación en el acápite f) del artículo 25, en el contexto del derecho a la salud; y en el acápite l), del artículo 28, en el contexto del derecho a un nivel adecuado de vida y a la protección social.

Culturales, denominado Protocolo de San Salvador (1988)¹¹⁸.

Varios instrumentos internacionales de derechos humanos que no son jurídicamente vinculantes, incluidas recomendaciones, directrices, resoluciones o declaraciones, son pertinentes también al derecho a la alimentación (se les conoce como instrumentos de *soft law*, es decir, derecho blando o en gestación). Estos son aceptados por los Estados y sirven para dar orientaciones acerca del cumplimiento del derecho a la alimentación, como el caso de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, aprobadas en noviembre de 2004 por el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dichos instrumentos son una herramienta práctica para ayudar a la aplicación del derecho a la alimentación adecuada, aunque no son jurídicamente vinculantes, procuran reflejar las normas vigentes de derechos humanos y proporcionan una orientación útil a los Estados acerca de la forma de dar cumplimiento a sus obligaciones.

Abarcan la diversidad de acciones que han de considerar los gobiernos en el plano nacional, a fin de formar un entorno que permita a las personas alimentarse con dignidad y establecer redes apropiadas de seguridad para quienes no puedan hacerlo, así como medidas para hacer responsables a los gobiernos frente a los titulares de los derechos.

Las Directrices del derecho a la alimentación se dirigen tanto a los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como a los que no lo son, ya sean países en desarrollo o desarrollados. Por su medio se alienta a los Estados a formular sus estrategias y programas nacionales

encaminados a luchar contra el hambre y la desnutrición. Asimismo, con ellas se invita a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado a promover y reforzar la aplicación efectiva del derecho a la alimentación adecuada.

Con relación al contexto hondureño, entre estas Directrices de la FAO es importante mencionar las siguientes¹¹⁹:

1. Los Estados deberían promover y salvaguardar una sociedad libre, democrática y justa, a fin de proporcionar un entorno económico, social, político y cultural pacífico, estable y propicio, en el cual las personas puedan alimentarse y alimentar a sus familias con libertad y dignidad.
2. Los Estados deberían, asimismo, promover la buena gestión de los asuntos públicos en cuanto factor esencial para lograr un crecimiento económico sostenido, un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre, así como para la realización de todos los derechos humanos, incluida la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.
3. A fin de conseguir la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, los Estados deberían promover un desarrollo económico de amplia base que respalde sus políticas de seguridad alimentaria. Los Estados deberían establecer, en relación con las políticas, objetivos y puntos de referencia basados en las necesidades de su población en materia de seguridad alimentaria.
4. Los Estados deberían poner en práctica políticas económicas, agrícolas, pesqueras, forestales, de uso de la tierra y,

¹¹⁸ El Protocolo de San Salvador reconoce el derecho a la alimentación en los artículos 12 y 17, en el contexto de la protección de las personas de edad.

¹¹⁹ FAO, Directrices voluntarias del derecho a la alimentación. Noviembre de 2004.

cuando convenga, de reforma agraria acertadas, generales y no discriminatorias, que permitirán a los agricultores, pescadores, silvicultores y otros productores de alimentos, en particular a las mujeres, obtener un rendimiento justo de su trabajo, capital y gestión, y deberían estimular la conservación y la ordenación sostenible de los recursos naturales, incluso en las zonas marginales.

5. Los Estados, según convenga y en consulta con los interesados directos y de conformidad con su legislación nacional, deberían considerar la posibilidad de adoptar una estrategia nacional basada en los derechos humanos para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional como parte de una estrategia nacional general de desarrollo, incluidas estrategias de reducción de la pobreza, si las hubiere.

Contenido del derecho a la alimentación

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en el plano nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos y todas.

En tal sentido, se considera que el derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros

elementos nutritivos concretos, tal derecho tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, tal como se dispone en el párrafo 2, del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente¹²⁰:

1. **La disponibilidad** de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. Por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda.
2. **La accesibilidad** de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

La accesibilidad comprende la económica y la física:

1. **La accesibilidad económica** implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado, deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo o

¹²⁰ ONU, *Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,*

Sociales y Culturales. Observación General No. 12, XX período de sesiones N.Y. 1999, página 3.

derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y es una medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los grupos socialmente vulnerables, como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la población, pueden requerir la atención de programas especiales.

2. **La accesibilidad física** se refiere a que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos y todas, incluidos los individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y las y los niños pequeños, los mayores adultos, las personas con discapacidad, los moribundos y las personas con problemas médicos persistentes, como los enfermos mentales. Será necesario prestar especial atención y, a veces, conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos en situación de pobreza. Son especialmente vulnerables los pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado.

Obligaciones del Estado

Las obligaciones de los Estados con respecto al derecho a la alimentación se expresan de forma diferente de un instrumento a otro. No obstante, en general, corresponden a tres categorías: respetar, proteger y cumplir.

La obligación de respetar el derecho a la alimentación.

Los Estados tienen que respetar el acceso de las personas a los alimentos y los medios existentes de obtener alimentos. Esto significa que toda medida que dé como resultado impedir el acceso a los alimentos, por ejemplo, denegar la asistencia alimentaria a los opositores políticos, está prohibida. Los Estados no pueden suspender la legislación o las políticas que den a las personas acceso a los alimentos (la legislación de bienestar social y

los programas relacionados con la nutrición), a menos que se justifique plenamente.

Los gobiernos deben garantizar que las instituciones públicas, incluidas las empresas administradas por el Estado o los militares, no menoscaben el acceso de las personas a los alimentos, por ejemplo, mediante la contaminación o la destrucción de tierras agrícolas o con los desalojos forzados. Los Estados deben examinar periódicamente sus políticas y programas nacionales relacionados con los alimentos para garantizar que respetan, efectivamente, la igualdad del derecho de todos y todas a la alimentación.

La obligación de proteger el derecho a la alimentación.

Los Estados tienen que proteger el derecho a la alimentación de las violaciones por terceras partes, por ejemplo otros individuos, grupos, empresas privadas u otras entidades. De igual manera, deben impedir que terceras partes destruyan las fuentes de alimentación mediante la contaminación de la tierra, el agua y el aire con productos industriales o agrícolas nocivos o la destrucción de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas con el objeto de despejar el camino para minas, represas, carreteras o la agroindustria.

La obligación de proteger incluye garantizar que los alimentos que lleguen al mercado sean seguros y nutritivos; por consiguiente, deben establecer y aplicar normas de calidad y seguridad de los alimentos, y garantizar prácticas justas e iguales en el mercado. Además, los Estados están obligados a adoptar las medidas legislativas y de otro orden necesarias para proteger a las personas, especialmente a la niñez de la publicidad y las promociones de alimentos que no sean sanos, con el fin de apoyar los esfuerzos de los padres y de los profesionales de la salud por estimular pautas más sanas de comida y de ejercicio físico.

Las naciones deben tener en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales con respecto al derecho a la alimentación, al concertar acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales.

La obligación de cumplir el derecho a la alimentación.

Esta obligación incluye facilitar y suministrar¹²¹. La obligación de cumplir (facilitar) significa que los Estados deben ser proactivos para reforzar el acceso de las personas a los recursos y a los medios de asegurar su modo de vida y el derecho de usarlos, incluida la salud alimentaria. Entre las medidas típicas se incluyen la aplicación de programas de reforma agraria o de reglamentos relativos a un ingreso mínimo. Al adoptar políticas alimentarias es necesario que los gobiernos equilibren cuidadosamente la inversión en cultivos para la exportación, con el apoyo del cultivo de alimentos para el consumo interno. Otras medidas posibles consisten en aplicar y mejorar programas de alimentación y nutrición y asegurar que los proyectos de desarrollo consideren la nutrición. Para facilitar la plena realización del derecho a la alimentación, es necesario que los Estados informen a la población acerca de sus derechos humanos y refuercen su capacidad para participar en los procesos y en la adopción de decisiones al respecto.

Instituciones públicas con responsabilidades para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación

La alimentación es un derecho que no se limita a aspectos nutricionales y que tiene el alcance de procurar un nivel de vida más justo para los sectores sociales vulnerables al derecho a una alimentación adecuada, por eso en Honduras existen dos instituciones que desempeñan un

papel relevante en esta problemática: Una es La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), instituida por el gobierno del Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa como la instancia técnica nacional de coordinación, planificación, seguimiento, monitoreo, evaluación y formulación de procedimientos metodológicos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria (PSAN) y La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSAN); y la otra es el Instituto Nacional Agrario (INA), institución que rectora la reforma agraria, definida en la actual Constitución de la República como una necesidad y utilidad pública.

Las competencias de la UTSAN son las siguientes:

1. Facilitar la coordinación entre las diferentes secretarías de Estado y otras entidades involucradas en la aplicación de la política y su plan;
2. Asegurar la transversalización de la política en los gabinetes sectoriales;
3. Definir propuestas y presentarlas al gabinete social sobre mecanismos, criterios de priorización y focalización de programas en seguridad alimentaria y nutricional;
4. Apoyar a las diferentes secretarías de Estado para la incorporación de prioridades de seguridad alimentaria y nutricional en sus planes anuales;
5. Realizar los estudios de base que se requieren para las actividades de monitoreo y evaluación de los resultados;
6. Realizar investigaciones sobre la incidencia de la aplicación de la Política en la calidad de vida hondureña;
7. Adecuar e integrar un sistema de monitoreo y seguimiento de la seguridad alimentaria y nutricional;

¹²¹ En observaciones generales más recientes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha

sugerido que la obligación de cumplir contiene las obligaciones de facilitar, promover y suministrar.

8. Asegurar la información del seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional; y,
9. Las demás funciones que se le asignen en los manuales internos que al efecto se emitan (Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022).

En cuanto al INA, sus competencias son:

1. Planificar, programar y llevar a la práctica la política de reforma agraria;
2. Conocer y resolver todo lo relacionado con la tenencia, explotación, expropiación, recuperación y distribución de la tierra destinada a la reforma agraria;
3. Organizar y administrar el Catastro Agrario Nacional;
4. Organizar y administrar un registro agrario;
5. Gestionar y administrar los recursos internos y externos indispensables para la ejecución de la reforma agraria;
6. Promover el mejoramiento económico, social, cultural y técnico de los campesinos;
7. Crear una conciencia nacional favorable a la reforma agraria mediante la difusión y promoción de sus principios y realizaciones;
8. Resolver sobre las denuncias o quejas presentadas en contra de los funcionarios y empleados encargados de realizar la reforma agraria y hacer las consignaciones correspondientes, en su caso; y,
9. Ejercer los derechos y acciones que correspondan al Estado en relación con las tierras nacionales y ejidales susceptibles de uso agrícola y ganadero y las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la Ley de Reforma Agraria.¹²²

Otras instituciones de importancia en la función de respetar y proteger el derecho humano a la alimentación, lo constituyen la Presidencia de la República y el Congreso

¹²² El INA, creado mediante el decreto número 69, del 6 de marzo de 1961, ha ido ajustando sus atribuciones.

Nacional de la República; este último a través de sus atribuciones establecidas en la Constitución de la República de hacer uso de su iniciativa de ley, discusión y aprobación de asuntos presupuestarios y de aprobación de Tratado y Convenios internacionales. Igualmente, es de importancia el papel del Poder Judicial y del Ministerio Público en la administración de justicia en el campo de los conflictos de tierras y ambientales.

De igual manera, otras instituciones relevantes en la aplicación del derecho humano a la alimentación, en coordinación y complementación con las atribuciones de la UTSAN y del INA, son: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, (SEPLAN), Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SEDINAFROH), Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Industria y comercio, Secretaría de Educación, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y los gobiernos locales.

Diagnóstico del derecho a la alimentación

Se debe entender que el derecho a la alimentación “se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”¹²³.

Panorama general: nutrición y pobreza

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), entre 1991-2006, Honduras ha experimentado logros importantes en la mejoría de los indicadores de

¹²³ OACNUDH, El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Folleto informativo No.16*.

desnutrición infantil global, crónica y aguda (ver cuadro 1)¹²⁴.

Cuadro 1
Indicadores de desnutrición para niños y niñas menores de cinco años según categoría
2005-2006

Año	Global	Crónica	Aguda
1991	20,2	39,7	1,8
2006	11,2	24,7	1,0

Fuente: ENESF 1991; ENDESA 2005-2006

Estos son resultados alentadores si tomamos en cuenta que “la desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones de la vida de las personas, entre ellas la salud, la educación y la economía (costos y gastos públicos y privados, así como menor productividad). Estos efectos producen, a su vez, mayores problemas de inserción social y un incremento o profundización de la pobreza e indigencia en la población, todo lo cual favorece la reproducción del círculo vicioso de la vulnerabilidad nutricional”¹²⁵.

No obstante esos logros, una preocupación nacional es que aproximadamente 234,000 niños y niñas¹²⁶ (en proporciones similares) están afectados por la desnutrición crónica, es

decir, con retardo de altura y dificultades para el aprendizaje, asociado a situaciones de pobreza y a una alimentación inadecuada.

Los departamentos más afectados por la desnutrición crónica son: Lempira (49%), Intibucá (47%), La Paz (42%), Ocotepeque (40%) y Santa Bárbara (29%). Esta preocupación es mayor cuando se constata que en las zonas rurales la desnutrición infantil presenta índices más altos que en las zonas urbanas, evidenciando asimetrías profundas en una sociedad marcada por patrones históricos de desigualdad (ver cuadro 2). Además, estos datos revelan que las zonas rurales son las que exhiben mayores dificultades en reducir la desnutrición infantil.

Cuadro 2
Indicadores de desnutrición menores de 5 años, según dominio, 2005-2006

Dominio	Global	Crónica	Aguda
Urbano	6,2	13,7	0,8
Rural	14,8	32,0	1,2
Diferencia rural-urbana	8,6	18,3	0,4

Fuente: Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2007. Segundo informe de país.

Adicionalmente, la FAO reporta el 12% de la población subnutrida (que representa más de 800,000 personas), con un promedio por arriba del latinoamericano (8%). Según este organismo: “La subnutrición se refiere a la falta

permanente de alimentos en cantidad y calidad adecuadas para satisfacer las necesidades energéticas de la población” (FAO, *Centroamérica en cifras*, 2011).

¹²⁴ Desnutrición global (peso/edad) se refiere a la deficiencia de peso por edad, Desnutrición crónica (talla/edad) tiene que ver con el retardo de la altura para la edad, Desnutrición aguda (peso/altura) hace referencia a la deficiencia de peso por altura, OPS, *Centroamérica en cifras. Datos de seguridad alimentaria nutricional y agricultura familiar*, 2011.

¹²⁵ CEPAL y PMA, *Análisis del impacto social y económico de la desnutrición infantil en América Latina: Centroamérica y República Dominicana*, Comisión. Santiago de Chile, 2007, página 15.

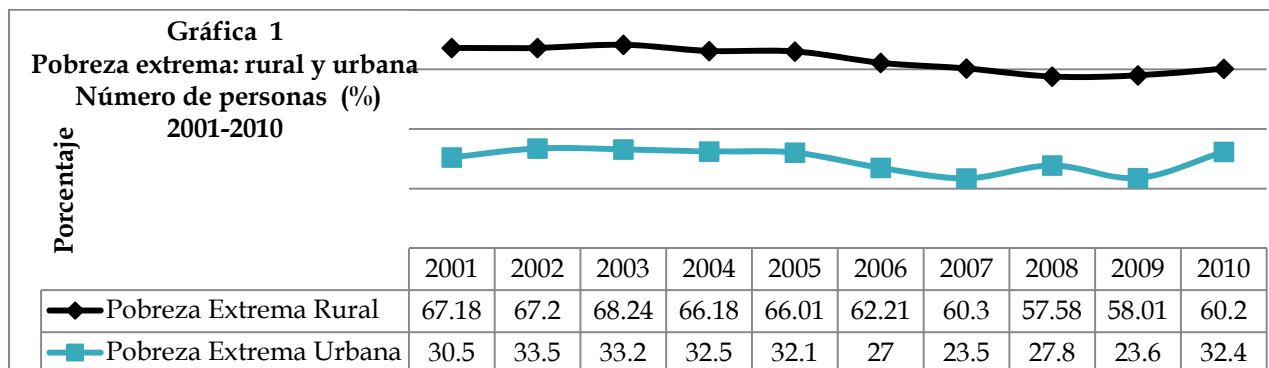
¹²⁶ Con base a la población menor de cinco años en el 2005.

“La pobreza e indigencia, factor clave en la falta de seguridad alimentaria.”

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “En Honduras, el avance en la reducción de la pobreza ha sido lento, mostrando los índices más altos de pobreza extrema (indigencia) y relativa en la región latinoamericana”.¹²⁷ Según las definiciones del INE, la pobreza extrema o indigencia representan los hogares que tienen un ingreso

per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos.

Al respecto, hay que destacar que en Honduras la pobreza rural es esencialmente pobreza extrema o indigencia (ver gráfica 1). Así, en el 2010, en las zonas rurales más del 60% de las personas pobres estaban afectadas por la indigencia, de un total de 71% de personas que vivían bajo la línea de la pobreza.



Fuente: INE. Encuesta de hogares 2001-2010.

También la indigencia afecta a las zonas urbanas, ya que del total de personas pobres en las ciudades (60%), el 32% vivían en la indigencia. Con esos datos es posible constatar que en el 2010, en Honduras, 3,821,078 personas (el 69% de ellas habitando en las zonas rurales) tenían dificultad en el acceso y disponibilidad de una alimentación adecuada.

La gráfica 1 permite observar que en el período 2001-2010, se ha producido una leve reducción de la indigencia rural, sin embargo, en números absolutos ha habido un incremento de 376,015 personas en esa situación. En sentido contrario, la indigencia urbana ha dibujado una curva hacia un leve incremento, de hecho, en las ciudades se han sumado a las filas de la indigencia 292,436 personas en los últimos 10 años. En cuanto a la distribución por sexo, siempre con base a datos del INE, la jefatura de mujeres en hogares pobres se ha

incrementado del 25% de hogares en el 2001, al 32% en el 2010¹²⁸.

El régimen de tenencia de la tierra y el derecho a la alimentación

Un factor asociado directamente a la pobreza rural y, por consiguiente, a las dificultades de la población campesina en la disponibilidad y acceso a una alimentación adecuada, tiene que ver con el régimen de tenencia de la tierra. La estadística oficial evidencia que en los últimos 50 años la concentración de la tierra en pocas manos se ha profundizado (ver cuadro 3).

¹²⁷ ONU, *Objetivos del Desarrollo del Milenio*, Honduras 2010, Tercer informe de país, página 58.

¹²⁸ INE, *Mujeres y hombres en cifras, 2001-2010, Boletín Estadístico*, página 16.

Cuadro 3

Número y tamaño de los minifundios y grandes propiedades agrícolas, en porcentajes (1952-2008)

Estrato	Censo 1952		Encuesta agrícola 2008	
	No. de unidades	Tamaño del área agrícola	No. de unidades	Tamaño del área agrícola
Menores de 5 hectáreas	57,0	8,1	70,6	8,6
De 50 a 500 hectáreas	4,2	56,8	4,8	61,5

Fuente: INE. Censo agropecuario 1952 y Encuesta agrícola 2008

Los datos indican que las unidades agrícolas menores de cinco hectáreas han incrementado su número en un 14%, pero su acceso al área agrícola se ha mantenido inalterable en 50 años. Lo contrario ha ocurrido con las unidades agrícolas mayores de 50 hectáreas, que han incrementado su control sobre la superficie agrícola en más del 6% (lo que representa más de 579,000 hectáreas). Pero, las unidades agrícolas menores de cinco hectáreas se han fragmentado, reduciendo su tamaño promedio de 2.5 hectáreas en 1952 a 1.5 hectáreas en el 2008¹²⁹.

Este proceso de concentración de la tierra no es ajeno a las políticas públicas que han priorizado y promovido la producción agrícola para la exportación, desestimulando la producción agrícola para el consumo interno. En consecuencia, este factor del régimen de tenencia de la tierra ayuda a explicar las dificultades para resolver la pobreza rural y el crecimiento de la desigualdad de ingresos.

Así, en las zonas rurales, en el 2010, el 20% más rico acaparaba el 60,4% de los ingresos y el 20% más pobre apenas percibía el 3,1% de esos ingresos¹³⁰. Adicionalmente, se debe señalar la exclusión de las mujeres del acceso y usufructo de la tierra agrícola (apenas un 24% de ellas posee propiedades en dominio pleno) y su baja participación en las actividades agrícolas y no agrícolas. De igual manera, hay que destacar las demandas de los pueblos indígenas y negros sobre la recuperación y legalización de los territorios ancestrales.

¹²⁹ Para que una familia campesina asegure sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación, se requieren de unidades agrícolas de cinco y 10 hectáreas.

El incremento en el precio de los alimentos

No puede soslayarse el impacto negativo que ha significado para las poblaciones rurales el incremento mundial de los alimentos y el proceso en curso del cambio climático, con la combinación de sequías e inundaciones que está afectando sensiblemente a la pequeña agricultura campesina.

Según el reporte de la FAO (*Centroamérica en cifras*, 2011), el precio de la tortilla de maíz entre 2006 y 2011 se ha multiplicado aproximadamente por dos y el precio de los frijoles ha sido muy inestable, siempre con una tendencia al alza.

Tendencias relevantes

A falta de intervenciones claramente dirigidas por el Estado, es de esperarse que ocurran las siguientes situaciones:

1. Reducción de las manifestaciones más graves de la desnutrición infantil, relacionadas con mayores niveles de información y proyectos de ONG que prestan servicios directos en las zonas rurales en el tema de maternidad y nutrición.
2. Estancamiento o leves avances en la disminución de la desnutrición crónica, especialmente en las zonas más

Ley de Reforma Agraria de Honduras, 1975. Además, *Plataforma Agraria. Propuesta de Ley de Transformación Agraria Integral*, 2011.

¹³⁰ CEPAL, Anuario estadístico 2010.

- vulnerables a la pobreza rural (occidente del país) y las áreas de indigencia urbana.
3. Mantenimiento de los niveles de indigencia en la población rural y urbana con todas las secuelas que eso implica en la salud, educación, trabajo, vivienda y otros aspectos indispensables para el disfrute de una vida plena.
 4. Incremento en la desigualdad de ingresos que está enraizada en la vigencia de una matriz de crecimiento económico de “base angosta”.
 5. Mantenimiento de la tendencia hacia el incremento de los precios de los alimentos y crecientes dificultades para la mayoría de la población rural y los sectores de pobreza urbana para asegurar su acceso y disponibilidad.
 6. Aumento de los efectos negativos del cambio climático en la economía agrícola campesina, frecuentes inundaciones e inesperadas sequías.
 7. Mantenimiento y posiblemente un agravamiento de los factores estructurales de exclusión y limitación de derechos de los pueblos indígenas, afrohondureños y mujeres.

Principales desafíos

Ante la situación antes descrita, el Estado tiene por delante tres grandes desafíos:

1. Diseñar e implementar políticas públicas orientadas a superar las grandes desigualdades de acceso a los activos productivos, tales como tierra, crédito, conocimiento y comunicación en las zonas rurales, considerando beneficios equitativos para hombres y mujeres. Esto implica retomar la producción agrícola para el consumo interno como una prioridad nacional, enfrentando proactivamente los riesgos que representa el incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial y el cambio climático.

2. Orientar el gasto público a las zonas más álgidas de la pobreza rural (occidente del país y áreas de pueblos indígenas y negros) y las más débilmente conectadas con el tejido productivo del país; asimismo, las áreas de mayor pobreza urbana que respondan a políticas públicas redistributivas y a la creación de nuevas oportunidades.
3. Adoptar políticas y medidas encaminadas a orientar a la población a un consumo sano y a evitar la ingesta de alimentos dañinos a la salud. En este aspecto la labor de educación y comunicación desde el Estado y organizaciones de la sociedad civil es fundamental y necesario.

Matriz sobre el derecho a la alimentación

Resultados de impacto

1. **Población rural en condiciones de pobreza e indigencia con acceso y disponibilidad de alimentos suficientes.**
 - a. Proporción del porcentaje del presupuesto gubernamental destinado al apoyo de la agricultura y a la soberanía alimentaria.
 - b. Proporción de la población rural con acceso y usufructo de los activos productivos necesarios para producir sus propios alimentos y para el mercado local.
 - c. Proporción de la población de pueblos indígenas y negros con acceso y usufructo de los activos productivos para el autoconsumo y para el mercado local.
2. **Reducidas las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso y disponibilidad de la alimentación.**
 - a. Proporción de hogares con jefatura femenina con acceso a activos productivos para la producción de sus alimentos.

- b. Proporción de hombres y mujeres con una ingesta energética inadecuada.
 - c. Proporción de adultos y adolescentes de ambos sexos con masa corporal baja.
 - d. Proporción de niños y niñas menores de dos años con peso inferior al normal.
 - e. Proporción de niños y niñas de tres a seis años con peso inferior al normal.
- 3. Población (rural y urbana) con protección contra la inseguridad alimentaria.**
- a. Proporción de las familias que no pueden hacer dos comidas normales con regularidad.
 - b. Proporción de los gastos de hogares en alimentos.
- c. Índice de variabilidad de los precios de consumo de primera necesidad.
 - d. Monto o proporción de la reserva estatal de alimentos.
 - e. Proporción de las transferencias monetarias a la población pobre del presupuesto gubernamental.
- 4. Población con acceso a alimentos sanos.**
- a. Proporción de personas vulnerables al consumo de alimentos insalubres.
 - b. Proporción de personas beneficiarias de campañas de información pública y educación (incluida la instrucción escolar) acerca de la nutrición y la salubridad de los alimentos.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho en la legislación.				
1	Adoptar lo más pronto posible el Protocolo sobre Desalojos Forzosos como directiva para las y los operadores de justicia en el país, en lo pertinente a los conflictos agrarios (Estado de la Inseguridad Alimentaria en Honduras, p. 31).	2013-2015	Instituto Nacional Agrario - INA	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Congreso Nacional de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Revisión y reforma del marco jurídico nacional con el propósito de reorientar el proceso de Reforma Agraria, haciendo énfasis especial en la resolución de casos relacionados con la tenencia de la tierra, teniendo en cuenta las necesidades del sector campesino y de los pueblos indígenas y afrohondureños. Recomendación No. 44, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mayo de 2001).	2014-2015	Instituto Nacional Agrario - INA	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Ampliar la cobertura de los programas Merienda Escolar, Vaso de Leche y Escuelas	2013-2022	Secretaría de Desarrollo Social	

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	Saludables (Reunión de consulta con instituciones públicas y de la sociedad civil).			
2	Mejorar la focalización del bono de solidaridad productiva (Reunión de consulta con instituciones públicas y de la sociedad civil).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Secretaría de Desarrollo Social
3	Promover la protección ambiental, utilización óptima de los recursos naturales, reducir la vulnerabilidad, promoción de la producción agroecológica e implementar medidas y políticas para la no importación de transgénicos que afecten la salud de las personas (Reunión de consulta con instituciones públicas y de la sociedad civil).	2013-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Instituto de Conservación Forestal - ICF Secretaría de Industria y Comercio - SIC
4	Lograr que a nivel nacional, regional y local exista disponibilidad de alimentos en forma suficiente, oportuna y estable para satisfacer la demanda alimentaria de toda la población, en especial para los grupos más vulnerables, que sea apropiada para satisfacer sus patrones alimentarios y suplir requerimientos nutricionales (Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA , Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA , Secretaría de Desarrollo Social
5	Garantizar un acceso alimentario equitativo para toda la población, en particular para los grupos más vulnerables, mediante acciones de transferencias condicionadas que sean acompañadas de acciones de mediano y largo plazo dirigidas a crear igualdad de oportunidades para la generación de ingreso y mejora a la infraestructura, que permitan su inserción gradual y sostenible en la economía (Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA , Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN , Secretaría de Desarrollo Social
6	Mejorar el consumo de alimentos en cantidad y calidad, lo mismo que su utilización biológica en la población, tomando especial consideración a los grupos vulnerables (Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA , Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA , Secretaría de Desarrollo Social , Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN
7	Garantizar a la población el acceso a alimentos adecuados en todo momento, mitigando los	2013-2022	Secretaría de Agricultura y	Instituto Nacional Agrario - INA , Banco Nacional de

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	riesgos que suponen las crisis repentinas derivadas del cambio climático y eventos de crisis económica o política (Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022).		Ganadería - SAG	Desarrollo Agrícola - BANADESA
8	Asegurar la equidad en el acceso a los servicios de salud por parte de niños, niñas, hombres y mujeres, quienes en muchas ocasiones ven limitado su acceso a los servicios y a la alimentación por sus diferenciales de inserción social y laboral (Política Nacional de Nutrición, pp. 21-22).	2013-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Desarrollo Social, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
9	Garantizar el acceso y la calidad de la atención a las poblaciones prioritarias a nivel institucional y comunitario, para prevenir y atender la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes y la obesidad (Política Nacional de Nutrición, p. 20).	2013-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Desarrollo Social
10	Elaborar modelos de intervención que sean efectivos, replicables y auto sostenibles para reducir la inseguridad alimentaria de los hogares más pobres (Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo, pp. 26-27).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA
11	Transversalizar los lineamientos y prioridades de la SAN en los planes de desarrollo regional territorial, municipal y local. Esta transversalización se reflejará en los planes operativos y presupuestos anuales de ingresos y egresos de la república y tendrá un enfoque de derechos humanos. (Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA
12	Tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto al derecho de los pueblos Indígenas a la posesión de tierras ancestrales. (Recomendación No. 19, Comité de Derechos Humanos-HCR, mayo de 2007).	2014-2022	Instituto Nacional Agrario - INA	Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños-SEDINAFRO, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
13	Actualizar el catastro de las tierras nacionales (inclusive las privadas).	2014-2018	Instituto Nacional Agrario - INA	Secretaría de Agricultura y Ganadería -SAG, Instituto Nacional de la Propiedad
14	Realizar un nuevo censo nacional agropecuario para tener una mirada actualizada de la	2015-2017	Secretaría de Agricultura y	Instituto Nacional Agrario - INA, Banco Nacional de

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	realidad agraria (Estrategia del Sector Público Agroalimentario, p.24)		Ganadería - SAG	Desarrollo Agrícola - BANADESA
15	Incorporar en los Planes de Desarrollo Municipal estrategias y acciones que aseguren el acceso a alimentos, aplicando los principios de participación social y enfoque de género. (Política Nacional de Nutrición, pp. 18-20).	2015-2017	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA
16	Recuperar lo más pronto posible, las tierras asignadas para la reforma agraria, para los campesinos y campesinas que las necesitan para poder alimentarse (Reforma Agraria y Derecho Humano a la Alimentación, p.	2015-2018	Instituto Nacional Agrario - INA	Secretaría de Agricultura y Ganadería -SAG, Instituto Nacional de la Propiedad
17	Asegurar la titulación de tierras a mujeres rurales, dando prioridad a las mujeres jefas de familia (II PIEGH)	2014-2022	Instituto Nacional Agrario - INA	Secretaría de Agricultura y Ganadería -SAG, Instituto Nacional de la Propiedad
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Realizar esfuerzos de información, sensibilización y capacitación de los operadores de justicia, en particular en los jueces y fiscales, sobre los derechos humanos y el derecho a la alimentación (Estado de la Inseguridad Alimentaria en Honduras, p. 31).	2015-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Asegurar una mayor coherencia en la coordinación y complementariedad de las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de alimentación y nutrición (Estado de la inseguridad alimentaria en Honduras, p. 5), de tal manera que se ejercite la complementariedad y se genere sinergia en los procesos, asegurando y fortaleciendo la participación de los actores locales a través de mecanismos de coordinación (PDM y consejos locales y regionales de desarrollo) y que deben ser integrados en los planes operativos y anuales correspondientes (Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022, p. 36).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA , Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA
2	Implementar acciones de desarrollo de los recursos humanos para el desarrollo científico y tecnológico, particularmente en la aplicación y gestión de tecnologías de información y comunicación al servicio de la lucha contra el	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA , Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA , Secretaría de Desarrollo Social

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	hambre (PNUD, 2006, Informe Nacional sobre la Meta del Milenio 2, p. 21).			
3	Establecer un sistema único de información en seguridad alimentaria y alerta temprana, tomando en cuenta la disponibilidad de alimentos básicos (por áreas y grupos vulnerables); estabilidad de los suministros, las condiciones de acceso (físico, económico y social) a los alimentos, particularmente en los grupos más vulnerables y los aspectos de salud que condicionan la utilización biológica de los alimentos (PNUD, 2006, Informe Nacional sobre la Meta del Milenio 2, p. 22).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA , Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA
4	Dar seguimiento a todos los programas públicos orientados a la seguridad alimentaria y nutricional, que promueva la rendición de cuenta de sus resultados e impacto en atención a los contenidos del derecho a la alimentación y, en caso necesario, proponer su readecuación (Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo, pp. 26-27).	2015-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Salud
5	Asegurar la coordinación interagencial de la cooperación internacional a fin de facilitar al gobierno la negociación eficiente y la asignación de recursos mejor focalizados en apoyo a la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras (Situación Actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras a diciembre de 2009, p. 64).	2013-2022	Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG	Instituto Nacional Agrario - INA , Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN , Secretaría de Finanzas , Secretaría de Desarrollo Social
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Asegurar el control social en la gestión pública de recursos y la rendición de cuentas gubernamental, que trascienda a la ejecución de actividades y procedimientos administrativos y que permita determinar pautas básicas que conduzcan a la prestación de servicios en condiciones de equidad, igualdad, universalidad, continuidad y calidad (Política Nacional de Nutrición, pp. 21-22).	2013-2022	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
2	Fortalecer el rol de los actores locales (comunidad, municipio, región) tanto en las fases de focalización y priorización de las intervenciones, como de la participación en la ejecución, control y auditoría social de las mismas, fomentando de esta manera la	2015-2022	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG, Consejo Nacional Anticorrupción -

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	sostenibilidad de las intervenciones para hacer efectivo el derecho a la alimentación (Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022, p. 37).			CNA , Organizaciones Ciudadanas
3	Promover y estimular el trabajo de las organizaciones ciudadanas en derechos humanos orientadas a incidir en las instituciones del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos en casos concretos de violaciones, incidir en la aprobación de medidas legales y políticas públicas y coordinar los esfuerzos de información y capacitación de las diferentes organizaciones (Estado de la Inseguridad Alimentaria en Honduras, p. 31).	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Organizaciones Ciudadanas
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Desarrollar un programa integral de información, educación y comunicación (IEC), a fin de promover prácticas alimentarias adecuadas (Política Nacional de Nutrición, pp. 18-20).	2013-2022	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional - UTSAN , Secretaría de Educación
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Asegurar que los órganos pertinentes del Estado de Honduras realicen todas las investigaciones necesarias para encontrar , enjuiciar y sancionar a las y los responsables de los asesinatos de campesinos cometidos en los conflictos agrarios, con el fin de superar la impunidad que persiste hasta la fecha (Reforma Agraria y Derecho Humano a la Alimentación, p. 5).	2013-2014	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Monitorear la implementación de las medidas cautelares, medidas provisionales y medidas de seguridad, decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y autoridades nacionales, especialmente en los casos de conflictos agrarios (Estado de la Inseguridad Alimentaria en Honduras, p. 31).	2013-2022	Secretaría de Seguridad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Creación de un mecanismo expedito para la resolución de conflictos agrarios.		Corte Suprema de Justicia	Instituto Nacional Agrario - INA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
9 - Acciones Urgentes.				
1	Invitar al Relator Especial por el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas para fortalecer el diálogo entre las instituciones del Estado y las organizaciones sociales sobre las medidas necesarias para la promoción del derecho a la alimentación en Honduras (Estado de Inseguridad Alimentaria de Honduras, p. 31).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Marco Normativo

Diversos instrumentos legales sobre derechos humanos, internacionales, regionales y nacionales, reconocen el derecho al trabajo y reafirman que se impone al Estado la obligación de adoptar medidas dirigidas al logro pleno del empleo.

En el ámbito internacional, el derecho al trabajo figura en el párrafo 1, del artículo 23, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el apartado a) del párrafo 3, del artículo 8, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el inciso i) del párrafo e) del artículo 5, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; en el apartado a), del párrafo 1, del artículo 11, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en los artículos 11, 25, 26, 40, 52 y 54 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Asimismo, está establecido en diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

De forma similar, el derecho al trabajo ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, aprobada mediante la resolución 2542 (XXIV), del 11 de diciembre de 1969 (artículo 6).

Los instrumentos regionales también reconocen el derecho al trabajo, entre ellos, el Protocolo Adicional a la Convención

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador de 1988 (artículo 6).

El cumplimiento del derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Sirve, al mismo tiempo, para la supervivencia de las personas y de sus familias; contribuye también a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad¹³¹.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)¹³², es el instrumento que en su artículo 6 aborda este derecho más extensamente¹³³. Dicho artículo, en el párrafo primero, proclama el derecho al trabajo en un sentido general y precisa que “el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”. El segundo párrafo reconoce que “para lograr la plena efectividad de este derecho, el Estado habrá de adoptar medidas, entre las que deberán figurar la orientación y formación técnico-profesional; la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante; y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana”.

El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador¹³⁴,

¹³¹ Comité DESC, Observación general No. 18 relativa al derecho al trabajo, párrafo 1, 2005.

¹³² El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General

de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; entró en vigor el 23 de marzo de 1971.

¹³³ Comité DESC, Observación general No. 18, párrafo 2, 2005.

¹³⁴ El Protocolo de San Salvador fue adoptado por la Asamblea General de Organización de Estados

también reconoce el derecho al trabajo en su dimensión general en el artículo 6. Asimismo, los artículos 7 y 8 establecen, respectivamente, el derecho a contar con condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo y los derechos sindicales.

También se especifica que en caso de que fuesen violados los derechos sindicales, reconocidos en el párrafo a) del artículo 8, por una acción imputable directamente a un Estado parte del Protocolo, se podrá dar lugar a la aplicación del sistema de peticiones individuales en el marco del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos en las Américas, integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)¹³⁵.

Contenido del derecho al trabajo

El PIDESC desarrolla la dimensión individual del derecho al trabajo mediante el reconocimiento, en el artículo 7, del derecho que tiene toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial lo siguiente:

1. Una remuneración que proporcione como mínimo a las y los trabajadores:
 - a. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, deben asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.
 - b. Condiciones de existencia dignas para las y los trabajadores y sus familias.
 - c. La seguridad y la higiene en el trabajo.

Americanos el 17 de noviembre de 1988; entró en vigor el 16 de noviembre de 1999.

¹³⁵ Ver artículo 19, inciso 6. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH solo está autorizada a recibir y procesar denuncias o peticiones

2. Igual oportunidad para todas y todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.

3. El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

La dimensión colectiva del derecho al trabajo se aborda en el artículo 8 del PIDESC, que estipula el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al sindicato de su elección, así como el derecho de los sindicatos a funcionar libremente.

El 24 de noviembre de 2005, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), adoptó la observación general No.18 relativa al derecho al trabajo, que precisa el contenido normativo del artículo 6 y las obligaciones del Estado y de los actores privados en la materia. Este instrumento internacional establece que el ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles, supone la existencia de los siguientes elementos interdependientes y esenciales¹³⁶:

1. **Disponibilidad.** El Estado debe contar con servicios especializados que tengan por objeto ayudar y apoyar a las personas para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él.
2. **Accesibilidad.** El mercado del trabajo debe ser de fácil acceso a toda persona que esté bajo la jurisdicción del Estado. La accesibilidad reviste tres aspectos:

sobre casos individuales en los cuales se aleguen violaciones a los derechos sindicales o al derecho a la educación.

¹³⁶ Comité DESC, Observación general No. 18, párrafo 12, 2005.

- a) **No discriminación**¹³⁷. El Pacto proscribire toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por motivos de: Origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o de cualquier otra que atente contra la dignidad humana. con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de igualdad o hacerlo imposible.
- b) **Accesibilidad física**. Constituye una de las dimensiones de la accesibilidad al trabajo, como se puntualiza en el párrafo 22 de la observación general No. 5, sobre las personas con discapacidad.
- c) **Accesibilidad**. También comprende el derecho a procurar, recibir y difundir información sobre los medios para obtener acceso al empleo, mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo en los planos local, regional, nacional e internacional.
- d) **Aceptabilidad y calidad**. La protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho de los trabajadores a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente empleo.

Obligaciones del Estado

Independientemente del sistema económico de cada Estado, éste tiene como obligación velar para que se pueda ejercer progresivamente el derecho al trabajo. El Estado tiene la obligación

inmediata de garantizar que este derecho sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas progresivas, deliberadas y concretas, dirigidas hacia su plena realización. Asimismo, el derecho al trabajo impone tres tipos de obligaciones: respetar, proteger y aplicar. En la observación general No. 18 se detallan de la siguiente forma¹³⁸:

1. **Respetar**. Implica, entre otras cosas, la prohibición del trabajo forzoso y abstenerse de denegar o limitar el acceso igualitario al trabajo digno a todas las personas, especialmente a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginados.
2. **Proteger**. Incluye, entre otros, los deberes del Estado de aprobar la legislación o de adoptar otras medidas que garanticen el igual acceso al trabajo y la capacitación y garantizar que las medidas de privatización no socaven los derechos de las y los trabajadores.
3. **Aplicar**. Implica que el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otro tipo, adecuadas para velar por la plena realización del derecho al trabajo. Incluye las obligaciones de proporcionar, facilitar y promover este derecho, que se pueden desarrollar de la siguiente manera:
 - a. El Estado está obligado a proporcionar el derecho al trabajo cuando las personas o grupos no pueden, por razones que escapan de su control, ejercer ese derecho por los medios de que disponen. El Estado debe adoptar medidas efectivas para aumentar los recursos asignados a la reducción de la tasa de desempleo, en particular entre las mujeres, las personas desfavorecidas y en situación de marginación.

¹³⁷ El artículo 2 del Convenio No. 111 de la OIT establece que los Estados parte están comprometidos a "formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en

materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto".

¹³⁸ Comité DESC, Observación general No. 18, párrafos 20 y 21, 2005.

- b. La obligación de facilitar el derecho al trabajo exige al Estado que adopte medidas positivas para permitir y asistir a las personas para que disfruten de su derecho al trabajo, entre otras cosas, implementar planes de enseñanza técnica y profesional para facilitar el acceso al empleo.
- c. La obligación de promover el derecho al trabajo exige que el Estado emprenda, por ejemplo, programas educativos e informativos para generar conciencia pública sobre el derecho al trabajo.
- d. El Comité también hace hincapié en la necesidad de establecer un mecanismo de indemnización en caso de pérdida del empleo, así como la obligación de adoptar medidas apropiadas para la creación de servicios de empleo (públicos o privados) en los planos nacional y local.

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Los derechos humanos laborales también están consagrados en diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En particular, destacan los siguientes:

1. Números 87 y 98 sobre la libertad sindical y contratación colectiva.
2. Números 138 y 182 relativos a la edad mínima de admisión al empleo y la erradicación del trabajo infantil.
3. Números 29 y 105 sobre la eliminación del trabajo forzoso.
4. Números 100 y 111 sobre la no discriminación en el empleo u ocupación.
5. Número 81 sobre la inspección del trabajo.
6. Número 131 sobre la fijación de salarios mínimos.

¹³⁹ Conferencia Internacional del Trabajo, XC reunión, Informe VI: El trabajo decente y la economía informal, Sexto punto del orden del día, pp. 142-143, Organización Internacional del Trabajo. Ginebra, 2002.

7. Número 158 sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

La OIT pone especial énfasis en que estos convenios, y de manera general los derechos laborales, se apliquen a las y los trabajadores y las y los empleadores, sin ninguna distinción, que se desempeñan tanto en el sector formal como en el informal de la economía¹³⁹.

Frente a los desafíos del proceso de globalización y sus efectos sobre el mundo laboral, la OIT lanzó en 1999 la Agenda Mundial por el Trabajo Decente, que hoy se comparte en todo el Sistema de Naciones Unidas y que ha recibido el respaldo de los jefes de Estado y de gobierno en diversos foros mundiales y continentales.

El trabajo decente parte de una noción integral que refleja una preocupación por lograr un trabajo productivo, justamente remunerado y ejercido en condiciones de libertad, seguridad, equidad y dignidad humana¹⁴⁰.

Instituciones públicas con responsabilidades para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho

Como resultado de la huelga general de los trabajadores bananeros (mayo-junio de 1954) nace la Secretaría del Trabajo mediante el decreto No. 8 del 24 de diciembre de 1954. A lo largo de su historia ha tenido diversos nombres, actualmente se denomina Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

De acuerdo al artículo 591 del Código del Trabajo, la STSS es la institución rectora del Estado en el tema del trabajo y de las relaciones laborales, incluyendo lo referido a la seguridad

¹⁴⁰ Véase el informe del director general de la OIT, embajador Juan Somavía, en la LXXXVII Conferencia Internacional del Trabajo, titulada “Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global”, Ginebra, junio de 1999.

social. Sus principales competencias son las siguientes:

1. La tutela de las relaciones obrero-patronales, incluyendo:

- a. Los servicios de inspección del trabajo, velando porque estas relaciones se ajusten a las leyes sobre la materia.
- b. La aprobación de los reglamentos de trabajo de las empresas públicas y privadas.
- c. La intervención con carácter conciliatorio en la solución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, así como el manejo de los procedimientos administrativos de solución de controversias de conformidad con las leyes.
- d. Los servicios de procuraduría del trabajo.
- e. Lo relativo al registro de los contratos colectivos de trabajo.
- f. Lo relativo al registro de contratos de trabajo celebrados por trabajadores hondureños para la prestación de servicios o ejecución de obras en el extranjero.
- g. La tutela del derecho de libre asociación de trabajadores y de empleadores.
- h. El reconocimiento y registro de la personalidad jurídica de los sindicatos y demás organizaciones laborales y de sus juntas directivas.
- i. En general, la conducción de las acciones necesarias para lograr la armonía entre empleadores y trabajadores.

2. Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas de empleo, inclusive de las personas discapacitadas, salarios y formación de mano de obra, asegurando su compatibilidad con las estrategias aprobadas por el presidente de la República, incluyendo:

- a. La realización de estudios y la formulación de programas relacionados con el mercado de trabajo, con énfasis en el empleo y la desocupación y subocupación de la mano de obra.
 - b. La coordinación de las acciones públicas y privadas relacionadas con la formación de mano de obra.
 - c. La conducción de estudios relacionados con salarios, incluyendo la formulación de propuestas para la fijación del salario mínimo, de conformidad con la situación económica y social de los sectores productivos.
3. El fomento de la educación obrera, promoviendo acciones coordinadas entre los sectores público y privado.
4. Los asuntos relacionados con la inmigración laboral selectiva, de conformidad con las leyes, incluyendo lo relativo a contratos de trabajo de los extranjeros.
5. Lo concerniente al sistema de seguridad social coordinando las acciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de las demás instituciones de previsión social, definiendo políticas para la homogeneización de la acción protectora de estos regímenes.
6. Lo relativo a la higiene y seguridad ocupacional.
7. Los demás asuntos que le correspondan de conformidad con la legislación sobre la materia.

Sin embargo, instituciones de importancia en la función de respetar y proteger el derecho humano al trabajo, lo constituyen también la Presidencia de la República y el Congreso Nacional con sus atribuciones de iniciativas de ley, asuntos presupuestarios y de aprobación de convenciones internacionales (en el caso del Congreso Nacional). Igualmente, se destaca el papel del Poder Judicial y el Ministerio Público en la administración de justicia en el campo obrero-patronal.

En cuanto a las instituciones relevantes en la aplicación del derecho humano al trabajo, en coordinación y complementación con las atribuciones de la STSS, están el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto de Formación Profesional (INFOP), la Comisión Nacional de Educación no Formal (CONEANFO), la Secretaría de Educación, las universidades, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH), la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la Secretaría de Turismo y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), entre otros.

Diagnóstico del derecho al trabajo

El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad¹⁴¹.

Panorama general

De acuerdo con los datos del INE, en la encuesta de hogares de mayo de 2011, la población en edad de trabajar es del 79% del total de la población, pero únicamente el 41% de ese total constituye la población económicamente activa (PEA). Este dato por sí

solo indica las dificultades de la economía para generar suficiente empleo. El 96% de la PEA se registra como ocupada, pero solamente el 46% es población asalariada, es decir, que recibe un salario; el resto son trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados. A nivel nacional la tasa de participación masculina en la PEA es del 65% y la tasa de participación femenina del 35%.

En los últimos 20 años, la economía hondureña ha sido impulsada por los subsectores de comercio, comunicaciones y servicios financieros generadores de bajo empleo; en cambio, la agricultura, especialmente la de pequeña escala donde continúa generándose el mayor porcentaje del empleo rural (60%, según el Banco Mundial)¹⁴², no ha contado con políticas públicas a su favor.

En lo que respecta al subsector maquila, éste ha generado más de 100,000 puestos de trabajo, lo que significa una contribución importante a la ocupación industrial, o sea, el 32% del empleo generado en el 2010; sin embargo, este porcentaje apenas representa el 9% del total de la población ocupada en ese mismo año. Tampoco se pueden desconocer las constantes denuncias de las organizaciones de la sociedad civil sobre la industria de la maquila, en el sentido que no respetan los derechos laborales, al grado que la CIDH ha abierto audiencias especiales sobre este tema¹⁴³.

Principal problema: el subempleo

Una lectura más a fondo de los datos aportados por el INE¹⁴⁴ indica que el problema principal del mercado laboral hondureño no es la desocupación abierta, sino que la calidad del

¹⁴¹ Naciones Unidas/Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XXXV período de sesiones, 2005.

¹⁴² Gerthan Stads y otros, *I&D agropecuaria en América Central*, 2008, página 36.

¹⁴³ La CIDH en audiencia temática realizada en Washington, el 23 de marzo de 2008, sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las trabajadoras de la maquila en Honduras, ha escuchado las denuncias de organizaciones de mujeres hondureñas, así como la

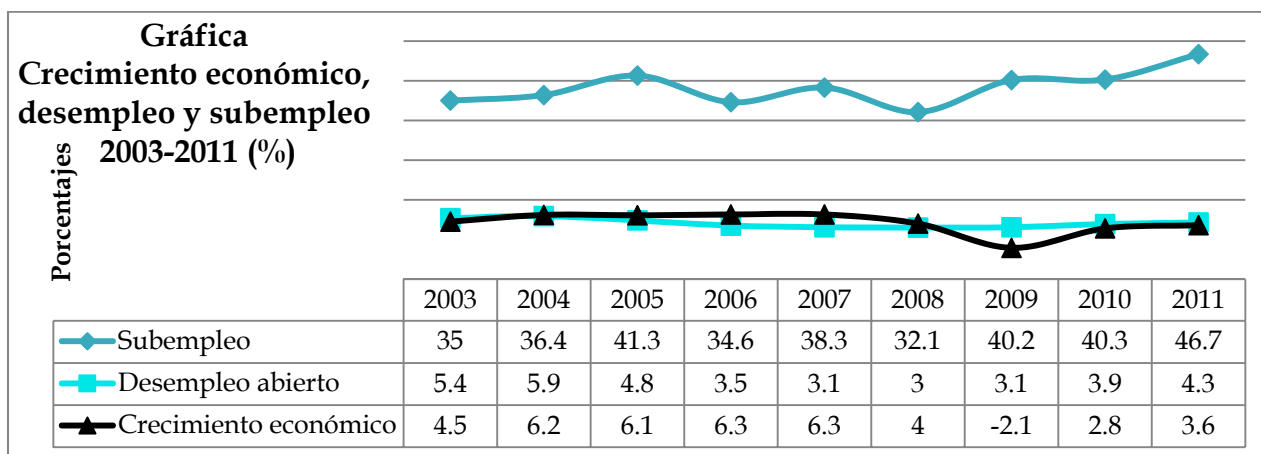
defensa de representantes del gobierno. Disponible en: www.codemuh.net.

¹⁴⁴ Definiciones del INE: El subempleo invisible son aquellas personas que trabajan el tiempo establecido en la legislación laboral, pero que perciben un ingreso menor al salario mínimo; y el subempleo visible se refiere a las personas que habitualmente trabajan menos que una jornada laboral normal y que estarían dispuestas a aceptar un trabajo adicional.

trabajo, asalariado y no asalariado, se expresa en altos grados de subempleo.

La encuesta de hogares del INE de mayo de 2011, describe con bastante claridad la actual situación del mercado laboral hondureño. En primer lugar, el desempleo abierto alcanza a 143,783 personas; el subempleo visible a 333,969 y el subempleo invisible a 1,648,729. En

resumen, actualmente 1,170,975 de ciudadanas y ciudadanos hondureños que forman parte de la PEA, se encuentran afectados por problemas en su ocupación laboral. Esto se torna más preocupante, cuando el INE indica que el 46% de los subempleados son jóvenes (de 15 a 29 años) y que el 50% de las y los desempleados corresponden a población menor de 24 años.



Fuente: INE y BCH

La gráfica 1 señala que incluso en los años con las tasas de mayor crecimiento económico reciente (2004-2007), los índices de subempleo no pudieron reducirse de manera significativa. La crisis financiera internacional abierta en el 2008 y su expresión a nivel nacional han incrementado los índices de subempleo en el país. Esta situación evidencia rigidez estructural en la economía hondureña, la cual no favorece el avance a situaciones de mayor inclusión laboral. El subempleo, caracterizado especialmente por la baja remuneración del trabajo, afecta otros derechos, tales como el derecho a la salud, educación, alimentación adecuada, vivienda e incluso a un trabajo decente.

Baja calidad del trabajo en Honduras

Por lo menos dos factores, entre otros, ayudan a explicar la rigidez del mercado laboral: los bajos índices de la población ocupada que

perciben el pago del salario mínimo, tanto en el área urbana como en el rural, siendo más grave en esta última y el mantenimiento por un largo período de la proporción de población por cuenta propia y familiares no remunerados. Ambos factores evidencian la precariedad o la baja calidad del trabajo en Honduras; asimismo, éstos tienen como telón de fondo una extendida pobreza que abarca a más del 60% de los hogares del país, más en las zonas rurales (65%) que en las zonas urbanas (55%).

En cuanto al pago del salario mínimo, un reciente estudio de la CEPAL/OIT¹⁴⁵ revela que en el 2010, más del 53% de los trabajadores asalariados en Honduras recibían un pago menor al salario mínimo, siendo esto más pronunciado en las zonas rurales (74%) que las zonas urbanas (44%).

Igualmente datos del INE apuntan que la población que trabaja por cuenta propia y

¹⁴⁵ CEPAL/OIT, *Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina*, Tomo II, página 162.

como familiares no remunerados era en 1990 del 50%, pero en mayo de 2011 se había incrementado al 54%. La tendencia que experimenta esta tasa -indica Naciones Unidas¹⁴⁶- refleja la incapacidad que tienen la economía y el mercado laboral hondureño para mantener mejores y generar nuevos puestos de trabajo decente y productivo en el sector formal de la economía, para un buen segmento de la población del país en edad de trabajar. Asimismo, significa la vulnerabilidad laboral que cada vez más trabajadoras y trabajadores hondureños experimentan al sumarse a la lista de los grupos con menor protección social.

Adicionalmente, el Instituto Sindical para América Latina y el Caribe (ISACC)¹⁴⁷, sostiene que en Honduras del total de la población asalariada, solamente el 45% tiene derecho a vacaciones; el 42% derecho al aguinaldo

(decimotercero y decimocuarto salarios, tal como lo establece la ley) y apenas el 46% cuenta con un contrato escrito. Estos datos son bastante coincidentes con la encuesta levantada por el PNUD entre la población joven, la cual se tomó como insumo para el Informe de Desarrollo Humano de 2009. Además, en este último informe, se puntualiza que entre la población joven asalariada (15 a 30 años), apenas el 20% tiene acceso al seguro social, el 1% a un seguro médico y el 0,8% a un fondo privado de pensiones. En este punto vale la pena destacar que en Honduras continúa vigente el Código de Trabajo de 1959, a pesar de todos los cambios que han ocurrido en el mundo y del desarrollo de nuevos enfoques sobre el trabajo como un derecho humano (ver cuadro 1).

Cuadro 1

Jóvenes ocupados afiliados a instituciones de seguridad y previsión social, por sexo, 2008 (%)

	Hombre	Mujer	Total
RAP	5,63	8,34	6,52
INJUPEM	0,62	1,35	0,86
IMPREMA	0,55	3,59	1,55
IPM	0,26	0,29	0,27
IHSS	15,95	27,13	19,61
Fondo privado de pensión	0,15	0,23	0,18
Seguro médico privado	1,16	1,20	1,17

Fuente: Elaboración propia con a PNUD. Informe Desarrollo Humano Honduras 2009

Discriminación laboral de las mujeres y de otros sectores excluidos

Un logro importante desde los años 90 ha sido el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, actualmente su peso en la PEA es del 35%. Pero, esta situación no refleja el aporte real de las mujeres a la economía, por la falta de registro en la estadística oficial del trabajo doméstico.

No obstante, de acuerdo al IPG, el 50.5% de los puestos profesionales y técnicos en Honduras son ocupados por mujeres; sin embargo, a nivel de puestos de directores, gerentes y administradores, solo un 37% está ocupado por mujeres, es decir, los niveles de toma de decisiones son todavía espacios para los hombres (PNUD, 2008/2009). Igualmente, aún prevalecen desequilibrios en “trabajo igual, salario igual”, presentándose una situación favorable hacia los hombres.

¹⁴⁶ ONU, *Objetivos del Desarrollo del Milenio*, Tercer informe de país, Honduras 2010, página 75.

¹⁴⁷ ISACC, *Estudio sobre el mercado laboral y su relación con la pobreza en Honduras, Guatemala y Nicaragua*, 2009, página 42.

En aspecto relacionado al derecho al trabajo, la OPS afirma que más de 800,000 personas afectadas por situaciones de discapacidad apenas logran ingresar al mercado laboral, afectadas por un alto grado de analfabetismo (51%), que es muy superior al promedio nacional (14%). Aunque no existen estadísticas precisas al respecto, otro sector muy afectado por el desempleo es el de los pueblos indígenas y afrohondureños, quienes además se ven perjudicados por el trabajo peligroso, tal es el caso de la pesca por buceo de langostas.

Persistencia del trabajo infantil

En los últimos 20 años, se han experimentado pocos avances del país en la reducción del trabajo infantil; como lo muestra la gráfica 2, éste se ha mantenido entre el 11% y 14% de la PEA, aunque la tendencia nacional es errática, lo cual indica una leve reducción porcentual.

Sin embargo, al considerar los valores absolutos se constata un incremento preocupante, pues si en 1990 eran 213,497 los niños y niñas involucrados en el mercado laboral, en el 2011 eran 359,617, es decir, un incremento de 146,120 menores. De ese total, el 80% son niños y el 20% niñas; el 76% se concentra en las zonas rurales y el 23% restante en las zonas urbanas. Con una tendencia hacia su reducción en las zonas urbanas, en sentido contrario, en las zonas rurales es hacia su incremento.

Educación y empleo

Hasta ahora, la educación en Honduras no se ha constituido en un factor de movilidad social debido a la baja calidad y segmentación del sistema educativo (público y privado). De allí que sean los jóvenes pobres y de capas medias los más afectados por el subempleo (54%); en cambio, los jóvenes con mayores ingresos solo padecen esta situación en un 8%¹⁴⁸.

Esto explica el porqué del incremento de los años de escolaridad de los jóvenes no se ha traducido en mayores logros de inclusión. Esta escolaridad en los últimos años pasó de cinco a siete años, siendo más elevada en las zonas urbanas que en las rurales. En las zonas urbanas esta escolaridad ha alcanzado hasta los ocho años, superando los promedios de la escolaridad de la población adulta (Encuesta de hogares 2010).

Considerando el período de 20 años, estos logros han sido limitados e insuficientes; además, el acceso a la formación vocacional ha sido reducido. Según el informe de seguimiento de los ODM de 2010, se encontró que el 78% de la juventud hondureña no había contado con formación vocacional que le permitiera incorporarse al mercado laboral.

Tendencias relevantes

De mantenerse la situación actual, sin una intervención intencionada del Estado, las tendencias a esperar son las siguientes:

1. Incremento de los problemas del empleo explicado, en parte, por la continuidad de la crisis financiera internacional, dado que el comportamiento restrictivo de los mercados externos afecta la dinámica de la economía y por la falta de desarrollo del mercado interno.
2. Aumento del subempleo en áreas rurales y urbanas, lo cual es un fenómeno cuya explicación de fondo radica en una matriz económica generadora de bajo empleo (predominancia del sector servicios, con el papel marginal de la economía campesina de pequeña escala en las políticas públicas y la falta de oportunidades en las zonas urbanas).
3. Incremento de la precarización de las condiciones de trabajo y un deterioro mayor de los derechos laborales (salario digno, seguridad social, estabilidad laboral).

¹⁴⁸ PNUD, *Informe de Desarrollo Humano Honduras*, 2009.

4. Consolidación de una marcada exclusión de la juventud, mujeres, pueblos indígenas y afro descendientes, población afectada por discapacidad y otros del actual mercado laboral. Dicha situación obedece a la rigidez estructural generadora de desigualdad social en Honduras.

Principales desafíos

Para que toda la sociedad pueda disfrutar de un trabajo decente y condiciones de vida dignas, el Estado debe afrontar los siguientes desafíos:

1. Promover y facilitar el diálogo social hacia la construcción de un pacto multiactoral que genere políticas públicas, en el marco de un modelo económico incluyente, hacia la generación de empleos decentes y sostenibles; de igual manera, la reducción de la pobreza en las zonas rurales y urbanas. Este reto conlleva considerar la reforma del Código del Trabajo de 1959.
2. Como parte del desafío anterior, desarrollar medidas afirmativas en la generación de empleo hacia sectores históricamente excluidos como las mujeres, los pueblos indígenas y negros, así como las personas con discapacidad.
3. Impulsar una activa política de educación formal y vocacional hacia el desarrollo de capacidades y habilidades académicas, técnicas y tecnológicas que exige el mundo laboral actual.
4. Avanzar hacia políticas públicas de protección social que consideren esquemas no contributivos, basados en la solidaridad de la sociedad hacia los grupos socialmente excluidos.

Matriz sobre el derecho al trabajo

Resultados de impacto

1. **Incrementado el acceso a un empleo e ingreso mínimo necesario a la población económicamente activa (PEA).**

- a. Tasa de desempleo.
- b. Tasa de subempleo (visible e invisible).
- c. Proporción de personas en situación de pobreza rurales y urbanos insertas en el mercado laboral, pero que ganan menos de la canasta básica de alimentos.
- d. Proporción de la población urbana y rural que devenga el salario mínimo.

2. **Reducida la desigualdad entre ambos sexos en el acceso y remuneración del trabajo.**

- a. Tasa de participación de hombres en la fuerza de trabajo.
- b. Tasa de participación de mujeres en la fuerza de trabajo.
- c. Salario medio de hombres y mujeres en los distintos sectores económicos.

3. **Incrementada la participación de la población joven y de otros sectores excluidos en el mercado laboral.**

- a. Tasa de participación de jóvenes (hombres y mujeres) en la fuerza de trabajo.
- b. Tasa de participación de personas con discapacidad (hombres y mujeres) en la fuerza de trabajo.
- c. Tasa de participación de pueblos indígenas y negros (hombres y mujeres) en la fuerza de trabajo.

4. **Asegurada la educación formal y vocacional en correspondencia a las demandas del mercado laboral.**

- a. Proporción de la PEA con formación universitaria.
- b. Proporción de la PEA con formación en educación media.
- c. Proporción de la PEA egresada del INFOP.
- d. Proporción de la PEA egresada del CONEANFO.

5. Incrementada la protección social de los trabajadores.

- a. Proporción de la fuerza de trabajo amparada por la seguridad social.
- b. Proporción de la fuerza de trabajo protegida con fondos solidarios de apoyo contra el desempleo.
- c. Proporción de la fuerza de trabajo incorporada a regímenes de jubilación: públicos, privados y mixtos.

6. Disminuido el trabajo infantil en zonas urbanas y rurales, pero especialmente en las rurales.

- a. Proporción de trabajadores y trabajadoras menores de 15 años laborando en el área rural.
- b. Proporción de trabajadores y trabajadoras menores de 15 años laborando en el área urbana.
- c. Prevalencia de las peores formas de trabajo infantil (en el sentido del Convenio No. 182 de la OIT).

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho al trabajo en la legislación.				
1	Ratificar los convenios de la OIT (No. 117 y 118) relativos a la seguridad social (Recomendación No. 39, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR, mayo de 2001).	2014-2016	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
2	Promover la reforma del Código de Trabajo con enfoque de género para garantizar la vigencia plena de los derechos laborales de las mujeres, incluidas aquellas que realizan trabajo doméstico remunerado (Plan de Igualdad de Equidad de Género en Honduras, 2010-2022, p. 130).	2014-2016	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Congreso Nacional de la República, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Adoptar y aplicar medidas legislativas y de otra índole para proteger a las y los trabajadores de los riesgos para su salud derivados del uso de sustancias tóxicas, como plaguicidas y cianuro, en el cultivo del banano y la extracción de oro (Recomendación No. 38, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR, mayo de 2001).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
4	Aplicar las medidas legislativas y administrativas vigentes para evitar que las empresas transnacionales violen las leyes laborales (Recomendación No. 36, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR, mayo de 2001).	2013-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
5	Aplicar con más firmeza la legislación sobre la pesca por buceo de langosta, de modo que se proteja de mejor forma a los pescadores.	2013-2022	Secretaría de Estado para el Desarrollo de los pueblos indígenas y afro descendientes - SEDINAFROH	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Secretaría de Trabajo y Seguridad Social , Secretaría de Salud , Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA , Secretaría de Desarrollo Social
6	Garantizar el derecho al trabajo a las personas en situación de discapacidad, asegurando el cumplimiento de las cuotas de empleo obligatorias para las empresas públicas y privadas, tal como lo establece la legislación hondureña (Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, artículos 31 y 35, Decreto No. 160-2005).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Interior y Población
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Ampliar el sistema de seguridad social de manera que beneficie a grupos de bajos ingresos y a grupos del sector no estructurado que ahora están excluidos.	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS , Secretaría de Estado del Despacho Presidencial , Congreso Nacional de la República , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Secretaría de Desarrollo Social
2	Tomar medidas de política específicas para suprimir la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, la discriminación contra la mujer en la remuneración, la desigualdad de oportunidades de facto para mujeres y hombres en el mercado laboral y la explotación de las mujeres en el sector no estructurado y el trabajo doméstico (Recomendación No. 29, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, agosto de 2007).	2018-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de la Mujer - INAM , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Secretaría de Estado del Despacho Presidencial , Congreso Nacional de la República

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Establecer centros de cuidado diario infantil, de personas adultas mayores y con discapacidad, en todos los centros de trabajo, tanto a nivel urbano como rural, garantizando el reconocimiento y la valoración equitativa del trabajo de cuidado realizado por las mujeres (Plan de Igualdad de Equidad de Género en Honduras, 2010-2022, p. 133).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA
4	Tomar medidas específicas para que las niñas que trabajan en labores domésticas y otros empleos en los sectores estructurado y no estructurado no sufran explotación ni abusos (Recomendación No. 29, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, agosto de 2007).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA
5	Promover políticas sostenibles para la generación de empleo decente en condiciones adecuadas, donde se potencie la dinámica de mercado laboral en función de indicadores de impacto en términos de condiciones de acceso a salarios justos y formación profesional (Plan Estratégico Institucional 2011-2015 de la STSS, p. 14).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP, Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO, Congreso Nacional de la República
6	Promover políticas sostenibles para el fomento de la seguridad social en la población trabajadora en el país, especialmente los afiliados a las instituciones de previsión social; además, promoción de la salud y seguridad ocupacional, prevención de riesgos profesionales, erradicación de las peores formas de trabajo infantil, así como reducción de la discriminación laboral femenina (Plan Estratégico Institucional 2011-2015 de la STSS, p. 14).	2013-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS, Congreso Nacional de la República, Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP
7	Armonizar los mandatos, acciones y recursos de los actores gubernamental, empresarial y laboral, con el propósito de generar condiciones de empleo digno y autoempleo que faciliten el desarrollo de la capacidad innovadora de los jóvenes entre 15 y 30 años en la creación de más y mejores opciones de inserción en el mercado de trabajo, en el marco de una	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	institucionalidad rectora fortalecida (Plan de Empleo Juvenil, p. 13).			
8	Velar por la salud y seguridad ocupacional de las personas con discapacidad y la prevención de las discapacidades por riesgo profesional y accidentes de trabajo (Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, artículo 34, Decreto No. 160-2005).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría del Interior y Población, Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS
9	Establecer políticas y programas de empleo para mujeres, a nivel estatal, regional, departamental y municipal, asegurando el derecho a la no discriminación por razones de sexo, edad, ideología, origen étnico-cultural, orientación sexual y discapacidad (Plan de Igualdad de Equidad de Género en Honduras, 2010-2022, p. 129).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Industria y Comercio - SIC , Secretaría de Desarrollo Social , Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG , Instituto Nacional de la Juventud - INJ , Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de la Mujer - INAM
10	Garantizar las condiciones para que los defensores de derechos humanos y de derechos sindicales realicen libremente sus actividades y abstenerse de realizar cualquier acción y de adoptar legislación que limite u obstaculice su trabajo (Informe 2011, título IV, CIDH Honduras, p. 7).	2013-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Seguridad
11	Garantizar unas condiciones laborales dignas a todos los empleados del sector salud (Observación No. 14 del PIDESC, 2000).	2015-2022	Secretaría de Salud	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social , Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
12	Brindar educación y preparación para la vida productiva para las personas que presentan distintos tipos de discapacidad (S).	2013-2015	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Desarrollo Social , Secretaría de Educación , Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP, Secretaría del Interior y Población
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Desarrollar programas de acción directa (PAD) dirigidos a prevenir y rescatar la niñez en trabajo infantil peligroso y peores formas de explotación económica o en	2013-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	riesgo de incorporación (II Plan de Acción Nacional frente al Trabajo Infantil 2008-2015, p. 30).			
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Aumentar el número de inspectores de trabajo y asegurar que estos puedan ejercer plenamente su autoridad en los centros de trabajo (Recomendación No. 37, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR, mayo de 2011) de manera particular en la industria maquiladora; velar porque se castiguen las infracciones con las sanciones correspondientes (Recomendación No. 29, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, agosto de 2007).	2013-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	
2	Establecer mecanismos de control y vigilancia de las empresas y patronos, para garantizar la afiliación efectiva de las mujeres trabajadoras y el ejercicio pleno de sus derechos a las prestaciones de la seguridad social, incluidas las que realizan trabajo doméstico remunerado (Plan de Igualdad de Equidad de Género en Honduras, 2010-2022, p. 134).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de la Mujer - INAM
3	Diseñar el sistema de gestión de equidad de género (SIEG) que vigile por los derechos laborales en el interior de las empresas.	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de la Mujer - INAM
4	Implementar, tanto a nivel de empresas públicas como privadas, el sistema de gestión de equidad de género (SIEG) que vigile por los derechos laborales en el interior de las empresas.	2016-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de la Mujer - INAM
5	Incentivar a las empresas a erradicar las brechas de género en términos salariales cuando se tienen las mismas capacidades y se desarrollan las mismas tareas; prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual en el lugar del trabajo y promover el desarrollo y crecimiento profesional de las mujeres que les permita incrementar el desempeño de cargos ejecutivos y otros incentivos (Tercer Informe de Cumplimiento de los ODM, p. 108).	2016-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de la Mujer - INAM

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
6	Realizar investigaciones sobre procesos de empleo digno que ofrezcan información confiable que permita a los actores de Estado y de la ciudadanía la capitalización de experiencias y buenas prácticas, la transferencia de conocimientos y la generación de políticas al respecto. (Plan Nacional de Empleo 06gno, PNED, 2006-2015, p. 38).	2015-2022	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Entidades Académicas, Organizaciones Ciudadanas
7	Realizar ajustes en los instrumentos de las encuestas nacionales, de tal manera que ofrezcan información fidedigna sobre el trabajo peligroso infantil por naturaleza y por condiciones, para que sea posible identificarlo en las diferentes ramas de actividad. Tomar como referencia el listado de trabajos peligroso aprobado en el año 2008 (Diagnóstico de situación del trabajo infantil y sus peores formas en Honduras, OIT, p. 35).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística - INE
8	Realizar una serie de investigaciones sobre segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, discriminación contra la mujer en la remuneración, inequidad de oportunidades de facto para mujeres y hombres en el mercado laboral y explotación de mujeres en el sector no estructurado y el trabajo doméstico que oriente la adopción de medidas específicas para proteger y hacer efectivos los derechos humanos (Recomendación No. 29, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, agosto de 2007).	2014-2017	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Entidades Académicas, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
9	Destinar suficientes fondos presupuestarios a la ejecución del Plan Nacional de Acción para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil, así como solicitar asistencia técnica internacional [Recomendación No. 73, inciso d), Comité CRC, diciembre de 2006].	2014-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas, Secretaría de la Presidencia
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Desarrollar programas especiales de capacitación con instructores idóneos para la formación laboral (Ley de Equidad y	2015-2022	Instituto Nacional de Formación	Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal -

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, artículo 37, Decreto No. 160-2005).		Profesional - INFOP	CONEANFO , Secretaría del Interior y Población - SIP
2	Sensibilizar a las y los empleadores y empleados del sector público y privado sobre los deberes y derechos inherentes al concepto de empleo digno. Temas esenciales: trabajo productivo versus trabajo precario e improductivo, deberes y derechos laborales, brechas de género en el mercado laboral, trabajo infantil y sus repercusiones en el desarrollo del país, respeto al medio ambiente, etc. (Plan Nacional de Empleo Digno, PNED, 2006-2015, p. 42).	2015-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Promover y fortalecer el Consejo Económico y Social (CES) como instancia de diálogo y concertación, adscrita a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), con amplia representatividad y participación tripartita de los gremios empresariales, laborales y del Estado (Plan Nacional de Empleo Digno, PNED, 2006-2015, p. 36).	2014-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Organizaciones ciudadanas
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Promover campañas educativas conjuntas con la Secretaría de Educación y los medios de comunicación, sobre la corresponsabilidad del trabajo reproductivo no remunerado, realizado tanto en el ámbito del hogar como en el comunitario (Plan de Igualdad de Equidad de Género en Honduras, 2010-2022, p. 133).	2015-2022	Instituto Nacional de la Mujer - INAM	Secretaría de Salud
2	Iniciar campañas de concienciación para prevenir y luchar contra la explotación económica de los niños [Recomendación No. 73, inciso e), Comité de los Derechos del Niño, CRC, diciembre de 2006].	2013-2022	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Promover acciones orientadas a que autoridades nacionales, departamentales y el personal directivo y docente del sistema	2015-2022	Secretaría de Educación	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA,

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	educativo incorporen los objetivos relacionados con la prevención, erradicación del trabajo infantil y el combate de sus peores formas en las actividades educativas regulares de las escuelas y colegios (Hoja de ruta para hacer de Honduras un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, OIT, pp. 56 - 59).			Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Establecer medidas orientadas a garantizar que las y los empleadores indemnicen a las víctimas y sus familiares de la pesca por buceo [Recomendación No. 32, inciso e), Relator Especial contra el Racismo, 2004].	2014-2014	Secretaría de Estado para el Desarrollo de los pueblos indígenas y afrohondureños - SEDINAFROH	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Reformar la ley de Contratación del Estado, para que prohíba hacer contratos o compras a empresas que violentan los derechos laborales de sus trabajadores	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH

DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA

Marco Normativo Internacional¹⁴⁹

El derecho a una vivienda adecuada se encuentra consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁵⁰, en su artículo 25, párrafo primero, que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)¹⁵¹ consagra dicho derecho en su artículo 11, párrafo primero, y señala que el Estado se obliga a tomar las acciones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas.

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

En particular, el derecho a la vivienda está establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5°; Convención

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 27; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, artículos 43, 61 y 62; y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, artículo 3.

La Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a una vivienda adecuada, enfatiza que: “el derecho a la vivienda se aplica a toda persona y no debe interpretarse en un sentido estricto, sino que debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte¹⁵²”. En particular, el disfrute de este derecho no debe estar sujeto a ninguna forma de discriminación¹⁵³.

Contenido del derecho a la vivienda adecuada

En particular, en la Observación General número 4 del Comité DESC se especifican siete aspectos que hay que tener en cuenta al determinar si las formas de vivienda constituyen una “vivienda adecuada¹⁵⁴”:

- a) Seguridad jurídica de la tenencia. Contar con un marco jurídico y administrativo que garantice a todas las personas una

¹⁴⁹ Los contenidos del presente apartado fueron retomados del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 2008.

¹⁵⁰ La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A 8III, del 10 de diciembre de 1948.

¹⁵¹ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y

adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; entró en vigor el 23 de marzo de 1971.

¹⁵² Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), Observación general número 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, 1991, párrafo 7.

¹⁵³ *Ibidem*, párrafo 6.

¹⁵⁴ *Ibidem*, párrafo 8.

- protección legal contra el desahucio, el hostigamiento, el desalojo involuntario u otras amenazas;
- b) Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras. Todas las personas deben tener acceso permanente a recursos tales como agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de emergencia;
 - c) Gastos adecuados al nivel de ingreso (asequibilidad). Los gastos que entraña la vivienda no deben impedir ni comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Se deben crear subsidios para los que no puedan costearse una vivienda y se debe proteger las y a los inquilinos de costos o aumentos desproporcionados de los alquileres;
 - d) Vivienda habitable. La vivienda debe ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de las y los ocupantes;
 - e) Accesibilidad (por parte de todos los grupos sociales, sin discriminación). Todas las personas, y especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, deben tener acceso a los recursos adecuados para conseguir una vivienda;
 - f) Lugar adecuado. La vivienda debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a centros de empleo, servicios de atención de salud, escuelas y otros servicios sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el derecho a la salud de las y los habitantes; y,
 - g) Adecuación cultural de la vivienda. La manera en que se construye la vivienda, los materiales utilizados y las políticas en

general debe permitir una adecuada expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.

Obligaciones del Estado ¹⁵⁵

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a una vivienda adecuada impone al Estado obligaciones de efecto inmediato (obligación de no discriminación y de adoptar medidas) y las obligaciones de respetar, proteger y realizar.

- a) **La obligación de respetar.** El Estado debe abstenerse de llevar a cabo toda medida que impida que las propias personas satisfagan este derecho cuando pueden hacerlo, por sí solas o en asociación con otras.
- b) **La obligación de proteger.** El Estado debe impedir toda posible violación de este derecho por terceros, como propietario, empresas urbanizadoras, vecinos u otros. Si ocurren tales violaciones, las autoridades públicas deben impedir nuevos abusos, crear y garantizar el acceso a mecanismos judiciales, cuasi judiciales, administrativos o políticos que ofrezcan reparación a las víctimas de violación.
- c) **La obligación de realizar,** que se subdivide en promover (el Estado debe aplicar medidas, incluido el reconocimiento de este derecho en la legislación nacional y la incorporación del contenido del derecho a la vivienda en las políticas en la materia y de otro tipo), y garantizar (el Estado deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción la oportunidad de satisfacer su derecho a una vivienda adecuada que no se alcance mediante el esfuerzo personal).

¹⁵⁵ Tomado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), *El derecho humano a una vivienda adecuada*, pp. 18-19, Caracas, 2005.

Diagnóstico del derecho a la vivienda adecuada

La Situación actual

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en referencia al cumplimiento de la meta 7d (Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios), destaca los avances en la reducción del porcentaje de personas viviendo en tugurios, pero al mismo tiempo señala que el número absoluto de personas ha crecido en los últimos 20 años.

Según datos del INE, en su serie histórica sobre hacinamiento, muestra que en el período 1990-2009 se ha producido una disminución de alrededor de casi 23 puntos porcentuales, pasando de 53.5% en el año 1990 a un 30.9% en el 2009. Sin embargo y según datos del INE, el número de personas en esta situación se ha incrementado desde más de 900,000 en 1990 hasta 1283,843 en 2009.

Pese al progreso logrado en la consecución de la meta en lo relativo a las personas, todavía no se ha conseguido contrarrestar el crecimiento de asentamientos precarios y se vuelven necesarias las medidas que contribuyan a cerrar la brecha urbana. Adicionalmente, en las ciudades principales como Tegucigalpa y San Pedro Sula, una alta cantidad de familias viven en zonas de riesgo ambiental. Es necesario avanzar aún más para mejorar los niveles y las condiciones de vida de estos habitantes¹⁵⁶.

Las condiciones de hacinamiento prevalecientes en las viviendas, según datos estadísticos aportados por el INE, muestran una reducción importante desde el 33.16% (275,744 viviendas) en 1990 a un 8,8% (15,2964

viviendas) en el año 2011. Por dominio la variación ha sido de 30 puntos porcentuales en el dominio rural, pasando de 40.43% a 10.4% de las viviendas en el período 1990-2011; en el dominio urbano, esta variación ha sido del 16.4%, pasando del 23.52% en 1990 a 7.1% en el 2011. No obstante en términos absolutos, todavía persisten condiciones de hacinamiento en 92,146 viviendas en la zona rural y 60,817 viviendas en las zonas urbanas.

Por su parte, la Dirección de General de Vivienda y Urbanismo dependiente de la Secretaría de Estado en los despachos de Transporte y Vivienda, señalaba en diciembre del 2010, la existencia de un déficit habitacional estimado en 1,150,000 viviendas, con un crecimiento vegetativo anual de 25,000 viviendas. De ese déficit, unas 750,000 (equivalentes al 65%) corresponden a viviendas con una o más necesidades básicas insatisfechas y las restantes 400,000 se refieren a nuevas soluciones habitacionales¹⁵⁷.

Factores que condicionan la exclusión

Tres son los principales factores propios que condicionan la exclusión en la realización del derecho humano a una vivienda que dignifique a las personas: Las condiciones de pobreza, la precariedad de la propiedad sobre los terrenos y la precariedad del empleo. A ello se suma al menos un factor externo, el elevado costo de la vivienda y de las condiciones de pago de la oferta habitacional en el país.

Las condiciones de pobreza afectan, según información del INE, al 61.9% de la población, de los cuales el 41.6% corresponden a personas en condiciones de pobreza extrema y el restante 20.3% a personas en condiciones de pobreza relativa. Esta situación, particularmente en el caso del 41.6% en condiciones de extrema pobreza, establece obstáculos casi insalvables para dignificar su

¹⁵⁶ Fuente: www.undp.un.hn/situacionODMHonduras.htm.

¹⁵⁷ Fuente: www.old.latribuna.hn/2010/12/29/deficit-habitacional-en-honduras-supera-el-millon-de-viviendas/.

vivienda por sí mismos, por lo que requieren de auxilio externo (desde el Estado, la cooperación al desarrollo y la solidaridad nacional, entre otros) para procurar en un primer paso la legalización de su propiedad y en un segundo paso el mejoramiento de sus viviendas en condiciones culturalmente aceptables.

Las cifras sobre la precariedad de la propiedad son disímiles entre distintas fuentes, mientras unos hablan de alrededor del 85%, cifras más optimistas estiman entre un 50 y 60% de predios sin regularización, tanto en zonas urbanas como rurales. Esta ausencia de regularización supone un obstáculo -incluso en el caso de cooperación solidaria- a ser sujetos de ayuda o de créditos para la construcción o mejoramiento de viviendas.

La precarización del empleo (en razón de la alta oferta de mano de obra, que opera a favor de las y los empleadores) y los bajos salarios, suponen un obstáculo para que la población en esas condiciones pueda ser considerada como sujeta de créditos para acceder a viviendas, especialmente para esa población en condiciones de pobreza extrema.

Matriz sobre el derecho a la vivienda adecuada

Resultados de impacto

1. Al menos el 70% de predios urbanos y rurales han sido legalizados y sus propietarios y propietarias cuentan con documentación que ampara su dominio.
2. La población de zonas rurales y periurbanas ha recibido apoyo y acompañamiento en el proceso de mejoramiento de las condiciones de sus viviendas.
3. El Gobierno Central y las municipalidades del país, mediante iniciativas público privadas, desarrollan proyectos de soluciones habitacionales dirigidas a personas de bajos ingresos, que suponen al

menos 25.000 soluciones habitacionales anuales en el período comprendido entre 2013 y 2020.

Indicadores de impacto

1. Para el año 2020 se han reducido en al menos un 50% las viviendas en condiciones de hacinamiento, tomando como base el año 2012.
2. Para el año 2020 se ha reducido en un 50% el número de viviendas con más de una necesidad básica insatisfecha.
3. Para el año 2020 se han puesto a disposición de la población de bajos ingresos, y facilitado su acceso a las mismas, al menos 150,000 soluciones habitacionales.

Indicadores estructurales

1. Al finalizar el año 2015 se ha incorporado el reconocimiento del derecho humano a una vivienda digna en la legislación interna pertinente, incluyendo reglamentos y mecanismos para la realización efectiva del derecho.
2. A partir del año 2013 el Fondo Social Departamental se destina principalmente hacia el apoyo de mejoras en las condiciones de vivienda de la población en zonas rurales y periurbanas.

Indicadores de proceso

1. El Instituto de la Propiedad e instituciones dependientes y complementarias agilizan los procesos de legalización de predios urbanos y rurales.
2. La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI destina al menos el 25% de su presupuesto de inversión para el fomento de la construcción de soluciones habitacionales.
3. La Secretaría de Finanzas, SEFIN, el Congreso Nacional y las

- municipalidades coordinan la inversión del Fondo Social Departamental.
4. Las funcionarias y los funcionarios, así como, las empleadas y los empleados públicos conocen y actúan conforme al conocimiento de los derechos de la población y cumplen con las responsabilidades que suponen esos derechos.
 5. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, SJDH y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH monitorean y dan seguimiento al sistema de monitoreo de cumplimiento de derechos humanos en Honduras.
 6. A partir del año 2013 se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento progresivo de las instituciones vinculadas con la realización, verificación del cumplimiento y protección de los derechos humanos.
 7. La ciudadanía conoce sus derechos y obligaciones y actúa responsablemente para su respeto, realización y justiciabilidad.
 8. Las instituciones del sector justicia están comprometidas y actúan en la persecución de los responsables de actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
 9. Las y Los funcionarios electos y contratados rinden cuentas a la ciudadanía y se someten a procesos de auditoría social y financiera sobre el manejo de recursos públicos.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la vivienda adecuada en la legislación.				
1	Homologación de la Legislación Nacional a los contenidos y alcances de la normativa internacional sobre el derecho a la vivienda.	2015-2018	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Reglamentar la acción de la Central de Riesgos para evitar que constituya un obstáculo para el acceso a crédito de adquisición o mejoramiento de vivienda de personas con deudas menores a 20,000 lempiras.	2016-2018	Comisión Nacional de Banca y Seguros	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda - SOPTRAVI , Banco Central de Honduras
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Desarrollar un proceso de formación dirigido a servidores públicos sobre el contenido y alcance de los derechos humanos y las responsabilidades que asumen en su condición de servidores públicos.	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de la Presidencia
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Emisión de la Ley Constitutiva del Ministerio de la Vivienda incorporando en la nueva ley la visión	2017-2013	Secretaría de la Presidencia	Congreso Nacional de la República

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	de cumplimiento del derecho como un derecho humano.			
2	Investigar las situaciones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas que provocan discriminación en la realización del derecho a una vivienda digna y generación de las recomendaciones de las respectivas reformas jurídicas, de políticas y programas para eliminar dichas condiciones.	2014-2016	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Organizaciones Ciudadanas
3	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente la gestión de las instituciones vinculadas al sector vivienda.	2016-2022	FOSOVI	FONAPROVI , Secretaría de Estado del Despacho Presidencial , Congreso Nacional de la República , Secretaría de Finanzas
4	Implementar un sistema de monitoreo sobre cumplimiento del derecho a la vivienda adecuada.	2015-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Desarrollo Social , Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda - SOPTRAVI , FONAPROVI , FOSOVI
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Realizar procesos de auditoría social sobre la implementación del derecho a la vivienda.	2015-2022	Organizaciones Ciudadanas	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Desarrollo de campaña informativa sobre ruta crítica para la exigibilidad del derecho a la vivienda, incluyendo información sobre los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la vivienda, tanto de los recursos administrativos como jurisdiccionales.	2018-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Secretaría de Desarrollo Social , Fiscalía Especial de los Derechos Humanos , Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , Fiscalía Especial del Consumidor

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Desarrollar campañas educativas y de sensibilización sobre el contenido y alcance del derecho a la vivienda y las obligaciones de respetar que atañen a la ciudadanía.	2018-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Desarrollo Social
4	Incorporar a los currículos de la educación primaria en el área de los estudios sociales una unidad sobre derechos humanos.	2015-2015	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Investigar los actos de corrupción como una violación a los derechos humanos por su efecto en la población más pobre del país.	2015-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
2	Sancionar los actos de discriminación en la realización del derecho a una vivienda digna que se produzcan por parte de funcionarios y particulares.	2013-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente la gestión de las instituciones vinculadas al sector vivienda.	2016-2022	FOSOVI	FONAPROVI , Secretaría de Estado del Despacho Presidencial , Congreso Nacional de la República , Secretaría de Finanzas

DERECHO AL AGUA

Marco Normativo

Marco Normativo Internacional

El reconocimiento del derecho humano al agua segura aparece en una serie de instrumentos internacionales, desde una manera implícita hasta su referencia explícita en la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las referencias tácitas sobre el derecho humano al agua aparecen en los siguientes instrumentos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos: artículos 3 y 25, párrafo 1, donde se declara el derecho a la vida y el derecho a un nivel de vida adecuados, respectivamente.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículo 6, párrafo 1, donde se reconoce el derecho a la vida como inherente a la persona humana.

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: artículo 11, párrafo 1, donde se reconoce el derecho al nivel de vida adecuado.

Las referencias explícitas se encuentran en:

1. Observación general número 15 del Comité DESC.

2. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14, párrafo 2, inciso h, sobre el derecho de la mujer a gozar de condiciones de vida adecuadas.
3. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 6, párrafos 1 y 2, literal c, sobre el derecho al más alto nivel de vida posible.
4. Convención de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales (1977) en materia de derecho internacional humanitario que establecen el derecho al agua potable.
5. Capítulo 18 de la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
6. Resolución 54/175 de la Asamblea General de 2000, que clarifica y reafirma el derecho fundamental al agua limpia¹⁵⁸.

En particular, el derecho al agua aparece establecido en el párrafo 1 del artículo 11, referente al derecho a un nivel de vida adecuado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)¹⁵⁹, en tanto que “el derecho al agua claramente es una garantía indispensable para asegurar un nivel de vida adecuado, particularmente puesto que es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia”¹⁶⁰.

Asimismo está estrechamente vinculado con otros derechos reconocidos en el PIDESC: el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental (párrafo 1 del artículo 12), a un medio ambiente sano (párrafo 2, inciso b, del artículo

¹⁵⁸ Tomado de: Memoria del Foro Intersectorial sobre el Derecho al Agua en la Ciudad de México, 9 y 10 de marzo de 2005, ponencia de Areli Sandoval Terán de Equipo Pueblo, A. C. También se recomienda ver: Informe sobre la Realización del Derecho al Agua Potable y al Saneamiento (E/CN.4/Sub.2/2005/25), presentado por el relator especial, El Hadji Guissé, encargado de realizar un estudio detallado sobre la relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento. Asimismo, en la sexta

nota al pie de la observación general No.15 se encuentra una lista de tratados, declaraciones y otras normas que reconocen el derecho humano al agua.

¹⁵⁹ El PIDESC fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; entró en vigor el 23 de marzo de 1971.

¹⁶⁰ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), Observación general número 15, relativa al derecho al agua, párrafo 3.

12), a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11) y a una alimentación adecuada (artículo 11).

Marco normativo nacional

En el derecho interno, el reconocimiento del derecho humano al agua deriva de los derechos individuales y sociales reconocidos en la Constitución de la República¹⁶¹ y derivada de ella en otros instrumentos legales secundarios:

- a) Constitución de la República: artículos 65 y 145.
- b) Código de Salud¹⁶²: artículos 1, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39 y 40.
- c) Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.

Contenido del derecho

El derecho humano al agua implica que todas las personas puedan disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico¹⁶³. La observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas precisa la fundamentación jurídica, el contenido normativo y las obligaciones del Estado y los agentes no estatales, en relación con el derecho al agua. También en esta observación se identifican posibles violaciones en la materia y se proponen medidas y estrategias para la aplicación de este derecho en el plano nacional.

Alcance del derecho ¹⁶⁴

Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas¹⁶⁵. En particular, el Comité DESC establece los siguientes factores necesarios para el ejercicio pleno de este derecho¹⁶⁶:

1. **La disponibilidad.** El abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien considera como acceso básico al servicio de agua potable un promedio de 20 litros diarios por persona y por día, como acceso intermedio 50 y como acceso óptimo 100¹⁶⁷.
2. **La calidad.** El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre y, por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua potable debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para su uso.
3. **La accesibilidad.** El agua, las instalaciones y los servicios de suministro deben ser accesibles a todas las personas, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
 - a. **Accesibilidad física.** El agua, las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de

¹⁶¹ Constitución de la República, Decreto número 131 de 1981.

¹⁶² Código de Salud, decretos 65 al 91.

¹⁶³ Comité DESC, Observación general número 15, párrafo 2.

¹⁶⁴ Los contenidos de este apartado fueron retomados del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 2008.

¹⁶⁵ Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, párrafo 11.

¹⁶⁶ *Ibidem*, párrafo 12.

¹⁶⁷ Bartram y Howard, Domestic Water Quantity, Service Level and Health, en *Informe de la Organización Mundial de la Salud* (who/sde/wsh/03.02), 2007. Tomado de DECA Equipo Pueblo, A. C. DESCA en la Ciudad de México: análisis, perspectivas y propuestas sobre algunos derechos.

toda la población, en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas, sin que la seguridad física para acceder a ella se vea amenazada; todos los servicios deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, considerando las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad.

- b. **Accesibilidad económica** (o asequibilidad). Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos.

Esta misma observación general estipula que en materia de tarifas “todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos”¹⁶⁸.

- c. **No discriminación.** El agua y los servicios e instalaciones deben ser accesibles -de hecho y de derecho- a todas las personas, principalmente a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad y marginación.
- d. **Acceso a la información.** La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y

difundir información sobre las cuestiones del agua.

Asimismo, la observación general número 15 señala que el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

Obligaciones del Estado ¹⁶⁹

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone obligaciones al Estado. Así, además de las obligaciones de efecto inmediato (obligación de no discriminación, de adoptar medidas y la progresividad)¹⁷⁰, el Estado tiene las siguientes obligaciones de carácter general¹⁷¹:

1. **Respetar.** El Estado debe abstenerse de obstaculizar o limitar el ejercicio del derecho al agua. Por ejemplo, no debe interrumpir o desconectar arbitraria o injustificadamente los servicios o instalaciones de agua, ni promover aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua; tampoco contaminarla.
2. **Proteger.** El Estado debe impedir a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por ejemplo, esta obligación implica la adopción de las medidas necesarias para impedir que particulares o empresas contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua.
3. **Cumplir.** La cual se subdivide en:
 - a. **Facilitar.** El Estado debe adoptar medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer su derecho al agua.

¹⁶⁸ Comité DESC, observación general número 15, párrafo 24.

¹⁶⁹ Los contenidos del presente apartado fueron retomados del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 2008.

¹⁷⁰ Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, párrafos 17 al 19.

¹⁷¹ *Ibidem*, párrafos 20 al 25.

- b. **Promover.** El Estado debe adoptar medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de sus fuentes y los métodos para reducir el desperdicio.
 - c. **Garantizar.** El Estado tiene la obligación de hacer efectivo el derecho cuando las personas no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos el derecho. Por ejemplo, el Estado debe adoptar y ejecutar una política sobre el agua -y asignarle los recursos suficientes- para garantizar el disfrute de este derecho a todas las personas o grupos, especialmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación.
4. **No discriminación.** Lo que implica que en la realización del derecho no deben aplicarse medidas que excluyan del goce del mismo a personas o grupos de personas en razón de su condición social, étnica, género, preferencias religiosas, políticas, culturales, sexuales o de cualquier otra índole.

Diagnóstico del derecho al agua

El 19 de enero de 2012, mediante el decreto legislativo número 270-2011, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional sobre el reconocimiento del derecho al agua, el cual fortalece lo establecido en la Ley General de Aguas y en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. No obstante, estos avances legales, persisten desafíos en términos de cobertura, calidad y acceso a los servicios de agua saludable para la población.

Cobertura

La prestación de los servicios de agua potable en Honduras se realiza principalmente desde las juntas administradoras de agua potable como autoservicios prestados por la comunidad, en más de 8,500 acueductos rurales y de cascos municipales, 31 acueductos administrados o en proceso de municipalización por el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), siete acueductos manejados por empresas privadas y mixtas (San Pedro Sula, Comayagua, Puerto Cortés, Catacamas, Siguatepeque, Choluteca y Danlí).

De acuerdo con el informe de situación de indicadores en servicios públicos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 12.84%¹⁷² de las viviendas no cuentan con un acceso adecuado de agua, lo que significa alrededor de un millón de hondureños y hondureñas con acceso inadecuado¹⁷³. En el área urbana el déficit de cobertura asciende al 4.3% de las viviendas y en el área rural sube al 21.12%. Estas cifras de cobertura representan un avance importante, considerando que para el año 1990 las viviendas sin servicio representaban el 31.58% de las viviendas a nivel nacional.

Calidad

En los acueductos urbanos se reconoce que solamente un 75% de los acueductos entregan agua segura y el restante 20.7% recibe agua de calidad por lo menos dudosa¹⁷⁴, lo que supone un riesgo adicional para la población, quienes usualmente desconocen las condiciones de calidad del agua que recibe.

En los acueductos manejados por las juntas administradoras de agua, la situación es más delicada, pues las juntas no han incorporado prácticas de análisis de calidad del agua con la

¹⁷² Cálculo propio con base a datos del INE, 1990-2011.

¹⁷³ Cálculo propio con base a proyecciones de población.

¹⁷⁴ Gobierno de la República-AECID-PNUD, Programa conjunto de agua y saneamiento Honduras, Tegucigalpa, 2008.

periodicidad necesaria para garantizar el acceso a agua de calidad a sus usuarios y usuarias. Esta ausencia de análisis impide a la población tomar medidas adecuadas de reducción del riesgo por consumo de agua contaminada, principalmente con heces fecales.

Acceso

En sistemas rurales persisten reglas de exclusión para la incorporación de nuevos usuarios y usuarias, principalmente por los montos solicitados por el derecho de conexión, que en ciertos sistemas superan los 10,000 lempiras, cantidad que normalmente no tienen disponibles las familias en situación de pobreza que se están asentando en las zonas o que por crecimiento demandan nuevas conexiones domiciliarias.

En el *Estudio sobre exclusión en el sector agua y saneamiento en Honduras*¹⁷⁵ se señala como principal causa de la exclusión en el sector, a la decisión de no desarrollar sistemas de abastecimiento de agua potable en caseríos con menos de 20 viviendas, lo que significa limitar el acceso a unos 587,976 pobladores en 18,785 caseríos. Adicionalmente, la priorización en el Plan de Nación se orienta a brindar acceso a comunidades urbanas con más 5,000 habitantes y a poblaciones menores en el área de influencia de 10 kilómetros paralelos a los ejes primarios pavimentados.

El mismo estudio apunta: “El principal impacto negativo de la exclusión es la necesidad de acarrear el agua desde fuentes poco seguras, actividad que recae principalmente en mujeres, niñas y niños. Esta situación también afecta a la población carente de servicio en comunidades que cuentan con sistema de agua, si éste es insuficiente para atender toda la población de las mismas¹⁷⁶.”

¹⁷⁵ M. López, *Estudio sobre exclusión en el sector agua y saneamiento en Honduras*, RASHON, Tegucigalpa: 2011.

¹⁷⁶ *Ibidem*, página 30.

También la exclusión afecta sensiblemente a la población con bajos ingresos, quienes deben pagar precios superiores por el agua; por ejemplo, la población en las áreas periurbanas paga entre 20 y 40 lempiras por un barril de 55 galones de agua, lo que significa un precio de entre 96 y 192 lempiras por metro cúbico, comparado con los 12.80 lempiras por metro cúbico que pagan los consumidores de más alto consumo suplidos por el SANAA o los 29.21 lempiras que por el mismo volumen paga un alto consumidor industrial en San Pedro Sula.

El estudio sobre exclusión en salud en América Latina¹⁷⁷, realizado por la Organización Panamericana de la Salud, muestra que la población con riesgo severo de exclusión se ubica principalmente en los departamentos de Lempira, Intibucá, Colón, Olancho y La Paz; con índices altos de exclusión en los departamentos de Santa Bárbara, Gracias a Dios, Choluteca y El Paraíso, quienes como característica común presentan el distanciamiento lateral del denominado corredor del desarrollo de Honduras, que incluye los departamentos de Atlántida, Cortés, Comayagua y Francisco Morazán.

En resumen, se destaca el incremento en la cobertura de los sistemas de entrega domiciliar de agua, sin que ello signifique - particularmente en el área rural- que el incremento de cobertura esté acompañado por la seguridad en el agua que se entrega y consume. La exclusión en la cobertura responde a diversos factores, entre los que destacan los de orden geográfico (en razón de la distancia de los corredores de desarrollo), los de orden topográfico (el SANAA ha declarado en reiteradas ocasiones la escasa disposición a entregar servicios en zonas ubicadas arriba de la cota de 1,150 metros, en razón de los costos por compra y operación de estaciones de bombeo), los de orden demográfico, al excluir caseríos de menos de 20 viviendas; y los de

¹⁷⁷ Organización Panamericana de la Salud, *Exclusión en salud en países de América Latina y El Caribe*, 2003.

orden económico, cuando las familias no pueden cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento de los sistemas, estimados entre 155 y 200 dólares anuales por usuario.

Matriz sobre el derecho al agua

Resultados de impacto

1. Déficit de cobertura de agua potable en zonas rurales reducido en un 10%.
2. Población de zonas periurbanas con acceso a servicio de agua potable en red domiciliaria en igualdad de condiciones.
3. Agua de calidad entregada al 90% de la población en sistemas urbanos y 60% en sistemas rurales.

Indicadores estructurales

1. Al finalizar el año 2015, Honduras ha adecuado su legislación interna para el reconocimiento del derecho humano al agua potable.
2. Al año 2020, se ha reducido en un 10% el déficit de cobertura en zonas rurales, incluyendo caseríos con 10 o más viviendas y se ha brindado acceso al 80% de la población en zonas periurbanas a través de conexiones domiciliarias.

Indicadores de proceso

1. A partir del año 2013, se han incorporado como prioridades el incremento de cobertura en áreas rurales con 10 y más viviendas y en zonas periurbanas tanto en el plan de país como en los planes de inversión pública y presupuestos nacionales y municipales.
2. A partir del año 2014, los acueductos nacionales han diseñado e implementan sus planes de desarrollo sectorial para asegurar mejoras en calidad, disponibilidad y acceso de la población al servicio de agua potable.

3. A partir del año 2014, se mejora anualmente la calidad del agua entregada a usuarios y usuarias del servicio.
4. A partir del año 2013, la SJDH ha diseñado e implementado un plan de formación en derechos humanos dirigido a funcionarios y empleados en forma diferenciada de acuerdo con sus mandatos.
5. Al año 2020, las instituciones públicas obligadas, operadores privados, juntas administradoras de agua y cooperantes han desarrollado acciones coordinadas para la realización del derecho humano al agua.
6. Al año 2020, la ciudadanía ha recibido formación e información calificada sobre sus derechos y obligaciones en materia de agua potable y saneamiento, incluyendo la responsabilidad compartida de proteger las fuentes de generación.
7. Operadores de servicios de agua potable rinden cuentas a sus usuarios sobre la situación de los sistemas y los resultados de su operación.
8. Ciudadanía en general reconoce los límites de sus derechos y sus obligaciones respecto del Estado y de la población en general.
9. Instituciones del sistema de justicia incorporan casos de violaciones al derecho humano al agua segura y sancionan administrativa o penalmente a los autores de la violación.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho al agua en la legislación.				
1	Homologar la legislación nacional a los tratados internacionales en la materia, incluyendo los acuerdos al respecto en los tratados de libre comercio y acuerdo de asociación UE.	2014-2018	Congreso Nacional de la República	
2	Adecuación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento para la incorporación del derecho humano al agua potable. (RI)	2014-2018	Congreso Nacional de la República	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA, Secretaría de Salud , Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA
3	Reforma de reglamentos marco de juntas administradoras de agua potable. (E)	2014-2015	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA	Secretaría del Interior y Población - SEIP
4	Incorporar en los reglamentos de Juntas de Agua, la obligación de rendir cuentas a los usuarios en asambleas.	2015-2016	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA	
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Incorporación de caseríos de entre 10 y 500 viviendas en las prioridades de inversión en materia de agua potable y saneamiento. (E)	2015-2022	Alcaldías Municipales	Secretaría de Finanzas , Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA , Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN , Congreso Nacional de la República , Secretaría de Desarrollo Social
2	Priorización del acceso al servicio de agua potable domiciliario a población en zonas periurbanas principalmente en acueductos servidos por el SANAA. (E)	2015-2022	Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA , Secretaría de Finanzas
3	Ampliar el abastecimiento de agua potable limpia a los hogares,	2014-2022	Servicio Autónomo	Secretaría de Salud , Secretaría de Desarrollo Social

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	en particular en las zonas rurales y más apartadas (doc. 143, Pág. 59)		Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA	
4	Ampliar el número de hogares beneficiarios de los servicios de agua y saneamiento.	2014-2022	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA	Secretaría de Salud , Secretaría de Desarrollo Social
5	Desarrollar un proceso de protección y declaración como áreas protegidas de las zonas productoras de agua.	2015-2022	Instituto de Conservación Forestal - ICF	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA , Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , , Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA Unidad de Medio Ambiente - UMA , Alcaldías Municipales
6	Incorporar el derecho al agua potable y saneamiento como una prioridad nacional en los planes de corto, mediano y largo plazo de las instituciones vinculadas al sector.	2015-2022	Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA , Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Alcaldías Municipales

Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.

1	Personal de las instituciones vinculadas al sector agua potable y saneamiento reciben formación y actúan como sujetos obligados para su realización en beneficio de la población.	2015-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , Alcaldías Municipales
---	---	-----------	---	--

Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.

1	Fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y de Protección al Consumidor, para incorporar acciones de justiciabilidad frente a violaciones al derecho humano al agua.	2015-2022	Ministerio Público	Secretaría de Finanzas
2	Fortalecimiento de las unidades de supervisión de concesiones en las ciudades que cuentan con operadoras privadas o mixtas	2014-2022	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA , Tribunal Superior de Cuentas - TSC

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	para monitorear el cumplimiento del derecho al agua.		alcantarillados - SANAA	
3	Fortalecimiento técnico, administrativo y financiero del CONASA y ERSAPS para el cumplimiento de su mandato. (E)	2015-2022	Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Secretaría de Finanzas
4	SJDH diseña e implementa un sistema de monitoreo de cumplimiento del derecho humano al agua, para la valoración efectiva de los avances en la satisfacción del derecho.	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , Alcaldías Municipales , Juntas Administradoras
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Población recibe información y cuenta con espacios de participación para la toma de decisiones sobre el derecho humano al agua.	2015-2022	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , Alcaldías Municipales , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Reactivación y apertura hacia la participación efectiva de la mesa sectorial de agua potable y saneamiento, con perspectiva de realización del derecho humano.	2014-2017	Secretaría de Desarrollo Social	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , Alcaldías Municipales , Juntas de Agua , Representantes de usuarios , Agencias de Cooperación
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Dar a conocer a los usuarios las condiciones de calidad del agua que reciben a partir de análisis de calidad llevados a cabo en muestra de viviendas.	2015-2022	Secretaría de Salud	Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA , Juntas de Agua
2	Desarrollar campañas sobre uso correcto del agua, creando conciencia sobre el efecto que el derroche tiene en las futuras generaciones.	2015-2022	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Prestadores de servicios , Alcaldías Municipales

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Incorporar en el currículo de la educación primaria, en las áreas de las ciencias naturales y estudios sociales, una unidad sobre el derecho al agua y la obligación de proteger las fuentes y evitar el uso inadecuado del agua en la casa y la comunidad.	2015-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Investigar a quienes cometan actos que dañen las zonas productoras de agua para consumo humano.	2014-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
2	Sancionar a quienes cometan actos que dañen las zonas productoras de agua para consumo humano	2015-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
3	Investigar administrativa y penalmente a quienes contaminen los cursos de agua.	2014-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
4	Sancionar administrativa y penalmente a quienes contaminen los cursos de agua	2015-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
5	Aplicar sanciones penales en casos de violación al derecho humano al agua.	2015-2022	Ministerio Público	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA
6	Generar información sobre mecanismos adecuados de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la vivienda, incluyendo recursos tanto administrativos como jurisdiccionales.	2015-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
7	Población cuenta con información y conoce mecanismos adecuados de exigibilidad y justiciabilidad del derecho agua, incluyendo recursos administrativos como jurisdiccionales.	2015-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Fiscalía Especial del Consumidor , Fiscalía Especial de los Derechos Humanos , Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS , Alcaldías Municipales

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Incorporación de caseríos de entre 10 y 500 viviendas en las prioridades de inversión en materia de agua potable y saneamiento. (E)	2014-2014	Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA , Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento - CONASA , Alcaldías Municipales
2	Instrumentación, apoyo financiero e implementación de la Incorporación de caseríos de entre 10 y 500 viviendas en las prioridades de inversión en materia de agua potable y saneamiento. (E)	2015-2017	Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - ERSAPS	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados - SANAA , Secretaría de Finanzas

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

Marco Normativo

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, señala que “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, los Estados tienen la solemne obligación de proteger y mejorar el medio, incluidos los recursos naturales de la tierra, el aire, el agua, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.¹⁷⁸

Los derechos a un ambiente limpio están contenidos en los siguientes instrumentos internacionales:

1. **Convención de Washington (1940) para la protección de la flora, fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América**, en la que se incluyen las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético, valor histórico o científico y los lugares donde existen condiciones primitivas.
2. **El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales**, que en el artículo 11, inciso 2,a fundamental), dice que “Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales y en el artículo 12,b) “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

3. **La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano**, emitida en Estocolmo entre el 5 al 16 de junio de 1972, manifiesta que “el hombre (y la mujer) es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente”.

Entre los Principios contenidos en la Declaración se establece que:

1. El hombre (y la mujer) tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal, que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.
2. Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

¹⁷⁸ ONU, *Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano*, Estocolmo Suecia, Junio 1972.

3. Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo.
4. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.
5. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre (y la mujer) pueda desarrollarse en todos los aspectos.
6. Se deben fomentar en todos los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo científico referente a los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de

información científica actualizada y de experiencias sobre la transferencia de ser objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga económica excesiva para esos países.¹⁷⁹

A partir de la Conferencia de 1972, se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se integró la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Plan de Desarrollo en 1983 y esta Comisión presentó el Informe Brundtland en el que por primera vez se habla de desarrollo humano sostenible.

1. **Carta de Belgrado** (Yugoslavia, 1975). se replantea el concepto de Desarrollo y se debe hacer un reajuste del estar e interactuar con la realidad, por parte de los individuos.
2. **Convenio para la protección de la capa de ozono** (1985) para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.
3. **Protocolo de Montreal y la Enmienda de Londres**, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (1987). El Protocolo de Montreal, elaborado en 1987 bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entró en vigor el 1° de enero de 1989. El Protocolo definió las medidas que debían adoptar sus signatarios para limitar la producción y el uso de sustancias controladas, inicialmente cinco CFC (Clorofluorocarbonos) y tres halones.

¹⁷⁹ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Doc. "Declaración de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano" Estocolmo Suecia, 1972

4. **Convención sobre el cambio climático**, Nueva York, 9 de Mayo de 1992.
5. **Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo**, emitida en el marco de la Cumbre de la Tierra en la que se aprobaron instrumentos importantes: El Programa 21, para la promoción del desarrollo sostenible, la Declaración de Principios relativos a los bosques, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio sobre biodiversidad Biológica.

Además, el derecho relativo al medio ambiente está contenido en:

- **Convención de lucha contra la desertificación**, en la que se establece el marco para todas las actividades encaminadas a combatir la desertificación y se centra en el aumento de la productividad del suelo, su rehabilitación y la conservación y reordenación de las tierras y recursos hídricos. Asimismo insiste en la participación social y comunitaria y en la creación de un "entorno propicio" que ayude a la población local a valerse de sus propios medios para remediar la degradación del suelo.
- **Protocolo de Kyoto** sobre el cambio climático, que incluye Mecanismos de Desarrollo Limpio y el Plan de Acción de Montreal en ejecución.¹⁸⁰
- **Convenio de Basilea**, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
- **Protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.**
- **El Convenio de Rotterdam**, en el que se establecen códigos de conducta y sistemas de intercambio de información obligatorios sobre productos químicos y plaguicidas peligrosos.
- **El Convenio de Estocolmo**, que contiene regulaciones trascendentes para la eliminación, o restricción de la producción y utilización de todos los contaminantes orgánicos persistentes producidos intencionalmente. También se propone la reducción continua y, cuando sea factible, la eliminación de las liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes producidos involuntariamente, como las dioxinas y los furanos.
- **Resolución 45/107**, en la que se hacen recomendaciones para la prevención internacional del delito y la justicia penal en el contexto del desarrollo, la cual, en el numeral 4, dice: "Es urgente reconocer y controlar los aspectos nacionales, regionales a internacionales de la creciente contaminación y de la explotación y destrucción del medio ambiente, en vista de la devastación alarmante y cada vez mayor, provocada por diversas causas. Además de las disposiciones de derecho administrativo y de las referentes a la responsabilidad civil, debe mantenerse bajo examen la función del derecho penal como instrumento que puede ayudar a lograr dicho control. Ha de examinarse la conveniencia de formular principios rectores para la prevención de los delitos contra el medio ambiente".
- **Declaración de Johannesburgo y Plan de Acción** para controlar la contaminación, el calentamiento global, la pérdida de especies, los incendios forestales y otras catástrofes. Esta declaración contiene directrices importantes relativas a Agua y Sanidad que plantea reducir a la mitad el número de personas que viven sin agua corriente y acceso a servicios sanitarios para 2015. Se plantea la energía renovable y hacerla más accesible a las personas en situación de pobreza. Se establece un fondo para ayudar a erradicar la pobreza con contribuciones voluntarias, se propone el acceso local a medicamentos en países pobres. Se plantea la reducción de la

¹⁸⁰ ONU, *Protocolo de Kyoto, 1997*, pp. 11

perdida de especies de flora y fauna silvestre para 2015, se asegura la firma de tratados relativos al mercado y subsidio de la producción agrícola y se respalda el Protocolo de Kioto.

En general la normativa internacional ha establecido principios que son generales en la aplicación del derecho al medio ambiente, entre estos: El principio de precaución, el principio de prevención, principio de reparación del daño (quien contamina y daña paga), principio de responsabilidad objetiva, principio de participación, principio de acceso a la información, principio de autodeterminación relacionada con la soberanía sobre los recursos naturales y la responsabilidad de no causar daño al ambiente de otros Estados o en áreas fuera de la jurisdicción nacional, principio de la buena vecindad y cooperación internacional y el principio de introducción de la variable ambiental.

Diagnóstico del derecho al medio ambiente sano

Honduras cuenta con una cantidad significativa de hábitats desde bosques nublados, bosques tropicales, áreas llaneras, hasta arrecifes coralinos, que ofrecen condiciones favorables para la sobrevivencia y generación de una biodiversidad de flora y fauna silvestre importante.

En estudios realizados por el PNUD, se afirma que Honduras registra el 2,5% de la flora mundial, sobre lo cual se reportan 7,524 especies de plantas vasculares, de estas, 244 se consideran endémicas o de distribución limitada y 35 se encuentran en situación de amenaza de extinción. La más reciente lista de aves cuenta con 718 especies, de las cuales 59 están bajo amenaza nacional y 5 están en la lista de especies bajo amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la

Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN), (incluyendo la única ave endémica de Centro América, la *Amazilia lucidae*).

Existen 228 especies de mamíferos, entre éstos, 6 endémicas y 19 especies bajo amenaza; 211 especies de reptiles, incluyendo 15 lagartijas y 111 anfibios, de las cuales, 36 se encuentran en situación endémica. Además, sobreviven 2,500 especies de insectos, considerando 14 endémicos y un total de 672 especies de peces¹⁸¹

El 53% de la superficie de Honduras posee cobertura boscosa con diferentes grados de conservación. Los tres principales ecosistemas boscosos son el Bosque latifoliado, el Bosque de Coníferas y los bosques de Mangle. Además, se posee gran riqueza de ecosistemas marino costeros, en la costa Pacífica, el ecosistema de manglar cubre aproximadamente 500 km² abarcando todo su litoral, a excepción de pequeñas porciones de playa. En este lugar se encuentra el sitio Ramsar 1000, refugio de aves migratorias y de especies en peligro de extinción. La costa Caribe con 671 km de playa, lagunas costeras, manglares y más de doscientos islotes y cayos que forman parte del sistema arrecifal mesoamericano, proveen hábitat a diversidad de formas de vida.

Actualmente existen proyectos para la utilización de fuentes alternativas de energía, además de la hidroeléctrica, entre estos el biodiesel (Honduras posee miles de hectáreas de palma africana) y el etanol a partir de bagazo de caña.

Si bien el aporte de los recursos naturales al PIB ha disminuido en gran proporción en los últimos 30 años, la población aún es altamente dependiente del uso de recursos naturales. La biodiversidad y los bosques se encuentran bajo presión extrema debido a la deforestación, especialmente en áreas agrícolas fronterizas de zona húmeda, como

¹⁸¹ Vreugdenhil, SERNA/DiBiO, 2002

resultado de la extensa cría de ganado, el descombro especulativo de la tierra y la expansión de la frontera agrícola por parte de pequeños agricultores (expulsados de las mejores tierras). La estabilidad de los recursos naturales y de los ecosistemas, así como su capacidad de mantener el sustento rural, se encuentran amenazadas por el manejo inapropiado de la tierra y el agua, especialmente en la zona seca. Según el Programa Nacional Forestal 2004-2021, anualmente se pierden entre 80,000 y 100,000 hectáreas debido a la tala ilegal, los incendios y la ampliación de la frontera agrícola.

Revertir estos procesos resulta difícil por varios factores, entre ellos, políticas sectoriales que no atienden los problemas de forma integral, así como políticas centralizadas; regulación inefectiva y condiciones inadecuadas de gobernabilidad; consideración inadecuada de los problemas ambientales en las iniciativas de desarrollo rural; la falta de acceso a la información y baja capacidad técnica de los actores locales.

Desde la década de los años noventa, Honduras está realizando esfuerzos puntuales para la protección del ambiente, convirtiéndose en signatario de las convenciones internacionales vinculadas a este tema, desarrollando e implementando una Política Ambiental Nacional, generando espacios de concertación y mejorando instrumentos para una gestión ambiental eficiente.

En su Informe de País sobre las Metas del Milenio, Honduras propone en su Meta No. 9 "Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y en los programas nacionales e invertir en el desarrollo de los recursos del medio ambiente" y se plantea los siguientes desafíos:

- a. Revertir la tendencia de destrucción de los bosques hondureños, en particular el latifoliado, por ser el que más se ha destruido y que lleva un proceso más

lento de regeneración y alberga una mayor biodiversidad.

- b. Aplicación de medidas prioritarias que inciden en la reducción de los niveles de emisiones de gases por fuentes fijas y vehiculares.
- c. Aplicar el marco de políticas ambientales que existe desde hace algunos años y que están plasmadas en documentos como son: perfiles ambientales, planes de acción ambiental, la Estrategia de Reducción de la Pobreza y el Plan de Gobierno.
- d. Ordenar el funcionamiento del marco institucional y diseñar una estrategia ambiental integral por parte del Estado que facilite la coordinación interinstitucional, la búsqueda y el uso de financiamiento para la ejecución de programas y proyectos ambientales. Esta política ambiental debe definir claramente los mandatos y funciones que cada actor e institución debe cumplir.
- e. Fortalecer las capacidades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para que pueda asumir con mayor propiedad el rol que le corresponde en el campo medioambiental, como también fortalecer las otras instituciones que forman parte del sistema de gestión ambiental del país.
- f. Agilizar la aplicación de leyes sobre el manejo de recursos naturales y ambientales, tales como: la Ley Marco de Agua, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. También es pertinente crear los reglamentos especiales para el desarrollo y la aplicación de las leyes existentes en materia ambiental.
- g. La incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas nacionales es un objetivo prioritario para promover el desarrollo humano sostenible y alcanzar las Metas del Milenio en Honduras.

Por otro lado se debe señalar, que el Congreso de la República concesionó 50 ríos, para la construcción de represas hidroeléctricas, sin tomar en cuenta en la mayoría de los casos la opinión de las comunidades, en donde se pretende realizar los proyectos referidos.

La población aledaña que ha vivido tradicionalmente en armonía con estas fuentes de agua, han manifestado preocupación, por el daño ambiental que se puede generar a las cuencas de estos ríos, concretamente a la biodiversidad y a la reducción de posibilidades de consumo de agua. A estas concesiones se debe agregar, los contratos de explotación de aguas subterráneas, mediante la perforación de pozos, que se desconoce el grado de daño al manto acuífero de Tegucigalpa.

Con relación a las concesiones mineras de cielos abiertos, se debe decir que el 60% del territorio del país es apto para la explotación minera y de este dato 31% fue concesionado mediante la emisión de 84 permisos otorgados y otros 188 en lista de espera,¹⁸² amparados en el Código de Minas (Decreto - Ley 2655 de 1988) y que está dañando extensas áreas de subsuelo por el alto contenido de cianuro y el daño colateral causado a la población, en relación al consumo de agua y productos alimenticios contaminados.

En San Andrés Minas, propiedad de Minerales de Occidente, ubicado en el Departamento de Copán, hasta mil toneladas de cianuro son consumidas al año. Los desechos de cianuro y de metales pesados, (algunos como el plomo, cromo, cobre y cadmio son tan peligrosos como el cianuro, especialmente en el largo plazo), están almacenados en cuatro piscinas al lado del Río Lara, un tributario al Río Higuito y Río Ulúa. Estas piscinas contienen más de 50 millones de galones de desechos y un accidente podría contaminar hasta el Departamento de Cortés. Las probables causas de un accidente

son numerosas, un fallo de la represa deteniendo las piscinas, un fallo en el plástico cubriendo la cancha de rocío de cianuro, un accidente de transporte o un simple error humano.

El control de desechos, muestra una situación compleja, por el hecho que del 100% de basura lanzada al ambiente, se estima que únicamente el 60% es llevada al vertedero municipal, dato que el Departamento de Limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central estima en 200 toneladas. El elemento crítico en el control de desechos es el reciclaje artesanal, el que se realiza en el vertedero, en los contenedores o en sitios en donde la ciudadanía deposita la basura, práctica que es realizada por niños, niñas y adolescentes en un porcentaje estimado en 70% lo que demuestra que aún no se cuenta con proyectos orientados a erradicar el trabajo infantil en los vertederos de las principales ciudades del país.

Honduras obtiene su energía de tres fuentes: hidrocarburos, hídrica y biomasa. Hasta el año 1990 el 99% de la energía eléctrica provenía de plantas hidroeléctricas estatales. Si bien, dadas las condiciones topográficas y de precipitación existe un enorme potencial para la generación hidroeléctrica, esta no ha sido debidamente aprovechada. La falta de inversión pública y privada en fuentes de energía renovable, ha provocado que la demanda de energía surgida en los últimos años fuera cubierta con plantas térmicas a base de combustibles fósiles. Actualmente el 65 % de la energía que se consume proviene de estas plantas. El 36% de los hidrocarburos son utilizados en la producción de energía eléctrica, el resto lo consume en su gran mayoría el transporte. Honduras no produce hidrocarburos, por lo que esta dependencia, afecta en gran medida la balanza comercial.

¹⁸² Doc. Mejía Thelma, "Nueva fiebre del oro" Honduras, 2006

Matriz sobre el derecho al medio ambiente sano

Resultados de impacto

1. Garantizadas las condiciones para el goce y disfrute de un medioambiente sano, que asegure la protección y la prolongación de la vida de la población de Honduras, mediante la coordinación interinstitucional del Estado en alianza transparente y eficiente con las organizaciones de sociedad civil, creando los espacios necesarios para la participación social.
2. Creados e implementados mecanismos expeditos para el cumplimiento de tratados, convenios y protocolos ratificados por Honduras, en materia de derechos humanos, generando voluntad política y coordinación interinstitucional efectiva.

Indicadores de impacto

1. El 100% de leyes armonizadas con la normativa internacional para 2020.
2. Reforma de la Ley Marco de Agua y Saneamiento aprobada para 2018.
3. El 100% de organizaciones de sociedad civil validan la nueva Ley de Minería para 2015.
4. Reforma del Código de Salud aprobada por el Congreso Nacional de la República para 2015.
5. Ley de Mitigación aprobada por el Congreso Nacional de la República para 2015.
6. Revisada la normativa ambiental en un 100% para 2015.
7. Validadas y socializadas las políticas ambientales actuales en un 40% para 2016.
8. Política de mitigación y de adaptación al cambio climático aprobada para 2016.
9. Comité funcionando para 2016.

10. En 2010, el 40% de comunidades rurales cercanas a áreas protegidas ejecutan proyectos sostenibles de erradicación de la pobreza.
11. Estrategias definidas para 2016 para el cumplimiento del 60% de compromisos.
12. Para 2018 los vehículos que generan riesgo de contaminación han dejado de circular en un 80%.
13. Plan en ejecución en siete ciudades para 2020.
14. Derecho ambiental incorporado en el nivel secundario para 2016.
15. Enfoque de derechos humanos incorporado a la Política Nacional, al Plan para la Gestión Ambientalmente Racional y a la Agenda Química Nacional para 2016.
16. Evaluación del control y erradicación de contaminantes orgánicos persistentes concluida para 2016.
17. Descentralización lograda en un 40% para 2018.
18. Para 2020, el 40% de comunidades rurales aledañas a áreas protegidas están participando en la venta de bonos de carbono.
19. Capacitadas y Capacitados el 80% de servidores públicos para 2020.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho al medio ambiente sano en la legislación.				
1	Revisión y armonización de las leyes nacionales referidas al medioambiente, según el contenido de la normativa internacional.	2013-2018	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Instituto de Conservación Forestal, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Congreso Nacional de la República
2	Revisión y reforma de la Ley Marco de Agua y Saneamiento de acuerdo a la normativa internacional.	2014-2018	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Congreso Nacional de la República , Instituto de Conservación Forestal , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Secretaría de Estado de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH
3	Revisar la normativa jurídica ambiental para reconceptualizar los delitos ambientales, privilegiando el aprovechamiento sostenible por parte de la población con bajo ingreso, que habita en zonas aledañas a las áreas protegidas.	2014-2020	Instituto de Conservación Forestal	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA
4	Emitir la Ley de Mitigación Ambiental haciendo énfasis en el principio del Interés Público y el Bien Común” y el de “quien contamina paga” .	2014-2018	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Congreso Nacional de la República , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
5	Aplicar las medidas legislativas y administrativas vigentes para evitar que las empresas transnacionales violen las leyes sobre medio ambiente.	2015-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Instituto de Conservación Forestal, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social , Ministerio Público , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
6	Revisión y Reforma del Código de Salud.	2014-2015	Secretaría de Salud	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Desarrollar estrategias de combate de la pobreza en áreas protegidas, a partir del aprovechamiento compartido y sostenible de los recursos ambientales.	2014-2022	Instituto de Conservación Forestal	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa- SEPLAN , Secretaría de Desarrollo Social

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Diseñar un Plan Estratégico para la descentralización de los procesos ambientales, priorizando el nivel local.	2014-2015	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Instituto de Conservación Forestal, Gobiernos Locales
3	Ejecutar Plan Estratégico para la descentralización de los procesos ambientales, priorizando el nivel local.	2016-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Instituto de Conservación Forestal
4	Diseñar un Plan para la venta de Bonos de Carbono, bajo el enfoque de mitigación y de adaptación al cambio climático y de derechos humanos	2014-2015	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Instituto de Conservación Forestal
5	Ejecutar Plan para la venta de Bonos de Carbono, bajo el enfoque de mitigación y de adaptación al cambio climático	2017-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Instituto de Conservación Forestal
6	Diseñar y ejecutar en forma participativa el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en los Vertederos sobre todo en las 7 ciudades con mayor concentración de población de Honduras.	2014-2020	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-IHNFA
7	Incorporar el enfoque de derechos humanos en el Plan para la Gestión Ambientalmente Racional y la Agenda Química Nacional.	2014-2016	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN
8	Generar una política de mitigación y de adaptación al cambio climático, congruente con derechos humanos.	2014-2018	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Desarrollo Social , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
	Revisar, Controlar, y eliminar la flota de vehículos de transporte que generen riesgo de contaminación del aire, preferentemente en zonas urbanas. Revisar tamaño de letra.	2014-2018	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda-SOPTRAVI	Dirección General de Transito, Alcaldías Municipales y Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente-SERNA.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
9	Incorporar el estudio del Derecho Ambiental en el Curriculum Nacional Básico.	2014-2015	Secretaría de Educación	Secretaría de Recursos Naturales y ambiente-SERNA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Desarrollar programa de capacitación en derechos humanos ambientales dirigido a las y los servidores públicos.	2015-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA
2	Desarrollar diplomado en cambio climático y vulnerabilidad ambiental dirigida a servidores públicos.	2014-2020	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de la Presidencia
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Diseñar estrategia de fortalecimiento de las instituciones reguladoras del tema ambiental.	2014-2020	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Finanzas
2	Conformar un comité interinstitucional para la protección del derecho ambiental en el que se incorpore la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	2014-2015	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Desarrollo de estudios especializados sobre eficiencia en el manejo de la basura en las siete ciudades con mayor concentración urbana.	2014-2016	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH	Secretaría de Salud , Gobiernos Locales , Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA
4	Desarrollo de estudio especializado sobre impacto en el comercio de madera.	2014-2016	Instituto de Conservación Forestal - ICF	
5	Desarrollo de estudio especializado sobre el impacto de la explotación minera.	2014-2015	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Dirección General de Fomento de la Minería- DIFOMIN, Instituto de Conservación Forestal, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
6	Diseñar en forma participativa un mecanismo de monitoreo al	2013-2014	Secretaría de Justicia y	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	cumplimiento de compromisos ambientales establecidos en la normativa internacional.		Derechos Humanos	
7	Desarrollar evaluación de avances nacionales en el control y erradicación de Contaminantes Orgánicos Persistentes según la normativa internacional.	2014-2016	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Desarrollar programa de Educación ambiental, dirigido a organizaciones de sociedad civil	2014-2020	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Asegurar la consulta efectiva de la Ley de Minería para valorar impactos ambientales y daños a los territorios de los pueblos Indígenas.	2013-2014	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Estado de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFRO, Dirección General de Fomento de la Minería-DIFOMIN, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Revisar la Política Ambiental de Honduras y la Política para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos, con fines de reformulación, asegurando la participación eficaz y de buena fe de las organizaciones de sociedad civil y la incorporación de un enfoque de derechos humanos.	2013-2015	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Salud
4	Crear la red nacional de comunicadores y promotores ambientalistas, que aseguren la profundización del conocimiento ambiental en el nivel local.	2014-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
5	Instalar mesa sectorial en el tema medioambiente sano con participación de instituciones del Estado, la ciudadanía y la academia.	2015-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Instituto de Conservación Forestal, Organizaciones Ciudadanas
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Ejecutar acciones de socialización de las funciones de la Secretaría de Recursos	2014-2016	Secretaría de Recursos	Instituto de Conservación Forestal - ICF

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	Naturales y Ambiente y del Instituto de Conservación Forestal, ICF.		Naturales y Ambiente - SERNA	
2	Desarrollar campaña educativa sobre derechos ambientales estableciendo alianzas entre sociedad civil y las instituciones reguladoras.	2014-2020	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Desarrollar plan de comunicación en medio ambiente en temas prioritarios para el país.	2014-2020	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Desarrollar procesos sistemáticos para investigar y sancionar los delitos contra el medio ambiente para reducir los niveles de impunidad y de mora judicial	2015-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Revisión y reforma del Código de Salud	2014-2018	Secretaría de Salud	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
2	Evaluación nacional de avances en el control de contaminantes orgánicos persistentes.	2014-2022	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	
3	Definir mecanismo para la consulta previa libre e informada.	2013-2014	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA	Secretaría de Estado de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

DERECHO A LA CULTURA

Marco Normativo Internacional

El Derecho a la cultura en el marco normativo internacional se encuentra establecido en:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José".
- El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
- El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, "Protocolo de San Salvador".

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna en su artículo 27 que:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José" enuncia en el capítulo III, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 26, Desarrollo Progresivo que:

Los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" establece en el artículo 14: Derecho a los Beneficios de la Cultura que:

1. Los Estados parte en este Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:
 - Participar en la vida cultural y artística de la comunidad.
 - Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.
 - Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados parte deberán adoptar en este Protocolo para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figuran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
3. Los Estados parte se comprometen en este Protocolo a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados parte en este presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales y, en este sentido, se comprometen a propiciar mayor cooperación internacional sobre la materia.

Marco Normativo Nacional

La cultura como un derecho está consignada en la normativa nacional en las siguientes leyes:

- Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto No 220-97 de 17 de diciembre de 1997).
- Ley Orgánica de creación del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (Decreto No. 118 de 16 de octubre de 1968) con sus respectivas modificaciones, el Decreto No. 54 de 28 de junio de 1973; el Acuerdo No. 20 de 25 de febrero de 1976; y el Decreto No. 152-91 de 13 de octubre de 1991.
- Ley General de la Administración Pública de 1986 (Decreto No. 146), en cuyos artículos 28 y 29 se crea la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y se determinan sus competencias, respectivamente, así como las modificaciones parciales posteriores a esta ley.
- Decreto No. 177-2010 de creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto No. 027-2011, que reforma el Reglamento de Organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo del año 1997 (Decreto ejecutivo No. PCM-008).
- Reglamento de organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo del año 1997 (Decreto ejecutivo No. PCM-008) que desarrolla la anterior ley y establece la estructura y funciones del nivel superior de la Secretaría.

Obligaciones del Estado frente al derecho a la cultura

El análisis del marco normativo nacional e internacional identifica entre otras responsabilidades del Estado frente al tema de la cultura las siguientes:

- Reconocer el derecho a participar, gozar de beneficios, contar con la libertad para desarrollar la actividad creadora, artística y realizar la investigación científica.

- Fomentar la cooperación y las relaciones internacionales para impulsar programas y proyectos orientados al quehacer y desarrollo cultural.
- Adoptar las providencias, para el logro de la plena efectividad de los derechos culturales.
- Proteger los intereses morales de la producción artística, científica y literaria.

Instituciones públicas con responsabilidades para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la cultura

1. La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes es el ente rector estatal del Patrimonio Cultural de la Nación y entre sus principales objetivos están:
 - Modernizar, promover e incentivar la producción y difusión cultural y deportiva en las diversas manifestaciones a nivel local, regional e internacional.
 - Fomentar el desarrollo creativo de la cultura individual y organizada.
 - Rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible.
 - Crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la comunidad en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas culturales y deportivas, en un marco de descentralización, concertación y transparencia.
 - Generar espacios de expresión artística y cultural, así como condiciones y capacidades para la promoción, difusión y fomento de la creatividad que contribuyan a fortalecer la convivencia intercultural entre las personas, comunidades y regiones del

territorio nacional y en su proyección al mundo.

- Fomentar el deporte y la recreación en comunidades urbanas y rurales de los municipios del país para contribuir a la salud física y mental de la población.
 - Democratizar la acción cultural del Estado estableciendo mecanismos vinculantes con el sector público y privado, nacional e internacional, consolidando redes, convenios y la participación colectiva.
 - Promover y fortalecer la identidad nacional y el desarrollo cultural mediante la implementación de programas permanentes en atención a la diversidad e industrias creativas, empresas culturales y la vinculación institucional.
 - Transformar a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes en un ente competitivo mediante la reingeniería de procesos y profesionalización continua de los recursos humanos.
2. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (ente desconcentrado, pero adscrito a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, cuyo objetivo general es "la defensa, exploración, conservación, restauración, reparación, recuperación y acrecentamiento e investigación científica" del Patrimonio Cultural de la Nación.

No obstante, que el marco legal nacional atribuye competencias directas a la SCAD y el IHAH, otras dependencias estatales tienen responsabilidad en el tema de los derechos culturales:

- Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Industria y Comercio (SIC), Archivo Nacional y Fiscalía Especial de las Etnias y del Patrimonio Cultural, en la

protección del patrimonio cultural de la Nación; la Academia Nacional de Geografía e Historia de Honduras, para la investigación, recuperación y acrecentamiento. Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores (SRE), a quien compete la divulgación cultural. Finalmente, las municipalidades poseen competencias para promover declaratorias, investigaciones, recuperaciones, acrecentamiento y divulgación del Patrimonio Cultural dentro de su término municipal.

La Ley "Plan de Nación y Visión de País 2010 - 2038, la herramienta de Planificación para 7 períodos de Gobierno" identifica como un lineamiento estratégico a "la educación y cultura como medios de emancipación social"¹⁸³ y especifica que la descentralización de la cultura en Honduras es un proceso en construcción que comenzó a desarrollarse en 2007 a iniciativa de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, partiendo de una subdivisión territorial en 9 regiones del país, con base en criterios de territorialidad y cercanía geográfica.

Así mismo, señala la "integración de los Consejos Regionales de Cultura, adscritos a las Consejos Regionales de Desarrollo", y concibe a "los Consejos Regionales de Cultura, como espacios de toma de decisiones sobre programas y presupuesto, priorización de emprendimientos, programación cultural y establecimiento de alianzas gobierno, sector empresarial, ciudadanía y cooperación, que estarán apoyados por una red de conexión a información, capacitación y mercados y un sistema de incubación empresarial"¹⁸⁴.

¹ Gobierno de Honduras, SEPLAN. Visión de País 2010 - 2038, Horizonte de Planificación para 7 períodos de Gobierno (Pág. 69).

¹⁸⁴ Ídem.

Diagnóstico sobre el derecho a la cultura ¹⁸⁵

La **cultura** se define como el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, emocionales y modos de vida que caracterizan a los individuos y a los grupos humanos, en forma que trasciende las prácticas estrictamente artísticas e intelectuales, y que acoge derechos humanos, fundamentales, colectivos y sociales”¹⁸⁶. “El término cultura podrá usarse para incorporar bajo una acepción general las diferentes expresiones y sectores artísticos y culturales y el Patrimonio Cultural de la Nación”¹⁸⁷.

El Patrimonio Cultural de la Nación se puede dividir, según su naturaleza y con independencia de su titularidad, en:

1. Bienes muebles completos.
2. Bienes muebles incompletos.
3. Bienes inmuebles.
4. Bienes intangibles.

En Honduras, como en el resto de los países latinoamericanos, existe una simbiosis entre las modalidades culturales “lo tradicional y lo moderno”, “arte y artesanía”, “cultura popular y cultura elitista”, etc.; el sincretismo, producto de la interacción de diferentes culturas: la indígena, la europea y la afrodescendiente, además de las diferentes diásporas existentes: asiática, judía y árabe; y la síntesis cultural necesaria entre la cultura concebida en su sentido antropológico y la cultura vista en su sentido artístico. Por ejemplo, a través de la tradición oral y de la fusión de los elementos multiétnicos que la forjaron, Honduras

constituye un acervo de imaginarios donde el mito y la utopía se entremezclan y la alimentan.

La cultura popular y la tradicional se preservan y transmiten al margen de los apoyos institucionales, a partir de lo que se estructuran entramados sociales peculiares, como los que describen los indicadores de pobreza, que refieren a las necesidades básicas insatisfechas en los hogares, tanto del sector urbano como rural, la notoria precarización laboral, resultado de una reducción del empleo formal y, en particular, la baja cobertura de servicios sociales a la población. Según el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2008-2009, Honduras es el segundo país con el índice de Desarrollo Humano más bajo de la región centroamericana, 0.664. Datos de la Encuesta de Hogares 2007 precisan que 60 de cada 100 hogares vivían en condiciones de pobreza y 35 en condiciones de pobreza extrema.

A la situación, ambiental, económica y social se suman la falta de políticas culturales que favorezcan el logro de los objetivos del milenio. Según la ONU, Honduras para el 2007 presentaba un avance moderado en reducir la pobreza a la mitad¹⁸⁸, sin embargo, en 2010 se retrocedió ya que un 60% de los hogares viven en esa condición¹⁸⁹.

La cultura es entendida hoy como un factor de desarrollo y como un instrumento propiciador de la cohesión social¹⁹⁰, un reconocimiento de este precepto se encuentra en el Plan de Nación en el principio correspondiente al “Respeto y preservación de la cultura y costumbres de los grupos étnicos”, cuya descripción es: “La Visión de País se basa en el reconocimiento de que Honduras es un país multicultural y plurilingüe. En tal sentido, sus objetivos,

¹⁸⁵ Formulado con base en el “Programa Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local”. Plan Nacional de Cultura (2012-2022). Tegucigalpa. 2012.

¹⁸⁶ Proyecto de Ley “Ley General y de Fomento a la Cultura” (2001). Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local.

¹⁸⁷ Ídem.

¹⁸⁸ PNUD (2010). Objetivos de Desarrollo del Milenio, Tercer Informe de País. Honduras 2010.

¹⁸⁹ Encontrado en <http://www.ine.gob.hn/drupal/node/123>.

¹⁹⁰ Edurad, Miralles (2009). *Cohesión social y reducción de la pobreza. “Cultura, cooperación descentralizada y desarrollo local”*.

metas, programas y políticas no sólo respetarán esta condición, si no que impulsarán y fomentarán su desarrollo”¹⁹¹.

Honduras es heterogénea en sus elementos culturales, que son identificables en regiones socioculturales y se han reconocido 9 regiones culturales, que se diferencian por sus capacidades de gestión cultural, protagonismos sociales e institucionales y cobertura geográfica:

1. Región Norte A

Es un espacio regional que convoca y circula iniciativas de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara y el municipio de El Progreso. “El concepto de región es tan antiguo como la presencia de los españoles en la zona. En ese tiempo ya había una conciencia manifiesta de lo que comprendía”¹⁹². En la actualidad, la Región del Valle de Sula aporta alrededor del 55% del Producto Interno Bruto de Honduras, sus exportaciones representan cerca del 40%. En esta región cultural reside aproximadamente un 27% de la población nacional, siendo la fuerza de trabajo más numerosa tanto en sus centros urbanos como rurales. En la Zona Metropolitana del Valle de Sula se encuentra instalada más del 80% de la industria manufacturera y textil del país¹⁹³.

En la Región del Valle de Sula se tienen registrados más de 800 sitios arqueológicos. De acuerdo con las estimaciones, los lugares registrados forman parte del 15% del total de zonas con valor histórico para el país¹⁹⁴. Con relación al financiamiento de la actividad cultural de la región, el 75% de los agentes se autofinancian con recursos propios, un 13% de los recursos para proyectos culturales proviene de patrocinios de la empresa privada y de la cooperación internacional y un 12% procede de

fondos que disponen los gobiernos municipales, central y las mancomunidades¹⁹⁵.

2. Región Occidente A

La integran los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira. Santa de Rosa de Copán se destaca como experiencia de gestión y compromiso local por la cultura. Está conformada por 810,930 habitantes, en donde el 50% son del sexo femenino y el otro 50% del masculino.

La Región Occidente A es famosa por su riqueza cultural precolombina, cuenta con un patrimonio universal: el sitio Arqueológico de Copán, que sustenta su identidad cultural en la cosmovisión de dos pueblos étnicos fundamentales: Chortí y lenca. Es famosa por su producción de alfarería y talla en piedra, así como una oferta artística de calidad, sin embargo, falta consolidar y fortalecer el compromiso de los gobiernos municipales en materia de cultura y vincular al departamento con el desarrollo general de la región.

Departamento de Copán. Las Ruinas Mayas de Copán, declaradas en 1980 Patrimonio Cultural de la Humanidad, son un importante incentivo turístico de la zona. Las Casas de la Cultura son ampliamente reconocidas y ejercen un liderazgo cultural en sus respectivos municipios. Con relación a Santa Rosa de Copán, la historia registra que su población disfruta de las artes y la cultura, por tal razón es un lugar con una programación cultural variada y abundante.

Copán ha iniciado un proceso de integrar la cultura como eje implícito de participación ciudadana. También, tienen una buena base de organización comunitaria en materia cultural: mucha diversidad en actividades, el nivel de

¹⁹¹ Gobierno de Honduras (2010). Plan de Nación 2010 - 2022.

¹⁹² CDIH (2010). *Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local”*; *Diagnósticos de actores sociales vinculados al ámbito de la cultura y el desarrollo*.

¹⁹³ Ídem.

¹⁹⁴ Ídem.

¹⁹⁵ CDIH (2010). *Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local”*; *Diagnósticos de actores sociales vinculados al ámbito de la cultura y el desarrollo*.

infraestructura (voluntariado, organizaciones, instituciones, alianzas, grupos artísticos) es adecuado.

Departamento de Ocotepeque. Es evidente el interés que tienen los agentes sociales en trabajar las artesanías, el desarrollo artístico, la temática ecológica y el turismo como áreas de mayor necesidad. La etnicidad es un componente fuerte en Nueva Ocotepeque, donde hay una significativa población indígena maya-Chortí que está organizada y demandando acceso a espacios propios para desarrollar actividades culturales.

Departamento de Lempira. El nombre del departamento es un tributo al héroe indígena Lempira, originario de este lugar. La ciudad colonial de Gracias, su cabecera departamental, es una de las ciudades más antiguas del país, ya que fue fundada en 1536. La ciudadanía reconoce su propia identidad y participa en la preservación de la cultura y tradiciones lenca, la gastronomía es muy rica y se basa en derivados del maíz. Las viviendas, por lo general, son chozas de bajareque y varas atadas con fibra de maguay o bejuco artísticamente decoradas con fogones, utensilios domésticos de alfarería y muebles. El patrimonio cultural y natural está constituido por monumentos coloniales, como el fuerte de San Cristóbal y las iglesias, además del parque Celaque y otras riquezas naturales, que reafirman la identidad cultural del departamento.

3. Región Occidente B

Departamento de Intibucá. Posee una rica herencia étnica y un pasado colonial y Republicano significativo y es parte de la ruta de evangelización que comprende Ocotepeque hasta Comayagua. Con un total de 232,509 habitantes, el 49% son hombres y el 51% mujeres, una de las características fundamentales es la juventud de su población

ya que 65% de las y los intibucanos son menores de 24 años.

La historia y cultura de esta región se sustenta en la herencia y permanencia de las y los lenca, de la que se deriva en cosmovisiones, costumbres, formas de organización sociopolítica y económica ancestrales comunes, como el Guancasco y las Alcaldías Auxiliares de la Vara Alta, que son tradiciones que datan de la Conquista. Tiene una forma de gobierno complementaria a la oficial, que es las Alcaldías Auxiliares, que son ejercidas por indígenas y operan paralelamente a las alcaldías “oficiales”, tienen una cuota de poder auténtico y son respetadas con veneración por la población indígena. Hay que destacar la producción de textiles y artesanías propios de la cultura lenca.

Posee una riqueza local, con extraordinaria belleza escénica, con abundantes recursos forestales y con recursos hídricos para generación de energía. Asimismo, existencia de monumentos históricos (iglesias) como patrimonio cultural y formas de religiosidad ancestral (composturas de la madre naturaleza). Sin embargo, presenta desigualdad, marginalidad y exclusión de su población que vive en una situación de mayor aislamiento geográfico, así como en niñas y niños, mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad que no tienen posibilidades de acceso a los servicios de salud, educación y serios problemas de empleo¹⁹⁶.

4. Región Sur

La Región Sur la integran los departamentos Valle y Choluteca, dividido en 28 municipios, con una extensión territorial de 4,228 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por el predominio de las actividades agrícolas, ganaderas, la pesca e industria del camarón, las principales actividades desarrolladas,

¹⁹⁶ CDI (2009). *Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local”*; *Diagnósticos de actores sociales vinculados al ámbito de la cultura y el desarrollo*.

combinadas con el comercio y la prestación de servicios turísticos locales asociados al mar.

Cuenta con un enorme potencial, ya que es la cuna del sector social de la economía (cooperativismo social), es una región con mucha capacidad comercial (posee fronteras con El Salvador y Nicaragua), tiene el mejor puerto de Centroamérica en el Pacífico (a nivel técnico por sus aguas profundas), que es una puerta comercial para Asia, tráfico obligado al construirse el Canal Seco, geopolíticamente es una zona estratégica, cuenta con un sistema de riego por goteo, con potencial acuífero, con un desarrollo de la empresa láctea y agroexportador de sandía y melón.

El aspecto más significativo de esta región es su riqueza cultural, con una diversidad de oferta que va desde patrimonio tangible como edificios coloniales y mobiliario, entre otros. Por ejemplo, la ciudad de Choluteca tiene uno de los cascos históricos más importantes del país, el resto de los municipios de la región cuenta con una belleza natural única, una ciudadanía comprometida con el disfrute y producción del folclore nacional.

En términos culturales, el sur posee un patrimonio cultural importante que va desde instituciones de arte y cultura, la promoción de la cultura popular, un patrimonio histórico cultural, diversidad de centros de recreación y deportes y, sobre todo, la identidad de los hondureños del sur caracterizada por su lealtad a la palabra como parte fundamental en el trato con los demás, su actitud emprendedora y abnegación por el trabajo, así como su sentido de dignidad y el orgullo por su región.

5. Región de La Mosquitia

La Mosquitia es una región binacional (Honduras y Nicaragua) y multiétnica por la presencia de pueblos indígenas: misquitos, tawahkas, garífunas y Pech y por población mestiza. Esta composición demográfica y

sociocultural hace de La Mosquitia una región multiétnica, multicultural y plurilingüe.

Destaca la riqueza cultural original, preservada de generación en generación, en las que se encuentra la medicina ancestral natural, la danza y la música, las comidas y bebidas y las artesanías de madera, sombreros de raíz de pino y artesanía de árbol de tuno y majao.

El “sihkru tara”, cuyo significado es la alegría comunal donde el único motivo es la forma de comunicarse con sus antepasados y mantener viva su memoria, hasta cierto punto era un festival religioso donde los protagonistas principales eran los sukias (curanderos), wihtas y almuk nani (síndicos, jueces y ancianos) de las comunidades misquitas.

La gastronomía misquita está conformada por bebidas típicas como el saman laya, tualbí laya, mislá, suahni laya, wabul laya y muñá y platos típicos como el takru, kruhban, bisbaya, el famoso luk luk, auhbi piakan y pilal nani.

Los ancianos son los que mayormente relatan los cuentos, leyendas e historias que, en su conjunto, conforman una gran riqueza cultural que es como el alma de su identidad y, además, la cultura misquita es rica en danzas, música y vestimenta.

6. Región Norte B

La región de la zona Atlántida comprende los departamentos de Atlántida, Colón y parte de Yoro en donde habitan 1, 048,757 personas, de las que el 50% son mujeres y el 50% hombres. La Región Norte B es pluricultural, multilingüe y posee una oferta cultural y artística extensa y variada, además de bellezas naturales y de patrimonio intangible como la tradición oral, prácticas ancestrales de salud y mágica religiosas.

Departamento de Atlántida. El contexto sociocultural tiene como marco dos vertientes culturales: 1. la cultura costeña, que representa un sincretismo cultural que mezcla culturas

mestizas de origen campesino y urbano, con minorías étnicas dominantes (árabes, judíos, estadounidense, etc.). 2. El componente afro hondureño en sus dos vertientes: negros de habla inglesa y garífunas. Esta composición se presenta en las dos ciudades costeras La Ceiba y Tela; el Triunfo de la Cruz es una situación cultural garífuna con una pequeñísima influencia ladina rural¹⁹⁷.

Departamento de Colón. El contexto sociocultural tiene como marco tres vertientes culturales: 1. la cultura del valle del Bajo Aguán, constituida por una cultura agraria de agro exportación y de cooperativismo (Sabá) y una cultura mestiza en sincretismo con la cultura garífuna (Trujillo). 2. En Sabá existe la Casa de la Cultura y en Trujillo no, lo cual es un contrasentido si se considera la cantidad de procesos generados, es importante tener un referente institucional que aglutine y amplíe las actividades culturales¹⁹⁸. 3. Se trata de una vertiente cultural ubicada en el municipio de Trujillo, representada por los Pech, quienes mantienen sus costumbres, forma de vida, cosmovisiones y lengua.

Departamento de Yoro. Fue fundado el 28 de junio de 1825 por el jefe de Estado Dionisio de Herrera, es bastante accidentado y lo atraviesa uno de los ríos más largos y caudalosos del país: el río Aguán. Su principal actividad productiva es el café, bananos y la ganadería. Lo conforman 11 municipios, incluyendo El Progreso, que pertenece a la Región Norte A por su cercanía con el departamento de Cortés y su identidad cultural.

Sus principales centros urbanos son Yoro, cabecera departamental en donde la historia registra el fenómeno de la lluvia de peces, y Olanchito, la “ciudad cívica de Honduras”, porque en ella nacen y viven personas amantes y productores de la literatura.

¹⁹⁷ CDIH. Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local”; Diagnósticos de actores sociales vinculados al ámbito de la cultura y el desarrollo.

Los tolupanes se localizan en el departamento de Yoro. Los cálculos más conservadores los ubican desde la desembocadura del río Ulúa hasta las inmediaciones de Trujillo, haciendo de frontera hacia el interior del país (aproximadamente) lo que hoy son los límites norteños de los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán y Olancho.

7. Región Cultural Oriental

Históricamente, Olancho siempre ha sido un poco independiente del resto de Honduras, llegando inclusive a declararse una república independiente en al menos una ocasión. Ubicado en la parte oriental del país, Olancho tiene una extensión territorial mayor a la de la República de El Salvador y cuenta con algunas de las riquezas naturales más extensas del país. Parte de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano se encuentra dentro de su territorio. Así mismo, los parques nacionales Patuca, Sierra de Agalta y La Muralla son insignes de la biodiversidad y riqueza Étnica de Olancho¹⁹⁹. Su riqueza colonial se concentra en Catacamas.

El departamento cuenta con el patrimonio arqueológico de “las Cuevas de Talgua”, zona de 1.5 km². En quioscos se exponen al público artefactos de cerámica, puntas de flechas, metates. Gran importancia reviste el Osario de las Cuevas de Talgua. Al interior corre un tributario del río Talgua, en una de las cuevas están bien conservadas gran cantidad de huesos humanos y ofrendas funerarias. Lámparas ocultas entre las rocas hacen destellar luces amarillas, blancas y azules, entrelazándose, dando una tonalidad atrayente a un amplio callejón donde los visitantes transitan entre el agua fría y el Osario. La calcita disuelta en agua cae sobre los esqueletos, cubriéndolos. Los cristales de calcita brillan a la luz, dando al lugar una

¹⁹⁸ Ídem.

¹⁹⁹ Honduras Universal. Departamento de Olancho.

visión espectacular y por eso el calificativo de “calaveras luminosas”²⁰⁰.

El departamento de Olancho es la cuna de poetas, periodistas y escritores. Destacan José Antonio Domínguez, Salatiel Rosales, Froylán Turcios Canelas, Timoteo Miralda Reyes, Medardo Mejía, Federico Peck Fernández, Abel García Calix, Miguel Ángel Osorio, Hostilio Lobo Calix, Alfonso Guillén Zelaya, Raúl Arturo Pagoaga y las poetisas líricas Rafaela Turcios, Clementina Suárez, Paca Navas de Miralda y Adilia Cardona de Angulo. También, este departamento ha dado cinco presidentes de la República: Francisco Zelaya y Ayes (1841), general Manuel Bonilla Chirinos (1913), doctor Francisco Bertrand (1917), Manuel Zelaya Rosales (2005-2009) y el actual presidente, Porfirio Lobo (2010-2014).

Desarrollan festivales folclóricos y ferias culturales, intercambios culturales y gestión del patrimonio tangible e intangible como la gastronomía, la narrativa oral, las celebraciones religiosas y los paseos rurales. Por otro lado, las casas de la cultura de las diferentes ciudades del departamento de Olancho conforman una ruta natural, cultural y turística que incluye Juticalpa, San Francisco de la Paz, Manto, Santa María del Real, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí.

8. Región Centro A

Conformada por los departamentos de La Paz y Comayagua, poseen rasgos socioeconómicos, históricos y culturales similares, ambos concentran una población indígena lenca, que se mezcla con la cultura colonial, fundamentalmente de sus edificaciones religiosas y habitacionales, mientras que la alimentación, las modas y modos de su población prevalece la cultura lenca, aunque existen mixtura y sincretismo en los bailes,

fiesta religiosas y forma de hablar y de comportamiento social.

Departamento de Comayagua. El nombre de Comayagua se deriva de la lengua indígena lenca que significa "páramo de abundante agua". La ciudad de Comayagua fue la primera capital de Honduras antes de 1880, fecha en que se traslada a Tegucigalpa. Fue fundada el 8 de diciembre de 1537 y es una de las ciudades más antiguas de Honduras.

Cuenta con actividades artísticas y explota de forma sistemática y sostenible su riqueza gastronómica cimentada en platillos derivados del maíz, tiene tradición y patrimonio cultural que expresan la fuerza de una cultura mestiza, en sincretismo con la cultura indígena, además de que conserva una larga tradición organizativa cultural. Esta plataforma y patrimonio cultural se percibe en su casco histórico, en su museo, en la obra de connotados escritores y artistas con proyección nacional e internacional, en sus celebraciones culturales, como la “danza de los diablitos”, las celebraciones de Semana Santa y adornada por valores culturales (las alfombras), transculturización de otros países hermanos que han sido asimilados como propios.

Así, la influencia de la cultura mesoamericana se traslapa con la de la gran cultura macrochibcha de Sudamérica y da lugar a un pueblo que floreció y brilló durante años en el centro del país, se encuentran vestigios de la aldea de Chilcal, la aldea más antigua que se ha descubierto en Honduras y que fue habitada desde el año 3000 a.C., hasta el año 200 d.C.

Hay que resaltar que Taulabé tiene gran importancia cultural en la región, porque ha desarrollado un poderoso movimiento cultural liderado por la iglesia católica del lugar, el que tiene varias vertientes: la peregrinación y fiesta de San Gaspar, el apoyo a expresiones artísticas

²⁰⁰ Sistema Cultural de Honduras. “Patrimonio Cultural”. Encontrado en: <http://www.oei.es/cultura2/honduras/>.

relevantes como el grupo indio, y el apoyo a la Sociedad Cultural de Taulabé, entre otros. Además, cuenta con las Cuevas de Taulabé, un destino turístico y cultural de Honduras.

Departamento de La Paz. Fundado el 28 de mayo de 1869 por la administración del presidente José María Medina. Existe un gran patrimonio cultural, entre los cuales se destaca el sitio arqueológico de Yarumela, la Cueva de La Pintada" o de "Los Gigantes", ubicada en Marcala. La Paz fue una de las primeras localidades que tuvo una casa de la cultura, jugando un rol fundamental en cuanto a la promoción, difusión, conservación y desarrollo del arte y la cultura. En el departamento y en casi todos los municipios se realizan cultos, procesiones con las imágenes de las iglesias y los santos patrones, alboradas, quema de pólvora y bendición de los derivados del maíz.

9. Región Cultural Centro B

La región está integrada por los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso, en donde viven un total de 1, 861,042 personas, siendo la más poblada. Con relación al sexo de sus habitantes, el 51% son mujeres y el 49% hombres.

El Distrito Central es una plaza de importancia con relación a actividades artísticas, debido a que se concentran la mayoría de escuelas de arte (Escuela Nacional de Música, de Teatro, el Conservatorio Nacional y la Escuela Nacional de Bellas Artes). En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) existen carreras de arte y recientemente la UNAH abrió la carrera de Antropología.

Departamento de Francisco Morazán. Su riqueza patrimonial va desde edificaciones coloniales hasta los petroglifos antropomorfos de la Cueva Pintada de Ayasta. Tiene una gran variedad de lugares, que representa una oferta cultural, como: Santa Lucía, Valle de Ángeles, Parque Obrero, San Juancito, Parque Nacional

La Tigra, Támara, Balneario San Francisco, Parque Aurora, El Zamorano, Ojojona, Santa Ana, La Trinidad, Cerro de Hula, Cedros, Catedral de San Miguel, iglesia Los Dolores, Teatro Nacional Manuel Bonilla, Museo Nacional e Instituto de Antropología e Historia, Monumento de la Paz, Parque las Naciones Unidas, Iglesia y Basílica de Suyapa, Parque La Concordia, Parque Central (Francisco Morazán), Parque La Leona, Museo Gráfico de Historia Nacional y el Museo para la Identidad Nacional de Honduras(MIN), entre otros.

Departamento de El Paraíso. Ubicado en la zona oriental de Honduras es limítrofe con la frontera nicaragüense, su cabecera departamental es el municipio de Yuscarán.

En las ciudades del departamento se puede admirar casas con balcones estilo colonial, cubiertos con relieves de leones y otros emblemas españoles. La capital del departamento, Yuscarán, en el año de 1979 se decreta como Monumento Nacional. Yuscarán significa "lugar de casa de flores", algo de resaltar es su situación topográfica que se debe al trazo irregular de sus calles y la riqueza de su paisaje urbano, que convierte este sitio en un lugar encantado por su belleza y riqueza histórica. En Yuscarán existen más de 200 casas antiguas y aún se conservan las bocas de las minas e instalaciones mineras, que ahora permanecen abandonadas y nos hablan de la riqueza de la zona, que primero fuera explotada por los españoles y luego por compañías norteamericanas.

Anualmente se celebra el Festival Nacional del mango en honor de la deliciosa fruta que es producida en esta región, así como el Festival del maíz y el Festival de la naranja. Y sin olvidar la feria patronal como fiestas religiosas que se celebran en cada municipio.

Plan Nacional de Cultura

La cultura y desarrollo

Desde el paradigma del desarrollo humano se entiende que el objeto de las estrategias de desarrollo lo constituye la ampliación de las oportunidades de las personas para la plena realización de sus potencialidades y el disfrute de sus libertades, y no simplemente el aumento de sus niveles de ingreso. Bajo esta óptica, la cultura es un medio para ampliar las opciones y libertades de las personas, pero también su disfrute: es una libertad en sí misma que debe ser garantizada por los procesos de desarrollo. Esta nueva concepción de la cultura la lleva a convertirse en un eje integrador de las intervenciones del desarrollo, a partir del reconocimiento de que el tejido social no es sólo el resultado de fuerzas socioeconómicas, sino que es esencialmente un producto de la dinámica cultural²⁰¹.

Honduras presenta problemas y obstáculos en el proceso de construcción del desarrollo que se relacionan con aspectos como: 1) falta de confianza entre las personas y sus instituciones, 2) corrupción, 3) débil participación ciudadana, 4) persistencia de una visión de corto plazo y 5) baja competitividad. Se trata de aspectos relacionados directamente con la cultura de las y los hondureños ya que tienen que ver con las creencias, las prácticas y los valores de la población²⁰².

Las políticas culturales deben ser transversales a todas las áreas del Estado porque propician novedosos modelos de desarrollo y representan un medio efectivo para involucrar a los grupos vulnerables y marginados en el

proceso de cohesión social y convivencia ciudadana.

“El desarrollo implica la mejora de factores como educación, salud, ingreso per cápita y su distribución, así como las libertades políticas, de expresión y culturales, por nombrar algunos. Por ello el crecimiento en el sector cultural permitiría el desarrollo del potencial en términos de eficiencia, productividad y rentabilidad, lo cual incidiría de forma directa en un incremento proporcional en el PIB como sucede en los sectores de maquila y turismo”²⁰³.

En conclusión, el plan se propone contribuir a la puesta en práctica de las políticas y la propuesta de ley general y de fomento a la cultura integrándolas con las estrategias de desarrollo humano a todos los niveles, asimismo se sustenta en dinamizar las industrias creativas, por su impacto económico y porque generan empleos. Además, las artes y la cultura influyen en el desarrollo de capacidades en niñas, niños y jóvenes.

El derecho a la cultura o la cultura como derecho

El Estado, como garante de los derechos humanos, tutela la diversidad y la integridad cultural a través de medidas legislativas y de otra índole. Los derechos humanos relacionados con la integridad y con la diversidad cultural constan de toda una serie de mecanismos para la protección de las personas pertenecientes a grupos étnicos, religiosos o lingüísticos minoritarios”²⁰⁴.

Lejos de restringir los derechos humanos proclamados universalmente, la diversidad

²⁰¹ PNUD (2003). Informe sobre Desarrollo Humano | Honduras. 2003.

²⁰² Ídem.

²⁰³ SCAD (2011). Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro “Cultura y Desarrollo: un desafío de país”. Conferencia de Ernesto Piedras.

²⁰⁴ Chareille Samantha (2001). *La planificación lingüística y el establecimiento de un sistema regional: el caso del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chile* (tesis doctoral en dos volúmenes, de la Universidad de París III-La Sorbonne Nouvelle - Escuela Normal superior de Humanidades de Lyon, 2011). Editado por Daniel Coste.

cultural representa la garantía más fiable de su ejercicio efectivo, porque fortalece la cohesión social y ofrece fuentes para renovar las formas de gobernanza democrática. No obstante, esto implica un abordaje a la realidad a través de la *comprensión de la diversidad cultural y el diálogo intercultural*.

En el diálogo intercultural se “supone que culturas distintas se articulan y generan espacios para el diálogo y la creación. ¿Qué es lo que produce la cultura? La maravilla de que dos culturas diferentes construyan espacios de creación, de diálogo, de relación de lo que hace cada una y puedan relacionarse; la interculturalidad sí lo permite porque es un espacio creativo, un espacio donde las distintas condiciones de equidad son las bases de producir, generar, innovar y enriquecer el patrimonio”²⁰⁵. El nuevo reto que plantea la ONU a través de la UNESCO en su Informe Mundial sobre Diversidad Cultural 2010, es invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, lo que implica compartir los distintos espacios de diálogo y de creación.

En la praxis cultural comunitaria el diálogo es generador de desarrollo y de compromiso, ya que permite intercambiar, pensar, planear, evaluar. Es la forma que posibilita generar conocimientos, transformar, conocer imaginarios, miedos, compartirlos, abrirlos, ponerlos en juego para generar progreso. La raíz etimológica de la palabra diálogo es *logos/palabra, conocimiento, tratado*; conduce a un proceso de humanización y a la praxis, entonces, a un proceso de reflexión-acción para transformar el mundo, es el construir en el quehacer cotidiano, y solamente en la praxis cultural comunitaria es la forma de gestionar la interculturalidad.

A partir de las concepciones anteriores, podemos hablar de la cultura de respeto a los derechos humanos, también conocida como la

cultura de los derechos y la cultura de paz, dado que son formas que trascienden, las prácticas estrictamente necesarias para la convivencia humana.

Ejes estratégicos del Plan

1. Desarrollo institucional y participación ciudadana: construcción de consensos, espacios compartidos de planificación, fortalecimiento de redes locales, transferencias de competencias y recursos del nivel central a los actores territoriales.
2. Normativa y financiamiento cultural: designaciones presupuestarias para el ámbito local/regional; incentivos fiscales, estrategias de financiamiento con donantes.
3. Fomento de la investigación: promoción de la investigación social, cultural, jurídica, lingüística, histórica y arqueológica; la divulgación de sus resultados y su incorporación pertinente al sistema educativo.
4. Cultura y educación: contribución efectiva en el fortalecimiento de la diversidad cultural y la identidad nacional.
5. Desarrollo de la creatividad: conexión entre la creatividad y el diseño a la competitividad del país, y la prevención de la violencia, con énfasis en escuelas, la comunidad rural para medios locales/regionales y de abrir oportunidades a través de espacios alternativos de comunicación para la difusión del arte y la cultura.
6. Patrimonio cultural y natural: la protección de bienes muebles e inmuebles, expresiones del patrimonio inmaterial, turismo cultural, artesanías, gastronomía, nuevos patrimonios.
7. Disciplinas artísticas: fomento de casas de la cultura, museos, bibliotecas, archivos, centros cívicos/comunales, espacios públicos.

²⁰⁵ SCAD (2011). Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro “Cultura y Desarrollo: un desafío de país”.

Conferencia: *Políticas culturales y los nuevos desafíos: la construcción de diálogos interculturales*. Por: José Antonio Mac Gregor Campuzano.

8. Infraestructura cultural: artes escénicas (música, teatro y danza); artes visuales (artes plásticas, pintura, escultura, dibujo, fotografía, instalación, arquitectura y diseño); medios impresos y literatura (libros, periódicos y revistas, programas de lectura, dotación de libros); medios audiovisuales (cine, radio, TV, música grabada, video, Internet); industrias culturales y creativas (edición impresa y multimedia, producción cinematográfica y audiovisual, industria fonográfica, artesanía y diseño artes del espectáculo, deportes, manufactura de instrumentos musicales, publicidad, desarrollo de software, turismo cultural).
9. Interculturalidad: diálogos y reconocimiento de la diversidad étnica y diálogo entre culturas, participación en los procesos de equidad de género y no exclusión.

El organismo coordinador de la política cultural del Estado es la Secretaría de Cultura, Artes y Deporte (SCAD), la que desempeña un rol facilitador, de seguimiento, monitoreo y evaluación.

El plan se plantea operar en tres niveles:

1. Descentralizada a nivel local/municipal con iniciativas culturales desarrolladas por las casas de la cultura. Las organizaciones culturales de base, los consejos locales y las unidades municipales de cultura.
2. En el ámbito regional, mediante la constitución de consejos regionales de cultura, mecanismos de fomento y soporte a los emprendimientos e industrias culturales y formación de redes de información y vinculación a mercados.
3. A nivel central con planes, políticas y programas de impacto nacional, y el apoyo

a instituciones, secretarías de estado, para la incorporación de la

Ejes de política

1. Fortalecimiento y desarrollo institucional de la SCAD

El Estado está obligado a incorporar la dimensión cultural en sus políticas, planes y acciones tendientes a conseguir el mejoramiento y la sostenibilidad de la calidad de vida. La SCAD, a través de su estrategia de descentralización cultural establecida en el Plan de Nación, es el motor para impulsar el desarrollo humano sostenible, lo cual implica crear y/o consolidar mecanismos de cooperación y coordinación entre la SCAD y las otras secretarías e instituciones del gobierno, las regiones, los municipios y las organizaciones de la ciudadanía.

El gobierno tiene un tema que es irrenunciable: la conservación del patrimonio, el cual debe fortalecer, llegar a elementos más cotidianos y comunes que permitan una definición más amplia de la identidad colectiva²⁰⁶.

Los Consejos Locales de Cultura (CLC) y Consejos Regionales de Cultura (CRC) definieron para este proceso las prioridades siguientes: 1) Fomentar una mayor definición de las reglas y de las competencias de cada uno de los actores a nivel local y regional, 2) transferencias de competencias y recursos a los Consejos Regionales de Cultura CRC, 3) crear una instancia de planificación y coordinación regional entre representantes municipales Consejos Regionales de Cultura CRC y Consejos Locales de Cultura CLC y 4) operacionalizar las alianzas entre los diversos agentes culturales²⁰⁷.

2. Ciudadanía cultural

²⁰⁶ SCAD. Programa Conjunto "Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro Cultura y Desarrollo. Comentarios nacionales: Julio Raudales.

²⁰⁷ Programa Conjunto "Cultura y Desarrollo". Mario Mejía. Estrategias Regionales.

La ciudadanía de democracia cultural implica reconocer todo el potencial que existe en cada sujeto, es la construcción de lo público a partir de contextos culturales compartidos con otros, proveer escenarios para tener esa sociedad plural. Propone la presencia y la participación de los sujetos, comunidades y pueblos con sus potencialidades y necesidades culturales en la vida pública de la nación, como antesala y requisito para su participación efectiva en condiciones de equidad, en los escenarios de la toma de decisiones²⁰⁸.

Posibilita la superación de “una igualdad abstracta y con frecuencia irreal de los integrantes de la nación y reconocer diferencias reales que existen entre los sujetos a partir de su dimensión cultural, de su experiencia, de su perspectiva y particularmente se busca construir la participación colectiva en la vida política de la nación²⁰⁹.”

El Plan de Nación proyecta que la economía nacional podrá garantizar mejores ingresos y una sociedad más incluyente, con personas que paguen sus impuestos responsablemente, asimismo una institucionalidad estatal, eficiente y eficaz para brindar servicio de calidad a las y los ciudadanos. Además del reconocimiento de los Consejos Locales y Regionales de Cultura, que serán los interlocutores válidos para lograr la ejecución del Plan.

Dentro de este eje fundamental, los actores relevantes de las regiones priorizaron estos aspectos: 1) establecer acciones y mecanismos necesarios para garantizar la plena participación ciudadana; 2) implementar mecanismos para la participación privada, individual, comunitaria, gremial comprometidos con el desarrollo de la cultura; 3) organizar mesa intersectorial de cultura

²⁰⁸ SCAD (2011). Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro “Cultura y Desarrollo: un desafío de país”. Conferencia *Plan de desarrollo cultural: su formulación y evaluación*. Clara Mónica Zapata Jaramillo.

(pequeñas alianzas, convenios específicos, conversatorios, conferencias y acciones de sensibilización que conduzcan al funcionamiento de esta mesa y 4) crear la conciencia de que la cultura contribuye al desarrollo económico y social de los procesos de Estado.

3. Normativa y sostenibilidad cultural

El apoyo financiero -tema importantísimo- a las iniciativas particulares o comunitarias, el rescate del mecenazgo en el país. La cultura como todo lo que tiene que ver con desarrollo, no es un tema que le compete únicamente al gobierno, es también responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad civil.

Bajo este análisis, la ciudadanía cultural organizada en los consejos regionales y locales de cultura ve el tema de la sostenibilidad económica a través de establecer un orden normativo al sector, en donde se identifiquen de forma clara y precisa la corresponsabilidad pública y privada, nacional, regional y local, además de la articulación con empresas y organizaciones internacionales de cooperación para que en conjunto aporten al presupuesto para la ejecución de este Plan Nacional de Cultura.

Sin embargo, las experiencias de otros países indican que el punto de partida es realizar un análisis económico, observar el tema de la cultura en cifras, la dinámica de relación economía y cultura; también revisar parámetros importantes como qué tanto invertía el sector privado en cultura, cómo se estaban dando esos flujos. Esto desembocará necesariamente en el diálogo intersectorial público y privado, cómo interpretan estos sectores lo cultural?, qué tipo de acciones generan identificando proyectos y recursos invertidos desde lo privado?²¹⁰.

²⁰⁹ Ídem.

²¹⁰ SCAD (2011). Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro “Cultura y desarrollo: un desafío de país”.

Los Consejos Regionales de Cultura (CRC) y los Consejos Locales de Cultura (CLC), también, establecieron como prioritario que la ejecución de los proyectos de este plan apunten a financiar lo generado por las comunidades de forma independiente (ONG, grupos, grupos artísticos, artistas individuales) y que con los aportes se formalicen y hagan las iniciativas autónomas económicamente rentables. Así mismo, consideran, que el gobierno y las instituciones internacionales visualicen la cultura como un generador de empleo, la gestión entendida en el marco de las acciones que componen el sector cultural, hay que hacerla no solamente desde los entes centrales sino desde las áreas, desde las distintas disciplinas, desde la academia, lo que es vital para la sostenibilidad, porque las regiones y los municipios esperan un mayor respeto y valorización de sus producciones culturales.

4. Gobernabilidad y cohesión social

La cohesión social es construir el tejido social, que es producto de las relaciones cotidianas con micro vínculos en un espacio local y social determinado (como la aldea, el caserío, el barrio, la comunidad, el municipio, la región y el país) donde sus habitantes participan, se organizan, planifican, se educan, eligen, desarrollan manifestaciones culturales, usan su tiempo libre y crean capital social al relacionarse entre ellos para obtener un fin determinado. Y desde allí interaccionan con entramados a nivel meso y macro. Este proceso trae como consecuencia una gobernabilidad eficiente.

La gobernabilidad necesita la cohesión social y para lograrla se debe partir de una acumulación de experiencias y capacidades de emprender acciones conjuntas por parte de los actores formuladores del Plan Nacional de Cultura. Esto es, los Consejos Regionales de Cultura (CRC) y los Consejos Locales de Cultura (CLC), lo ven como un factor

determinante del crecimiento económico y del desarrollo social. El problema fundamental es que el sector cultura está fraccionado, razón por lo cual se requiere construir el tejido social de las y los artistas y articularlos al desarrollo comunitario. De allí, este eje es esencial para el logro de mejores políticas públicas, complementar y potenciar los esfuerzos dirigidos a las personas y a las familias. En consecuencia, permitirá a las y los ciudadanos desarrollar sus capacidades y participación, lo que se traduce en los procesos de construcción de ciudadanía, de cohesión social y reducción de la violencia.

5. Investigación y desarrollo de la creatividad e innovación

El capital social local es condición para lograr desarrollar capacidades de investigación e intercambiar conocimientos. La inteligencia colectiva es la habilidad para comprender, manejar y utilizar las relaciones humanas y grupales con la finalidad de resolver problemas y compartir propuestas para satisfacer necesidades colectivas y, sobre todo, para construir conocimiento compartido. Es la forma en que reacciona una sociedad ante los estímulos que ella misma genera y ante el medio con el que se relaciona. Es en estos conceptos donde se concentra el potencial de riqueza cultural, que sirve de base para generar y disfrutar de los recursos de un país. Invertir en investigación y desarrollo de la creatividad e innovación es un eje fundamental para el logro de las metas propuestas en el Plan Nacional de Cultura.

Los Consejos Regionales de Cultura (CRC) y los Consejos Locales de Cultura (CLC), consideran 1) fomentar la investigación social, cultural, jurídica, lingüística, histórica y arqueológica; la divulgación de sus resultados y su incorporación pertinente al sistema educativo; 2) realizar investigaciones culturales; 3) investigaciones realizadas; 4)

Conferencia *Plan de desarrollo cultural: su formulación y evaluación*. Clara Mónica Zapata Jaramillo.

contar con estrategias para la conservación y difusión de la memoria histórica de los procesos culturales; 5) formalizar e impulsar la alianza entre los sectores; 6) establecer programas de cultura y educación para el desarrollo del capital humano del sector en materia de gestión cultural y 7) creación del Centro Investigación y Desarrollo del Folclore.

Mientras que en el ámbito de la creatividad se plantean: 1) crear un centro de diseño e innovación para articular al sector cultura con el sector empresarial; 2) fundar el Centro de Formación/Investigación sobre Ciencias del Mar en Amapala; 3) articular la cultura con el sector productivo para el desarrollo del diseño y la innovación de productos; 4) brigadas lúdicas-artístico-culturales para su promoción en escuelas, en comunidades rurales para medios locales/regionales y 5) desarrollar espacios alternativos de comunicación para la difusión del arte y la cultura.

Líneas de acción, metas, indicadores programáticos e instituciones responsables

Resultados de impacto en derecho a la cultura

1. Promovida la enseñanza de las artes en los centros educativos del país como una opción extracurricular, abiertos los establecimientos los fines de semana para la prevención de la violencia en la juventud y la niñez.
2. Fomentada la creación de obras de excelencia, para que las y los artistas de trayectoria, crean, produzcan y organicen espacios de intercambio profesional y de muestras o exhibiciones en espacios nacionales e internacionales.
3. Organizados y realizados festivales, encuentros, foros, muestras y otros eventos para acercar el arte, los artistas a la población.
4. Promocionado el diseño en los productos y la capacitación de diseñadores para

mejorar sus capacidades, desarrollada la confianza del país hacia sus industrias y productos, premiadas anualmente a las empresas que aplican el diseño como esencia competitiva.

5. Valorado el pasado de los municipios del país, a través de la organización de la documentación histórica, y los ciudadanos accediendo a la información en forma fácil y expedita, permitiendo la búsqueda, pero al mismo tiempo preservando los documentos.
6. Mejorados los servicios de la red de bibliotecas públicas nacionales, por medio de la gestión y acervos bibliográficos actualizados, apoyo a los clubes de lectores y salas de lectura de los municipios, fomento del hábito a la lectura entre la población y de la existencia del programa continuo de capacitación al personal bibliotecario.
7. Propiciado el compromiso de los medios de comunicación comercial con el desarrollo cultural y fomentado el desarrollo de los medios de comunicación alternativos y de la comunicación oral en los municipios.
8. Creada la escuela nacional de cine y de audiovisuales y realizando procesos de formación de carácter profesional y técnico, diplomados, especializaciones, seminarios y conferencias.
9. Valorada la diversidad cultural como riqueza y recurso para el desarrollo de iniciativas empresariales y definidas estrategias innovadoras de distribución de los productos a fin de ampliar el acceso a los mercados.
10. Elaborados estudios de mercado, de las cadenas productivas y del valor de las industrias creativas y culturales, que identifican obstáculos y oportunidades para el desarrollo de sus eslabones, conformando consorcios en donde se asocian organizaciones y agentes.
11. Fortalecida la institucionalización real y efectiva de la SCAD en sus diversas dimensiones; desempeño (eficiencia y eficacia), el seguimiento, evaluación y

mejora continua de los resultados, objetivos, productos y la sistematización de experiencias y aprendizajes.

12. Creadas y /o fortalecidas las Casas de la Cultura y/o otros espacios culturales en los municipios, con programación, equipamiento básico y convertidas en lugares de convivencia e inclusión social fundamentalmente de grupos vulnerables, reconociendo la pluriculturalidad de las etnias indígenas y afro hondureñas.
13. Logrado el empoderamiento de los consejos regionales, consejos locales de cultura, la red de voluntarios culturales y

los gestores culturales y comunidades beneficiarias , que favorece el desarrollo institucional local, regional y logra sostenibilidad de los espacios culturales.

14. Promovida la diversidad cultural por medio de investigaciones y revitalización de las prácticas culturales de los indígenas y afro hondureños, de Honduras y creado un observatorio nacional, sobre la diversidad cultural, que realiza un seguimiento con el cual se adoptan medidas apropiadas para la salvaguardia de las diferentes culturas del país.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la cultura en la legislación.				
1	Revalorización de las prácticas culturales de los pueblos originarios y afro descendientes como parte importante de la riqueza cultural nacional reconocida en la Constitución de la República, legislación secundaria ,en los textos y contenidos programáticos de la educación formal.	2015-2022	Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afro hondureños - SEDINAFROH	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD, Congreso Nacional de la República
2	Aprobación de la legislación sobre cine que establece las prioridades del Estado respecto a la protección del patrimonio cinematográfico nacional.	2015-2016	Congreso Nacional de la República.	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Realizar eventos culturales en los barrios urbanos con mayor índice de violencia.	2014-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
2	Creación de grupos artísticos en los barrios urbanos por medio de actividades formativas populares para la niñez y juventud en situación de riesgo social.	2015-2015	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Nacional de la Juventud - INJ

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Dotados de equipo, los grupos culturales para que reciban formación artística, y la niñez y la juventud de los barrios seleccionados realiza actividades culturales en los espacios públicos, que se convierten en puntos de encuentro de la ciudadanía.	2017-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Nacional de la Juventud (INJ).
4	Creación de las escuelas municipales de artes escénicas y/o visuales, como un programa para lograr la cohesión social y la convivencia ciudadana.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
5	Apoyo a los grupos artísticos visuales y escénicos en su etapa de investigación, creatividad y circulación de las obras.	2014-	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
6	Ejecución de un programa de pasantías en escuelas de artes en las universidades que ejecutan un proceso de formación artística complementaria a estudiantes de los centros educativos públicos.	2014	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
7	Realización de pasantías y becas que promuevan el diálogo intergeneracional, cultural, interregional y centroamericano para el reconocimiento de la diversidad y el surgimiento de comunidades artísticas interregionales y la calidad de las obras artísticas.	2014-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Secretaría de Relaciones Exteriores.
8	Fortalecimiento a los proyectos culturales de los artistas nacionales, por medio del financiamiento de investigación, producción y circulación de las obras.	2018-2021	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
9	Promoción de las artes visuales y escénicas a través de los festivales nacionales, regionales y municipales.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales, Secretaría de Relaciones Exteriores.
10	Puesta en operación de los centros regionales de diseño, con una currícula de acuerdo con las capacidades productivas de las regiones y con una matrícula de 50 personas al año.	2018-2018	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP
11	Creación de incentivos fiscales para las empresas editoras, distribuidoras y librerías.	2017-	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH, Secretaría de

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				Finanzas , Congreso Nacional de la República.
12	Crear estímulos a la producción hondureña así como instancias como premios, festivales y concursos y mecanismos de difusión de la producción nacional en condiciones favorables a las obras hondureñas.	2016-	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM.
13	Fomento de la participación de las obras de cine nacional en festivales mundiales, incluyendo asesoría internacionales.	2014-2020	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
14	Fomento del desarrollo de las nuevas tecnologías en la producción cultural. Especial atención a las creaciones digitales en los sectores artísticos tradicionales y en los ligados al aprendizaje y al ocio creativo.	2014-2019	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Educación , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM.
15	Identificada una oferta y la cadena de valor, de productos y servicios creativos y culturales con alto valor agregado, que sean técnica, económica y financieramente rentables, para fomentar su desarrollo en el mercado nacional e internacional.	2013-2018	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Industria y Comercio - SIC.
16	Habilitación de espacios públicos sostenibles en donde se desarrollen actividades culturales y artísticas, con la procura de mejorar la vida de las y los ciudadanos, con énfasis en niñez, juventud y mujer.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
17	Financiar intercambios interculturales en los centros educativos públicos, como un proceso didáctico y de integración de las otras culturas.	2014-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afro hondureños - SEDINAFROH
18	Ampliada la cobertura de educación intercultural bilingüe.	2014-2022	Secretaría de Educación	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes -

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				SCAD, Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afro hondureños (SEDINAFROH)
19	Incorporación de las organizaciones indígenas y afro hondureñas en la enseñanza del idioma y cosmovisión, incorporándolos en los textos educativos.	2015-2021	Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afro hondureños - SEDINAFROH	Secretaría de Educación , Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
20	Planificación del manejo patrimonial por el sector público y privado, en coordinación con los Consejos Regionales de Cultura, Consejos Locales Culturales, municipalidades e instancias gubernamentales y locales.	2015-2022	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN	Secretaría de Educación , Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Alcaldías Municipales.
21	Creación de nueve centros regionales de diseño.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales , Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
22	Ampliación de la lista indicativa de bienes y sitios para su inscripción en la Lista Nacional y la del Patrimonio Mundial.	2015-2016	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).	
23	Ejecución de programas interinstitucionales de información, valoración, manejo y protección del patrimonio.	2015-2022	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
24	Rescatados, organizados y funcionando archivos históricos municipales.	2015-2022	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD, Alcaldías Municipales
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Diseño y uso de herramientas empresariales necesarias para la gestión de calidad de las empresas culturales con objetivos estratégicos definidos.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía , Secretaría de Industria y Comercio (SIC).

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Metodología y manuales de gestión comunitaria para la sostenibilidad del espacio público intervenido.	2014-2016	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
3	Formulada una metodología de servicios de desarrollo para empresas creativas y culturales, combinar de forma equilibrada criterios de rentabilidad social y económica respetando la singularidad del hecho cultural, la sostenibilidad, el medio ambiente y la igualdad de oportunidades.	2016-2017	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Industria y Comercio (SIC), Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía , Instituto Nacional de la Juventud (INJ).
4	Elaboración de manuales de salvaguarda y protección del patrimonio ante desastres naturales.	2014-2018	Comité Permanente de Contingencias (COPECO).	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Fortalecimientos de las casas de la cultura para que tengan una programación artística y cultural sostenibles.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
2	Organización y funcionamiento de la Escuela Nacional de Cine y audiovisual para lograr la profesionalización de productores, directores, sonidista, montajista, directores de arte, fotografía, edición y arte cinematográfico	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM).
3	Formulado un plan de reestructuración y reconversión institucional en función del diagnóstico realizado que permita atender sus obligaciones para hacer efectivo el derecho a la cultura.	2016-2016	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH
4	Creación de nuevas casas de la cultura.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
5	Fundado el museo vivo de las etnias y pueblos afro hondureños en Tela.	2016-2017	Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afro hondureños - SEDINAFROH	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
6	Firmados convenios con empresas y los centros regionales de diseño para la asesoría técnica.	2015-2015	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
7	Establecimiento de alianzas estratégicas con los medios de comunicación audiovisual comercial.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
8	Establecimiento de encadenamientos con los distintos sectores o subsectores integrantes de la cadena de valor de las empresas creativas y culturales.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía , Secretaría de Industria y Comercio SIC
9	Establecer la coordinación entre instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para lograr los recursos necesarios para la ejecución del Plan Nacional de Cultura.	2014-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN.
10	Estudiar la diversidad del patrimonio inmaterial de las comunidades indígenas y afro hondureñas para encontrar prácticas culturales que están desapareciendo.	2015-2017	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH	Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afro hondureños (SEDINAFROH) , Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) , Secretaría de Cultura, Artes y Deportes (SCAD).
11	Realizar un análisis del desempeño institucional de la SCAD en función de sus mandatos y obligaciones para hacer efectivo el derecho a la cultura.	2014-2015	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH
12	Estructuración de los premios nacionales de arte aumentando el valor metálico y el prestigio artístico.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
13	Apoyar las muestras itinerantes de las artes hondureñas.	2013-2021	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
14	Facilitar servicios adicionales, incluido el acceso a la financiación para la realización de proyectos culturales empresariales.	2015-2021	Secretaría de Industria y Comercio - SIC	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
15	Equipamiento de las casas de la cultura.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
16	Apoyo a iniciativas locales de salvaguarda del patrimonio.	2015-2022	Comité Permanente de Contingencias - COPECO	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH, Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
17	Instalación de vínculos y trabajo conjunto con cooperantes en cultura.	2014-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Asesorar de forma individualizada a las empresas culturales y los empresarios, sobre las oportunidades y en el desarrollo de su plan de negocio.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Industria y Comercio - SIC, Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía.
2	Capacitación al personal de las empresas productivas en las 9 regiones culturales del país para que introduzcan mejoras en los diseños de los productos y procesos.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP , Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO, Organizaciones Ciudadanas.
3	Acompañado en el proceso de implantación de las propuesta de reconversión para desarrollar su estructura y capacidades para el cumplimiento efectivo del derecho a la cultura.	2016-2022	Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
4	Participación de las comunidades en la investigación, rescate y puesta en función social del patrimonio.	2014-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Organizaciones Ciudadanas.
5	Establecimiento de una red de circulación de prácticas y reflexión de calidad acreditada en pedagogía artística y animación del conjunto del campo artístico.	2017-2021	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM).

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
6	Realización de un encuentro nacional por disciplina artística.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
7	Alianza estratégica con el COHEP, la ANDI y las cámaras de comercios para promover el diseño como factor de competitividad.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Consejo Hondureño de la Empresa Privada - COHEP, Asociación de Industriales - ANDI, Secretaría de Industria y Comercio - SIC
8	Formación de consorcios empresariales por sector o subsector de las industrias creativas y culturales.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Industria y Comercio - SIC, Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía , Consejo Hondureño de la Empresa Privada - COHEP
9	Organización y realización de intercambios interculturales municipales, regionales, nacionales e internacionales a fin de crear redes informales de solidaridad.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afro hondureños (SEDINAFROH).
10	Organización de grupos de escritoras y escritores organizadas y produciendo obras literarias y científicas.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH , Organizaciones Ciudadanas
11	Realización de grupos de creación literaria, uno en cada municipio del país y con una publicación por grupo.	2017-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales , Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Fomento de la conformación de nuevos programas de capacitación a los públicos en la apreciación de las diferentes áreas artísticas.	2014-2016	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
2	Fundación de bibliotecas públicas en los municipios.	2015-2021	Alcaldías Municipales.	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
3	Bibliotecas con acervo bibliográfico actualizado y consultado por la ciudadanía y con capacidades de fomentar el hábito a la lectura	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales , Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
5	Fundación de medios de comunicación audiovisual alternativos en los municipios vinculado a temas de desarrollo.	2016-2022	CONATEL.	Alcaldías Municipales , Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
6	Publicación sobre los archivos históricos de Honduras, para la celebración del bicentenario.	2016-2016	Instituto Hondureño de Antropología e Historia IHAH.	Alcaldías Municipales , Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD
7	Realización de campañas nacionales de estímulo del hábito a la lectura como actividad formativa, educativa y recreativa.	2014-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Educación , Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH, Alcaldías Municipales.
8	Realizar eventos culturales en los barrios urbanos con mayor índice de violencia.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
9	Fomento de las capacidades locales de los artistas-formadores de las escuelas de arte no formales o docentes pertenecientes al servicio educativo mediante la implementación de enseñanza artística en los centros educativos públicos.	2016-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales , Secretaría de Educación.
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Apoyo a los grupos artísticos visuales y escénicos en su etapa de investigación, creatividad y circulación de las obras.	2015-2022	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
2	Fomento de las capacidades locales de los artistas-formadores de las escuelas de arte no formales o docentes pertenecientes al servicio educativo mediante la implementación de enseñanza artística en los centros educativos públicos.	2016-2021	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Secretaría de Educación , Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH
3	Fortalecimiento a los proyectos culturales de los artistas nacionales, por medio del financiamiento de investigación, producción y circulación de las obras.	2014-2021	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	
4	Apoyar las muestras itinerantes de las artes hondureñas.	2014-2021	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
5	Habilitación de espacios públicos sostenibles en donde se desarrollen actividades culturales y artísticas, con la procura de mejorar la vida de las y los ciudadanos, con énfasis en niñez, juventud y mujer.	2018-2020	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Alcaldías Municipales.
6	Publicar un análisis del el desempeño institucional de la SCAD.	2014	Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH
7	Elaboración de planes de salvaguarda y protección del patrimonio ante desastres naturales.	2014-2018	Instituto Hondureño de Antropología e Historia - IHAH	Comité Permanente de Contingencias - COPECO, Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - SCAD

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO SOBRE SISTEMA DE JUSTICIA

DERECHO A LA VIDA

Marco Normativo Internacional ²¹¹

El derecho a la vida, es imprescindible para el desarrollo de la dignidad humana y *sine qua non* para el ejercicio de todos los demás derechos. Se halla consagrado en múltiples instrumentos internacionales, siendo los principales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos arts. 2, 3 y 25; la Convención Americana sobre Derechos Humanos arts. 4, 8, 25, 27 No. 2.; la Convención Americana sobre derechos y deberes del hombre art. 1; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 6; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer arts. 3 y 4; la Convención sobre los Derechos del Niño art. 6.1., 23.1, 27.1, 27.2 y 31; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional art. 5, 7, 8, 28 y 29; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas arts. 1,2 y 5; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas art I y II; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares artículo 9; la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio arts. 1 y 2. Así como otros instrumentos internacionales como la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados; Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo

²¹¹ Las máximas consagraciones del derecho a la vida emanan de su desarrollo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego otros Tratados Internacionales la abordan relativo a prevenir o abolir atentados contra la vida de manera específica derivados de prácticas en los Estados oprobiosas tendientes a anular

a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a Abolir la Pena de Muerte de 1989 y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1948.

En la Constitución de la República, la vida se garantiza a las y los hondureños y extranjeros residentes en el país, en el derecho a la inviolabilidad de la vida (Artículo 61); se consagra además que el derecho a la vida es inviolable (artículo 65), que se prohíbe la pena de muerte (art. 66); y que la vida es un derecho que no puede suspenderse ni aún en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad general. (Art. 187).

Contenido del derecho

El derecho a la vida se refiere en primer término a su inviolabilidad e inherencia al ser humano y a la obligación del Estado de brindar la protección jurídica y fomento para el desarrollo de la misma; ella tiene su fundamento en el principio de la dignidad del ser humano.

El derecho a la vida forma parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos ni aun en casos de guerra, peligro público u otras amenazas, o emergencias que atente la independencia o seguridad del Estado (artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha

la vida como la desaparición forzada, la pena de muerte, la violencia contra la mujer, entre otras. En el caso de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** la encontramos desarrollada en el Artículo 4,8, 25, 27. El otro instrumento columna vertebral del derecho a la vida es el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**.

señalado la necesidad de considerar el derecho a la vida como un derecho universal y supremo del ser humano, dictando que este derecho “no puede ser comprendido de modo restrictivo, y que su protección requiere que los Estados adopten medidas positivas para la protección y realización de este derecho²¹².”

El sentido originario de este derecho es el de impedir que el Estado, de manera arbitraria, arrebatase la vida a cualquier persona o legalice o autorice la muerte de ésta de forma arbitraria; se trata, por lo tanto de una obligación negativa para el Estado. No obstante y debido a la interdependencia, integralidad y la universalidad de los derechos humanos el derecho a la vida se relaciona también con obligaciones positivas para el Estado, derivadas del principio de la dignidad humana.

Así el derecho a la vida desde una perspectiva integral involucra no sólo al derecho al respeto a la existencia, sino que comprende también el derecho de acceso a las condiciones que garanticen una vida digna como por ejemplo la reducción de la mortalidad materna o de la mortalidad infantil, aumentar la esperanza de vida en especial adoptando medidas para eliminar la mal nutrición y las epidemias²¹³ y pandemias como el VIH-SIDA, o la promoción de las personas para que desarrollen un nivel de vida adecuado, libres de pobreza y opresión que disminuyan su calidad de vida.

No obstante, y para efectos de este capítulo los alcances de este derecho serán abordados desde las obligaciones negativas, en tanto que las obligaciones positivas y de desarrollo humano serán retomadas en los apartados relativos a la seguridad humana.

²¹² Comité de Derechos Humanos de la ONU, CODHONU. *Observación General No. 6*, (A/37/40).

²¹³ Observación General No. 6 cit.

²¹⁴ OACNUDH, *Derechos Humanos, Manual para Parlamentarios*, lugar, 2005, Página 84. Oficina del Alto

Obligaciones del Estado

En muchos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH) han dictaminado que las ejecuciones sumarias y arbitrarias, el genocidio o la desaparición forzada son por definición una violación del derecho a la vida. Así quedó establecido desde la sentencia histórica en el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, (Corte IDH 1988).

Las obligaciones exigibles al Estado para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la vida se relacionan principalmente con la adopción de medidas negativas y positivas que ofrezcan protección frente a:

1. La prohibición de la privación arbitraria de la vida: pena de muerte, genocidio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales (o extralegales), sumarias o arbitrarias.
 2. Muertes por uso de fuerza letal arbitraria por agentes estatales.
 3. Sancionar adecuadamente las agresiones homicidas contra la vida de una persona cometidos por fuerzas paramilitares, la delincuencia organizada o cualquier particular²¹⁴.
- 1) La prohibición de la privación arbitraria de la vida.

A pesar de la unanimidad demostrada en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos al reconocer y garantizar el derecho la vida, no por ello dejan de presentarse, a nivel doctrinal e incluso normativo, innumerables debates como los sostenidos sobre la pena de muerte, la eutanasia, el aborto y el suicidio asistido²¹⁵. En

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria, 2005.

²¹⁵ MASSINI, Carlos I Correas. *El Derecho a la Vida en la Sistemática de los Derechos Humanos*. En: *Problemas Actuales sobre Derechos humanos. Una Propuesta filosófica*. Coord. Javier Saldaña. UNAM. México, 2000. Pág. 161

medio de esas inacabadas discusiones el sentido primordial del derecho a la vida es el de impedir que el Estado, de manera arbitraria, arrebatase la vida a cualquier persona o legalice o autorice la muerte de esta de forma arbitraria.

Sobre la pena capital o pena de muerte, hay importantes progresos en relación a su abolición definitiva en la mayoría de Estados del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos²¹⁶. Honduras se sumó a ellos en función de declarar el derecho a la vida como el propósito y fin último que sustenta la existencia del Estado. Así en la Constitución de la República en su artículo 59, en el capítulo de las Declaraciones, Derechos y Garantías afirma que: La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad ser humano es inviolable. Y más adelante Honduras consagra en la misma Constitución que: El derecho a la vida es inviolable (artículo 65). Se prohíbe la pena de muerte (Artículo 66).

A nivel internacional la tendencia a abolir la pena de muerte es consagrada cuando los Estados han ratificado dos importantes instrumentos internacionales relativos a la proscripción de la práctica de la pena de muerte, uno es el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 1989, y ratificado por Honduras el 1 de abril de 2008; y el otro es el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en 1990 y

²¹⁶ Como afirma la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971, el derecho a la vida solo puede garantizarse plenamente si el número de delitos a los que pueda imponerse la pena capital se restringe progresivamente, habida cuenta de la conveniencia de abolir esa pena en todos los países.

ratificado por Honduras el 14 de septiembre de 2011.

En ambos instrumentos internacionales los Estados se obligan a no aplicar en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción y adoptar las medidas para la abolición definitiva de la pena de muerte en aquellos Estados que aún no la han eliminado. Igualmente los Estados quedan obligados a incluir en los informes que presenten al Comité de Derechos Humanos información sobre las medidas que han adoptado para poner en vigor la abolición de la pena capital²¹⁷.

No obstante, los dos tratados internacionales admiten la reserva, que debe ser expresa al momento de ratificación o adhesión, de poder aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar. Reserva que Honduras no realizó al momento de la ratificación, por lo tanto ni aún en esas circunstancias nuestro país podría declarar jurisdicción militar para juzgar y condenar legalmente a una persona a pena capital.

En 1983 la Corte IDH dictó una Opinión Consultiva OC - 3/38 del 8 de septiembre de 1983 por medio de la cual interpretó el art. 4.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el alcance de la norma de protección del derecho a la vida, señalando que el artículo 4 de la Convención Americana debe ser interpretado según el artículo 29 y 30 que indican una clara nota de progresividad, que consiste en adoptar las disposiciones requeridas para limitar definitivamente la aplicación de la pena de muerte de modo que

²¹⁷ Artículos 1, 2 y 3 del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, aprobado por Naciones Unidas en 1989, y ratificado por Honduras el 1 de abril de 2008; y artículos 1 y 2 del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, ratificado por Honduras el 14 de septiembre de 2011.

ésta se vaya reduciendo hasta su supresión final.

Desapariciones Forzadas: consideradas como un crimen contra la humanidad, surge en Latinoamérica entre los años 60s y 70s, como práctica sistemática y generalizada caracterizada por la negativa u ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima por parte de los agentes estatales y aún los judiciales. En Honduras el mayor número de casos se presentó en los años 80s, paradójicamente cuando se consideraba que el Estado había retornado la senda de la democracia y habían finalizado los regímenes militares, con lo cual se reafirma la necesidad de imponer salvaguardas contra la desaparición forzada aún en supuestos momentos de estabilidad democrática.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la desaparición forzada de personas constituye una vulneración grave al derecho a la vida y una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar, pues no solo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreado otros delitos conexos²¹⁸. Además agrega, la desaparición forzada conculca el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto²¹⁹.

La desaparición forzada de personas se encuentra regulada en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), adoptada por la Asamblea General de la OEA el 9 de junio de 1994 y ratificada el 11 de junio del año 2005; así como en la Convención Internacional para la

²¹⁸ Corte IDH Casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz Serie C núm. 4, del 29 de julio de 1988 y el caso Blake, sentencia de 24 de enero de 1998, Serie C núm. 36, ambos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF), adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas estableció en el Art. II la definición de desaparición forzada: “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”

Esta Convención, además de dar una definición de lo que se considera desaparición forzada, establece la imposibilidad del Estado de eximir de responsabilidad a ninguna persona en virtud de obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Además, este instrumento estipula que los presuntos responsables sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar, no admitiendo privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos²²⁰.

La definición de desaparición forzada preceptuada en el instrumento Interamericano, es complementada por el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI, ratificado por Honduras en junio del 2002) en lo que respecta a la imprescriptibilidad del crimen y que el

²¹⁹ Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez, cit., párr. 155..

²²⁰ Artículo 9 Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. OEA, Washington, 1994.

mismo puede ser cometido además de los agentes Estatales, por particulares, grupos, organizaciones políticas y otras no estatales: en el Art. 7, 2, "i" señala que: "1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes: ...cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: [...] i) Desaparición forzada de personas [...] 2. A los efectos del párrafo 1: [...] i) por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado [...]".

Los Estados tienen de cara a la desaparición forzada las obligaciones generales derivadas de la Convención Americana de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y la obligación de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención implica, no sólo que exista un orden jurídico que propenda por la realización de este mandato, sino además impone a los Estados Partes el deber de organizar toda su estructura gubernamental en tal forma que puedan asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Este es el fundamento de la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos fundamentales, y cuando sea posible, restablecer el derecho afectado, o en su caso, reparar los daños²²¹.

²²¹ La Desaparición Forzada en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en:

De conformidad con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, los Estados partes tienen además las obligaciones de:

- No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
- Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo.
- Cooperar entre Estados para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas.
- Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.
- Adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito en el Código Penal la desaparición forzada de personas y su imprescriptibilidad en virtud de la gravedad del crimen y de tratarse de un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
- No es un delito político, por lo que es susceptible de extradición.
- No se admite como eximente de responsabilidad la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada.
- Los presuntos responsables sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares.

<http://www.menschenrechte.org/lang/de/verstehen/desaparicion-forzada-cidh>

El Estado de Honduras ha adecuado su legislación interna, al aprobar la reforma al Código Penal, mediante la adición del artículo 333-A relativo al delito de desaparición forzada de personas, teniendo como base lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, siendo los elementos más importantes de su tipificación los siguientes: actuar con autorización, apoyo o la aquiescencia de uno o más funcionarias y funcionarios, así como, empleadas y empleados públicos, privar de su libertad a una o más personas cualquiera que fuere su forma y Limitar o negar el ejercicio de las garantías constitucionales y las garantías procesales pertinentes. El delito es sancionado con pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 25 a 50 salarios mínimos.

Ejecuciones extrajudiciales (o extralegales), sumarias o arbitrarias.

Durante muchos años Naciones Unidas consideró el tema de las ejecuciones sumarias o arbitrarias en el marco de una discusión más amplia sobre los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 20 (XXXVI), del 29 de febrero de 1980, estableció el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. La creación de dicho grupo, junto con otros acontecimientos, llevó al establecimiento del mandato sobre ejecuciones sumarias y arbitrarias²²².

Años antes en 1980 la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado una resolución 35/172, en la que instaba a los Estados Miembros a que respetasen, como norma mínima, el contenido de las disposiciones de los artículos 6, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que abarcan el derecho a la vida y diversas salvaguardias que garantizan que

nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, y además la garantía de un juicio justo e imparcial en los casos de los países que aún conserven la pena capital.

No fue hasta el 11 de marzo de 1982 cuando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomienda en su resolución 1982/29 que el Consejo Económico y Social pidiera al Presidente de la Comisión que nombrase un Relator Especial con el mandato de presentar a la Comisión, en sus 39° sesión, un informe extenso sobre la existencia y alcance de la práctica de ejecuciones sumarias o arbitrarias, junto con sus conclusiones y recomendaciones. Dicha resolución sería posteriormente adoptada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1982/35 que estableció el mandato del Relator Especial²²³.

El mandato del Relator Especial/la Relatora Especial ha sido renovado regularmente. El Relator Especial ha examinado el asunto de las ejecuciones desde perspectivas distintas con el fin de presentar una imagen completa del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias en el mundo contemporáneo²²⁴.

De acuerdo con el mandato de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para este tema, comprenden: las violaciones del derecho a la vida relacionadas con la pena de muerte; las muertes ocurridas durante la detención; las muertes causadas por el uso de la fuerza por agentes del orden público o personas que actúen directa o indirectamente con el consentimiento del Estado; las muertes causadas por atentados u homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas privadas que cooperan con el Estado o son tolerados por éste; violaciones del derecho a la

²²² Sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, disponible en

<http://www2.ohchr.org/spanish/issues/executions/index.htm>

²²³ *Ibidem* sitio web cit.

²²⁴ *Ibidem* sitio web cit.

vida durante los conflictos armados; expulsión, devolución o retorno de personas a un país o lugar donde sus vidas corren peligro; genocidio; muertes causadas por actos de omisión por parte de las autoridades.

Igualmente el mandato se ha ampliado a las muertes de víctimas que son particularmente vulnerables o víctimas preferentes de ejecuciones extrajudiciales. Dentro de esos grupos figuran defensoras y defensores de los derechos humanos, abogadas y abogados, periodistas, manifestantes, miembros de minorías nacionales, étnicas religiosas o lingüísticas, desplazadas y desplazados internos, mujeres, niñas y niños y miembros de comunidades indígenas²²⁵.

No existe por parte de Naciones Unidas una definición expresa sobre ejecución extrajudicial/extralegal, sumaria o arbitraria; no obstante en el año de 1989 el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65 aprobó los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias en los cuales entre otros deberes, se insta a los Estados a:

1. Prohibir por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velar por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos y sean sancionadas con penas adecuadas a la gravedad de tales delitos.
2. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública.
3. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión.

4. Garantizar un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios y funcionarias responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego.
5. Prohibición de obediencia debida.
6. Garantizar una protección eficaz, judicial o de otro tipo a los particulares y grupos que estén en peligro de ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, en particular a aquellos que reciban amenazas de muerte.
7. No ser obligado u obligada a regresar ni será extraditado o extraditada a un país en donde haya motivos fundados para creer que puede ser víctima de una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria.
8. Realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias,
9. En los casos en los que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia o de imparcialidad, así como en aquellos en los que se produzcan quejas de la familia por esas insuficiencias o haya otros motivos sustanciales para ello, los gobiernos llevarán a cabo investigaciones por conducto de una comisión de encuesta independiente o por otro procedimiento análogo. Los miembros de esa comisión serán elegidos en función de su acreditada imparcialidad, competencia e independencia personal. En particular, deberán ser independientes de cualquier institución, dependencia o persona que pueda ser objeto de la investigación. La comisión estará facultada para obtener toda la información necesaria para la investigación.
10. Las y Los querellantes, los testigos, quienes realicen la investigación y sus familias serán protegidos y protegidas de actos o

²²⁵ Informe de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Comisión de

Derechos Humanos, E/CN.4/2004/7, 22 de diciembre de 2003.

amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación.

11. Quienes estén supuestamente implicados o implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias serán apartados y apartadas de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre las y los querellantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones.
12. Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción.

Diagnóstico

El derecho a la vida abarca todas las dimensiones del ser humano que contribuyen a alcanzar un nivel de vida adecuado; no obstante también hemos señalado que los aspectos del desarrollo humano en el significado del derecho a la vida, son abordados en los capítulos atinentes a derechos económicos, sociales y culturales, así como en los derechos de poblaciones específicas.

El estado de situación del derecho a la vida en lo que respecta a las prohibiciones al Estado en relación a no ejecutar, ni permitir que en su territorio se verifiquen graves atentados contra el derecho a la vida, en particular aquellos que constituyen crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones arbitrarias; muertes por uso de fuerza letal arbitraria por agentes estatales y desapariciones forzadas.

Honduras tiene una tasa de homicidios de 86.5 por 100,000 habitantes²²⁶, una de las más altas a nivel mundial. No obstante, el registro de estas muertes presenta problemas de desagregación de tal manera que un desafío desde los derechos humanos es afinar los sistemas de

registro de información estatal a fin de indagar mejor el estado de los ataques al derecho a la vida imputables a agentes del estado, o a particulares con su tolerancia y aquiescencia.

Sobre la situación de muertes violentas en cárceles algunos datos disponibles reflejan que entre el 1 de enero del año 2010 a noviembre de 2012 un número de 451 personas fallecieron violentamente en los centros de detención del país²²⁷, espacios donde la tutela del Estado debería estar garantizada pues el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a los derechos de las personas privadas de libertad.

Las muertes violentas en cárceles es de tal dimensión que en un solo evento en febrero de 2012 murieron 361 personas durante un incendio en el centro penal de Comayagua, definido antes de esa fecha como una “cárcel modelo”; ya en mayo de 2004 habían muerto también 107 personas en otro incendio en la cárcel de San Pedro Sula y en el año 2003 un total de 69 privados de libertad murieron asesinados y quemados en la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida.

Estos casos se suman a otros eventos de violencia mortal motivados por amotinamientos, enfrentamientos entre las y los internos, crímenes por encargo, aplicación de “ley fuga”, uso arbitrario y desproporcional de la fuerza y otros hechos de violencia carcelaria registradas que develan la descomposición del sistema penitenciario hondureño y sus limitaciones para ser un espacio de rehabilitación y reinserción social adecuado para salvaguardar la vida e integridad personal de las y los 12,186 privados de libertad registrados en el 2012 en Honduras.

Ejecuciones por uso de fuerza letal policial. Estas muertes perpetradas mediante el uso arbitrario, desproporcionado, irracional e

²²⁶ Informe 2011. Observatorio de la Violencia, Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de (IUDPAS), UNAH. Tegucigalpa, 2011. Página

²²⁷ Fuente: Poder Judicial y Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Seguridad, Honduras. 2012.

ilegal de la fuerza por parte de funcionarios y funcionarias de las instituciones públicas de seguridad y defensa en el ejercicio de sus funciones; no suelen ser desagregadas en las estadísticas de los homicidios en el país. No obstante, El Observatorio de la Violencia²²⁸ como resultado de un monitoreo específico de este tipo de modalidad homicida reporta que entre el 1 de enero de 2011 al 30 de noviembre de 2012 han muerto en lo que denominan “acción policial”, un total de 149 víctimas, en promedio 6 cada mes, 92 casos se perpetraron en el 2011 y 57 en el 2012, el 97.3% de éstos asesinatos fueron cometidas por uso de armas de fuego asignadas.

El número de víctimas en cada escena por uso arbitrario de la fuerza policial, según el mismo Observatorio, refleja que en setenta y ocho escenarios se dio muerte a una persona (52.3%), en catorce escenarios resultaron dos víctimas (9.4%), y en diez escenarios resultaron muertos 3 o más víctimas (6.7%).

Ejecuciones arbitrarias contra adolescentes y jóvenes, principalmente los de estratos urbanos pobres y que viven en marginamiento, algunos de ellos etiquetados como “miembros de maras y pandillas”. De acuerdo al último informe de la organización Casa Alianza Honduras, denominado “La situación de los niños, niñas y jóvenes de Honduras”, revela que en los últimos 14 años fueron muertos un total de 7,865 personas menores de 23 años, de ellos, casi 3,000 niños y niñas eran menores de 17 años y unos 5,000 jóvenes estaban entre las edades de 17 a 23 años, de ellos, 9 de cada 10 homicidios de niñas, niños y jóvenes fueron cometidos con arma de fuego, los demás por estrangulamiento, golpes con objetos contundos, armas blancas y otras ligadas, incluyendo que en el 15% de los casos los cuerpos presentaban evidencia visible de torturas. Del total de casos monitoreados solo en el 6% se identificó al agresor por lo que es complejo brindar información sobre los móviles de las

ejecuciones pero se destacan en los pocos casos de los que se tiene información las muertes por enfrentamientos entre pandillas contrarias, entre barras de equipos de fútbol, las muertes por encargo y los asesinatos perpetrados por policías y militares.

De igual gravedad son los asesinatos de personas particularmente vulnerables como las defensoras y los defensores de derechos humanos, operadoras y operadores de justicia, abogadas y abogados, periodistas y comunicadores sociales, miembros de comunidades indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual, líderes ambientalistas y defensores y defensoras de la tierra.

En esa línea los homicidios de mujeres y los femicidios (homicidio de una mujer por razones de género) están presentes en Honduras, y las estadísticas de la Policía Nacional reflejan que en total 3,018 mujeres fueron asesinadas en los últimos 10 años. El homicidio y el femicidio de mujeres adquieren un alto impacto social por el grado de saña que se refleja en los casos, por la desarticulación de las familias, principalmente las lideradas por madres solas y por los altos niveles de impunidad que las rodea.

También, y según las cifras el país estaría aumentando sus niveles de homofobia explicada por el elevado aumento de crímenes de odio contra la población LGTTBI (77 asesinatos desde el rompimiento Constitucional en junio de 2009 a junio 2012 según datos del Observatorio de la organización lesbica Catrachas). En tanto, la Fiscalía del Ministerio Público, registra que entre el año 2003 a noviembre del año 2012, han sido privados de la vida 33 periodistas y comunicadores sociales, y que de esos casos seis han sido judicializados y sólo dos han

²²⁸ Observatorio de la Violencia, Boletín Especial N. 5 sobre Criminalidad Policial, enero 2011-30 noviembre

2012, Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Tegucigalpa. 2012.

llegado a sentencia²²⁹. La presencia del crimen organizado y la intolerancia de los poderes públicos aparecen como las principales motivaciones de muertes de periodistas, según IFEX, Red Mundial para la Libertad de Expresión, sin embargo, debido al escaso avance en los procesos de investigación de estas muertes, no ha sido posible identificar a los y las responsables de las mismas. En los 6 casos que han sido judicializados, no se ha señalado como posibles autores a miembros de las fuerzas de defensa y seguridad.

Otro gremio atacado es el de las y los abogados reportándose que 63 abogadas y abogados han sido asesinados entre los años 2005 y 2012²³⁰, por supuestos sicarios y con el ánimo de hacer cesar su ejercicio de la profesión²³¹.

Los defensores al medio ambiente y a la tierra presentan particulares condiciones de ataques a sus vidas. En la Región de Colón, en el Bajo Aguán donde observadores internacionales estimaban a mayo de 2012 el homicidio de más de 53 líderes y miembros de organizaciones campesinas²³², en tanto la denuncia ciudadana del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) señala que a noviembre 2012 las víctimas son más de 80 miembros de organizaciones campesinas que han sido asesinados en los últimos tres años²³³, entre ellos el caso de su abogado defensor. Las fuentes secundarias revelan que como producto de ese mismo conflicto por la tierra han sido privados y privadas de la vida 15 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y de guardias de seguridad privada²³⁴.

²²⁹ Fiscalía del Ministerio Público; Más en Univision.com: <http://noticias.univision.com/america-latina/honduras/article/2012-08-14/honduras-con-indice-mas-alto-asesinatos-periodistas#ixzz2AIBQi2V7>

²³⁰ Fuente: Colegio de Abogados de Honduras.

²³¹

<http://www.laprensa.hn/Publicaciones/Especiales/Se-acabo-la-paciencia/Notas/Abogados-el-gremio-mas-golpeado-por-la-ola-de-violencia>

²³² Informe de la Misión Internacional de Verificación en el marco de la Audiencia Pública sobre la situación de los

El 16 de diciembre de 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de las observaciones al Informe Anual Preliminar 2011 de la CIDH, establece que entre el año 2010 y noviembre de 2011 perdieron la vida 46 personas en la zona del Aguán, las que, agrupadas por ocupación laboral o relación con el conflicto, se distribuían así: 18 campesinos; 2 personas que se suponían campesinas, pero de quienes no se pudo comprobar en definitiva su filiación; 12 guardias de seguridad; 4 jornaleros de fincas; 5 personas desconocidas o no identificadas y; 5 personas particulares, ajenas al conflicto²³⁵.

Los autores de las muertes aparecen como desconocidos, por lo que el Estado debe redoblar sus esfuerzos para hacer más expeditos y eficaces los procesos investigativos, que permitan identificar a las y los responsables de estos hechos y poner fin a la impunidad que se cierne sobre estas muertes.

Desaparición Forzada. existe una deuda acumulada en el enjuiciamiento de los casos de la desaparición forzada perpetrada en el país mediante la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional con su consiguiente saldo de 184 casos de personas desaparecidas permanentes, además de los múltiples casos de asesinatos políticos, torturas, detenciones arbitrarias, persecución política, instauración de cárceles clandestinas y cuerpos ilegales de exterminio como el Batallón 3-16, entre otros hechos que constituyeron graves violaciones a derechos fundamentales y que hoy día continúan en la impunidad (Comisionado

derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, mayo 2012.

²³³

http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14413:muca-denuncia-asesinato-de-otros-tres-campesinos-en-el-aguan&catid=1:noticias-generales

²³⁴

<http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Dos-muertos-y-siete-heridos-en-Bajo-Aguan>

²³⁵ Oficio 1899-DGAE, Secretaría de Relaciones Exteriores.

Nacional de Derechos Humanos, 1993:73)²³⁶. Durante el año 2011, la Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público, informó que ingresaron a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, 13 denuncias de personas presuntamente desaparecidas, 7 ocurrieron en Tegucigalpa y 6 en San Pedro Sula. En el año 2012, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos registró 3 supuestos casos de desaparición forzada.

Sobre la comisión de este hecho delictivo, es importante que el Estado active todos sus mecanismos de respuesta para dar con el paradero de las víctimas y adopte medidas para su prevención y erradicación definitiva, ya sea cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen por la tolerancia o aquiescencia del Estado.

Matriz sobre el derecho a la vida

Resultado de impacto

1. Disminución sostenida con miras a erradicar prácticas violatorias del derecho a la vida en el territorio nacional, especialmente brindar salvaguardas contra la desaparición forzada, el sicariato, las ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias y otros crímenes contra la vida.

Indicadores de impacto

1. Tratados internacionales relativos a obligaciones del Estado para tutelar la vida, ratificadas en la fecha de entrada en vigor del tratado.
2. Número y tipo de leyes y políticas públicas armonizadas a los tratados para tutelar el derecho a la vida de manera general y/o ciertas tipologías de actos específicos que violan el derecho.

²³⁶ Dicho informe revela que cientos de opositores y opositoras al modelo de gobierno fueron desaparecidos y desaparecidas y asesinados y asesinadas, la tortura se transformó en el método corriente para la obtención de información sobre la actividad de los opositores y se

Indicadores estructurales

1. Capítulo incorporado de Reforma por Adición al Código Penal y/o Ley Especial de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional CPI, aprobado y publicado en la Gaceta; en especial tipificación del genocidio, crímenes de guerra, crimen político, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes de lesa humanidad.
2. Código Militar compatible con estándares de Derechos Humanos aprobado y publicado.
3. Código Penal y Procesal reformado incorporando tipificación, sanciones y procedimientos en casos de sicariato, femicidio o crimen de odio por origen étnico, orientación sexual, identidad de género u opinión política.
4. Leyes derogadas y/o reformadas que eliminan obstáculos de acceso, y dictado de normativa afirmativa al respecto.
5. Ley especial de reparación para víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.
6. Constitución de la República reformada en materia de Derechos Humanos.
7. Derogatoria aprobada y publicada en la Gaceta.

Indicadores de proceso

1. Políticas Públicas de Órganos con competencia para asegurar el derecho han sido ajustadas desde el enfoque de Derechos Humanos.
2. Número y tipo de políticas públicas dictadas, protocolos de atención dictados, programas de formación implementados, campañas desarrolladas/cantidad de recursos destinados por año a la implementación del Plan.

instauraron centros de detención clandestinos desencadenándose una violencia clandestina e ilegal basada en la violación sistemática de los derechos humanos.

3. Número anual de denuncias de uso de la fuerza letal por órganos de seguridad y defensa; número anual de denuncias de ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, sicariatos, femicidios, crímenes de odio por origen étnico, diversidad sexual, opinión política; desagregar por autoría o perfil del presunto responsable.
4. Niveles de desempeño de los organismos especializados en investigar, dar seguimiento, acusar y enjuiciar casos de violaciones de Derechos Humanos.
5. Proporción de agentes, funcionarias y funcionarios denunciados, investigados, sancionados administrativamente y/o condenados penalmente por violaciones a los Derechos Humanos.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la vida en la legislación.				
1	Derogación de obstáculos y dictado de normativa afirmativa especialmente en Código Penal y Procesal Penal, Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley del Ministerio Público, especialmente sobre: <ol style="list-style-type: none"> i. Agravamiento del asesinato cuando se cometa por medio de sicarios; aumento de penas para autores intelectuales o mediatos; posibilidad de rebaja de pena para el sicario que ofrezca información sobre el autor intelectual. ii. Tipificación del femicidio y del crimen de odio por origen étnico, orientación sexual, identidad de género u opinión política. iii. Regulación de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. iv. Procedimientos de investigación diferenciados frente a ataques al derecho a la vida en sus diversas modalidades. 	2014-2018	Congreso Nacional de la República	
2	Incorporar a la Constitución de la República la prohibición de la práctica de la desaparición forzada, de las ejecuciones sumarias y arbitrarias; afirmar el derecho a la verdad de la víctima y sus familiares y la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos o de lesa humanidad (S).	2014-2015	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Creación de un marco jurídico específico que incorpore al Código Penal un capítulo, o bien favorezca la emisión de una Ley Especial, con el fin de implementar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto implica entre otros aspectos armonizar figuras como la tortura y el genocidio, incorporar los crímenes de guerra, y tipificar la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y los demás crímenes de lesa humanidad descritos en el Estatuto, como el crimen político; reconocimiento de la imprescriptibilidad de la acción	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional de la República, Fiscalía Especial de Derechos Humanos - FEDH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	penal y de la ejecución de penas, inexistencia de amnistías, indultos e inmunidades, la cosa juzgada; reformar la figura de la autoría mediata del superior jerárquico en crímenes de aparatos de poder de conformidad con el Estatuto de la CPI. (S. con base en RI EPU, doc. A/HRC/16/10, No. 19, p. 5).			
4	Reforma del Código Militar a los compromisos internacionales, en particular revisar aspectos como la tipificación de crímenes, fuero militar, obediencia a orden de superior jerárquico, entre otros que pudiesen ser incompatibles con los estándares internacionales, especialmente las Convenciones Internacionales sobre Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma.	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia
5	Revisión desde el enfoque de derechos humanos de políticas, prácticas y criterios adoptados por las entidades del sector justicia, seguridad, defensa, Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, sobre "información reservada" en los casos en que la misma esté relacionada con la investigación de graves crímenes contra los derechos humanos o de lesa humanidad (S).	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Fiscalía Especial de Derechos Humanos - FEDH, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP
6	Aprobación de normativa sobre derecho a la verdad y la reparación material, psicológica y social. (RI Informe 2010 capítulo IV CIDH Honduras Doc. 160, p. 3; Informe a Honduras Alta Comisionada NUDH, 2010, 84.a, 85.a; Honduras Examen Periódico Universal; Informe a Honduras del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, 2007; I. Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes - CIDH doc. 14, p. 38.).	2015-2018	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
7	Diseño de mecanismo efectivo para la protección de víctimas, familiares, testigos y grupos vulnerables a atentados al derecho a la vida.	2014-2014	Ministerio Público	Congreso Nacional de la República, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
8	Diseñar Procedimientos claros en la normativa interna que aseguren la participación en las investigaciones y procesos a víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.	2014-2016	Corte Suprema de Justicia	Congreso Nacional de la República, Ministerio Público, Secretaría de Justicia y Derechos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	(RI Informe 2010 capítulo IV CIDH Honduras Doc. 160, p. 3; Informe a Honduras Alta Comisionada NUDH, 2010, 84.a, 85.a; Honduras Examen Periódico Universal; Informe a Honduras del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, 2007; I. Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes – CIDH doc. 14, p. 38.).			Humanos, Secretaría de Seguridad
9	Derogatoria del Decreto de amnistía del 27 de enero de 2010 por incompatibilidad con estándares de derechos humanos. (Informe de la Comisión de Verdad, doc. 207, p. 132).	2014-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Diseño del sistema de protección para jueces especializados, fiscales, investigadores, procuradores y defensores públicos que participan en casos de investigación y enjuiciamiento de crímenes de desaparición forzada, ejecuciones sumarias y arbitrarias y otros (S. con base en PP Plan de Gobierno 2010-2014 (doc. 113, p. 55).	2013-2022	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Congreso Nacional de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas
2	Implementación del sistema de protección para jueces especializados, fiscales, investigadores, procuradores y defensores públicos que participan en casos de investigación y enjuiciamiento de crímenes de desaparición forzada, ejecuciones sumarias y arbitrarias y otros	2013-2021	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Congreso Nacional de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas
3	Establecer un programa de formación y especialización permanentes a todos los niveles para servidores de instituciones públicas relacionados con la aplicación de medidas abusivas y arbitrarias en sus acciones de prevención, disuasión y control de hechos, investigación y enjuiciamiento de delitos y violaciones de los derechos humanos .	2014-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio Público, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Seguridad

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
4	Realizar una planeación y presupuestación anual de las instituciones públicas con enfoque de derechos humanos(S).	2013-2022	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN	Secretaría de Finanzas, Secretarías de Estado (varias), Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Programas de formación médico-forenses especializados en la investigación de crímenes de derechos humanos , exhumaciones en cementerios clandestinos. (S).	2014-2021	Ministerio Público	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad
2	Establecer un programa de formación y especialización permanente (teórico-práctico) a servidores de instituciones autorizadas para uso del monopolio de la coerción y la fuerza, especialmente con relación a estándares internacionales, jurisprudencia y prácticas sobre el empleo legal de la fuerza y las armas; y las responsabilidades penales por las violaciones de derechos humanos derivadas de su uso arbitrario e ilegal. (S. con base en PP Recomendación No. 18 de la CVR).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Educación , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Organizaciones de Derechos Humanos
3	Elaboración de un protocolo que facilite los procesos estatales de identificación de violaciones cualificadas del derecho a la vida (desaparición forzada, ejecución sumaria o arbitraria, femicidio, crimen de odio de diversa naturaleza, genocidio y otros) (S).	2014-2014	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia
4	Dictado de protocolos, recomendaciones de autoridad, autos acordados y otros que aseguren la asunción de prácticas para garantizar la participación de familiares de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales que les representen, durante las investigaciones y procesamiento de los juicios contra el derecho a la vida (S).	2013-2013	Corte Suprema de Justicia	Ministerio Público, Procuraduría General de la República - PGR, Secretaría de Seguridad
5	Definir protocolos de actuación que permitan asegurar una efectiva separación de las investigaciones o de su relación de poder e influencia de los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en ejecuciones arbitrarias, desaparición forzadas y otros crímenes contra la vida (S).	2013-2014	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial -

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				DIECP, Consejo Nacional de Seguridad Interna - CONASIN
6	Incluir conocimientos sobre reparaciones en materiales educativos dirigidos a funcionarios, agentes del Estado y ciudadanos en todos los niveles educativos, incorporando además, la reparación moral con motivo de violaciones.	2014-2016	Corte Suprema de Justicia	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Plan de Fortalecimiento de Unidades Especiales de investigación (policial y fiscal) responsables de investigar violaciones del derecho a la vida cualificadas y contra grupos especialmente vulnerables; dotándolas de medios técnicos, logísticos, presupuestarios, humanos y administrativos. (RI EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.67, 82.68); DC Propuesta de lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad, doc. 120, pp. 40 y 43 (2) (3).	2014-2022	Ministerio Público	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia
2	Establecer una instancia especial en la Secretaría de Seguridad con atribuciones para controlar las actividades de las empresas de seguridad privadas y a la que se le puedan someter quejas. (RI Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios, doc. 148, 73).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Seguridad
3	Fortalecer la independencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) mediante su transformación en un órgano colegiado y desarrollar sus capacidades de supervisión independiente de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de conformidad con lo establecido por los Principios de París. (RI Informe a Honduras del Relator de la Libertad de Expresión 2012; Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de derechos humanos en las Américas).	2013-2021	Congreso Nacional de la República	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
4	Incorporar a los sistemas de información de datos de las instituciones del sector justicia y seguridad y a los observatorios de violencia, variables sobre las modalidades de violaciones del derecho a la vida desde este enfoque de derechos humanos.	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Observatorio de la Violencia

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	(S. con base en PP Visión de País y Plan de Nación, doc. 108, p. 84; Bases de la política integral de Seguridad Pública y Ciudadana, doc. 115, p. 15; Informe general de las consultas regionales en el marco del proceso de diseño de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Justicia y Derechos Humanos).			
5	Crear una base de datos unificada entre todas las instituciones involucradas en la investigación, identificación y sanción de los responsables por las muertes violentas de niños y jóvenes en situación de riesgo, (Sentencia).	2014-2016	Ministerio Público	Congreso Nacional de la República , Secretaría de Seguridad , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Corte Suprema de Justicia, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Procesos de formación en derechos humanos a cuadros de partidos políticos que eleven su nivel de conciencia y compromiso con las Políticas Públicas en materia de derechos humanos en el país (S).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	
2	Elevar las capacidades ciudadanas mediante cursos de especialización, diplomados, pasantías orientadas a elevar las capacidades de los y las defensores/as, las organizaciones de derechos humanos y en general la sociedad civil sobre una mejor identificación de casos de violaciones de Derechos Humanos , (desaparición forzada, ejecución sumaria o arbitraria, femicidio, crimen de odio de diversa naturaleza, genocidio, reglas de uso de la fuerza, etc.) (S).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Llevar a cabo campañas anuales de prevención, sensibilización e información sobre el estado de situación de las violaciones a derechos humanos en el país y en particular la situación de los crímenes de lesa humanidad (S).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Alcaldías Municipales , Secretaría de Educación , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Difusión amplia, escrita y a través de medios locales, de los derechos de la población en general y de las víctimas del delito en particular, incluyendo rutas de acceso a la justicia y mecanismos de control de las responsabilidades de los funcionarios.	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
3	Incorporar a los currículos educativos de la historia de las violaciones de DDHH en el país, especialmente la memoria sobre la desaparición forzada, con participación de la sociedad civil (S).	2013-2014	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
4	Incorporar de manera oficial y sistemática el contenido de derechos humanos en los currículos de todo el sistema educativo formal pre básico, básico y superior .	2013-2021	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Organizaciones de Derechos Humanos , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
Componente: 7 - Lucha contra impunidad de violaciones de derechos humanos y reparación.				
1	Diseñar e implementar una estrategia para la reactivación de la investigación de los crímenes por violaciones de derechos humanos en los años ochenta (no repetición/nunca más). (S. Con base en RI Observaciones finales del Comité contra la Tortura, 145, No. 11).	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
2	Realizar y/o actualizar un mapeo de supuestos cementerios clandestinos en el país, instar las exhumaciones pertinentes y el cotejamiento forense con familiares sobrevivientes. (S. con base en RI Observaciones finales del Comité contra la Tortura, 145, No. 11).	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia , Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
3	Disponer a las familias de las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones sumarias y arbitrarias, crímenes de odio, femicidio de asistencia material, médica, psicológica, social y protección ante riesgos específicos. (S. Con base en RI EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.81)	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Ministerio Público , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				CONADEH, Secretaría de Salud
4	Diseño de una política pública para la reparación, indemnización justa y adecuada de las familias de las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones sumarias y arbitrarias, crímenes de odio, femicidios. (S).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Procuraduría General de la República - PGR, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Finanzas
5	Diseñar y poner en marcha un plan para el pleno y eficaz cumplimiento de las sentencias internacionales contra Honduras por violación del derecho a la vida: desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias o arbitrarias, muertes en centros de internamiento (S).	2014-2021	Procuraduría General de la República - PGR	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.				
1	Informes periódicos del MP, la Procuraduría General, Poder Judicial y Secretaría de Seguridad, relacionado con el avance general de los casos que conocen, e informes específicos para la víctima, sus familiares o sus representantes legales; procurando un equilibrio entre el derecho a la verdad y la obligación estatal de asegurar una investigación eficaz y eficiente (S).	2013-2021	Ministerio Público	Fiscalía Especial de Derechos Humanos - FEDH, Procuraduría General de la República - PGR, Corte Suprema de Justicia
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Creación de un marco jurídico específico que incorpore al Código Penal un capítulo, o bien favorezca la emisión de una Ley Especial, con el fin de implementar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto implica entre otros aspectos armonizar figuras como la tortura y el genocidio, incorporar los crímenes de guerra, y tipificar la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y los demás crímenes de lesa humanidad descritos en el Estatuto, como el crimen político; reconocimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución de penas, inexistencia de amnistías, indultos e inmunidades, la cosa juzgada; reformar la figura de la autoría mediata del superior jerárquico en crímenes de aparatos de poder de conformidad con el Estatuto de la CPI.	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional de la República, Fiscalía Especial de Derechos Humanos - FEDH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	(S. con base en RI EPU, doc. A/HRC/16/10, No. 19, p. 5).			
2	<p>Derogación de obstáculos y dictado de normativa afirmativa especialmente en Código Penal y Procesal Penal, Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley del Ministerio Público, especialmente sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Agravamiento del asesinato cuando se cometa por medio de sicarios; aumento de penas para autores intelectuales o mediatos; posibilidad de rebaja de pena para el sicario que ofrezca información sobre el autor intelectual. ii. Tipificación del femicidio y del crimen de odio por origen étnico, orientación sexual, identidad de género u opinión política. iii. Regulación de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. iv. Procedimientos de investigación diferenciados frente a ataques al derecho a la vida en sus diversas modalidades. 	2014-2018	Congreso Nacional de la República	

DERECHO A LA SEGURIDAD

Marco Normativo

La seguridad ciudadana como derecho humano es aún un campo que se encuentra en evolución, no obstante, numerosos tratados internacionales se refieren expresamente a ella, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ratificada el 7/12/95) que reconoce el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia en lo público y en lo privado (artículos 4, 5 y 6).

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ratificada el 11 de junio de 2005) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles Inhumanas, o Degradantes (ratificada el 5 de diciembre de 2006) buscan prevenir y sancionar actos específicos de violencia estatal y que son crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada o la tortura.

De igual manera lo hace la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificada en 2003, decreto 108), que brinda la definición de grupos delictivos organizados y adopta medidas para impedir el blanqueo de capitales producto de esas actividades criminales. Dicha Convención, cuenta con tres protocolos: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.

A nivel de la seguridad del individuo o seguridad personal, está consagrada como derecho en varios tratados internacionales, especialmente en el artículo 3 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene que: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales” y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Igualmente puede encontrarse su alusión en la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada el 10 de agosto de 1990); Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Estatuto de la Corte Penal Internacional (ratificado en junio de 2012); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ratificada el 9 de agosto de 1985); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (ratificada el 3 de marzo de 1983); Convención internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial (ratificada el 10 de octubre de 2010); Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, entre otras leyes.

Contenido de los derechos

El derecho a la seguridad ciudadana se relaciona con una serie de derechos que le son complementarios, o bien, con otros derechos igualmente fundamentales que resultan especialmente afectados ante situaciones agravadas de inseguridad y violencia; en este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)²³⁷ reconoce que:

²³⁷ Igual opinión sostiene la Federación Iberoamericana de Ombudsmen, FIO. Ver: *VIII Informe sobre Derechos Humanos: Seguridad Ciudadana*, 2011.

“los Estados se encuentran obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes.

Las obligaciones de los Estados miembros respecto a la seguridad ciudadana, también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial, el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación y el derecho a la participación en los asuntos de interés público. En un sentido amplio, la seguridad ciudadana también puede incorporar medidas de garantía de los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y al trabajo, entre otros²³⁸.

El derecho a la seguridad ciudadana puede ser restringido o limitado temporalmente con la finalidad de garantizar la seguridad de la colectividad, como puede derivarse del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Suspensión de Garantías): “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo,

idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 6 (prohibición de la esclavitud y servidumbre), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 12 (libertad de conciencia y de religión), 17 (protección a la familia), 18 (derecho al nombre), 19 (derechos del niño), 20 (derecho a la nacionalidad) y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.”

A nivel nacional, la garantía del derecho a la seguridad de la colectividad puede apreciarse en el artículo 62 de la Constitución de la República de Honduras: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”.

Obligaciones del Estado

La inseguridad ciudadana, generada por la criminalidad y la violencia, como ha puesto de manifiesto la CIDH, “constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos”. Y dado que la seguridad ciudadana debe ser evaluada desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos, hay que tener presente que los Estados tienen a su cargo obligaciones negativas (abstención y respeto) y positivas (adoptar medidas en aras de la prevención)²³⁹. En el informe adoptado por la CIDH²⁴⁰, de manera particular se hace referencia a las obligaciones negativas y positivas de los

²³⁸ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. *Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 57, Washington, 31 de diciembre de 2009.

²³⁹ Federación Iberoamericana de Ombudsmán, FIO. VIII Informe sobre Derechos Humanos: Protección de la Seguridad Ciudadana, pág. 77; Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, Módulo Instruccional:

Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales, IIDH. San José (2011):

²⁴⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, *Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 de diciembre de 2009. Washington, 2009.

Estados con respecto a los derechos humanos vinculados con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción, en especial los derechos de las víctimas de delitos frente a acciones violentas de actores estatales y no estatales.

Siguiendo a la CIDH, a la Federación Iberoamericana de Ombudsmán, FIO, y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)²⁴¹, las principales obligaciones del Estado con respecto a la seguridad ciudadana que pueden generar responsabilidad, según las normas y estándares internacionales, pueden ser clasificadas en cuatro grupos de obligaciones:

1. La obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana (prevención del daño).
2. La responsabilidad del Estado por conductas de sus agentes y de terceros.
3. El derecho a la protección judicial y la obligación de investigar.
4. La obligación de adoptar medidas para la seguridad de los colectivos en situación de vulnerabilidad o expuestos a situaciones específicas de riesgo.

Un mejor desarrollo con relación a estas agrupaciones de las responsabilidades positivas y negativas del Estado incluyen:

La obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana (prevención del daño)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, ha señalado que el deber de

²⁴¹ FIO, VIII Informe sobre Derechos Humanos: Protección de la Seguridad Ciudadana, página 77.

²⁴² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II, Documento 57, Párrafo 41, 2009.

prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la prevención y salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito, susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa (prevención general)²⁴².

En su Informe sobre Seguridad Ciudadana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH advierte de que “las estrategias definidas por los Estados miembros en la ejecución de su política pública sobre seguridad ciudadana deben contemplar medidas de prevención social, comunitaria y situacional, a la vez que planes operativos de disuasión por parte de las fuerzas policiales, que contribuyan a disminuir el riesgo de que las personas puedan ser víctimas de delitos o hechos violentos que afecten su derecho de disfrutar pacíficamente de sus bienes²⁴³.”

La falta de adopción de medidas de prevención puede dar lugar a responsabilidades internacionales del Estado, aunque en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH ha dicho que para que surja esa obligación positiva, debe estar establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitarlos²⁴⁴.

Tampoco el Estado puede invocar circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad

²⁴³ *Ibidem*, Documento 57, Nota número 18, párrafo 216.

²⁴⁴ XLIII European Court of Human Rights, Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, Application No. 22492/93, párrafos 62 y 63, Osman v. the United Kingdom Judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, párrafos 115 y 116.

política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la no adopción de medidas de protección a los derechos amenazados por la violencia y el delito.

La responsabilidad del Estado por conductas de sus agentes y de terceros

En primer término, esta responsabilidad surge en el momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito que le sea atribuible directamente al Estado, en violación de sus obligaciones adquiridas en virtud de un tratado de derechos humanos. Así, el Estado es responsable por acciones u omisiones cometidas por cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en ausencia de intencionalidad, dolo e independientemente de que las acciones u omisiones sean o no consecuencia de una política estatal deliberada²⁴⁵.

Dos obligaciones directas se derivan de esta responsabilidad del Estado por conductas de sus agentes:

1. La supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
2. La adecuación del marco jurídico y la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva prevención y protección de los derechos de la población, incluyendo la represión del delito y la violencia.

En lo relativo a la responsabilidad del Estado por la conducta de terceros, se parte de que el Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre

particulares dentro de su jurisdicción, de tal cuenta que dicha atribución de responsabilidad por actos de particulares, puede darse por dos supuestos:

1. Por la tolerancia o complicidad con particulares que atentan contra los derechos humanos.
2. Por la falta de diligencia para prevenir un acto de un particular que viole los derechos humanos consagrados.

De esta manera, el Estado adquiere la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales, es decir, el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones a los derechos humanos de los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción.

La protección judicial y la obligación de investigar

La obligación de los Estados de protección judicial y de investigar ha sido reconocida por las normas del Derecho Internacional, encontrándose plasmada en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1), en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 8.1 y 25); en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 10). También se encuentra citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha catalogado el derecho a la tutela judicial como un derecho fundamental de los ciudadanos y, por ello, las y los Estados se encuentran obligados a cumplir con esta función esencial: la protección de este derecho fundamental a favor de sus ciudadanos y ciudadanas. Este derecho contempla:

²⁴⁵ La Corte IDH se ha pronunciado en ese mismo sentido en las siguientes sentencias: Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de febrero de 2001. Serie C, No. 73, párr. 72 y Voto Concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade, párrafos 16

y 31-3. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005, Serie C, No. 134, párrafo 108; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C, No. 140, párrafo 111.

1. Deber jurídico del Estado de iniciar de oficio sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientados a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores²⁴⁶.
2. Obligación de los Estados de establecer un recurso interno efectivo a favor de las personas víctimas de violaciones de los derechos humanos.
3. Participación de las víctimas o sus familiares y ser oídas durante el proceso de investigación y enjuiciamiento.
4. Disponer a las víctimas de los crímenes de asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, prestando atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos.
5. Proporcionar formación al personal de los servicios de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado respecto a las necesidades de las víctimas y las directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.
6. Medidas de protección y dispositivos de seguridad a víctimas y testigos de graves violaciones a derechos humanos (tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad).
7. Eliminar los obstáculos procesales para el acceso a la justicia de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la prohibición de amnistías que conducen a la indefensión de las víctimas y

a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

8. Determinación de los delitos en el derecho interno que asegure la adecuada y efectiva tipificación y sanción de los crímenes, con especial atención al sometimiento a la justicia a los autores de las graves violaciones de derechos humanos (tipificación y responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad).
9. Derecho de reparación y resarcimiento para las víctimas de delitos y del abuso de poder²⁴⁷.
10. Garantía de los presuntos responsables de un proceso justo, independiente e imparcial, para el examen de cualquier acusación en su contra.

La obligación de adoptar medidas para la seguridad de los colectivos en situación de vulnerabilidad o expuestos a situaciones específicas de riesgo

La Corte IDH ha dicho que: “toda persona cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial”, que resulta necesaria para que el Estado satisfaga sus deberes generales de respetar y garantizar los derechos humanos. Ello implica que: “no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre²⁴⁸”.

²⁴⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, *Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos*. OEA/Ser.L/V/II, Documento 57, Washington, 2009, Página 41, párrafo 18.

²⁴⁷ La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional puede realizarse, siempre que sea posible, a través de la plena restitución (*restitutio in integrum*), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación cometida. Si esto no es posible, como en efecto no lo es en la mayoría de los casos, cabe determinar las medidas conducentes a garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las

infracciones produjeron, disponer el pago de una indemnización en calidad de compensación por los daños ocasionados y asegurar que no se repitan los hechos lesivos.

²⁴⁸ Corte IDH, Caso Furlan y familiares vs. Argentina, Resumen oficial sentencia del 31 de agosto de 2012 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), Fuente: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_246_esp.pdf

Si bien la seguridad de las personas pertenecientes a grupos especialmente vulnerables tiene que ser la misma que para las demás personas, también hay que reconocer que por su especial vulnerabilidad necesitan, ante determinadas situaciones, una especial protección. Desde esta perspectiva serán tratadas las personas pertenecientes a “grupos especialmente vulnerables”, como las mujeres, la juventud y la niñez, así como aquellos grupos sociales no organizados como pueden ser los migrantes, los grupos étnicos o minoritarios, incluidos en estos últimos indígenas y afro descendientes, personas de la diversidad sexual, profesiones especialmente vulnerables...²⁴⁹.

Algunas medidas que el Estado debe cumplir para asegurar la debida diligencia en cuanto a la seguridad de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad o ante situaciones de riesgo, son:

1. Ratificación o adhesión a instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos de colectivos específicos como mujeres, niños y niñas, juventud, migrantes, etnias, diversidad sexual, o que promuevan y protejan la libertad de expresión, opinión política, religión, ejercicio de profesiones, entre otros.
2. Garantías constitucionales y de legislación nacional sobre la igualdad de esos grupos (leyes de igualdad de oportunidades).
3. Existencia de sanciones administrativas y penales contra la discriminación, sexismo, racismo, xenofobia, transfobia, apología del odio, intolerancia. Agravamiento de la responsabilidad en el caso de agentes del Estado o que como resultado de la acción se deriven atentados a la integridad personal.
4. Dictado de tipos penales especiales o adecuación de la normativa penal existente a estándares internacionales que castigan la

trata de personas, el tráfico de migrantes, el femicidio, el crimen de odio por origen étnico, político, religioso, orientación sexual, ataques a la libertad de prensa, utilización de mercenarios, entre otros.

5. Políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra estos grupos de manera específica y no genérica.
6. Accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo específicos y especializados.
7. Existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de comunicación social, el arte y la cultura.
8. Compilar datos y elaboración de estadísticas desagregadas sobre la violencia y sus manifestaciones contra los distintos colectivos sociales en situación de vulnerabilidad o expuestos a situaciones específicas de riesgo.
9. Sensibilización del sistema de justicia penal y la policía a fin de erradicar la influencia de estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios durante el proceso de recepción de denuncia, investigación y enjuiciamiento de hechos violentos contra personas de estos colectivos y minorías.
10. Medidas eficaces de denuncia, acceso a la justicia rápida e imparcial, reparación e indemnización.

Diagnóstico

En los últimos años Honduras ha visto aumentar drásticamente sus estadísticas de violencia y criminalidad. Datos acumulados del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma revelan que, entre los años 2004 al 2011, un número de 33,933 personas perdieron su vida a causa de los homicidios. Midiéndolo por tasas, el país alcanzó al cierre de 2011 una tasa de homicidios de 86.5 por cada 100.000 habitantes²⁵⁰, en tanto el promedio de América

²⁴⁹ Federación Iberoamericana de Ombudsmán, FIO, VIII Informe sobre Derechos Humanos: Protección de la Seguridad Ciudadana, página 61, ítem 7.

²⁵⁰ Observatorio de la Violencia, *Boletín Observatorio de la Violencia*, edición 24, Tegucigalpa, marzo de 2012. Página.

Latina se sitúa en 25 por cada 100,000²⁵¹. El 84.6% de los homicidios se cometieron mediante el uso de armas de fuego debido a la fácil disponibilidad de armas legales e ilegales que circulan en el país²⁵².

Entre enero y diciembre de 2011, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) reporta haber recibido 81,815 denuncias, donde los delitos contra la propiedad y la violencia doméstica contra la mujer son los de mayor incidencia. La violencia se encuentra universalizada en todo el país, pero las regiones urbanas del corredor norte y central del país presentan los mayores casos; aunque medido por homicidios, los departamentos de Olancho, Copán y Ocotepeque también reflejan un creciente aumento de homicidios e incluso masacres con varias víctimas mortales. En estas regiones, hay un aumento de actividades del crimen organizado, incluyendo actividades de secuestros, tráfico de armas, de personas, de drogas, robo de vehículos, extorsiones y presencia de pandillas de naturaleza violenta.

Existen sectores de población a los que la violencia les afecta de manera particular, por ejemplo, datos del Observatorio de la Violencia (2011) reflejan una mayor victimización en la población joven en edades comprendidas entre 14 y 29 años, que en el año 2011 presentaron 3,344 homicidios, que equivalen al 47%; igualmente hay un aumento de los homicidios de mujeres y de femicidios (homicidios por razones de género). Las cifras estadísticas según información de la Policía Nacional, señalan que unas 3,018 mujeres fueron privadas de la vida en los últimos 10 años, y se estima que en el año 2012 las muertes violentas de mujeres se han incrementado en un 129%, con un promedio de tres víctimas cada dos días.

²⁵¹ Datos del Observatorio Hemisférico de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Disponible en: www.oas.org/dsp/Observatorio/database/regionsdetails.aspx?lang=es®ion=6

También se refleja un incremento de ataques a colectivos sociales, como la población de lesbianas, gays, bisexuales y las personas transgéneros (LGBTTI), así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a periodistas, abogados y abogadas litigantes, operadores y operadoras de justicia, defensores y defensoras de los pueblos indígenas, de los recursos naturales y ambientales incluyendo crímenes contra quienes defienden el derecho a la tierra.

Frente a esta situación, el Estado ha reaccionado dotando de más recursos a las tradicionales instancias del sector Seguridad, Defensa, Ministerio Público y Poder Judicial; de modo que para el año 2010 se estimó en 426 millones de dólares del gasto en el sector seguridad²⁵³ (el presupuesto aprobado para la Secretaría de Seguridad en el año 2011 fue de 3,100 millones de lempiras, y el de la Secretaría de Defensa de 2,583.5 millones de lempiras, sin sumar los recursos asignados al Ministerio Público, juzgados y tribunales penales, ni los gastos destinados a la ampliación de los servicios de seguridad privada y compra de armas).

Algunos factores que están en la base de las violaciones al derecho a la seguridad ciudadana son los siguientes:

1. La propensión a focalizar las respuestas estatales en la coerción, represión y la militarización, con escasas y poco articuladas estrategias en materia de prevención.
2. Ausencia de una política integral de seguridad ciudadana que se articule con los programas sociales y que recupere la visión de seguridad como derecho humano.

²⁵² Un total de 249,244 armas permitidas habían sido registradas a marzo de 2011 por la Unidad de Registro Nacional de Armas, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

²⁵³ Gasto público de los países de Centroamérica en seguridad y justicia 2006-2010 (AECID/SICA/PNUD, 2011).

3. Impunidad ante la gran mayoría de hechos de violencia, se estima que solo 18.5% de los casos denunciados y remitidos a investigación en 2010 fueron judicializados²⁵⁴.
4. Violaciones a derechos humanos por agentes del Estado engrosan las estadísticas de violencia en el país.
5. Corrupción y penetración por el crimen organizado de funcionarios y operadores del sector seguridad y justicia, incluyendo Fuerzas Armadas.
6. Armamentismo y fácil disponibilidad de armas sin control o seguridad privada creciente, desbordada y sin control.
7. Relaciones de poder, machismo, homofobia, discriminación, estigma y autoritarismo en la sociedad y gobierno hondureño.
8. Invisibilización de la violencia que afecta a grupos sociales y perfiles de actores sociales con mayor vulnerabilidad.
9. Limitaciones para implementar mecanismos efectivos de diálogo y solución de controversias.
10. Problemas de coordinación interinstitucional
11. Baja formación técnica en los operadores del sector, principalmente en materia de investigación criminal.
12. Falta de universalización de mecanismos para la recepción de denuncias principalmente en lo local, barrios y colonias; y acceso de grupos en situación de mayor riesgo a mecanismos protectores e instancias eficientes y eficaces de recepción y denuncia.
13. Negación de los derechos de las víctimas, ausencia de reparaciones y obstáculos procesales para la participación de la víctima, sus familiares y de las ONG de Derechos Humanos que les representan en los procesos penales.
14. Debilidad en los sistemas de recopilación de datos, información estadística

desarticulada, invisibilización de la violencia contra grupos vulnerables en los sistemas de información y mala calidad de los datos.

15. Falta de procesos de rendición de cuentas sobre el gasto en el sector seguridad y defensa, contra resultados alcanzados por parte de las instituciones públicas hacia la ciudadanía, que vincule el gasto institucional con resultados, indicadores y cumplimiento de derechos humanos.

Matriz sobre el derecho a la seguridad

Resultados de impacto

1. Disminución progresiva y sostenida de la violencia, mediante la adopción e implementación de una política pública de prevención de la violencia, que incluya al menos:
 - a. Énfasis en la prevención social integral.
 - b. La solución pacífica de conflictos.
 - c. La cultura de paz.
 - d. La coordinación interdisciplinaria e interagencial.
 - e. Su articulación con la política social.
 - f. La garantía de la participación de las comunidades y la sociedad civil.
 - g. El abordaje de las vulnerabilidades de grupos sociales con riesgos específicos.
 - h. Las oportunidades de integración social de sectores expuestos a la cooptación por redes criminales o propensas a la reincidencia.
 - i. La creación o fortalecimiento de institucionalidad especializada para rectorar y desarrollar dicha política.
2. Las víctimas de la violencia, del delito y de violaciones de los derechos humanos tienen acceso a instituciones de seguridad

²⁵⁴ En 2010, de un total de 68,846 denuncias recibidas, 56,089 (81.5%) fueron remitidas a DNIC para investigación, pero solo 12,154 (21.7%) fueron devueltas

al MP con informe y 10,372 (18.5%) alcanzaron requerimiento fiscal. Fuente: Ministerio Público de Honduras.

y justicia asequibles, creíbles y con capacidad de investigar, procesar y sancionar en forma rápida, con calidad y capacidad de restituir o resarcir los derechos violentados.

3. Reducción sostenible de la violencia institucional mediante la supresión de normas y prácticas que entrañan la violación de derechos por agentes del Estado o por particulares cuando exista negligencia, falta de control estatal, tolerancia o complicidad.

Indicadores de impacto

1. Tratados internacionales relativos a la seguridad ratificados o armonizados, fecha de entrada en vigor del tratado o la armonización legislativa nacional.
2. Creación y funcionamiento de institucionalidad pública especializada para asegurar la prevención social de la violencia, su planificación implementada y su presupuesto con un enfoque de derechos humanos.
3. Tiempo y cobertura del marco de políticas públicas para la protección de los derechos de las víctimas de delitos y de manera diferenciada a grupos vulnerables.
4. Tiempo y cobertura del marco de políticas públicas para la responsabilidad del Estado y sus servidores por actos de abuso de poder y violaciones de derechos humanos.

Indicadores estructurales

1. Ley de prevención social de la violencia y armonización de la estructura institucional para rectorarla aprobada y publicada en *La Gaceta*.
2. Plan nacional de prevención social de la violencia oficialmente aprobado.
3. Dictado de leyes antidiscriminación que protejan de la violencia a los distintos grupos vulnerables de manera

diferenciada en el plano administrativo y penal.

4. Revisión de la normativa y directrices sobre seguridad privada y su estandarización a las recomendaciones a Honduras del grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios.
5. Reforma de la legislación sobre armas de fuego con un enfoque preventivo y que desaliente el armamentismo como forma de solución de conflictos.
6. Revisión del marco jurídico con miras a la derogación de normas que alientan la violencia contra grupos, especialmente en el Código Penal y Procesal Penal, Ley de Policía y de Convivencia Social, Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, decretos de concesiones de recursos naturales y otras para los mismos fines.
7. Dictado de leyes especiales de promoción de igualdad de oportunidades en el plano social, cultural, económico, político a grupos vulnerables a la violencia.
8. Derogación de obstáculos y dictado de normativa afirmativa para el acceso a la justicia a víctimas de delitos y el castigo de graves violaciones a derechos humanos, especialmente en el Código Penal, Procesal Penal, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley del Ministerio Público y otras relacionadas.
9. Dictado de ley especial de reparación a las víctimas por violación de los derechos humanos.
10. Revisión y armonización con un enfoque de derechos humanos del marco institucional de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y de las instancias de coordinación sectorial en seguridad y justicia.

Indicadores de proceso

1. Política pública y plan nacional de prevención social oficialmente aprobado, con recursos y en ejecución

gradual y creciente. Número y tipo de programas de prevención realizados por año. Cantidad de recursos públicos destinados por año a la implementación del plan.

2. Número anual de denuncias y tasas desagregadas por tipos de delitos, y número de crímenes contra mujeres, jóvenes, niños y niñas, grupos étnicos, personas de diversidad sexual, defensoras y defensores y profesionales especialmente vulnerables.
3. Número de denuncias de victimización, tiempo de tramitación en cada nivel,

organismos especializados de investigación creados o apoyados técnica y presupuestariamente; nivel de satisfacción de víctimas de grupos vulnerables y víctimas de violaciones de los derechos humanos.

4. Proporción de agentes y funcionarios y funcionarias denunciados, investigados, sancionados administrativamente y condenados penalmente por violaciones contra los derechos humanos.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la seguridad en la legislación.				
1	Incorporar a la Constitución de la República y Código Penal el derecho a la verdad y la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos o de lesa humanidad (S).	2016-2017	Congreso Nacional de la República	
2	Armonizar a estándares internacionales la normativa constitucional y nacional sobre responsabilidad del Estado y sus servidores, especialmente en los delitos de desaparición forzada de personas y tortura (S.)	2016-2019	Congreso Nacional de la República	
3	Revisión de la Ley de Policía y Convivencia Social. (R.1 Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, No. 145. No. 14).	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Seguridad
4	Creación de un marco jurídico para la prevención integral de la violencia, que defina la estructura institucional especializada encargada de rectorar, armonizar, coordinar y operativizar las políticas públicas y planes en esta materia y cuente con recursos necesarios para su funcionamiento: estudio de armonización con instancias preexistentes; formulación participativa y validación; aprobación legislativa; instrumentación, apoyo financiero e implementación. (E. CIDH Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009, párr. 41; PC Propuesta	2013-2013	Secretaría del Interior y Población -SEIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional de Prevención y Convivencia, Consejo Nacional de Seguridad Interna - CONASIN, Asociación de Municipios de Honduras - AMHON, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Finanzas

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	de Lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad, doc. 120, p. 41).			
5	Fortalecimiento del marco de ley para el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que trabajan en la prevención de la violencia, la promoción y defensa de los derechos humanos (en su sentido amplio).	2015-2017	Secretaría del Interior y Población -SEIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Congreso Nacional de la República.
6	Formular propuesta de derogación de la legislación contraria a los fines de prevención social para la seguridad ciudadana o que alientan la discriminación y la violencia contra grupos sociales.	2015-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República , Secretaría de Seguridad
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	<p>El diseño programas y proyectos nacionales, municipales y locales de convivencia y prevención, rehabilitación o reintegración de la violencia y la delincuencia con enfoque de derechos humanos , con participación social y del sector privado. Estos programas deberán atender proyectos y acciones prioritarias como las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disminución del consumo de alcohol y drogas; 2. Prevención, rehabilitación y reintegración con la niñez y la juventud en la calle, maras y pandillas y en centros de internamiento; 3. Programas para la prevención de la violencia en centros educativos (con la participación de maestros, padres y madres de familia y la comunidad); 4. Prevención de la violencia en los establecimientos de trabajo; 5. Prevención de la violencia en espectáculos deportivos; 6. Prevención situacional mediante la habilitación de espacios lúdicos infantiles-juveniles y comunitarios libres de violencia, gratuitos y con el equipamiento pertinente; 7. Programas especializados de prevención de la violencia que afecta a grupos de riesgo: mujeres, grupos campesinos, pueblos indígenas y afrohondureños, diversidad sexual, comunicadores y periodistas, privados de libertad, migrantes, PVVIH. <p>(PP Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-</p>	2015-2016	Secretaría de Seguridad	Instituto Nacional Agrario - INA, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Secretaría de Educación , Organizaciones Ciudadanas

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	2022, 109, p. 7; Recomendaciones a Honduras EPU; Observaciones finales del Comité contra la Tortura, mayo de 2009, 145, p. 19; Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, mayo de 2007; Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud, doc. 27, p. 20, 2.3).			
2	<p>Ejecutar programas y proyectos nacionales, municipales y locales de convivencia y prevención, rehabilitación o reintegración de la violencia y la delincuencia con enfoque de derechos humanos, con participación social y del sector privado. Estos programas deberán atender proyectos y acciones prioritarias como las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disminución del consumo de alcohol y drogas; 2. Prevención, rehabilitación y reintegración con la niñez y la juventud en la calle, maras y pandillas y en centros de internamiento; 3. Programas para la prevención de la violencia en centros educativos (con la participación de maestros, padres y madres de familia y la comunidad); 4. Prevención de la violencia en los establecimientos de trabajo; 5. Prevención de la violencia en espectáculos deportivos; 6. Prevención situacional mediante la habilitación de espacios lúdicos infantiles-juveniles y comunitarios libres de violencia, gratuitos y con el equipamiento pertinente; 7. Programas especializados de prevención de la violencia que afecta a grupos de riesgo: mujeres, grupos campesinos, pueblos indígenas y afrohondureños, diversidad sexual, comunicadores y periodistas, privados de libertad, migrantes, PVVIH. <p>(PP Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022, 109, p. 7; Recomendaciones a Honduras EPU; Observaciones finales del Comité contra la Tortura, mayo de 2009, 145, p. 19; Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, mayo de 2007; Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud, doc. 27, p. 20, 2.3).</p>	2017-2022	Secretaría de Seguridad	Instituto Nacional Agrario - INA, Secretaría de Educación, Organizaciones Ciudadanas

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Desarrollar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria con niños y adolescentes en situación de riesgo social (S).	2017-2022	Secretaría de Seguridad	Instituto Nacional Agrario - INA, Secretaría de Educación, Organizaciones Ciudadanas
4	Establecer políticas en materia de prevención del armamentismo; se propenderá por la reducción de la circulación y el uso de estas armas en el país. La estrategia debe buscar la sensibilización social sobre el riesgo que representa la posesión y el uso de armas de fuego, así como la destrucción de los excedentes. Intensificar estrategias de registro, control o destrucción de armas con el fin de disminuir los altos índices de violencia letal por armas de fuego. (Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022, doc. 109, p. 38).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Policía Nacional, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
5	Fortalecimiento de direcciones de justicia municipal, unidades de mediación y conciliación, la Unidad de Solución de Conflictos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, las consejerías de familia, la jurisdicción de violencia doméstica y en general los distintos mecanismos alternativos que buscan la resolución de conflictos. Incentivar la creación de la figura de facilitadores judiciales (consejeros) a nivel comunitario. (S. y Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022, doc. 103, p. 40).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Congreso Nacional de la República, Secretaría del Interior y Población - SIP, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Asociación de Municipios de Honduras - AMHON
6	Revisar los planes de acción y políticas públicas referentes a la niñez y los planes de trabajo de los mismos; vigilar eficazmente su ejecución y fortalecer la incorporación de los módulos sobre temas de niñez en las encuestas nacionales (doc. 143, Pág. 79) (Grupo sociedad civil)	2015-2015	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Organizaciones de Sociedad Civil, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística - INE
7	Evaluar con un enfoque de derechos humanos y convivencia social el Programa Municipio Seguro e incorporar ajustes a partir de las recomendaciones obtenidas (S).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Asociación de Municipios de Honduras - AMHON
8	Implementar estrategias que reorienten el papel de los medios de comunicación hacia la	2015-2022	Secretaría de Seguridad	Medios de Comunicación

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	formación de valores y hagan efectiva su integración a las acciones de prevención de la violencia. (Bases de la Política Integral de Seguridad Pública y Ciudadana (doc. 115, pp. 32-33).			
9	Generar un programa integral, universal, coordinado y permanente de prevención de la violencia contra las mujeres, enfocado a los cambios culturales y dirigido al ámbito familiar, institucional, comunitario y público.	2013-2021	Instituto Nacional de la Mujer - INAM	Secretaría de Seguridad , Ministerio Público , Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Salud
10	Realizar una planeación y un presupuesto anual de las instituciones públicas con enfoque de derechos humanos.	2013-2021	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN	Secretaría de Finanzas, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
11	Elaborar una política integral de convivencia y seguridad ciudadana, que incluya aspectos sobre prevención, rehabilitación y reinserción social, y esfuerzo a nivel nacional, regional y local.	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Secretaría del Interior y Población - SEIP, Asociación de Municipios de Honduras - AMHON, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA
12	Implementar una política integral de convivencia y seguridad ciudadana, que incluya aspectos sobre prevención, rehabilitación y reinserción social, y esfuerzo a nivel nacional, regional y local.	2014-2021	Secretaría de Seguridad	Secretaría del Interior y Población - SEIP, Asociación de Municipios de Honduras - AMHON, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA
13	Los programas de prevención social que se implementen considerarán generar modelos piloto de intervención familiar que potencien los recursos familiares de los niños, niñas y adolescentes de manera que participen	2013-2014	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA	Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	activamente de la corresponsabilidad que tienen en el cuidado de sus hijos e hijas. (Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022 (doc. 109, p. 37) (2) (4).			
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Realizar cursos de capacitación y sensibilización entre los servidores públicos de una cultura de paz, no discriminación y de erradicación del estigma, el racismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia y otras conductas que promueven la violencia (S).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad, Alcaldías Municipales, Secretaría de Educación, Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA
2	Establecer un programa de formación y especialización permanentes a todos los niveles para servidores de instituciones públicas relacionados con la aplicación de medidas abusivas y arbitrarias en sus acciones de prevención, disuasión y control de hechos, investigación y enjuiciamiento de delitos y violaciones de los DDHH.	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Educación, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Organizaciones de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
3	Desarrollar un programa nacional de formación entre los maestros y docentes que facilitarán el currículo de derechos humanos (S).	2013-2021	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
4	Dictar protocolos, recomendaciones de autoridad, autos acordados y otros que aseguren la asunción de prácticas para garantizar la participación de las víctimas y sus familiares durante las investigaciones y procesamiento de los juicios, en especial a favor de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales que les representen (S).	2013-2014	Secretaría de Seguridad	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV
5	Establecer estándares de calidad y protocolos de atención, en los centros de internamiento de las y los menores.	2014-2021	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Readecuación del sistema de justicia penal juvenil en su capacidad de desarrollar programas que sustituyan el castigo por la restauración del daño causado: sistema de responsabilidad penal juvenil (políticas de rehabilitación o reinserción social) (S).	2016-2022	Corte Suprema de Justicia	Ministerio Público, Secretaría de Seguridad
2	Realizar estudio de viabilidad para crear un organismo especializado de investigación de casos de violaciones de derechos humanos y de un organismo judicial especializado para juzgamiento.	2015-2015	Corte Suprema de Justicia	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
3	Aplicar un sistema de selección de jueces y demás miembros del sector justicia, con base a méritos y a la conducta en la vida pública y privada. (Plan de Gobierno 2010-2014, doc. 113, p. 55.)	2013-2021	Corte Suprema de Justicia	Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial - DIECP

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
4	Controlar la solvencia de los responsables, accionistas y ejecutivos de las empresas de seguridad privada, así como de todos sus empleados, con el fin de asegurarse de que no han estado implicados anteriormente en violaciones de derechos humanos (RI Recomendaciones a Honduras, grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios, doc. 148, 73e).	2013-2014	Secretaría de Seguridad	de Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Policía Nacional
5	Promoción de los derechos humanos de los profesionales y agentes del sistema de seguridad pública mediante la garantía de sus derechos humanos, especialmente salario y seguridad social digna, equipamiento para la protección individual adecuado, formación profesional de calidad y continua en todos los niveles, asistencia legal gratuita y de calidad por actos legítimos del servicio y derecho a la defensa, entre otros (S).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	de Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Ministerio Público, INJUPEMP, BANPROVI, Congreso Nacional de la República.
6	Favorecer estrategias de articulación de diferentes instancias para la prevención y erradicación de la violencia en general y la que afecta a colectivos sociales especialmente vulnerabilizados; con participación social, comunitaria y empresarial (S).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	de Consejo Nacional de Seguridad Interna - CONASIN, CNSC, Alcaldías Municipales , Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH, Instituto Nacional de la Mujer- INAM
7	Establecer una red de información permanente sobre el trabajo que se realiza en prevención en el país con posibilidad de acceso, intercambio y asistencia de experiencias regionales y mundiales más significativas. (Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad (doc. 120, p. 40; doc. 120, p. 43) (2) (3).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	de Consejo Nacional de Seguridad Interna - CONASIN , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Alcaldías Municipales, Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH, Instituto Nacional de la Juventud - INJ
8	Desarrollar estudio de la legislación que incentiva el estigma y la violencia.	2015-2015	Secretaría de Justicia	de Congreso Nacional de la República , Comisionado Nacional

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	(RI Informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, misión a Honduras, doc. 147, p. 103; RI doc. 152, pp. 85; RI Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, doc. 143,11, 32). Honduras Examen Periódico Universal, doc. 152. pp. 81.1, 83.8, 82.81; PC Proceso de Incidencia Nacional e internacional en Defensa de los Derechos Humanos de las LGBT, Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad (doc. 120, p. 40) (doc. 120, p. 43) (2) (3). E. Diagnóstico del Estado de la Situación de la Violencia contra la Mujer en Honduras, INAM y otros.		Derechos Humanos	de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Organizaciones de Derechos Humanos
9	Realizar un estudio exhaustivo, referente a todas las personas menores de 18 años, desglosados por sexo y los grupos de niñas y niños que necesitan protección especial, con inclusión de las quejas, las investigaciones, los juicios y las condenas en casos de tortura y malos tratos, violencia entre reclusos, trata de personas y violencia doméstica y sexual. (doc. 145, Pág. 26; doc. 143, p. 22; doc. 141, Pág. 40).	2016-2018	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Alcaldías Municipales.
10	Analizar el fenómeno de la violencia contra grupos especialmente vulnerables, investigando en profundidad las intersecciones de edad, género, etnia, condición social y otras que permitan identificar el cruce con otros factores que generan la violencia como la discriminación, subordinación, exclusión y pobreza (S).	2013-2021	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH	Secretaría de Seguridad, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría del Interior y Población - SEIP, Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Instituto Nacional de la Mujer - INAM
11	Dotar de capacidades humanas y recursos técnicos para que cada municipio hondureño elabore, aplique y evalúe obligatoriamente un plan municipal para la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia y el delito. (Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad (doc. 120, p. 40; doc. 120, p. 43) (2) (3).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Asociación de Municipios de Honduras - AMHON, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
12	Establecer mecanismos de monitoreo para que se cumpla el debido proceso y respeten sus derechos y vigilar que tengan un contacto regular con sus familias mientras estén bajo custodia del sistema de justicia de menores, en particular notificando a sus progenitores (doc. 143, Pág. 81)	2014-2021	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia -IHNFA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
13	Fortalecer el Observatorio de los Derechos de la Niñez, como competencia de las instituciones especializadas en niñez, para el desarrollo de un sistema eficaz de recopilación que abarque todos los datos estadísticos pertinentes para vigilar la aplicación de la Convención a nivel nacional.	2014-2016	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Alcaldías Municipales.
14	Desarrollar continuamente sistemas nacionales y locales de recopilación de datos e información desagregados, oportunos, sensibles a los DDHH y con alta credibilidad. (PP Visión de País y Plan de Nación, doc. 108, p. 84; Bases de la Política Integral de Seguridad Pública y Ciudadana, doc. 115, p. 15; Informe general de las consultas regionales en el marco del proceso de diseño de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Justicia y Derechos Humanos).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Observatorio de la Violencia

Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.

1	Desarrollo de capacitación de la ciudadanía y de agentes estatales sobre la derogatoria de la legislación contraria a la prevención social de la violencia y la discriminación de grupos sociales.	2015-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia
2	Implementar mecanismos de consulta y concertación entre las instituciones estatales y las formas organizadas de la sociedad civil ad hoc o en forma permanente, como son la Mesa Sectorial de Seguridad y Justicia, el Consejo de Seguridad Interior, la Comisión Interinstitucional de Justicia penal, la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, la Comisión de Justicia Penal y el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. (Bases de la Política Integral de Seguridad Pública y Ciudadana, doc. 115, p. 25).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
3	Incorporar a los padres y madres de familia, maestros de educación, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación social,	2014-2015	Instituto Hondureño de la	Asociación de Municipios de Honduras - AMHON,

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	empresa privada, iglesias, los grupos sociales directamente afectados por la violencia en la red de protección social en las comunidades, principalmente las más afectadas por la violencia. (Plan de Oportunidades para la Niñez y la Adolescencia 2005-2015 (S).		Niñez y la Familia - IHNFA	Gobiernos Locales, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Secretaría de Educación.
4	Incentivar procesos de organización social y política, tanto de las mujeres como de los hombres, que demuestren conciencia, solidaridad y prácticas efectivas para prevenir, atender y repudiar la violencia, como un mecanismo de control y subordinación de las mujeres. (Diagnóstico del Estado de la Situación de la Violencia contra la Mujer en Honduras, INAM 2012, 60, p. 74.)	2013-2021	Instituto Nacional de la Mujer - INAM	Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Salud.
5	Fortalecimiento de políticas públicas para el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que trabajan en la prevención de la violencia, la promoción y defensa de los derechos humanos, en su sentido amplio.	2013-2014	Secretaría del Interior y Población - SEIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Realizar campañas de sensibilización para fomentar en la sociedad una cultura de paz, apego a la no violencia, no discriminación y de erradicación del estigma, el racismo, sexismo, la homofobia, xenofobia y otras conductas que promueven la violencia (S).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, Alcaldías Municipales, Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH, Instituto Nacional de la Juventud - INJ, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA
2	Difusión amplia, escrita y a través de medios locales, de los derechos de la población en general y de las víctimas del delito en particular, incluyendo rutas de acceso a justicia y mecanismos de control de las responsabilidades de los funcionarios.	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Incorporar de manera oficial y sistemática el contenido de derechos humanos en los currículos de todo el sistema educativo formal pre básico, básico y superior y no formal (PC).	2013-2021	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal - CONEANFO

Componente: 7 - Lucha contra impunidad de violaciones de derechos humanos y reparación integral.

1	Gestionar ante los operadores de justicia, especialmente ante DNIC, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, la reducción de la mora judicial, fiscal y de investigación policial (DC Ruta Social...)	2013-2015	Secretaría de Seguridad	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
2	Disponer de mecanismos para iniciar de oficio y sin dilación en las distintas regiones del país investigaciones serias, imparciales y efectivas por todos los medios legales disponibles y orientadas a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de delitos, crímenes contra grupos especialmente vulnerables y graves violaciones de los DDHH cometidas por agentes estatales o por particulares con su complicidad o tolerancia (RI Comité contra la Tortura, EPU 83.23, 82.33, 83.25).	2013-2021	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad
3	Operativizar medidas idóneas y que prueben su eficacia para garantizar la protección de la víctima, sus familiares, el denunciante, los testigos y de los operadores de justicia (policías, jueces, fiscales, etc.). (Plan de Gobierno 2010-2014 (doc. 113, p. 55).	2013-2021	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Congreso Nacional de la República , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
4	Disponer a las víctimas de los crímenes de asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, prestando atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos (RI EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.81).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Salud, Ministerio Público, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Fideicomiso de Tasa de Seguridad.
5	Intensificar acciones de política pública para la reparación, indemnización justa y adecuada y la rehabilitación integral de las víctimas de delitos en general y en particular de violaciones a derechos humanos (énfasis en justicia restaurativa) (S).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Procuraduría General de la República - PGR, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Finanzas, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.				
1	Hacer del proceso de elaboración de informes para los diferentes tratados de derechos humanos una oportunidad para la rendición de cuentas a nivel interno, la participación de todos los actores públicos responsables de implementar las recomendaciones, la participación de las organizaciones de la ciudadanía y la promoción de los derechos, las obligaciones del Estado y las responsabilidades de terceros con los mismos y la discusión amplia de los retos hacia el futuro. (RI Observaciones finales del Comité contra la Tortura, mayo de 2009, p. 30; Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mayo de 2011, 41, 54; Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, agosto de 2007, 33; Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, mayo de 2007, 87).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretarías de Estado, otras Instituciones, Organizaciones de Derechos Humanos
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Creación de un marco jurídico para la prevención integral de la violencia, que defina la estructura institucional especializada encargada de rectorar, armonizar, coordinar y	2013-2013	Secretaría del Interior y Población -SEIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional de Prevención y

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	operativizar las políticas públicas y planes en esta materia y cuente con recursos necesarios para su funcionamiento: estudio de armonización con instancias preexistentes; formulación participativa y validación; aprobación legislativa; instrumentación, apoyo financiero e implementación. (E. CIDH Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009, párr. 41; PC Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad, doc. 120, p. 41).			Convivencia, Consejo Nacional de Seguridad Interna - CONASIN, Asociación de Municipios de Honduras - AMHON, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Finanzas
2	Formular propuesta de derogación de la legislación contraria a los fines de prevención social para la seguridad ciudadana o que alientan la discriminación y la violencia contra grupos sociales.	2015-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Seguridad
3	Desarrollar estudio de la legislación que incentiva el estigma y la violencia. (RI Informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, misión a Honduras, doc. 147, p. 103; RI doc. 152, pp. 85; RI Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, doc. 143,11, 32). Honduras Examen Periódico Universal, doc. 152. pp. 81.1, 83.8, 82.81; PC Proceso de Incidencia Nacional e internacional en Defensa de los Derechos Humanos de las LGBT, Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad (doc. 120, p. 40) (doc. 120, p. 43) (2) (3). E. Diagnóstico del Estado de la Situación de la Violencia contra la Mujer en Honduras, INAM y otros.	2015-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Organizaciones de Derechos Humanos
4	Operativizar medidas idóneas y que prueben su eficacia para garantizar la protección de la víctima, sus familiares, el denunciante, los testigos y de los operadores de justicia (policías, jueces, fiscales, etc.). (Plan de Gobierno 2010-2014 (doc. 113, p. 55).	2013-2021	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas.

DERECHO A LA INTEGRIDAD Y LIBERTAD PERSONAL

Marco Normativo

Los derechos a la integridad y a la libertad personal constituyen derechos que demuestran la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, pues ellos suelen denominarse derechos necesarios para ejercitar otros derechos.

Ambos derechos se encuentran regulados en los artículos 5, 7 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos, artículos 7, 8, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 37, 39 y 40 de la Convención Internacional de los derechos del Niño; artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; artículos 16 y 17 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; artículo 10 del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y los artículos 5,7, 8 del Estatuto Corte Penal Internacional.

Además hay una serie de tratados internacionales que hacen alusión de manera específica a la protección de la integridad personal y que sancionan como crímenes de lesa humanidad las graves violaciones a derechos humanos que atentan contra la vida, integridad personal y libertad personal, nos referimos específicamente a la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar Tortura; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas otros instrumentos internacionales relacionados son el Código de Conducta para Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por las Naciones Unidas en septiembre de 1990.

Contenido de los derechos

La libertad personal y la integridad son dos derechos íntimamente relacionados. Por un lado, nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Por otra parte, todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad lo cual implica el derecho a no ser sometida o sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

a) El derecho a la integridad personal implica el respeto por la vida de la persona en su aspecto físico, moral y mental, en otras palabras es el derecho al resguardo de la persona humana y su dignidad en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. Este derecho forma parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos ni aún en casos de guerra, peligro público u otras amenazas, o emergencias que amenace la independencia o seguridad del Estado.²⁵⁵

El derecho a la integridad personal está integrado por la prohibición de torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, la regularización del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado encargados de hacer cumplir la ley y el orden, la restricción de

²⁵⁵ Artículo 27.2, Convención Americana de Derechos Humanos.

practicar exámenes médicos cuando la persona no los autorice y la prohibición de amenazas.

La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, y la desaparición forzada son obligaciones de *jus cogens* internacional, es decir, normas de derecho imperativo que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que le sea contrario será declarado como nulo. La gravedad de conductas como la tortura pueden generar responsabilidad penal internacional de sus perpetradores pues da lugar a la jurisdicción universal y las responsabilidades en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y son hechos además imprescriptibles.

Siguiendo estas ideas la prohibición absoluta de la tortura y trato cruel, inhumano o degradante, es consagrada de manera específica en las siguientes normas internacionales:

Artículo 2, numerales 2 y 3 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que a la letra establece: "... 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura, y 3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura".

De igual manera en el artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar Tortura, determina que: "No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia,

²⁵⁶ Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Aprobadas por el Consejo Económico y Social. Resoluciones 663C (xxiv), del 31 de julio de 1957, y 2076 (lxii), del 13 de mayo de 1977, regla 31.

conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.- Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura".

Igualmente la regla 31 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos determina que: "Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias²⁵⁶."

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en su jurisprudencia ha determinado que se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito, entre ellos, la investigación de delito²⁵⁷. De esta manera, es imprescindible compatibilizar la normativa nacional a la definición de los tratados y la jurisprudencia internacional en relación a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, subraya que cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados miembros garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Otra dimensión de particular importancia en el contenido del derecho a la integridad personal, es lo referente al monopolio del Estado del uso de la fuerza. Con el fin de cumplir su misión,

²⁵⁷ Corte IDH, *Caso Bayarri Vs. Argentina*. Sentencia del 30 de octubre de 2008, Serie C No. 187, párrafo 88

las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley²⁵⁸ ejercen poderes que constriñen derechos como el poder del arresto, la detención, el registro e incautación, y el uso de la fuerza y de armas de fuego.

Estos poderes monopólicos deben ser estrictamente controlados y transparentado su uso y de acuerdo a los estándares y jurisprudencia internacionales utilizados de manera excepcional, pues el uso de la fuerza o de armas de fuego para hacer cumplir la ley es, obviamente, una medida extrema que debe estar en plena relación con la consagración del derecho a la vida como derecho humano fundamental, absoluto e irreductible.

En el caso del uso de la fuerza la doctrina ha dicho que el uso de la fuerza por parte de las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional, el último recurso a utilizar y en la medida en que razonablemente sea necesario y siempre para proteger el interés de las personas y sus derechos amenazados. El principio de proporcionalidad del uso de la fuerza tiene que ser respetado²⁵⁹, a la vez que este tipo de intervenciones debe regirse estrictamente por los principios que aseguren la licitud de la actuación de las fuerzas estatales²⁶⁰.

En su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos²⁶¹ la CIDH ha dicho que: “El monopolio estatal del uso de la fuerza tiene particular interés en su relación con el derecho de reunión pacífica, de tal manera que aquella potestad estatal no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por lo cual

la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas y su uso debe ser estrictamente proporcionado, necesario y lícito. Los operativos de seguridad que deben implementarse en estos contextos deben contemplar las medidas de desconcentración más seguras y menos lesivas para los manifestantes”.

Al respecto, la Comisión nos recuerda que: “el derecho de asociación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Comisión observa que un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por su parte, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos²⁶²”.

²⁵⁸ De conformidad con el artículo 1 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.

²⁵⁹ Instituto Interamericano de derechos humanos, IIDH, *Modulo instruccional: derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales*. IIDH, San José, C.R. 2011, pág. 50.

²⁶⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, *Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos*, p.5. OEA/Ser.L/V/II. Doc.57, Washington, 31 de diciembre de 2009 Ítem 114, pág. 47.

²⁶¹ CIDH, *Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos*, cit.

²⁶²

<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/133.asp>

Las normas y los principios de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, aun cuando carecen de la fuerza obligatoria de los tratados internacionales, constituyen orientaciones a la legislación y prácticas en los países, particularmente nos referimos al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y a los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

b) En relación al derecho a la libertad personal implica el derecho de toda persona a disfrutarla y a no ser privada de ella, excepto en los casos y condiciones previamente determinadas por la ley.

La libertad personal es uno de los derechos humanos que puede ser restringido, pero sujeto a una serie de requisitos y controles que deben estar garantizados por el mismo Estado. En general, los órganos de tratados han dicho que toda restricción a cualquiera de los derechos humanos debe ser:

1. Permisible de conformidad con la propia legislación internacional y nacional (principio de legalidad);
2. Necesaria para conseguir objetivos legítimos de protección de los derechos; y
3. Proporcional al logro de dichos objetivos.

Aplicado al caso de la libertad personal, la prisión preventiva de una persona está condicionada: “por garantías que aseguren su comparecencia en el juicio” (fórmula empleada por la C.A.D.H.) o “en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso, para

²⁶³ CIDH, “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. En la misma definición, la Comisión anota que: “Dada la amplitud del anterior concepto, los siguientes principios y buenas prácticas se podrán invocar y aplicar, según cada caso, dependiendo de si se trata de personas privadas de libertad por motivos relacionados con la

la ejecución del fallo” (en palabras del P.I.D.C.P.). Más concretamente el artículo 7 de la Convención Americana dispone en su inciso 5 que: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH ha definido la privación de libertad personal como:

“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria²⁶³. “

Y continua diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH que se entiende entre esas categorías de personas, no sólo a las privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas; sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales, psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para

comisión de delitos o infracciones a la ley, o por razones humanitarias y de protección”. Ver también el Comentario General sobre el artículo 10 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, E/CN.4/1997/34, disponible en <http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/gtsdf/E-CN-4-1997-34.html>.

migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, ha dicho que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado o imputada de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Igualmente, el Tribunal considera que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. La prolongación arbitraria de una prisión preventiva la convierte en un castigo cuando se inflige sin que se haya demostrado la responsabilidad penal de la persona a la que se le aplica esa medida.²⁶⁴

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reiterado que una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, que resulta en un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como la integridad física y a ser tratada con dignidad²⁶⁵.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, destaca que en muchos casos, las detenciones ilegales marcan el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos, que generalmente incluye los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales. La presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es excesivamente prolongada dado que,

²⁶⁴ Corte IDH, Caso Acosta Calderón *vs.* Ecuador, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C, núm. 129, párr. 74 y 75. En el mismo sentido, Corte IDH, Caso Tibi *vs.* Ecuador, Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C, núm. 114, párr. 106 y 180.

a pesar de la presunción, se está privando de la libertad a una persona todavía inocente, castigo severo que legítimamente se impone a las y los que han sido condenados.²⁶⁶

Obligaciones del Estado

Las obligaciones exigibles al Estado para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos a la integridad y libertad personales derivan del contenido mismo de los textos de los tratados internacionales ratificados por Honduras, como igualmente de las medidas sugeridas en la jurisprudencia y en las recomendaciones generales y específicas al país por parte de los órganos de seguimiento a tratados.

Así, algunas de las principales obligaciones que tiene el Estado para preservar tanto el derecho a la integridad como el derecho a la libertad personal, son:

- Obligación del Estado de respetar la integridad física, psíquica y moral a toda persona.
- Prohibición de someter a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Obligación de no privar de la libertad física a ninguna persona, salvo por las causas y en las condiciones establecidas de antemano en la legislación.
- Derecho de la persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
- Derecho de la persona a la presunción de inocencia.
- Prohibición de que las penas puedan trascender de la persona imputada o condenada penalmente.

²⁶⁵ Corte IDH, Caso López Álvarez *vs.* Honduras, Sentencia de 1 de Febrero de 2006, Serie C, No. 141, párrafo 104.

²⁶⁶ CIDH, caso Giménez *c.* Argentina, párr. 80. Véase también la decisión en el caso Pinheiro y Dos Santos *c.* Paraguay, en la que la CIDH considera que la detención prolongada sin condena viola el artículo 8(2) de la Convención Americana y el artículo XXVI de la Declaración Americana, párr. 86 (2002).

- Prohibición de detención en secreto y garantizar que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados.
- Obligación de establecer las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad.
- Obligación de determinar las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad.
- Garantizar que toda persona detenida sea informada de las razones de su detención y notificada lo antes posible de los cargos formulados contra ella.
- Prohibición de detención por deudas.
- Garantizar que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
- Garantizar el acceso de toda autoridad e institución competentes y facultadas por la ley a los lugares de privación de libertad, si es necesario con la autorización previa de una autoridad judicial.
- Garantizar que toda persona detenida o retenida sea llevada, sin demora, ante un juez/a u otro funcionario o funcionaria autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.
- Garantizar que toda persona detenida sea juzgada dentro de un plazo razonable o sea puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
- Garantizar que toda persona detenida o procesada tendrá derecho a asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa.
- Obligación de establecer la prisión preventiva como excepción y condicionada como garantía que aseguren la comparecencia en el juicio.
- Garantizar que toda persona privada de libertad, por sí o por otra persona, pueda recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.
- Garantizar en cualquier circunstancia a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparición forzada, por encontrarse la persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho, a toda persona con un interés legítimo, por ejemplo los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que éste determine sin demora la legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación de libertad fuera ilegal.
- Prohibición de justificación del delito de tortura, tratos crueles, desaparición forzada y otros de lesa humanidad a la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.
- Obligación de sancionar la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la desaparición forzada y otros crímenes contra los derechos humanos en el derecho penal, estableciendo penas severas que tengan en cuenta su gravedad.
- Obligación de adiestramiento de agentes de la policía y de otras y otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.
- Velar porque la formación del personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, del personal médico, de los

funcionarios, funcionarias y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes respecto de la desaparición forzada.

- Obligación de emitir directrices claras y basadas en los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Derecho de toda persona que denuncie haber sido sometida a violaciones a derechos humanos al acceso a la justicia y que el caso sea examinado con celeridad e imparcialmente.
- Obligación de proceder de oficio y de realizar de inmediato una investigación y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal una vez que las autoridades tengan conocimiento que se han cometido violaciones a derechos humanos en particular la tortura y la desaparición forzada.
- Prohibición de admitir como medio probatorio ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio la o el acusado obtuvo tal declaración.
- Crear y mantener uno o varios registros oficiales y expedientes actualizados de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o institución competente, así como de toda persona con un interés legítimo en esa información, por ejemplo las y los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado o abogada.
- Asegurar el derecho de cada víctima a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y

resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida.

- Garantizar el derecho a la reparación integral.
- Adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.
- Garantizar el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.
- Obligación de separar a los procesados de las personas condenadas, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
- Cuando los menores puedan ser procesadas o procesados, deben ser separados de las y los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
- Obligación en los casos en que se alegue que un niño o niña ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño o niña por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño o niña y la importancia de promover la reintegración del niño o niña y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
- Obligación del establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños las niñas no tienen capacidad para infringir las leyes penales.
- Garantizar que siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para

tratar a esos niños o niñas sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños y las niñas sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.

Diagnóstico

En relación a la libertad personal, el aumento del delito y el crimen organizado en el país, ha provocado una expansión de tipos penales, aumento de la duración de las penas y en consecuencia del número de privados y privadas de libertad en un sistema penitenciario que ya venía siendo colapsado, por la obsoleta estructura penitenciaria en el país.

La mora penal y el número de presos sin condena no han logrado reducirse a niveles aceptables en virtud de la declaración de la excepcionalidad constitucional de la prisión preventiva, ante una práctica que tiene al abuso de la misma. Lo paradójico es que esta expansión de la prisionalización se da a diez años de la Reforma Procesal Penal de Honduras implementada una solución al problema del uso predominante de la prisión preventiva como medida coercitiva penal. A octubre de 2012 la población carcelaria había aumentado a 12,186 personas, de las cuales 6,589 estaban bajo prisión preventiva y 5,597 se encontraban cumpliendo condena es decir un 46%.

Como lo han reflejado los trágicos incendios en las cárceles de Honduras de 2004 y de 2012 en el que murieron 472 internos, muchos de ellos estaban privados de su libertad de manera ilegal o arbitraria por falta de garantías procesales en los procesos de captura policial y de enjuiciamiento penal; algunos de ellos estaban “guardados” por disposiciones policiales mientras se le pasara los efectos de bebidas alcohólicas; otros como resultados de procesos penales basados en denuncias anónimas o en meras sospechas. Otros permanecen presos por falta de defensa adecuada sea pública o privada.

En los centros de detención de menores y de mujeres sucede de manera similar. Más grave es la situación de 53 menores de edad (niños y niñas) guardando “medidas cautelares” en once cárceles locales, contrario a la prohibición constitucional y la Convención de los Derechos del Niño.

En todos los casos las condiciones de internamiento se caracterizan por el hacinamiento, la deficiente infraestructura carcelaria, la violencia mortal en las cárceles, la corrupción y tráfico de los derechos de las y los internos; la falta de reglas sobre el personal penitenciario, la ausencia de medidas de reinserción y rehabilitación, la aplicación de castigos constitutivos de actos de trato cruel e inhumano e incluso torturas, entre otros. De los 24 centros penitenciarios que hay en el país, 23 no reúnen los requisitos de seguridad e infraestructura para cumplir con su propósito; y de estos, nueve son un peligro letal porque ya colapsaron como por ejemplo en la cárcel de San Pedro Sula, hay un hacinamiento del 160% y en Puerto Cortés es del 170%. La ONU sostiene que los márgenes aceptables son 120%, más arriba de ese número se considera una situación “peligrosa”²⁶⁷.

²⁶⁷ <http://archivo.elheraldo.hn/A1%20Frente/listado-nota/Ediciones/2011/03/09/Noticias/Honduras->

[triplica-media-sugerida-en-penitenciaras, y ver http://www.laprensa.hn/Publicaciones/Series-de-](http://www.laprensa.hn/Publicaciones/Series-de-)

De igual manera, con la puesta en vigencia de la Ley de Policía y Convivencia Social, la Policía Nacional ha aumentado sus posibilidades de arresto administrativo por meras sospechas y sin que exista control interno, ni externo sobre la legalidad de esas detenciones. Figuras como la vagancia o el pandillerismo pernicioso están vigentes a la usanza de las doctrinas obsoletas de la defensa social del siglo XVIII. El abuso del arresto policial ha implicado casos que han desembocado en desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales (ver sentencia Corte IDH Caso Cuatro Puntos Cardinales contra Honduras).

En materia migratoria año con año entre 300 a 400 migrantes son arrestadas o arrestados y puestos en custodias (muchas veces de duración indefinida hasta que no se consigan medios económicos para la repatriación principalmente de migrantes extra continentales). Estas detenciones no son sujetas de control judicial, ni de ninguna instancia administrativa Estatal.

La práctica de la tortura continua vigente en el país. Datos de la ONG Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura, CPTRT y sus familiares, indagaron en un estudio que entre los años 2004 al 2008 de cada 10 privados de libertad, 7 fueron víctimas de tortura y trato cruel e inhumano, cifra que según la misma fuente aumento en los meses sucesivos al golpe de Estado de 2009. Antes de ese evento entre el 2007 y el primer semestre de 2009 el CPTRT había atendido un promedio mensual de 2.5 casos de tortura, y esta cifra se elevó a 118.75 casos mensuales desde el golpe de Estado.

Los tipos de tortura que ha detectado el CPTRT han incluido la tortura física, psicológica y sexual. De entre estas las más comunes, que

Investigacion/Muerte-ronda-en-penales/Carceles-de-Honduras-en-situacion-extrema

²⁶⁸ CPTRT Informe al Examen Periódico Universal, Tegucigalpa 2010. Página

tanto el CPTRT como organismo internacionales han constado, han comprendido el uso de choques eléctricos en distintas partes del cuerpo, el uso de la capucha (cubrir la cabeza con una bolsa de plástico o camiseta con el objetivo de provocar asfixia), del submarino (hundir la cabeza de la persona en el agua para hacerle creer que se ahogará), del teléfono (producir golpes con objetos contundentes o con choques eléctricos en los oídos con la intención de desorientar a la persona) y del helicóptero (colgar a la víctima de las extremidades, colocarle una “balanza” en los testículos e ir agregando peso en la misma progresivamente)²⁶⁸.

Por otra parte, en el Boletín del Observatorio de la Violencia del IUDPAS, correspondiente al año 2010, se destaca que 699 personas resultaron lesionadas en su integridad producto de la fuerza desproporcionada aplicada por policías, en tanto para el año 2011, el número de casos fue de 432 eventos, de los cuales varios respondían a víctimas múltiples como las lesiones propinadas por agentes estatales en la desmovilización de manifestaciones. Entre el 1 de enero de 2011 al 30 de noviembre de 2012 destaca en otro Boletín Especial el mismo Observatorio que han muerto 149 personas producto de la “acción policial” o militar, el 97.3% de éstos homicidios fueron cometidos por uso de armas de fuego asignadas²⁶⁹.

Matriz sobre el derecho a la integridad y libertad personal

Resultado de impacto

1. Reducción de detenciones arbitrarias e ilegales por órganos facultados para ejercer el monopolio de la coerción legal, con disminución tendiente a la

²⁶⁹ Observatorio de la Violencia, Boletín Especial N.5 sobre Criminalidad Policial enero 2011-30 noviembre 2012, IUDPAS, Tegucigalpa, 2012, página.

erradicación definitiva de prácticas de tortura, trato cruel, inhumano o degradante al momento del arresto, la detención administrativa, el arresto de migrantes, la detención judicial, la prisión preventiva, prisión por sentencia condenatoria, medidas cautelares de niñez infractora, desmovilización de manifestaciones y otras.

Indicadores de Impacto

1. Tratados internacionales relativos a obligaciones del Estado para tutelar la libertad e integridad personal ratificados, fecha de entrada en vigor del tratado.
2. Número y tipo de leyes que previenen y/o sancionan las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y actos de tortura; así como las políticas públicas dictadas en consonancia con las obligaciones internacionales.

Indicadores estructurales

1. Reformado el Código Penal, aprobado y publicado en la Gaceta la tipificación con base a estándares internacionales de desaparición forzada; adecuación tipo penal de tortura, detención ilegal y trata de personas.
2. Reformado y vigente Código Procesal Penal y Código Niñez (capítulo Justicia Penal Juvenil) incorporados medidas alternativas al uso abusivo de la prisión preventiva.

3. Normativa de carácter criminalizante y contrarias a tratados de derechos humanos derogadas.
4. Constitución de la República reformada en materia de derechos humanos.
5. Modificación legislativa aprobada y publicada en la Gaceta.

Indicadores de proceso

1. Políticas Públicas de Órganos con competencia dictadas y tipo de políticas para asegurar el derecho.
2. Número, contenido y resultado de evaluaciones de programas de formación implementados, campañas desarrolladas.
3. Cantidad de recursos destinados por año a la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
4. Estimado promedio de duración prisión preventiva.
5. Número anual de denuncias de detenciones ilegales, desaparición forzada; tortura; trato cruel e inhumano; trata de personas; detención arbitraria; uso de la fuerza ilegal por órganos de seguridad y defensa.
6. Niveles de desempeño de los organismos especializados en investigar, dar seguimiento, acusar y enjuiciar casos de violaciones a derechos humanos por derecho a la libertad e integridad.
7. Proporción de agentes, funcionarias y funcionarios denunciados que han sido sancionados administrativamente, y/o condenados penalmente por actos contra los derechos humanos.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la integridad y libertad personal en la legislación.				
1	Armonización del marco jurídico penal a las recomendaciones de órganos de tratados y las Convenciones internacionales en particular de las inclusiones del tipo penal de desaparición forzada,	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	detención ilegal, tortura; estas dos últimas deficientemente tipificadas.			CONADEH, FEDH , Organizaciones de Sociedad Civil
2	Incorporar la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución de penas en los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y la tortura.	2014-2015	Congreso Nacional de la República	
3	Revisión del Código militar para derogar la legislación paralela sobre tortura. Adecuación de la legislación sobre trata de personas para incluir otros fines para la trata que no sean sexuales. (R.1 Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, CAT/C/HND/CO/1, No. 145. Nos. 7, 11, 13, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, misión a Honduras. Oct. 2007)	2014-2015	Congreso Nacional de la República	
4	Reformas en la legislación procesal penal y de justicia penal juvenil para incorporar medidas de aplicación real como alternativas al uso excesivo de la prisión preventiva, como: la justicia restaurativa, el régimen de prueba, la mediación, el servicio comunitario o las sentencias de ejecución condicional. (R.1 Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, No. 145. No. 14)	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH , Organizaciones de Sociedad Civil
5	Incorporar a la Constitución de la República la prohibición de la práctica de la desaparición forzada.	2014-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Organizaciones de Sociedad Civil.
6	Revisar el artículo 332 del Código Penal (asociación ilícita) con el fin de proveer garantías jurídicas para todas las personas arrestadas o detenidas, sin discriminación. (R.1 Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, No. 145. Nos. 7, 11, 13).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Organizaciones de Sociedad Civil
7	Revisar la legislación que criminaliza las manifestaciones públicas de sectores de oposición	2013-2014	Secretaría de Justicia y	Congreso Nacional de la República , Comisionado

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	o a manifestantes de demandas ciudadanas: Revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita, la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial, la Ley de policía y convivencia social, y la Ley de estado de sitio. (R.I. Informe Oficina ACNUDH, marzo 2010, 85a).		Derechos Humanos	Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Organizaciones de Sociedad Civil
8	Regular que las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil -evitando abusos de poder y actos de uso ilegal de la fuerza. (Informe 2011, Título IV CIDH Honduras Doc.161, pp8).	2013-2013	Secretaría de Defensa	Secretaría de Seguridad
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Diseñar una política penitenciaria nacional, dotando adecuadamente de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y logísticos al nuevo Instituto Penitenciario Nacional. La política penitenciaria deberá coordinarse con la política criminal especialmente en lo relativo a mora judicial y la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento. En particular es urgente que esa política incorpore: a) Medidas para prevenir la violencia en las prisiones. b) Combatir con decisión y firmeza la corrupción en las prisiones c) La renovación de la infraestructura de las prisiones y otros centros de detención que ha causado pérdida de vidas humanas. d) Condiciones dignas en relación a suficiencia y calidad alimenticia, condiciones de salud, sanitarias, reglamentación interna estandarizada a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas; separación entre presos preventivos y condenados, entre mujeres y hombres, y garantizar el no ingreso de niños a cárceles de adultos; así como en las celdas de la policía. Tomar especial atención de personas con discapacidades o enfermedades mentales, o enfermedades en fase terminal. (S. Con base R.I. CAT/C/HND/CO/1 página 7, Observaciones finales del Comité contra la Tortura, No. 145. 16 y 17; A/HRC/4/40/Add.4, página 26).	2014-2021	Instituto Nacional Penitenciario	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad , Secretaría del Interior y Población - SEIP

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Instaurar el mecanismo de registro único de privados de libertad de conformidad a las indicaciones y estándares internacionales que permita controlar la legalidad de las detenciones.	2013-2014	Instituto Nacional Penitenciario	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV, Secretaría de Seguridad
3	Diseñar estrategia para el adecuado registro obligatorio de los libros foliados y sellados por una instancia superior de los libros de incidencias o novedades de las distintas estaciones de policía, militares, penitenciarias. (S.)	2013-2013	Secretaría de Seguridad	Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras, Instituto Nacional Penitenciario, Secretaría de Defensa
4	Asegurar el uso obligatorio durante actos de servicio de las tarjetas, ficheros y demás distintivos de identificación del personal policial, militar, penitenciario. (S.)	2013-2013	Secretaría de Seguridad	Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario, Secretaría de Defensa
5	Registro de las armas de fuego de la Policía Nacional y las asignadas a los efectivos de las Fuerzas Armadas que participan en acciones de seguridad ciudadana, por lo que no podrán invocarse causales de seguridad nacional en virtud de su vinculación directa a la relación con la ciudadanía. (S.)	2013-2013	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Defensa, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Policía Nacional
6	Capacitación específica para agentes del orden, jueces, funcionarios de prisiones, especialistas de la salud, psicólogos, sobre la manera de reconocer los indicios de tortura y malos tratos. 15.)	2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
7	Realizar una planeación y presupuestación anual de las instituciones públicas. (S). con enfoque de derechos humanos	2013-2021	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN	Secretaría de Finanzas, Secretarías de Estado, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Programas de formación especializadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre garantías jurídicas de las personas detenidas y privadas de su libertad, incluyendo detenciones por procesos administrativas de policía,	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	jurisdicción de niñez, detención de migrantes, otros.			
2	Implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales (incorporar cárceles de mujeres que suelen ser relegadas de estos procesos), y planes de emergencia y evacuación en caso de incendios u otras catástrofes, en los términos de los párrafos 113 y 114 de esta Sentencia. (R.I. CoIDH Caso Pacheco Teruel y otros, Honduras, Sentencia 27 de abril 2012, Doc.157, pp6 - caso incendio penal SPS.).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
3	Establecer un programa de formación y especialización permanente (teórico-práctico) a servidores de instituciones autorizadas para uso del monopolio de la coerción y la fuerza, especialmente con relación a estándares internacionales, jurisprudencia y prácticas sobre el empleo legal de la fuerza y las armas; y las responsabilidades penales por las violaciones a derechos humanos derivadas de su uso arbitrario e ilegal. (S. Con base en P.P. Recomendación No. 18 de la CVR).	2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
4	Capacitación e implementación con personal de salud del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Protocolo de Estambul) pase a ser parte integrante de la capacitación impartida a los médicos. (R.I. Observaciones finales del Comité contra la Tortura. Mayo 2009, Doc.145, No.	2015	Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Salud
5	Capacitación a las fuerzas de seguridad, los funcionarios de Migraciones y la policía de fronteras sobre las causas, las consecuencias y las repercusiones de la trata y otras formas de explotación (R.I. Observaciones finales del Comité contra la Tortura. Mayo 2009, Doc.145, p 13).	2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Organizaciones de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
6	Elevar las capacidades ciudadanas, mediante cursos de especialización, diplomados, pasantías	2013-2014	Comisión Nacional	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	orientadas a elevar las capacidades de los y las defensores/as, las organizaciones de derechos humanos y en general la sociedad civil sobre una mejor identificación de casos de desaparición forzada, tortura, trata de personas, detenciones ilegales y arbitrarias, reglas de uso de la fuerza (S.)		para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV	
7	Diseñar una guía para los funcionarios autorizados a usar la fuerza en situaciones de arresto, capturas, desconcentración de manifestaciones, basado en la excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad, legalidad y deber de protección de las personas; definiendo criterios sobre tipo y perfil del equipamiento para tales fines, destruyendo e inutilizando de manera definitiva aquel equipo en poder de las instituciones de seguridad de Estado y empresas de seguridad privada que violen los estándares internacionales de derechos humanos para tal fin. Evitando en caso de armas de fuego el uso de armas largas, de munición perforante o de equipamiento de guerra en funciones de seguridad ciudadana. (S.).	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Diseñar una estrategia de fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras, dotándolo adecuadamente de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y logísticos para el desarrollo de su mandato. S.	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Cruels e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Corte Suprema de Justicia
2	Plan de Fortalecimiento de Unidades Especiales de investigación (policial y fiscal) responsables de investigar tortura, desaparición forzada, detenciones ilegales, trata...; dotándolas de medios técnicos, logísticos, presupuestales, humanos y administrativos. (S. con base a R.I. EPU, docto. A/HRC/16/10, párr. 82.67, 82.68); D.C. Propuesta de lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad, doc. 120, pp. 40 y. 43 (2) (3).	2014-2017	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Dirección Nacional de Investigación Criminal - DNIC, Corte Suprema de Justicia

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Fortalecimiento de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial DIECP y las facultades del CONASIN, Jueces de Ejecución; autonomía a la Dirección de Derechos Humanos y Humanitario de las Fuerzas Armadas.	2014-2015	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Defensa.
4	Mejorar la capacidad de investigar profesionalmente denuncias de casos frecuentes de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención, actos de extorsión y ejecuciones cometidos supuestamente por los miembros de las fuerzas de seguridad. (S. con base a Observaciones finales del Comité contra la Tortura, No. 145. 9 y 14)	2014-2015	Secretaría de Seguridad.	Secretaría de Defensa.
5	Elevar el número de defensores públicos y darle carácter a la Defensa Pública de organismo autónomo del Poder Judicial, universalizando sus servicios y la calidad de los mismos. (S. con base a Observaciones finales del Comité contra la Tortura, No. 145. 9)	2015-2018	Corte Suprema de Justicia	Congreso Nacional de la República.
6	Elevar el número de jueces de ejecución que asegure la adecuada vigilancia y garantía de los derechos de los privados de libertad; reducir la duración de la prisión preventiva y las excepciones a la aplicación de las normas que la regulan, así como la prisión previa a la acusación. Asegurar mecanismos de articulación entre jueces de ejecución y CONAPREV. (S. con base a Observaciones finales del Comité contra la Tortura, CAT/C/HND/CO/1 , No. 145. 14)	2015-2018	Corte Suprema de Justicia	Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
7	Incorporar a los sistemas de información de datos de las instituciones del sector justicia y seguridad, observatorios de violencia, servicios de salud y Medicina forense, variables para detectar la presencia de actos de tortura en los casos que conozcan. (S. con base en R.I. Observaciones finales del Comité contra la Tortura, 145 No. 12).	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Observatorio de la Violencia, Ministerio Público , Policía Nacional, Secretaría de Salud, Corte Suprema de Justicia
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Preservar y facilitar información a las víctimas que les permita el acceso a la Corte Penal Internacional (CPI) en razón que algunas de las prácticas cometidas en el marco del golpe de Estado como ejecuciones sumarias o extrajudiciales, tortura y demás que califican entre los tipos penales que son	2013-2013	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	del conocimiento de este instrumento de la justicia universal. Informe de la Comisión de Verdad. (doc. 207, pp. 305).			
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Llevar a cabo campañas anuales de prevención de la tortura, trato cruel e inhumano por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. (S).	2014-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Alcaldías Municipales, Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH
2	Difusión amplia escrita y a través de medios locales de los derechos de la población en general y de las víctimas del delito en particular, incluyendo rutas de acceso a justicia y mecanismos de control de las responsabilidades de los funcionarios. (S.)	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
3	Incorporar de manera oficial y sistemática el contenido de derechos humanos en la curricula de todo el sistema educativo formal pre básico, básico y superior (PC).	2013-2021	Secretaría de Educación	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM
Componente: 7 - Lucha contra impunidad de violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Diseñar e implementar una estrategia para la reactivación de la investigación y castigo de casos de desaparición forzada por violaciones a DDHH en los años 80s. (S. con base a R.I. Observaciones finales del Comité contra la Tortura, 145 No. 11).	2015-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Fiscalía Especial de Derechos humanos - FEDH
2	Disponer a las víctimas y familiares de las víctimas de desaparición forzada, de asistencia material, médica, psicológica, social y protección.	2013-2021	Secretaría de Seguridad	Ministerio Público , Secretaría de Salud, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos,

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
3	Elaborar un programa concreto de asistencia a las víctimas de tortura y malos tratos. (S. Con base en RI Observaciones finales del Comité contra la Tortura, No. 145. 1 y 13 y EPU, docto. A/HRC/16/10, párr. 82.81).	2013-2021	Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes - CONAPREV	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
4	Diseño de programa para la reparación integral, indemnización justa y adecuada de las familias de las víctimas de desaparición forzada, tortura, trata de personas. (S. Con base en RI Observaciones finales del Comité contra la Tortura, No. 145. 1 y 13 y EPU, docto. A/HRC/16/10, párr. 82.81)	2014-2021	Procuraduría General de la República - PGR	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Finanzas, Corte Suprema de Justicia
Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.				
1	Informe periódicos del Ministerio Público, la Procuraduría General, Poder Judicial y Secretaría de Seguridad (Policía Nacional), relacionado con el avance general de los casos que conocen, e informes específicos para la víctima, sus familiares o sus representantes legales; procurando un equilibrio entre el derecho a la verdad y la obligación estatal de asegurar una investigación eficaz y eficiente. (S.).	2013-2022	Ministerio Público	Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República - PGR, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Armonización del marco jurídico penal a las recomendaciones de órganos de tratados y las Convenciones internacionales en particular de las inclusiones del tipo penal de desaparición forzada, detención ilegal, tortura; estas dos últimas deficientemente tipificadas.	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, FEDH, Organizaciones de Sociedad Civil

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Incorporar la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución de penas en los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y la tortura.	2014-2015	Congreso Nacional de la República	
3	Revisión del Código militar para derogar la legislación paralela sobre tortura. Adecuación de la legislación sobre trata de personas para incluir otros fines para la trata que no sean sexuales. (R.1 Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, CAT/C/HND/CO/1, No. 145. Nos. 7, 11, 13, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, misión a Honduras. Oct. 2007)	2014-2015	Congreso Nacional de la República	
4	Reformas en la legislación procesal penal y de justicia penal juvenil para incorporar medidas de aplicación real como alternativas al uso excesivo de la prisión preventiva, como: la justicia restaurativa, el régimen de prueba, la mediación, el servicio comunitario o las sentencias de ejecución condicional. (R.1 Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, No. 145. No. 14)	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Organizaciones de Sociedad Civil
5	Revisar la legislación que criminaliza las manifestaciones públicas de sectores de oposición o a manifestantes de demandas ciudadanas: Revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita, la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial, la Ley de policía y convivencia social, y la Ley de estado de sitio. (R.I. Informe Oficina ACNUDH, marzo 2010, 85a).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Organizaciones de Sociedad Civil
6	Mejorar la capacidad de investigar profesionalmente denuncias de casos frecuentes de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención, actos de extorsión y ejecuciones cometidos supuestamente por los miembros de las fuerzas de seguridad. (S. con base a Observaciones finales del Comité contra la Tortura, No. 145. 9 y 14)	2014-2015	Secretaría de Seguridad.	Secretaría de Defensa.

Marco Normativo

El derecho de acceso a la justicia está reconocido en la Constitución de la República, en los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Honduras, y en varios estándares internacionales sobre situaciones y colectivos específicos. La cobertura de las normas internacionales y nacionales se extiende tanto a la faceta de tutela judicial efectiva como a la de garantía del debido proceso.

La Constitución de la República²⁷⁰ lo protege concretamente en el párrafo segundo del artículo 82, el cual establece que: “los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” y en el primer párrafo del artículo 90, el cual contempla que: “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Además del texto completo de los dos artículos mencionados, este derecho es desarrollado al menos en los artículos 33, 83, 89, 91, 94 y 304 de la ley fundamental hondureña.

El derecho a la justicia se encuentra igualmente contemplado en los instrumentos internacionales ratificados por Honduras, tanto del ámbito universal como del regional interamericano. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos²⁷¹ lo regula en su artículo 14, el cual es explicado ampliamente en la Observación General número 32, relativa al

derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas²⁷². Mientras tanto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo aborda en sus artículos 8 y 25²⁷³. Por su importancia, se reproducen a continuación el artículo 8, que configura la faceta de debido proceso, y el numeral 1 del artículo 25, que resume la dimensión de tutela judicial efectiva del también llamado Pacto de San José:

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
 - a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no

²⁷⁰ Decreto número 131 de la Asamblea Nacional Constituyente, 11 de enero de 1982, Publicado en el diario oficial *La Gaceta*, número 23,612 del 20 de enero de 1982.

²⁷¹ Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2200(XXI), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 16 de diciembre de 1966; Aprobado por Decreto 64-95 del Congreso Nacional el 18 de abril de 1995, Publicado en el diario oficial *La Gaceta*, número 28,293 del 24 de junio de 1997.

²⁷² Emitida durante su XC período de sesiones, 2007.

²⁷³ Adoptado por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Aprobada por Honduras mediante acuerdo número 8 del 22 de noviembre de 1977. Ratificada por Decreto número 523 del Jefe de Estado en Consejo de Ministros el 26 de agosto de 1977. Publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*, número 22,287 del 1 de septiembre de 1977.

- comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
 - b. Comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;
 - c. Concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
 - d. Derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
 - e. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
 - f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
 - g. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y
 - h. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculcado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
 4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 25. Protección Judicial:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Adicionalmente, el derecho a la justicia se encuentra contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño cuyo artículo 40 se refiere a las garantías y procedimientos especiales que habrán de seguirse en el caso de adolescentes en conflicto con la ley; en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial²⁷⁴, que en su artículo 5.a) establece el derecho a la igualdad de tratamiento para todas las personas ante los tribunales y órganos de la administración de justicia; en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT 169)²⁷⁵, cuyos artículos 8, 9 y 12 contemplan, por un lado, la necesidad de respetar el derecho consuetudinario de estos pueblos, y por otro lado, la protección de sus derechos por el ordenamiento nacional, a través de la facilitación de intérpretes u otros medios eficaces.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos²⁷⁶ reconoce el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los

²⁷⁴ Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989. Aprobada por el Consejo Nacional mediante Decreto No. 75-90 del 24 de julio de 1990. Publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*, número 26,259 del 10 de octubre de 1990.

²⁷⁵ Adoptado por la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, el 7 junio de 1989. Aprobado por Decreto No. 26-94 del Congreso Nacional el 10 de mayo de 1994. Publicado en el diario oficial *La Gaceta*, número 27,413 del 30 de julio de 1994.

²⁷⁶ Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A(XXX) del 10 de diciembre de 1948.

tribunales (artículo 8), así como las garantías judiciales de quienes sean acusados en materia penal (artículos 10 y 11). En sentido similar se pronuncia la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre²⁷⁷ en sus artículos 18 y 26.

Para ámbitos más específicos, el de las personas con discapacidades mentales y el de los extranjeros, respectivamente, también contienen disposiciones protectoras en materia de justicia el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental²⁷⁸ y el 5 c) de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No Son Nacionales del País en que Viven²⁷⁹.

Finalmente, el derecho a la justicia es desarrollado por la legislación secundaria nacional, a través de las disposiciones del Código Procesal Penal²⁸⁰, particularmente los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que contienen los principios que inspiran los procedimientos penales, y, los primeros veintidós artículos del Código Procesal Civil²⁸¹ contentivos de los principios que rigen el procedimiento civil. En un ámbito más específico, los artículos 7, 85, 87, 180 al 187, 226, 227, 229, 231 y 243 del Código de la Niñez y la Adolescencia²⁸², contienen regulaciones aplicables al sistema penal juvenil.

Contenido del derecho

El derecho de acceso a la justicia es un derecho complejo, o un conglomerado de derechos. En su faceta de tutela judicial efectiva permite a

toda persona, independientemente de su origen social, posición económica o cualquier otra condición, acceder a los órganos jurisdiccionales para ejercer o defender sus derechos o intereses legítimos, o para resolver los conflictos de los que sea parte. Su protección se extiende a la fase de acceso al sistema judicial, al curso del proceso y a la fase de finalización del mismo, incluyendo el cumplimiento y la ejecución de los fallos. En su dimensión de derecho al debido proceso implica que toda persona acusada criminalmente tiene derecho, al menos, a la presunción de inocencia, a conocer el contenido de la acusación formulada, a que su caso sea conocido por un juez o jueza ordinario cuya competencia haya sido predeterminada legalmente, el derecho a la defensa, la publicidad del juicio y la posibilidad de ejercitar recursos contra las resoluciones judiciales.

Además de un derecho fundamental por mérito propio, el acceso a la justicia es un instrumento para la protección y el ejercicio de los demás derechos humanos. Este rol resulta particularmente relevante con relación al derecho a la verdad, el cual, como lo han reconocido ya varios órganos de los sistemas internacionales de protección, constituye, junto con la justicia, la memoria y la reparación, uno de los pilares de la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos. El derecho a la verdad tiene una doble dimensión, individual, para las víctimas y sus familiares, y colectiva, para que la

²⁷⁷ Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, 1948. Aprobada por Honduras mediante Acuerdo No. 372 del Poder Ejecutivo, el 9 de marzo de 1949. Ratificada por Decreto No. 129 del Congreso Nacional el 14 de marzo de 1949. Publicado en el diario oficial *La Gaceta*, números 13,836 del 22 de junio y 13,837 del 23 de junio de 1949.

²⁷⁸ Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971.

²⁷⁹ Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985.

²⁸⁰ Decreto No. 9-99-E del Congreso Nacional, emitido el 19 de diciembre de 1999. Publicado en el diario oficial *La Gaceta*, número 29,176 el 20 de mayo de 2000.

²⁸¹ Decreto 211-2006 del Congreso Nacional de 22 de enero de 2007. Publicado en el diario oficial *La Gaceta* 31,313 de 26 de mayo de 2007.

²⁸² Decreto No. 73-96 del Congreso Nacional 30 de mayo de 1996. Publicado en el diario oficial *La Gaceta*, número 28,053 de 5 de septiembre de 1996.

sociedad tenga la capacidad de prevenir estos crímenes en el futuro²⁸³.

Obligaciones del Estado

Los derechos humanos suelen generar tres tipos de obligaciones para los Estados: las de respeto, las de protección y las de realización. Las obligaciones de respeto están orientadas, generalmente, a garantizar el ejercicio de las libertades, e implican, por tanto, una conducta de abstención, u obligación negativa, por parte del Estado. Por su lado, las obligaciones de protección se relacionan con la salvaguardia de los derechos humanos ante otros particulares (efecto horizontal de los derechos fundamentales) y se traducen generalmente en regulaciones emitidas por los órganos competentes del Estado. Finalmente, las obligaciones de realización comportan el hacer efectivos los derechos humanos, a través de servicios y prestaciones, deviniendo por tanto obligaciones positivas para el Estado.

En el caso particular del derecho de acceso a la justicia, si bien los Estados no deben crear obstáculos que impidan a las personas acudir ante los tribunales en busca de protección a sus derechos, prevalecen las obligaciones de protección y de realización, en el sentido del artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando manifiesta que: “cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 2 de la Convención

²⁸³ Véase: Consejo de Derechos Humanos, V período de sesiones. El derecho a la verdad: informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 7 de junio de 2007 (Docto. A/HRC/5/7); Asamblea General de la OEA, IV sesión plenaria, 4 de junio de 2009. El derecho a la verdad,

Americana sobre Derechos Humanos. Obviamente, además de la legislación protectora y reguladora, tanto el acceso a un recurso judicial rápido y efectivo como el debido proceso a las y los imputados penalmente sólo pueden hacerse efectivos por medio del establecimiento de un servicio público de justicia independiente y con recursos suficientes para su funcionamiento. En suma, el Estado debe proveer espacios institucionales para el ejercicio de este derecho.

Instituciones públicas con responsabilidades para proteger y hacer efectivo el derecho a la justicia.

Tienen responsabilidades principales en la protección y realización del derecho de acceso a la justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Este último lo hace a través de una serie de servicios auxiliares que diversas secretarías de Estado, instituciones y dependencias prestan al sistema de justicia, entre ellas puede mencionarse: la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad (particularmente a través de la Dirección General de Investigación Criminal y la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos que administra los centros penales del país y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), en lo concerniente a los servicios de rehabilitación y reeducación social de adolescentes en conflicto con la ley.

Adicionalmente, cumplen funciones de acceso a la justicia, desde una perspectiva no jurisdiccional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y los mecanismos que establece la legislación sobre mediación y arbitraje.

A manera puramente indicativa, no exhaustiva, se reproduce a continuación las

(Docto. AG/RES. 2509 (XXXXIX-O/09); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001; y Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Sentencia sobre reparaciones de 22 de febrero de 2002.

secciones pertinentes de algunas disposiciones constitucionales y legales que atribuyen funciones a las tres instituciones con responsabilidad principal en la protección y realización de este derecho.

Artículo 313 de la Constitución de la República. La Corte Suprema de Justicia tendrá las atribuciones siguientes:

1. Dirigir el Poder Judicial en la potestad de impartir justicia.
2. Conocer los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los diputados.
3. Conocer en segunda instancia de los asuntos que las cortes de apelaciones hayan conocido en primera instancia.
4. Conocer de las causas de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme al Derecho Internacional.
5. Conocer de los recursos de casación, amparo, revisión e inconstitucionalidad, de conformidad con esta Constitución y la ley.
6. Autorizar el ejercicio del notariado a quienes hayan obtenido el título de abogado.
7. Conocer en primera instancia del antejuicio contra los magistrados de las cortes de apelaciones.
8. Emitir su reglamento interior y los otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
9. Las demás que le confiere la Constitución y las leyes.
10. Elaborar el proyecto del presupuesto del Poder Judicial conjuntamente con el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y enviarlo por medio del Presidente al Congreso Nacional.
11. Fijar la división del territorio para efectos jurisdiccionales.
12. Crear, suprimir, fusionar o trasladar los juzgados, cortes de apelaciones y demás dependencias previo dictamen favorable del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.”

“Artículo 1 de la Ley del Ministerio Público.

El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente en sus funciones de los poderes y entidades del Estado, el que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes:

1. Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad.
2. Colaborar y velar por la pronta, diligente, correcta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal. Conducir y orientar jurídicamente la investigación de los delitos hasta descubrir los responsables y procurar de los tribunales competentes la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública y de la privada cuando procediere. Será auxiliado en la actividad por la Policía Nacional, quien acatará las directrices que emita en el ejercicio de tales funciones.
4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualquiera de sus formas.
5. Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público, así como el uso legal, racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes.
6. Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, preservación del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos.
7. Proteger y defender al consumidor de bienes de primera necesidad y de servicios públicos.
8. En colaboración con otros organismos públicos o privados, velar por el respeto de los derechos humanos.

El Ministerio Público rendirá informe anual de su gestión al Congreso Nacional de la República.”

“Artículo 64 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) tendrá las atribuciones siguientes:

1) Proceder, de oficio o por orden de las autoridades del Ministerio Público, a investigar los delitos de acción pública, y cuando legalmente procediere o le fuere solicitado, los delitos de instancia particular, previa autorización del ofendido.

[...] 3) Recolectar, asegurar y embalar conforme a la cadena de prueba, los indicios, evidencia y elementos probatorios, efectos, antecedentes y demás elementos necesarios para la investigación de los hechos.

4) Informar inmediatamente al fiscal respectivo, o en su defecto dentro de las seis horas siguientes a la recepción de la información, de cada delito de que tenga noticia.

[...] 9) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares mediante exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones técnicas aconsejables.

[...] 14) Recibir la declaración de las personas que puedan proporcionar información y datos de interés para la investigación de delitos. [...]"

En aquellos lugares de la República donde no hubiere presencia de otro órgano especializado de investigación para los delitos no comunes, corresponde a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) cumplir las funciones de investigación de los mismos, en cuyo ejercicio cesarán tan pronto como el órgano especializado de investigación competente se haga cargo de las mismas.

²⁸⁴ Además de los documentos recientes y oficiales que se citan en el texto y en la matriz de planificación, el presente análisis se basa en la sistematización de los hallazgos de tres estudios e informes especializados sobre el sector justicia que, a pesar de haberse realizado hace algunos años, reflejan tendencias que se mantienen hasta el presente, ellos son: Banco Mundial, Oficina Regional de América Latina y el Caribe, *Estudio de instituciones y gobernabilidad: mejorando la rendición de cuentas en Honduras*, mayo 2009, capítulo III: Justicia y Seguridad

Diagnóstico²⁸⁴

El siguiente análisis de la situación actual del derecho a la justicia, sus tendencias relevantes y sus principales desafíos se estructura en derredor de la independencia, la efectividad, el acceso y la transparencia, por considerar que son estos cuatro los ejes fundamentales para el establecimiento de un servicio público de justicia que garantice tanto la tutela judicial efectiva como el debido proceso a toda persona en Honduras. Por tratarse de un diagnóstico sintético, éste se concentrará en las tres instituciones con mayor responsabilidad en la realización del derecho: el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía de Investigación.

Situación actual

a. Poder Judicial

Gracias al aseguramiento constitucional de su presupuesto (el artículo 318 de la Constitución de la República ordena una asignación no menor al 3% de los ingresos corrientes) y al apoyo continuo que le han brindado las agencias de cooperación de países amigos y organismos internacionales durante los últimos 25 años, el Poder Judicial se ha beneficiado materialmente de una serie de reformas. Este proceso de desarrollo organizacional le ha permitido, entre otros, los siguientes logros: el aumento del número de jueces y auxiliares, conservando con ello la razón juez-habitantes, a pesar del importante incremento demográfico del período (ver cuadro 1); el mantenimiento de salarios y beneficios sociales relativamente competitivos para el sector público hondureño; la ejecución

Pública en Honduras; Fundación para el Debido Proceso Legal/Banco Mundial, *Las reformas a la administración de justicia en Honduras y Bolivia: razones que han obstaculizado su éxito y cómo enfrentarlas*, octubre 2008; Fundación para el Debido Proceso Legal, *Controles y descontrol de la corrupción judicial: evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá*, 2007.

de un programa de construcción de locales judiciales en todo el país; la ampliación de los programas de capacitación a su personal; la instalación y operación de equipos y sistemas

informáticos; y la creación de nuevos juzgados en materia de familia, jurisdicción contenciosa administrativa, violencia doméstica y justicia de paz móvil.

Cuadro 1: Número de magistrados y magistradas y jueces en 1986 y 2008

Instancia	1986	2008
Corte Suprema	9	15
Cortes de Apelaciones	24	33
Tribunales de Sentencia	N.A.	70
Jueces de ejecución	N.A.	30
Jueces de letras comunes	28	163
Jueces de letras especializados	21	127
Jueces de paz	317	330
Total	399	768
Número por 100,000 habitantes	10,5	10,6

Tomado de: Banco Mundial. Oficina Regional de América Latina y el Caribe.

Estudio de instituciones y gobernabilidad: mejorando la rendición de cuentas en Honduras.

Mayo 2009. Capítulo III: Justicia y Seguridad Pública en Honduras, tabla 3.1. La información de 1987 proviene de ILANUD y la de 2008 del Poder Judicial.

Sin embargo, este desarrollo material no ha tenido necesariamente un correlato en mayor independencia, efectividad, acceso y transparencia.

En lo que concierne a la independencia, la situación se puede ilustrar por medio de dos procesos ocurridos en el máximo órgano del Poder Judicial durante la última década. El primero de ellos guarda relación con el cambio en el mecanismo de selección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y, el segundo, con la posición asumida por este alto tribunal durante la crisis constitucional y el golpe de Estado de 2009. El 22 de diciembre de 2000 es aprobada una reforma total del Capítulo XII (del Poder Judicial), del Título V (de los poderes del Estado) de la Constitución hondureña, mediante Decreto 262-2000, el cual es ratificado el 16 de abril de 2001, mediante Decreto 38-2001. Una de las principales novedades introducidas por la reforma es el establecimiento de una Junta Nominadora que, integrada por representantes de la sociedad civil, el sector académico y gremial de la profesión del Derecho, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y un representante de la Corte Suprema, propone al Congreso Nacional un listado de 45 candidato

y candidatas de entre las y los cuales las y los diputados seleccionan a 15 magistrados y magistradas para un período de siete años.

A la vista de los dos procesos de selección realizados bajo este nuevo mecanismo, en enero de 2002 y de 2009, pareciera que el problema no ha estado tanto en la lista de 45 candidatos y candidatas que ha presentado la Junta Nominadora, organismo que, por cierto, no estuvo exento de señalamientos de politización, sino en la selección de las y los 15 magistrados por parte del Congreso, pues en ambos casos ha prevalecido un reparto de ocho-siete entre los dos partidos mayoritarios, dejando por fuera candidatas y candidatos nominados por la Junta con altos perfiles académicos y profesionales, pero que carecían de patrocinio político. En lo que respecta a la posición asumida por la Corte Suprema, concretamente la Sala Constitucional, durante la crisis institucional de 2009, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha documentado en su apartado sobre derechos humanos (capítulo XIII del tomo I) que, de los 81 recursos de amparo recibidos por la Sala como consecuencia del conflicto, únicamente fueron otorgados dos, aquéllos interpuestos para mantener en su cargo al Jefe del Estado

Mayor Conjunto. Los 79 restantes, referidos a la detención, deportación y deposición del Presidente, al decreto de restricción de derechos del 22 de septiembre de 2009, a los toques de queda, a la represión de movilizaciones, al cierre y amenazas contra medios de comunicación y otros actos gubernamentales del gobierno de facto no fueron otorgados por diferentes razones, siendo los defectos formales o la improcedencia sustantiva las razones más comúnmente invocadas para ello.

Con relación a la efectividad, eje que en esencia apunta al impacto del sector justicia como mecanismo de resolución de conflictos y generador de seguridad jurídica para la sociedad hondureña, a través de la cantidad y calidad de los servicios prestados al público usuario, los estudios más recientes disponibles señalan que, por ejemplo, el indicador "casos resueltos por juez", el cual mide la productividad individual de estos funcionarios

y funcionarias, era menor en 2006 que 20 años atrás en 1986. De la misma manera, la comparación anual entre casos ingresados y resoluciones refleja regularmente un déficit importante de casos en tramitación, no resueltos, tanto más si se entiende que muchos de las resoluciones recaen sobre casos ingresados en años anteriores (ver cuadro 2).

Esto, a pesar que la sociedad hondureña no tiene una tasa de litigio alta (medida por los ingresos de casos por cada 100,000 habitantes) y tiene una razón de jueces por habitantes similar a la de países desarrollados como Francia, Italia, España y Estados Unidos (ver cuadro 3). El problema es reconocido en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2011- 2016, que al enumerar las debilidades de esta rama del Gobierno, establece como la sexta de ellas "el rezago en la tramitación de los asuntos sometidos al conocimiento del Poder Judicial que requiere de la implementación de mejores mecanismos encaminados a contrarrestarlo".

Cuadro 2: Resumen de ingresos y resoluciones para los años 2009 y 2010

Instancia/Materia	Ingresos		Resoluciones	
	2009	2010	2009	2010
Salas de la Corte Suprema	3,243	2,774	1915	2526
Cortes de Apelaciones	4,286	5,567	3899	5115
Tribunales de Sentencia	2,602	2,833	1473	1750
Juzgados de Letras	65,326	72,548	35292	40853
Juzgados de Paz	39,238	39,414	24888	25107
Total	114,695	123,136	67,467	75,351

Tomado de: Memoria del Poder Judicial, 2011. Para facilitar la comparación se han unido dos cuadros que aparecían separados en el anexo estadístico de la memoria, páginas 62 y 69.

Cuadro 3: Carga de trabajo judicial (en países seleccionados)

País	Año	Entradas por 100,000 habitantes	Jueces por 100,000 habitantes	Entradas por juez
Honduras	2006	1.089	10,1	108
Ecuador	2006	1.802	6,7	269
El Salvador	2006	2.375	9,2	258
Colombia	2006	2.893	10,2	283
Perú	2006	3.919	7,7	509
Argentina	2004	10.225	11	930
Brasil (federal, laboral y estatal; no incluye fueros militar y electoral, ni juzgados de menor cuantía)	2004	8.568	5,7	1503
Chile	2004	12.305	5,0	2461

País	Año	Entradas por 100,000 habitantes	Jueces por 100,000 habitantes	Entradas por juez
Costa Rica	2004	22.911	17,4	1316
Holanda	2004	7.224	12,3	587
Francia	2004	4.411	10,1	436
Italia	2004	8.611	10,4	828
Alemania	2004	7.151	24,7	289
España	2004	14.000	9,8	1428
EE.UU.	2004	33.848	10,2	3351

Tomado de: Banco Mundial. Oficina Regional de América Latina y el Caribe. *Estudio de instituciones y gobernabilidad: mejorando la rendición de cuentas en Honduras.* Mayo 2009. Capítulo III: Justicia y Seguridad Pública en Honduras, tabla 3.4.

Otro problema que se ha señalado consistentemente por los estudios sobre el sector justicia, y en el que se juntan dos de los ejes de este análisis, la búsqueda de independencia y efectividad, es la confusión y concentración de las labores jurisdiccionales y administrativas, particularmente en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El esfuerzo más reciente para mejorar la situación lo constituye la reforma de los artículos 313 y 317 de la Constitución de la República para crear el Consejo de la Judicatura, mediante el decreto 282-2010, ratificado por el decreto 5-2011 de 17 de febrero de 2011. Posteriormente, se aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, por medio del decreto 219-2011. Sin embargo, tanto la forma en que quedó integrado el Consejo en el articulado de la ley, como las irregularidades denunciadas ya durante el proceso de selección de las y los delegados, no parecieran dar mucho espacio a la esperanza de cambio.

Con respecto a las dificultades de acceso, habrá que mencionar dos componentes muy importantes para el debido proceso: la asistencia letrada y el poder conocer, en su propia lengua, el contenido de la acusación. En cuanto al primer aspecto, el servicio de defensa pública depende en Honduras del Poder Judicial. Los estudios disponibles indican que la Dirección de la Defensa Pública carece de autonomía administrativa y presupuestaria y que entre las y los defensores se reproducen los problemas de poca productividad observados en los jueces. Además, el Plan Estratégico del

Poder Judicial 2011-2016, indica como una debilidad el que “sólo existen 233 defensoras y defensores públicos en todo el país, aproximadamente 3 por cada 100,000 habitantes”. Con relación al segundo tema, el mismo documento expresa su preocupación por “la falta de una unidad especial de peritos intérpretes y peritos traductores que contribuya a mejorar el acceso a la justicia para grupos vulnerables”.

En lo que corresponde a la transparencia y la lucha contra la corrupción habrá que señalar que los controles internos son todavía muy débiles, y los externos, provenientes de la sociedad civil, son prácticamente inexistentes. En el ámbito institucional interno, el Plan Estratégico del Poder Judicial 2011-2016 manifiesta, por ejemplo, que “la Inspectoría de Tribunales requiere de una reestructuración y readecuación de sus funciones y urge de un mayor apoyo para llevar a cabo eficientemente la vigilancia judicial en todo el país”. En el ámbito externo, no existen en la academia, ni entre las organizaciones no gubernamentales, observatorios permanentes de la justicia u otro tipo de mecanismos sistemáticos de participación y control social del Poder Judicial.

Finalmente, debe reconocerse que el Plan Estratégico del Poder Judicial 2011-2016 representa un progreso al reflejar varias debilidades institucionales y comprometer la voluntad política de las autoridades superiores del Poder Judicial a dar continuidad al proceso

de modernización de esta rama esencial del Estado, fijando para ello plazos específicos de ejecución de actuaciones que podrían conducir gradualmente al logro de mayor independencia, efectividad, acceso y transparencia en los servicios de justicia.

b. Ministerio Público

El moderno Ministerio Público en Honduras surge de la conformación de la Comisión Ad-Hoc de Alto Nivel para las Reformas Institucionales que Garanticen la Paz y la Seguridad en Honduras, instituida por el Presidente Rafael Leonardo Callejas en 1993 como consecuencia de serias denuncias públicas en derredor de la Policía de Investigación que se encontraba en aquel momento bajo control militar. Esta comisión, conformada por representantes de los poderes públicos y de los sectores obreros, campesinos, empresariales y eclesiásticos, no solo recomienda la creación de una nueva policía de investigación, de naturaleza civil, sino que sugiere que la misma se encuentre bajo la dependencia de una fiscalía general independiente del Poder Judicial y del Ejecutivo, especializada y profesional. La recomendación es atendida y el Ejecutivo presenta al Congreso Nacional un proyecto de decreto que finalmente es aprobado el 13 de diciembre de 1993 como Ley del Ministerio Público, bajo el Decreto 228-93.

Buscando hacer operativos los fines y objetivos que señalaba el artículo 1 de la nueva Ley, el primer Fiscal General, organiza las fiscalías especiales de la Constitución, el narcotráfico, la corrupción, el medio ambiente, las etnias y el patrimonio cultural, la defensa del consumidor, la mujer, la niñez y los derechos humanos. Los servicios de Medicina Forense y de investigación contra el narcotráfico también quedan bajo la estructura del Ministerio Público, en calidad de direcciones especializadas.

Los análisis que se utilizan como referencia para este diagnóstico coinciden en que la

separación de la policía de investigación (Dirección de Investigación Criminal, DIC) del Ministerio Público en 1998, con motivo de la emisión de la primera Ley Orgánica de la Policía Nacional, no solo debilitó la capacidad investigativa de la Fiscalía, sino que también afectó la investigación criminal en general, pues la policía de investigación pasó a formar parte de la estructura de la Policía Nacional. También señalan los mencionados estudios que las desconfianzas institucionales entre la policía de investigación y la Fiscalía han llevado a la duplicación de tareas, y por tanto, a la ineficiencia en el uso de los escasos recursos para el sector.

Han contribuido también al debilitamiento institucional del Ministerio Público las dos crisis de dirección que sufrió en la década del 2000. Todo indica que ambas estuvieron motivadas, esencialmente, por la falta de independencia y de eficacia. La primera entre 2004 y 2005, que lleva al Congreso Nacional a nombrar un nuevo Fiscal General y un Adjunto, como consecuencia de la reacción de los fiscales de carrera y varios sectores sociales ante las instrucciones de la Dirección de Fiscales para archivar varios casos de presunta corrupción de antiguos altos funcionarios del Estado. La segunda se manifiesta públicamente a través de una huelga de hambre iniciada por varios fiscales de carrera el 7 de abril de 2008, quienes demandaban la reactivación de varias investigaciones por presunta corrupción de funcionarios de administraciones anteriores, las que a su criterio se encontraban “engavetadas”. Este movimiento, al que se sumaron líderes religiosos y otros sectores sociales, reclamó también la destitución del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, quienes, luego de integrarse una comisión especial para realizar una auditoría sobre casos complejos o de impacto social, lograron finalmente concluir su término.

Los estudios disponibles revelan, como sucede con jueces y defensores, unos rendimientos muy bajos de casos por fiscal.

c. Servicios policiales a la administración de justicia

De las seis direcciones que integran la Policía Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad, son las de Investigación Criminal, de Servicios Especiales de Investigación (contrabando, defraudación y evasión fiscal, lavado de activos provenientes del narcotráfico, casos internacionales y control de agencias privadas de seguridad) y de Servicios Especiales Preventivos (seguridad de los centros penales), las que tienen una relación más directa con la Administración de Justicia. Esto sin perjuicio de que, en mayor o menor grado, las tareas de la Policía Preventiva, la de Tránsito y de la Dirección de Educación Policial, también tienen vínculos con el servicio público de Justicia.

De las tres instituciones con mayor responsabilidad en el cumplimiento del derecho de acceso a la Justicia, es la Policía la que parece encontrarse en una crisis mayor, lo cual ha repercutido en su eficacia y en su legitimidad ante la ciudadanía. En un informe sobre la Policía hondureña elaborado por expertos policiales colombianos, presentado a finales de enero de 2012 ante el Presidente de la República y el Congreso Nacional, se señalaban, entre otros problemas: corrupción creciente, ausencia de liderazgos positivos, escasa relación con la comunidad, fractura entre el nivel directivo y el subalterno, irracionalidad en la atención de casos, falta de reglas claras en los procesos de investigación, falta de compromiso en el servicio, falta de eficacia, escasa capacitación del personal y carencia de medios técnicos y tecnológicos.

Ante la crítica situación, los poderes Ejecutivo y Legislativo han iniciado un proceso de depuración del cuerpo policial que incluye una serie de medidas legislativas e institucionales

Tendencias relevantes

A falta de intervenciones claramente direccionadas del Estado, es de esperar:

1. Persistencia de la influencia de intereses particulares de grupos políticos y económicos en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General y Fiscal Adjunto; así como en otros niveles de funcionarios en el Poder Judicial y el Ministerio Público. La situación podría incluso agravarse si los espacios de influencia indebida que permiten los actuales mecanismos de nominación y selección son aprovechados por el crimen organizado.
2. Incremento de la mora de casos sin resolver en todas las instituciones operadoras del sistema, particularmente la policía de investigación, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
3. Probable incremento de los casos de corrupción en todas las instituciones operadoras del sistema.
4. Aceleración de la deslegitimación de la institucionalidad del sector justicia ante los ojos de la ciudadanía, dada la inexistencia de mecanismos permanentes de participación y control social sobre el sistema de justicia.
5. Persistencia de la desigualdad y las limitaciones en el acceso a la justicia.

Principales desafíos

Ante la situación descrita, el Estado tiene por delante los siguientes desafíos:

El primero, diseñar modelos e implementar políticas públicas orientados a establecer la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público tanto frente a los poderes institucionales (Legislativo, Ejecutivo y partidos políticos) como frente a los poderes fácticos (grupos económicos, familias tradicionales, propietarios de medios de comunicación, crimen organizado) y cualquier otra influencia indebida.

El segundo, reorientar los recursos humanos y materiales de las instituciones operadoras del sistema (particularmente el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía de investigación)

hacia la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de sus fines últimos, estableciendo de esta manera un servicio público de justicia relevante, conectado con los problemas y necesidades de la población, generador de paz social y de seguridad jurídica.

El tercero, adoptar políticas y medidas encaminadas a permitir y promover la profundización, por un lado, de los controles internos de las propias instituciones; y por otro, de la participación social en iniciativas de control y auditoría que velen por la independencia, la eficacia y el combate a la corrupción en las instituciones operadoras del sistema de justicia.

Matriz sobre derecho a la justicia

Resultados de impacto

1. Consolidada la independencia de las instituciones operadoras del sistema de justicia (particularmente el Poder Judicial y el Ministerio Público) frente a los poderes institucionales, los poderes fácticos y cualquier otra influencia indebida.

a. Indicadores

- i. Porcentaje anual de funcionarias y funcionarios (juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos y policías de investigación) nombrados y/o promovidos por concurso de méritos y pruebas de oposición con relación al número de posiciones vacantes (se desagregaría al menos en cuatro, por tipo de funcionario y funcionaria).
- ii. Cantidad de resoluciones votadas en función de líneas partidarias en la Corte Suprema de Justicia, CSJ y sus salas.
- iii. Porcentaje anual de denuncias por derechos humanos, corrupción y crimen organizado que concluyen en

requerimiento fiscal en el Ministerio Público.

- iv. Cantidad de juezas y jueces seleccionados por concurso afiliados a las asociaciones de jueces.
- v. Cantidad de quejas por amenazas e interferencias, internas y externas, interpuestas por operadores y operadoras de justicia ante las instancias previstas en la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

2. Establecido un servicio público de justicia conectado con los problemas y necesidades de la población, generador de paz social y seguridad jurídica, a través del desempeño eficaz, eficiente y de calidad de las instituciones operadoras (Poder Judicial, Ministerio Público y policía de investigación).

a. Indicadores

- i. Porcentaje de juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos y policías de investigación entrenados en derechos humanos (se desagregaría al menos en cuatro, por tipo de funcionario y funcionaria o materias jurisdiccionales).
- ii. Razón entre casos asignados y casos terminados por jueza y juez, fiscal, defensor y defensora y policía de investigación.
- iii. Costo en salario por caso terminado para cada uno de los cuatro operadores y operadoras.
- iv. Tiempo promedio de duración de los casos o expedientes en juzgados, fiscalías, defensa pública y Policía de Investigación.
- v. Distribución del gasto público del Poder Judicial, Ministerio Público y policía de investigación (administrativo-técnico; directivos-base; corriente-inversión).

3. Establecidos y en funcionamiento los mecanismos internos y externos de transparencia, rendición de cuentas, participación y control social en las instituciones operadoras del sistema de justicia (particularmente Poder Judicial, Ministerio Público y Policía de Investigación).

a. Indicadores

- i. Número de organizaciones no gubernamentales con trabajo en el sector justicia (monitoreo, participación en instancias formales, programas de acceso).
- ii. Resultados de estudios de usuarios de las instituciones operadoras en variables como confianza, calidad, independencia (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Policía de Investigación).
- iii. Razón entre denuncias presentadas, denuncias investigadas y acciones disciplinarias tomadas por la Inspectoría de Tribunales y la Supervisión Nacional del Ministerio Público.

4. Incrementado el acceso de la población a los espacios institucionales del sector justicia, particularmente el de los sectores más vulnerables: mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, personas con discapacidad y comunidad LGBTTI , entre otros.

a. Indicadores

- i. Proporción de juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores y policías de investigación asignados a asuntos de violencia doméstica, justicia penal juvenil y etnias con relación al número de casos en esas materias.

- ii. Comparación de tasas de condena y tiempo de privación de libertad entre defensoras y defensores privados y públicos.
- iii. Cantidad de municipios que cuentan con oficinas de las instituciones operadoras del sistema de justicia.
- iv. Cantidad de municipios que cuentan con centros integrados de justicia penal.
- v. Proporción de casos apelados por defensoras y defensores públicos en comparación con las defensoras y defensores privados.
- vi. Cantidad de barrios y municipios que cuentan con centros de mediación y conciliación.
- vii. Cantidad de casos ingresados y resueltos de los juzgados de paz móviles.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la justicia en la legislación.				
1	Fortalecer la administración de justicia con arreglo a las normas internacionales (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.57).	2013-2017	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
2	Armonizar el sistema de justicia de menores con la Convención sobre los Derechos del Niño (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.75).	2013-2017	Congreso Nacional de la República	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA , Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
3	Reformar el sistema de garantías constitucionales, por medio de una reforma a la Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional (recomendaciones Nos. 4 y 5 de la CVR).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
4	Establecer el juicio político en la Constitución de la República para que los procesos de responsabilidad constitucional contra los altos funcionarios del Estado cumplan con los estándares del debido proceso (Recomendaciones No. 9, No. 46 de la CVR).	2013-2017	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
5	Armonizar las normas internas y procedimientos de la policía preventiva y la policía de investigación con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la ley de Naciones Unidas (1979) y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de Naciones Unidas (1990) (Recomendación No. 18 de la CVR).	2013-2017	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Congreso Nacional de la República
6	Revisar y reformar la Ley Orgánica de la Policía respecto al funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de políticas de seguridad (Recomendación No. 28 de la CVR).	2013-2017	Congreso Nacional de la República	Comisión de Reforma del Sector Justicia, Secretaría de Seguridad
7	Revisar la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (Decreto No. 219-2011) para incluir al menos un miembro de las organizaciones de la sociedad civil con	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	programas en el sector justicia y remover elementos que consolidan la endogamia, con el objetivo de: i. Establecer un órgano independiente encargado de salvaguardar la independencia [sic] del Poder Judicial y supervisar el nombramiento, los ascensos y la reglamentación de la profesión (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.59, 82.61, 82.62 y 82.70) (Recomendación No. 14 de la CVR).			
8	Completar la tramitación del proyecto de Ley Especial de Audiencias Públicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado, que son cargos de elección directa del Congreso Nacional: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Director y Subdirector del RNP, Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Procurador y Subprocurador del Ambiente, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Superintendente de Concesiones, Comisionados del IIAP y otros que se establezcan en el futuro. (Recomendación No. 31 de la CVR).Revisión y reforma de los procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Fiscal Adjunto y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (inferido a partir del análisis sistemático de los documentos con recomendaciones al Estado y los estudios sobre el sector).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	
9	Aprobar la ley especial de reparación a las víctimas por violación de los derechos humanos. (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.81).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1	Continuar aplicando medidas para fortalecer la independencia del Poder Judicial. (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.54, 82.55 y 82.56).	2013-2022	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia
2	Asegurar que el sistema de administración de justicia brinde un efectivo acceso a la justicia de todas las personas. (Recomendación CIDH Informe 2011, cap. IV, párr. 393.1).	2013-2022	Corte Suprema de Justicia	

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Conmutar penas de prisión, particularmente para menores de edad y adolescentes en conflicto con la ley (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.74).	2013-2022	Corte Suprema de Justicia	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA, Ministerio Público
4	Garantizar a los pueblos tribales e indígenas el acceso a la justicia en su propia lengua o a través de intérpretes u otros medios eficaces, tal como se establece en el artículo 12 del Convenio No. 169 de la OIT. (Recomendación No. 21 de la CVR).	2013-2017	Corte Suprema de Justicia	Secretaría de Estado en el despacho de los pueblos indígenas y afro hondureños - SEDINAFROH, Ministerio Público
5	Garantizar el acceso debido a la justicia de los niños que son víctimas de la violencia (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.17).	2013-2022	Ministerio Público	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA, Corte Suprema de Justicia
6	Poner en práctica un enfoque de derechos humanos en las instituciones públicas vinculadas al sector justicia mediante una planificación y presupuesto anual que incorpore de manera explícita el derecho a la justicia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado para respetarlo, protegerlo y hacerlo efectivo, con la participación activa de los titulares del derecho. (lineamiento general de la política de Derechos Humanos).	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
7	Enriquecer permanentemente el presente plan, a partir de las nuevas recomendaciones que sobre el derecho a la justicia emitan los órganos de tratados y cualquier otro mecanismo de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, así como de las propuestas provenientes del diálogo permanente con las organizaciones ciudadanas, los estudios especializados, las evaluaciones institucionales y las consultas a los usuarios del servicio público de justicia (lineamiento general de la política de Derechos Humanos).	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Promover la enseñanza y la capacitación relativa a los derechos humanos, particularmente para los funcionarios encargados de la administración de justicia, como oficiales de policía, jueces y fiscales. (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.15, 82.16 y 82.68)	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	Diseñar e implementar un programa de capacitación a servidores públicos de las instituciones del sector justicia responsables de la formulación y monitoreo de los POA, con la finalidad de que tanto la planificación formal como el comportamiento institucional cotidiano se realicen con un enfoque de derechos humanos (lineamiento general de la política de Derechos Humanos).	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Fortalecer la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y garantizar su debida financiación. (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.5 y 82.7)	2013-2022	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Finanzas
2	Fortalecer la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.64), para: i. Velar por la eficacia de los recursos judiciales contra las detenciones arbitrarias, la tortura y la operación de centros de detención ilegal (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.25 y 82.26). ii. Llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes para combatir la impunidad en los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos e informar a la comunidad internacional de esas investigaciones (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.65).	2013-2017	Ministerio Público	Congreso Nacional de la República
3	Revisión del diseño institucional y depuración de la policía de investigación, para: i. Mejorar la capacidad de investigación del Estado de Honduras para esclarecer los asesinatos de mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos y hacer comparecer a los responsables ante la justicia (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.80). ii. Dotar al Ministerio Público de su propia capacidad de investigación para que pueda llevar a cabo sus propias indagaciones independientes (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.80) (Recomendación No. 15 de la CVR).	2013-2014	Secretaría de Seguridad	Comisión de Reforma del Sector Justicia , Congreso Nacional de la República
4	Crear un tribunal constitucional (Recomendación No. 6 de la CVR), para:	2013-2015	Corte Suprema de Justicia	Congreso Nacional de la República , Secretaría de

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	<p>i. Velar por la eficacia de los recursos judiciales contra las detenciones arbitrarias, la tortura y la operación de centros de detención ilegal (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.25 y 82.26).</p> <p>ii. Continuar las reformas institucionales, constitucionales y de infraestructura para mejorar la administración de justicia y el Estado de Derecho (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.60).</p>			Justicia y Derechos Humanos
5	Designar jueces especiales con jurisdicción exclusiva en materia de derechos humanos. (Recomendación No. 19 de la CVR).	2013-2017	Corte Suprema de Justicia	
6	Revisar la estructuración de la Inspectoría de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial para dotarla de las atribuciones y recursos necesarios para ejercer sus funciones de control de manera efectiva, imparcial e independiente. (Recomendación No. 32 de la CVR).	2013-2017	Corte Suprema de Justicia	Congreso Nacional de la República
7	Fortalecer el régimen de carrera del Ministerio Público, a fin de que los fiscales actúen con mayor independencia y eficiencia contra los delitos de corrupción. (Recomendación No. 38 de la CVR).	2013-2014	Ministerio Público	Congreso Nacional de la República
8	Proporcionar recursos financieros y humanos suficientes a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, para que puedan cumplir su función de prevenir e investigar eficazmente las violaciones de los derechos humanos. (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.67).	2015-2022	Ministerio Público	Secretaría de Finanzas, Congreso Nacional de la República
9	Proporcionar recursos financieros y humanos suficientes a la nueva Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, para que puedan cumplir su función de prevenir e investigar eficazmente las violaciones de los derechos humanos.	2015-2022	Ministerio Público	Secretaría de Finanzas, Congreso Nacional de la República
10	Proporcionar recursos suficientes a jueces y policías. (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.68).	2013-2022	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Finanzas, Congreso Nacional de la República
11	Realizar una construcción participativa e interinstitucional de los indicadores estructurales, de proceso y de resultado para medir los logros hacia la realización del derecho	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	a la justicia, recogiendo y enriqueciendo la experiencia internacional al respecto (lineamiento general de la política de Derechos Humanos).			
12	Evaluar a profundidad la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en aspectos de capacidad y gestión de la unidad para identificar áreas de mejora y dotarla con recursos de investigación propios, permanentes y especializados. (Recomendación No. 17 de la CVR).	2013-2014	Ministerio Público	Comisión de Reforma del Sector Justicia
13	Fortalecer los procedimientos de evaluación y control interno de la policía preventiva y la policía de investigación para excluir a aquellos funcionarios implicados en prácticas irregulares o delictivas. (Recomendaciones Nos. 18, 32 de la CVR).	2013-2017	Secretaría de Seguridad	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
14	Analizar la viabilidad de establecer una comisión internacional contra la impunidad, siguiendo el modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.63) (Recomendación No. 47 de la CVR).	2013-2017	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Comisión de Reforma del Sector Justicia

Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.

1	Establecer mecanismos permanentes de diálogo, control social y rendición de cuentas hacia los titulares del derecho a la justicia y sus organizaciones, con relación a la planificación anual y la medición de indicadores sobre el sector (lineamiento general de la política de Derechos Humanos).	2013-2022	Corte Suprema de Justicia	Ministerio Público, Secretaría de Seguridad
2	Reactivar y fortalecer el funcionamiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las políticas del Ministerio Público (Recomendación No. 29 de la CVR).	2013-2017	Ministerio Público	Comisión de Reforma del Sector Justicia, Congreso Nacional de la República

Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.

1	Realizar un programa amplio y permanente de difusión del derecho a la justicia, su alcance y las obligaciones del Estado, adecuado a las poblaciones destinatarias y relevante para las diferentes regiones geográficas del país, dirigido particularmente a las mujeres, los niños, los	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público
---	--	-----------	---	--

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	jóvenes, los miembros de pueblos indígenas y afro hondureños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los defensores de derechos humanos, la comunidad LGBT, los migrantes y los privados de libertad (lineamiento general de la política de DDHH).			
2	Instalar y dar amplia divulgación a un centro virtual de conocimiento sobre el derecho a la justicia que reúna instrumentos internacionales, legislación nacional, investigaciones académicas, material educativo y sistematización de experiencias exitosas y buenas prácticas sobre el cumplimiento del derecho a la justicia (lineamiento general de la política de DDHH).	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Seguridad , Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Secretaría de Educación
3	Incluir de manera explícita el tema del derecho a la justicia en el currículo de todos los niveles del sistema educativo formal, con contenidos particulares para cada nivel, muy especialmente para las disciplinas que forman recursos humanos cuyo ejercicio profesional tiene relación directa con la realización del derecho a la justicia (lineamiento general de la política de DDHH).	2013-2022	Secretaría de Educación	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Consejo de Educación Superior, Colegios Profesionales
Componente: 7 - Lucha contra impunidad de violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Establecer términos razonables para la duración de las investigaciones del Ministerio Público, evitando la duración indefinida de las mismas y la afectación de los derechos del investigado (Recomendación No. 44 de la CVR).	2013-2014	Ministerio Público	Congreso Nacional de la República
2	Fortalecer los mecanismos estatales y gubernamentales para investigar mejor y sancionar a los autores de violaciones de los derechos humanos (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.73).	2013-2022	Corte Suprema de Justicia	Congreso Nacional de la República, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad
3	Investigar sin demora, cabalmente y con imparcialidad todos los casos de muerte de personas detenidas y otorgar una compensación suficiente a las familias de las víctimas, como recomendó el Comité contra la Tortura (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.23).	2013-2022	Ministerio Público	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos , Corte Suprema de Justicia - CSJ (Poder Judicial) , Secretaría de Seguridad
4	Llevar a cabo investigaciones independientes y creíbles del homicidio y amenazas contra periodistas y hacer comparecer ante la justicia a los autores de esos actos (Recomendación del	2013-2022	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ,

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.33, 82.76, 82.77, 82.78, 82.79 y 82.93) (Recomendación No. 72 de la CVR) (Recomendación CIDH Informe 2011, cap. IV, párr. 393.4).			Corte Suprema de Justicia - CSJ
5	Tomar medidas concretas para garantizar la investigación inmediata, adecuada y transparente de los homicidios, intimidaciones y otros abusos cometidos contra personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.36).	2013-2022	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia
6	Investigar a los responsables del hostigamiento de los miembros del Poder Judicial (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.66).	2013-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad
7	Enjuiciar y castigar a los responsables del hostigamiento de los miembros del Poder Judicial	2013-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad
8	Asegurar que los traficantes de personas sean llevados ante la justicia (recomendación del EPU, docto. A/HRC/16/10, párr. 82.69)	2013-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad
9	Hacer comparecer ante la justicia a las personas que han sido identificadas por la Comisión de la Verdad y otras instancias como autores de violaciones de los derechos humanos en el contexto de la crisis institucional y el golpe de Estado de 2009 (Recomendación No. 12 de la CVR) (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.83, 82.84, 82.85, 82.86, 82.87, 82.88, 82.89 y 82.90) (Recomendación CIDH Informe 2011, Cap. IV, párr. 393.2).	2013-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
10	Garantizar que se preste la máxima atención a las víctimas de la violencia basada en el género, la violencia sexual, la trata de personas y la explotación sexual. Particularmente, disponer de las medidas necesarias para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.21 y 82.34) (Recomendación CIDH Informe 2011, cap. IV, párr. 393.9).	2013-2022	Instituto Nacional de la Mujer - INAM	Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
11	Establecer un plan nacional de reparaciones para garantizar el resarcimiento integral de las víctimas de violaciones de los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio de 2009 (Recomendaciones Nos. 22, 23, 24, 25, 26 de la CVR) (Recomendación CIDH Informe 2011, cap. IV, párr. 393.6).	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Corte Suprema de Justicia
Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.				
1	Tomar medidas inmediatas y eficaces para hacer rendir cuentas a los miembros del Poder Judicial, la policía y las fuerzas de seguridad que cometan actos de corrupción, extorsión, tortura y otras formas de violencia (Recomendación del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.71).	2013-2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad
2	Hacer de la preparación de informes a los órganos de tratados y cualquier otro mecanismo de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, una oportunidad de discusión amplia sobre los avances obtenidos, los retos y los compromisos hacia el futuro en materia de derecho a la justicia, entre todos los actores institucionales con responsabilidad y las organizaciones ciudadanas que trabajan en este tema (lineamiento general de la política de DDHH).	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público
3	Difundir ampliamente los informes presentados por el Estado ante los órganos de tratados, y cualquier otro mecanismo de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos (lineamiento general de la política de ddhh).	2013-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Revisar la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (Decreto No. 219-2011) para incluir al menos un miembro de las organizaciones de la sociedad civil con programas en el sector justicia y remover elementos que consolidan la endogamia, con el objetivo de: i. Establecer un órgano independiente encargado de salvaguardar la independencia [sic] del Poder Judicial y supervisar el nombramiento, los ascensos y la reglamentación de la profesión (Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.59, 82.61, 82.62 y 82.70) (Recomendación No. 14 de la CVR).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
2	<p>Completar la tramitación del proyecto de Ley Especial de Audiencias Públicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado, que son cargos de elección directa del Congreso Nacional: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Director y Subdirector del RNP, Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Procurador y Subprocurador del Ambiente, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Superintendente de Concesiones, Comisionados del IIAP y otros que se establezcan en el futuro.</p> <p>(Recomendación No. 31 de la CVR).Revisión y reforma de los procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Fiscal Adjunto y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (inferido a partir del análisis sistemático de los documentos con recomendaciones al Estado y los estudios sobre el sector).</p>	2013-2014	Congreso Nacional de la República	

DERECHO A LA VERDAD

Marco Normativo ²⁸⁵

Las disposiciones a partir de las cuales es posible derivar el derecho a la verdad, se encuentran contenidas de manera general en:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos.
- La Carta de las Naciones Unidas.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977 y 2005, y
- La Declaración y Programa de Acción de Viena.

Además, el derecho a la verdad se encuentra contenido en el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad²⁸⁶ y la versión actualizada de estos principios, acompañados por informes explicativos de la Experta Independiente, y los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparación, adoptados y proclamados por la Asamblea General en 2005.

De manera particular, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, específicamente en su artículo 24, párrafo 2, establece el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la marcha y los resultados de las investigaciones y la suerte de la persona desaparecida, así como la obligación del Estado parte de tomar las medidas adecuadas a ese respecto. En el preámbulo de la Convención se reafirma el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin.

El “derecho a la verdad” es un concepto que ha evolucionado durante los últimos años en el sistema interamericano. Inicialmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que se trata del derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, conforme al artículo 25²⁸⁷ de la

²⁸⁵ Los contenidos del presente apartado fueron retomados del Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, Presentado en el Consejo de Derechos Humanos XXI período de sesiones, Tema 3 de la agenda; Casos 10.580, 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.595, 11.657 y 11.705 e Informes N° 10/95 y N° 25/98 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, LXI período de sesiones, Tema 17 del programa provisional.

²⁸⁶ Adoptado en febrero de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el LXI período de sesiones, tema 17 del Programa Provisional.

²⁸⁷ Véase Caso 10.580, Informe N° 10/95, Ecuador, Manuel Bolaños, 12 de septiembre de 1995. La Comisión abordó el tema del derecho a la verdad por primera vez en 1995, con motivo del caso de la desaparición de Manuel Bolaños, en Ecuador. La Comisión señaló que este derecho surge de la obligación que tiene el Estado de usar todos los medios a su alcance para investigar seriamente las violaciones cometidas en su jurisdicción a fin de identificar a los responsables. (Id. en “Análisis”, Sección II, párrafo 45, citando la sentencia en el caso Velásquez Rodríguez, del 29 de Julio de 1988, párrafo 166). La Comisión señaló que, en virtud de que los tribunales se abstuvieron inicialmente de investigar la desaparición del señor Bolaños, el Estado no informó a los familiares acerca de la muerte del señor Bolaños o de la ubicación de sus restos y de la demora en dar comienzo a la investigación que finalmente se llevó a

Convención Americana sobre Derechos Humanos. La interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera, por lo menos por parte de la Comisión, que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad se basa no solo en el artículo 25, sino también en los artículos 1.1, 8 y 13 de la Convención²⁸⁸.

Así, el derecho a la verdad se define como “el derecho inalienable que cada pueblo tiene a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes²⁸⁹”.

El conocimiento por un pueblo de la historia de violaciones de derechos humanos que ha sufrido forma parte de su patrimonio. En este sentido, y como se detalla más adelante, resulta indispensable que el Estado tome medidas que deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas²⁹⁰.

El Relator Especial considera que la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, constituyen una serie de áreas de acción interrelacionadas que deben reforzarse mutuamente para contribuir a la consecución de dos objetivos mediatos, a saber, ofrecer reconocimiento a las víctimas y fomentar la confianza, así como de dos objetivos finales, contribuir a la reconciliación y reforzar el estado de derecho:

cabo, el Estado había violado el derecho de la familia a la justicia y al conocimiento de la verdad.

²⁸⁸ Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.595, 11.657 y 11.705, Informe N° 25/98, Chile, Alfonso René Chanfeau Oracye y otros, 7 de abril de 1998.

- 1) Es fundamental reconocer que la víctima es titular de derechos. Esto conlleva, además de buscar vías de reparación que mitiguen el sufrimiento de las víctimas, restablecer sus derechos y confirmar su condición de personas habilitadas para reivindicar sus derechos.
- 2) La confianza supone la expectativa de cumplimiento de las normas compartidas y, por lo tanto, emana de un sentimiento común de adhesión a estas normas y valores compartidos. En concreto, confiar en una institución equivale a ser consciente de que sus miembros o participantes comparten sus reglas, valores y normas constituyentes, y que las consideran vinculantes. Tanto el reconocimiento como la confianza son requisitos y consecuencias de la justicia.
- 3) La reconciliación es un fin que resultará de la aplicación integral de las cuatro áreas de acción del mandato. La reconciliación no debe considerarse una alternativa a la justicia ni un objetivo que puede alcanzarse con independencia de la aplicación del enfoque global. La reconciliación es, como mínimo, la circunstancia en que las personas pueden recobrar la confianza mutua como titulares de iguales derechos.

Esto significa que las personas:

- a) Se han adherido en grado suficiente a las normas y los valores en que se fundan las instituciones del Estado.
- b) Confían en grado suficiente en que las personas que trabajan en estas instituciones lo hacen sobre la base de esas normas y valores, incluidas las normas que hacen de las personas titulares de derechos.

²⁸⁹ Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, LXI período de sesiones, Tema 17 del programa provisional.

²⁹⁰ *Ibidem*.

- c) Están suficientemente seguras de la voluntad del resto de cumplir y respaldar estas normas y valores básicos.
- 4) El Estado de Derecho debe entenderse de un modo congruente con la noción de su objetivo último, la promoción de un orden social justo, y los objetivos más particulares que persiguen las medidas de justicia de transición, como el reconocimiento, la confianza y la reconciliación. Con la combinación de las áreas de acción, se pretende que las personas se consideren titulares de derechos, libres de organizarse y reclamar sus derechos y asegurarse de que las violaciones sufridas no queden impunes. También actúa como un fuerte catalizador en el proceso de organización de la sociedad civil. El concepto de estado de derecho comprende también las condiciones que garantizan a las personas y a la sociedad civil en general la posibilidad de una participación positiva en procesos legislativos que permitan dar sentido al concepto de justicia.

En resumen, el Relator Especial insiste en que los cuatro objetivos principales contribuyen a lo que la resolución 18/7 del Consejo de Derechos Humanos, aprobada por consenso y con el patrocinio de casi 80 Estados miembros, describe como: “prevenir la repetición de las crisis y futuras violaciones de los derechos humanos, asegurar la cohesión social, la construcción de la nación, la implicación en el proceso y la inclusión de todos a nivel nacional y local, y promover la reconciliación”.

En el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” se establecen los siguientes lineamientos a fin de que los Estados cumplan sus obligaciones en la materia, que incluyen, desde luego, medidas de respeto, protección y garantía de derechos:

- El Estado deberá garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la posibilidad de consultarlos.
- Se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas con el fin de que queden impunes las y los autores de violaciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario.
- Se deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas y de sus familiares para hacer valer sus derechos. En caso necesario, también se facilitará a las personas acusadas que lo soliciten para defenderse. Cuando la consulta persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas. No podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.
- Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del Poder Judicial, para hacer efectivo el derecho a saber. Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial.
- Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.
- Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación integral, el cual implica el deber del Estado

de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.

- Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá la imprescriptibilidad de las acciones.
- En el ejercicio de dicho recurso, debe beneficiarse de una protección contra actos de intimidación y represalias. También pueden proporcionarse reparaciones mediante programas, basados en medidas legislativas o administrativas, dirigidos a individuos y a comunidades.
- Las víctimas y otros sectores de la sociedad civil deben desempeñar un papel significativo en la elaboración y aplicación de tales programas. Deben hacerse esfuerzos concertados para asegurar que las mujeres y los grupos minoritarios participen en las consultas públicas encaminadas a elaborar, aplicar y evaluar los programas de reparación.
- Los procedimientos especiales que permiten a las víctimas ejercer su derecho a una reparación serán objeto de la más amplia publicidad posible.
- El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional.
- En los casos de desapariciones forzadas, la familia de la víctima directa tiene el derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido la identidad de las y los autores o se les haya encausado.
- El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no puedan volver a ser objeto de violaciones de sus derechos. Con ese fin, los Estados deben emprender reformas institucionales

y otras medidas necesarias para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

- Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, incluidas reformas legislativas y administrativas, para procurar que las instituciones públicas se organicen de manera de asegurar el respeto por el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Es menester derogar o abolir la legislación y las reglamentaciones e instituciones administrativas que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos o que las legitimen, para asegurar la protección de los derechos humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos democráticos. Como base de tales reformas, durante períodos de restauración o transición a la democracia y/o a la paz los Estados deberán emprender un examen amplio de su legislación y sus reglamentaciones administrativas.
- Las y Los funcionarios públicos y empleados, en particular que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial deben recibir capacitación amplia y permanente en materia de derechos humanos y, cuando proceda, en las normas del derecho internacional humanitario y en la aplicación de esas normas.

Diagnóstico

Contexto del Derecho a la Verdad

Manuel Zelaya Rosales asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2006. El 28 de junio de 2009, se produce un golpe de Estado al Poder Ejecutivo, que se materializa cuando el ejército hondureño le da captura y lo expulsa del país; los motivos de la captura y extrañamiento habrían sido motivados por lo

que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó como “supuestos planes para celebrar una consulta pública para someter a referéndum, simultáneamente a las elecciones de noviembre de 2009, una serie de enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, permitirían su reelección para un nuevo mandato”. Ante esas circunstancias el Congreso Nacional de la República, nombra al Presidente de ese Poder del Estado, Roberto Micheletti Baín para que le sustituya en el cargo.

Este hecho generó la más grave polarización política y social en nuestro país. Las manifestaciones de protesta se caracterizaron por ser las más intensas. “La violencia contra los partidarios del Presidente Zelaya comenzó el mismo día del golpe, con la represión de las manifestaciones a su favor y la ocupación por la fuerza de varios medios de difusión por miembros del ejército”²⁹¹.

Como es característico en este tipo de situaciones, el gobierno interino decretó estado de excepción, impuso toques de queda y otras medidas restrictivas del derecho a la libertad individual y a la libertad de expresión; por su parte, la comunidad internacional condenó firmemente el golpe de Estado y aunque se encontraban vigentes en el país los principales Tratados y Convenciones de derechos humanos de carácter universal y regional, ello no impidió que se produjeran graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones ilegales o arbitrarias, y contra las libertades de pensamiento y expresión, con ocasión del cierre e intervención de varios medios de comunicación del país por las fuerzas militares y de seguridad.

²⁹¹ Informe de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos ONU, sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, XXXIII período de sesiones.

²⁹² Sobre las Comisiones de la Verdad, éstas se refieren a órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación

Con motivo de los hechos vinculados a la ruptura del orden democrático del país, se produjeron diálogos en el marco de lo que se denominó Acuerdo Tegucigalpa/San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras (Diálogo de Guaymuras, 30 de octubre de 2009), en la búsqueda de resoluciones a la crisis, con la participación de distintos actores políticos del conflicto. Estos acodaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), con la finalidad de establecer las causas de dichos hechos y aclarar, para que no se vuelvan a repetir²⁹².

La CVR, en el ámbito internacional, sustentó sus investigaciones en el derecho a la verdad, derecho que, aunque no es reconocido expresamente a través de una convención u otro instrumento internacional, se ha ido construyendo por medio de resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instancias que a lo largo de los años han ido transformando y enriqueciendo este concepto. “Un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y un derecho particular para los familiares de las víctimas²⁹³”.

La CVR fue instalada por el presidente Porfirio Lobo Sosa, el 4 de mayo de 2010, mediante la toma de posesión de los comisionados bajo la coordinación del Dr. Eduardo Stein, de Guatemala, junto con la abogada María Zavala, de Perú; el embajador Michael Kergin, de Canadá y por Honduras la rectora Julieta

que no tienen el carácter judicial y se ocupan de investigar abusos a derechos humanos o derecho internacional humanitario que se han cometido a lo largo de varios años o en un periodo corto.

²⁹³ Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, *Para que los hechos no se repitan*, página 47.

Castellanos y el abogado Jorge Omar Casco. El mandato consistió en establecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009 en Honduras, a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcionar al pueblo de Honduras elementos para que estos hechos no se repitan en el futuro.

Recomendaciones de la CVR

La CVR, el día 7 de julio de 2011 presentó a los titulares de los poderes del Estado y al pueblo hondureño, su informe final, en el cual se formula un conjunto de 84 recomendaciones, distribuidas en diferentes ámbitos de acción: 1) Constitucional. 2) Derechos Humanos. 3) En el combate a la corrupción. 4) Para fortalecer el Estado democrático de derecho y la democracia durante una crisis. 5) Político Electoral. 6) Internacional. 7) Medios de Comunicación Social, y 8) De la memoria histórica.

Dado su relación con el derecho a la verdad, presentamos las 24 recomendaciones que, en el ámbito de derechos humanos, fueron formuladas:

Medidas para satisfacer el derecho a la justicia:

1. El Estado de Honduras en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, debe investigar, procesar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida, debiendo garantizar a las personas acusadas todas las salvaguardas del debido proceso, incluyendo su presunción de inocencia, asistencia letrada, acceso pleno al acervo probatorio y oportunidades de examen y contradicción de la evidencia.

2. Los comisionados vemos como positivo que el decreto de amnistía en su artículo 1 excluye los delitos de lesa humanidad; en tal virtud, recomendamos al Poder Judicial que asegure su estricto cumplimiento y evitar cualquier interpretación que genere impunidad.
3. Los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia deben someter su actuación, ante las violaciones a los derechos humanos derivadas del 28 de junio de 2009, a un consejo nacional de la magistratura para determinar si se contrarió el derecho a la protección judicial reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los comisionados recomiendan que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, quien deberá ser el ente responsable de la evaluación de su desempeño y la supervisión de la carrera judicial
4. El Congreso Nacional debe aprobar las reformas legales necesarias para que el Ministerio Público vuelva a contar con un cuerpo de investigación propio, integrado en la institución y sometido a la dirección de los fiscales, tal y como existía con la antigua Dirección de Investigación Criminal.
5. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe someter su actuación a una investigación independiente, comisionada por el Congreso de la República, para determinar si cumplió con sus obligaciones con la imparcialidad y diligencia que requería la situación.
6. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos debe ser evaluada en profundidad en aspectos de capacidad, gestión de unidad y otros, para identificar áreas para mejorar; y el Estado de Honduras debe dotarle con los recursos de investigación propios, permanentes y especializados, con un nivel suficiente para garantizar su

eficacia, dando continuidad al apoyo presupuestario aprobado en 2010.

7. La Policía Nacional, incluyendo tanto la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) deben fortalecer sus procedimientos de evaluación y control interno para excluir aquellos funcionarios implicados en prácticas irregulares o delictivas. Asimismo debe adoptar criterios de funcionamiento y rendición de cuentas de conformidad con el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas (1979), e incluir en sus directivas internas y observa los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas (1990). En particular, el entrenamiento para el uso de la fuerza y de las armas de fuego debe tener un fuerte componente práctico y renovarse periódicamente.
8. El Poder Judicial debe proceder a la designación de jueces especiales con jurisdicción exclusiva en materia de derechos humanos.
9. Las autoridades nacionales correspondientes deben reconocer a aquellos funcionarios que en las diferentes instituciones competentes han actuado de manera ejemplar en el ejercicio de sus funciones, esforzándose por investigar rigurosamente las violaciones a los derechos humanos y asistir debidamente a las víctimas.
10. Garantizar a los pueblos tribales e indígenas el acceso a la justicia en su propia lengua o a través de intérpretes u otros medios eficaces, tal como se establece en el artículo 12 del Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales.

Medidas para satisfacer el derecho a la reparación:

1. El Gobierno y el Congreso Nacional de Honduras deben comprometerse públicamente con las víctimas a reparar el daño que sus agentes les causaron, con criterios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, debiendo establecer un plan nacional de reparaciones para garantizar el resarcimiento integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio de 2009.
2. El Gobierno y el Poder Judicial deben garantizar la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio de 2009, a cargo del estado de Honduras o en su caso a cargo de los perpetradores de dichas violaciones.
3. El Estado de Honduras debe tomar medidas de reconocimiento público a las víctimas individual y colectivamente, tales como dar su nombre a lugares o instalaciones públicas, monumentos o placas conmemorativas, u otras pertinentes.

Medidas para satisfacer el derecho a la verdad:

1. El Estado de Honduras debe reconocer públicamente que sus autoridades y agentes cometieron violaciones a los derechos humanos, pedir perdón a las víctimas y comprometerse con ellas y la sociedad a que tales violaciones no se repitan.
2. El Estado de Honduras debe entregar a las víctimas de violaciones a derechos los humanos la información que sobre ellas o sus allegados se encuentran en poder de las fuerzas de seguridad estatal y revelar la utilización que de ellas se ha realizado.

Medidas para la prevención y adecuación a los estándares internacionales:

1. El Estado de Honduras debe revisar o derogar su legislación incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a la libertad y seguridad personales, la libertad de expresión y la tortura.
2. El Congreso Nacional debe revisar la discrecionalidad que la Ley de Policía y Convivencia Social concede a la Policía para realizar detenciones en casos que no se encuentran tipificados como delitos o faltas según la legislación penal vigente. Además, se debe revisar y reformar la ley orgánica de la Policía, respecto al funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de políticas de seguridad.
3. El Gobierno debe reactivar y fortalecer el funcionamiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las Políticas del Ministerio Público.
4. El Gobierno debe dar capacitación adicional específica sobre la prohibición de la tortura y su investigación, a funcionarios de Policía y otros competentes en la materia, siguiendo el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 2004).
5. El Congreso Nacional debe completar la tramitación del proyecto especial de audiencias públicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado, que son cargos de elección directa del Congreso Nacional: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Director y Subdirector del Registro Nacional de las Personas, Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Procurador y Subprocurador General de la República, Procurador y Subprocurador General del ambiente, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Superintendente de Concesiones, Comisionados del Instituto de Acceso a la Información pública y otros que se establezcan en un futuro.
6. El Gobierno debe revisar la estructuración de la Oficina de asuntos internos de la Policía, la Inspectoría de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial y la Inspección de las Fuerzas Armadas, para dotarlas de las atribuciones y recursos necesarios para ejercer sus funciones de control de manera efectiva, imparcial e independiente.
7. El Estado de Honduras debe tomar las medidas correspondientes para reconocer públicamente que los defensores de derechos humanos de la sociedad civil cumplen una función de notorio interés público y asegurar que desarrollen su labor sin obstrucción ni acoso, ya sea de sus propios agentes o de particulares y vigilar porque se erradique cualquier práctica que tienda a criminalizar su trabajo.
8. Revisar y reglamentar los criterios/protocolos para la utilización de gases lacrimógenos por parte de la Policía; para ello, se debe llevar a cabo un estudio sobre los componentes de los gases lacrimógenos utilizados por la Policía.
9. Reglamentar el Convenio 169 de la OIT para asegurar el cumplimiento de los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas y tribales respecto al uso y explotación de los recursos naturales en sus territorios."

Todas estas recomendaciones, con anterioridad, fueron formuladas al Estado hondureño por otras instancias como la Corte Interamericana desde 1988 (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras y otros posteriores), CONADEH (Informe sobre desaparecidos de 1994 y otros), Comité contra la Tortura de

Naciones Unidas (mayo de 2009), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe de mayo de 2010), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Informe de mayo de 2010) y diferentes ONG nacionales e internacionales²⁹⁴.

En ese sentido, dichas recomendaciones constituyen obligaciones de derecho positivo para el Estado de Honduras²⁹⁵.

El Estado hondureño, por tanto, está en la obligación de asegurar la realización del derecho a la verdad, para darla a conocer a las víctimas, sus derecho habientes y a la sociedad, con el propósito que adquiera conciencia de la legalidad a fin de prevenir la repetición de las violaciones.

Es importante mencionar que la jurisprudencia internacional de los órganos de protección de los derechos humanos, ha reconocido a los familiares de las víctimas, también como víctimas, dado que han sido afectados en su integridad con motivo de las violaciones a los derechos humanos de sus seres queridos.

En Honduras el derecho a la verdad no ha sido reconocido como un derecho fundamental, pero se conoce que en Latinoamérica si lo han hecho países como Colombia y Perú, pero no de forma directa sino a través de la práctica del

Tribunal Constitucional, en aplicación a la figura jurídica denominada “bloque constitucional”²⁹⁶.

En el caso hondureño, por lo tanto, podría ocurrir que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, o en su caso un futuro Tribunal constitucional, lo reconozcan, elevándolo a rango constitucional, en atención a lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de la República, que establece que “las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma Republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre”.

Finalmente se señala, que en el ámbito nacional, es procedente investigar si existe en nuestra jurisprudencia algún desarrollo interpretativo del derecho a la verdad.

Seguimiento de las Recomendaciones de la CVR

Con motivo de la entrega del Informe de la CVR el presidente Porfirio Lobo Sosa, se comprometió a darle seguimiento a las recomendaciones de dicha Comisión,

tal y como lo determinó el Consejo Constitucional de ese país en varias decisiones. Sin embargo, si alguien leyera la totalidad de las constituciones de Estados Unidos o de Francia, en ninguna parte de estos textos encontraría una mención expresa a esos derechos, que tienen empero rango constitucional. Estos ejemplos elementales muestran entonces que en muchos ordenamientos jurídicos existen derechos o principios que no se encuentran directamente en el texto constitucional, pero que, por expreso mandato constitucional, tienen rango constitucional. Por ello, la actividad judicial, a través de los operadores de justicia, y muy especialmente a través de las actuaciones y fallos de salas o tribunales constitucionales, pueden invocar disposiciones y principios del derecho internacional de los derechos humanos, para elevar a rango constitucional los derechos humanos que la comunidad mundial o los Estados van reconociendo progresivamente, tal como así lo hicieron, con respecto al derecho a la verdad, los dos países mencionados.

²⁹⁴ Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, *Para que los hechos no se repitan*, página 404.

²⁹⁵ *Ibidem*, página 405.

²⁹⁶ La noción de bloque de constitucionalidad puede ser formulada recurriendo a la siguiente imagen paradójica: este concepto hace referencia a la existencia de normas constitucionales que no aparecen directamente en el texto constitucional; esto es algo muy simple pero que al mismo tiempo tiene consecuencias jurídicas y políticas complejas: que una constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional, es decir, que las normas constitucionales, o al menos supra legales, pueden ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la constitución escrita. Por ejemplo, en Estados Unidos es claro que las mujeres gozan del derecho constitucional de abortar, tal y como lo señaló la Corte Suprema de ese país en la sentencia *Roe vs. Wade* de 1973. Igualmente en Francia, es indiscutible que los derechos de sindicalización y de huelga tienen rango constitucional,

delegando a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) la responsabilidad de impulsar el proceso de implementación y cumplimiento de las recomendaciones; en ese sentido, la Ministra Ana A. Pineda, propuso ante el Consejo de Ministros, la creación de una Unidad, para dicho proceso.

La Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la CVR se crea mediante el Decreto Ejecutivo PCM-071-2011, y se le dotó de independencia funcional, administrativa, jurídica y técnica, siendo nombrado coordinador de la misma, el Dr. Rolando Sierra Fonseca, y como asesor técnico principal el Doctor Eduardo Stein, quien fue coordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; actualmente funciona con el acompañamiento de un Consejo de Notables, como un órgano especializado de consulta y asesoría y se contempla el acompañamiento de una Comisión Internacional de Verificación que identifique, revise, evalúe y registre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.

La Unidad, en junio de 2012, presentó su primer informe del estado de las recomendaciones.²⁹⁷

De acuerdo con el Sistema de seguimiento, de las 84 recomendaciones, a la fecha de presentación del primer informe, se reflejaba los resultados siguientes:

- 13 recomendaciones cumplidas.
- 15 están en proceso de cumplimiento.

La Unidad, en coordinación con la SJDH, al momento de la elaboración de este documento, trabaja promoviendo las condiciones para el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con el derecho a la verdad y la reparación integral a víctimas o sus familiares.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la verdad en la legislación.				
1	Incluir el derecho a la verdad en la Constitución de la República.	2014-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República
2	Afirmar el derecho a la verdad de la víctima y sus familiares y la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos o de lesa humanidad en la legislación nacional SJDH (S.)	2014-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH,

²⁹⁷ Primer informe del estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, páginas 6 y 7.

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				Corte Suprema de Justicia
3	Aprobación de una ley sobre reparaciones y su reglamento, que incluya compromisos relacionados con el cumplimiento del derecho a la verdad, en relación con la investigación, procesamiento y castigo de culpables de violaciones; acceso a la información con motivo de las investigaciones;	2013-2016	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas
4	Facilitar sin ninguna demora y con los criterios de calidad establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda información de violaciones graves de derechos humanos solicitada por las víctimas, sus allegados u organizaciones de derechos humanos.	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Procuraduría General de la República - PGR, Corte Suprema de Justicia
5	Realizar cambios en la Constitución para especificar que los procesos judiciales en contra de un funcionario del Gobierno deben ser públicos y registrados. ²⁹⁸ (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015 - 2022	Congreso Nacional de la República	
6	Adecuar desde el Congreso Nacional la Constitución de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la atribución del Congreso Nacional de interpretar la Constitución de la república y debe mandar a publicar dicha sentencia. (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015 - 2022	Congreso Nacional de la República	
7	Definir claramente cuáles son los alcances, límites y procedimientos del voto de censura y los mecanismos de control político con efectos correctivos. ²⁹⁹ (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015 - 2022	Congreso Nacional de la República	
8	Revisión de normas constitucionales referidas a procedimientos de control del poder o de fortalecimiento de garantías civiles y ciudadanas. Realizar las reformas a artículos de la Constitución para posible armonizar las provisiones constitucionales con el objetivo de crear garantías de control del poder político, por un lado y, por el otro, perfilar algunos derechos ciudadanos de forma tal que su esfera normativa sea correctamente expresa y sus efectos	2015 - 2022	Congreso Nacional de la República	

²⁹⁸ La secretividad crea la posibilidad de que observadores imparciales puedan tener dudas genuinas con respecto al inicio de procesos judiciales. Por ello, la secretividad solo puede ser admitida por vía de excepción, en la etapa de investigación.

²⁹⁹ La atribución de improbar la conducta administrativa y de interpelar a los titulares de otros poderes del Estado y altos funcionarios públicos, conferidas al Congreso Nacional de la república a través del artículo 205, numerales 20 y 22, respectivamente, no tienen claramente establecidos sus efectos correctivos o coercitivos

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	jurídicos sean compatibles con las otras reformas. Reforma al artículo 45, reforma al artículo 205, concordancia con el artículo 242, concordancia con el artículo 326. . (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)			
9	Realizar un cambio constitucional para seguir los parámetros definidos por la doctrina constitucionalista moderna, que defiende la meta-juridicidad y meta-constitucionalidad del poder originario de una asamblea constituyente. . (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015 - 2022	Congreso Nacional de la República	
10	Transformar el sistema constitucional constitutivo en un sistema constitucional declarativo. En un sistema declarativo, la ley declarada inconstitucional es nula desde su aprobación (ab initio). . (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015 - 2022	Congreso Nacional de la República	
Componente: 2 - Recepción del derecho a la verdad en las políticas públicas.				
1	Inclusión del derecho a la verdad en planes de acción de instituciones públicas relacionadas con el derecho.	2013-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, SEPLAN, Dirección General de Servicio Civil
2	Diseño de una Política Pública para la aplicabilidad del derecho a la verdad	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Congreso Nacional de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
3	Enriquecer de manera permanente el presente Plan a partir de las nuevas recomendaciones de los Comités de Tratados, Relatores Especiales, así como con las propuestas de organizaciones ciudadanas y estudios especializados y las evaluaciones al mismo.	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia Ministerio

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				Público, INAM, IHNFA, INJ, La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños -SEDINAFROH
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Diseñar e imprimir un programa de capacitación a personal del MP, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sobre el derecho a la verdad.	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Proyecto de organización y funcionamiento de archivos del gobierno en materia de derechos humanos.	2013-2016	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Ministerio Público
2	Realizar una construcción participativa e interinstitucional de los indicadores para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la verdad que recoja y retroalimente la experiencia internacional al respecto. Realizar este ejercicio de manera paralela y coordinada con la construcción de indicadores sobre derecho a la Justicia.	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Instituto Nacional de la Mujer - INAM, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA; Instituto Nacional de La Juventud - INJ, La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños -SEDINAFROH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Crear un Tribunal de Justicia Constitucional con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los Poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015 - 2022	Congreso Nacional de la República	
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Monitoreo social del cumplimiento del calendario y formulación de recomendaciones desde la perspectiva de familiares de las víctimas y de la ciudadanía.	2014-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia Procuraduría General de la República - PGR
2	Establecer mecanismos permanentes de diálogo, control social y rendición de cuentas hacia los portadores del derecho y sus organizaciones, en relación con la puesta en marcha de acciones para hacer efectivo el derecho a la verdad.	2013-2013	Ministerio Público	Secretarías de Estado, Corte Suprema de Justicia Ministerio Público
3	Creación de un espacio de reunión de los operadores de justicia con víctimas y familiares, con participación de organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil para la rendición de cuentas sobre los mecanismos y acciones puestas en marcha para hacer efectivo el derecho a la verdad.	2013-2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio Público, Fiscalía Especial de Derechos Humanos - FEDH, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Presentación pública del calendario para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH	2014-2014	Procuraduría General de la República - PGR	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretarías de Estado,
2	Amplia difusión de los informes de los Comités de Tratados y de Relatores Especiales del Sistema de Nacionales Unidas y Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad.	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
				de Justicia, Ministerio Público
3	Realizar un programa amplio y permanente de difusión del derecho a la verdad, su alcance y obligaciones del Estado, incluido el tema de Memoria Histórica, adecuado a las distintas regiones del país y a poblaciones diferenciadas: niños, jóvenes, pueblos indígenas y afrohondureños, adulto mayor, mujer, discapacitados, defensores de derechos humanos, población LGBT, migrantes y población privada de libertad.	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público
4	Instalar y dar amplia divulgación a un Centro Virtual de Conocimiento sobre el derecho a la verdad que reúna todos los documentos, instrumentos internacionales, investigaciones, material educativo y experiencias exitosas de educación sobre el derecho a la verdad e iniciativas novedosas para hacerlo efectivo.	2013-2017	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Unidad de Seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
5	Incluir de manera explícita el tema del derecho a la verdad en todos los currículos del sistema educativo formal a nivel primario, medio y superior, con contenidos particulares para cada nivel y para las disciplinas que forman recursos humanos cuyo ejercicio profesional tiene relación directa con las obligaciones para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la verdad.	2013-2015	Secretaría de Educación	Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UPNFM, Universidades Privadas, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 7 - Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Diseño de mecanismo eficaz para prestar a las familias de las víctimas el apoyo adecuado, incluyendo una justa indemnización (doc. 143, Pág. 36; doc. 159, Pág. 14) SDP	2015-2021	Presidencia de la República, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial	Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Desarrollo Social
2	Elaboración de un calendario de trabajo para dar cumplimiento total a las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras. Discusión del calendario con familiares de las víctimas y organizaciones de ciudadanía que trabajan el tema.	2014-2015	Procuraduría General de la República - PGR	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Finanzas
3	Implementación definitiva del calendario para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH e informes periódicos de su cumplimiento.	2015-2021	Procuraduría General de la República - PGR	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretarías de Estado
4	Crear un Consejo Nacional de la Magistratura . (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015- 2017	Congreso Nacional de la República	
5	Someter por parte de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia una actuación ante las violaciones a los derechos humanos derivadas del 28 de junio 2009 a un Consejo Nacional de la Magistratura para determinar si se contrarió el derecho a la “protección judicial” reconocido por el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015- 2017	Corte Suprema de Justicia	
6	Someter por parte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos su actuación a una investigación independiente, comisionada por el Congreso de la República, para determinar si cumplió con sus obligaciones con la imparcialidad y diligencia que requería la situación. (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015	Congreso Nacional de la República	

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
7	Establecer un Plan Nacional de Reparaciones ³⁰⁰ para garantizar el resarcimiento integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio 2009. Asumir en el marco del Plan un compromiso público con las víctimas orientado a reparar el daño que sus agentes les causaron, con criterios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. . (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2014	Presidente de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Fiscalía de Derechos Humanos
8	Investigar, procesar y sancionar, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras, todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida, debiendo garantizar a las personas acusadas todas las salvaguardas del debido proceso, incluyendo su presunción de inocencia, asistencia letrada, acceso pleno al acervo probatorio y oportunidades de examen y contradicción de la evidencia. . (Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional)	2015 - 2022	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia
Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.				
1	Informe de la situación de cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras y cronograma de cumplimiento de las obligaciones que están pendientes de ejecución.	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Organizaciones de Sociedad Civil, Familiares de Víctimas
2	Informes periódicos del MP y la CSJ relacionado con la situación de casos de violaciones a derechos humanos, particularmente los relacionados con el derecho a la verdad	2013-2013	Ministerio Público	Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH

³⁰⁰ Incluye la responsabilidad de garantizar la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio 2009, a cargo del Estado de Honduras o en su caso a cargo de los perpetradores de dichas violaciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones a delitos de sedición y manifestación ilícita, la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial.	2013-2018	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad
2	Inventario de casos en MP, relacionados con la situación del derecho y en juzgados y tribunales. Entrevistas con víctimas y/o sus familiares.	2013-2021	Ministerio Público	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Realización de investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas después del golpe de Estado, en particular respecto de violación del derecho a la vida, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones, e iniciación de procedimientos judiciales contra quienes resulten responsables.	-	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Congreso Nacional de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores, Corte Suprema de Justicia
4	Evitar el uso de la fuerza militar en funciones del cumplimiento de la ley, a menos que se trate de casos extremos y excepcionales, y velar siempre por que esté sujeto a mecanismos independientes de control judicial.	2013-2014	Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
5	Impulsar un programa de educación en derechos humanos, aplicados por las organizaciones de la sociedad civil, así como por el Sistema de Naciones Unidas, con el apoyo de la comunidad internacional.	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Relaciones Exteriores
6	Solicitud al Relator Especial sobre promoción de la verdad, la reparación y garantías de no repetición de la ONU, efectuó una visita a Honduras en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre reparaciones.	-	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Relaciones Exteriores

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
7	Censo de víctimas para reparaciones (Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Informe al Consejo de Derechos Humanos, 13.º período de sesiones, 3 de marzo de 2010).	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Corte Suprema de Justicia

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO SOBRE DEMOCRACIA

DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Marco Normativo

Suecia fue el país que reguló por primera vez el derecho de acceso a la información cuando se establecieron provisiones concretas que regulaban la obligación de las autoridades a rendir cuentas de sus actuaciones e informar sus decisiones. De esta forma, en 1776, el clérigo y parlamentario Anders Chydenius propuso y logró la aprobación de la ley “Freedom of Press and the Right of Access to Public Records Act” (La libertad de prensa y el Derecho de acceso a los Archivos Públicos).

Recientemente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá en abril de 1948, siete meses antes de la Declaración Universal, estableció en su artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento”. Este artículo significa que es una necesidad “investigar”, es decir, buscar, recibir y difundir información como requisito indispensable para poder ejercer las libertades de opinión, expresión y difusión del pensamiento, que constituyen las formas más importantes para ejercer el derecho a la libertad personal como auténtico ejercicio de la propia dignidad, base fundamental de los derechos humanos.

No obstante, en definitiva, la Declaración Universal de Derechos Humanos (del 10 de diciembre de 1948) fue el instrumento que a nivel mundial consagró el derecho a la información:

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Este artículo se refiere a las ya tradicionales libertades de opinión y de expresión, pero les

da un sentido más amplio. No sólo comprende el no ser molestado a causa de sus opiniones, sino que, además, agrega el derecho a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones. La redacción es lo suficientemente amplia para no reducir el término información únicamente al sentido de noticia, por eso se le agrega el concepto de opinión, el cual tiene una connotación más amplia que incluye no sólo hechos, sino ideas y juicios.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también ha servido de punto de partida para las convenciones y pactos de derechos humanos, cuyas ideas siguen en lo fundamental, aunque modificando y añadiendo algunos términos que extienden o precisan mejor su contenido. Por otra parte, como es el caso de Honduras, estos instrumentos internacionales al ser ratificados se convierten en derecho interno, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas 16 de diciembre 1966), que en su artículo 19, numeral 2, dice:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su elección.

Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (22 de noviembre de 1969), repite el ya citado contenido del artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, agregándole, en su artículo 13, inciso 1, la palabra “pensamiento”, para incluir la libertad de pensamiento y no sólo la libertad de expresión.

En el derecho nacional

Y en el derecho nacional, la Constitución de la República (11 de enero 1982) no se refiere en forma expresa al derecho a la información,

únicamente en el artículo 72 establece: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables por la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas”. Ante esta falta de protección expresa del derecho de acceso a la información, se acude a otra disposición constitucional, el artículo 80, que garantiza el derecho de petición: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”. De esta manera todos tenemos “derecho a pedir información”.

Sin embargo, a pesar de la falta de una disposición expresa de la Constitución de la República sobre el derecho de acceso a la información pública, ésta no establece un *numerus clausus*, es decir, una enumeración limitativa de los derechos y libertades que consagra a favor de la persona humana, por el contrario, reconoce en su artículo 63 que “las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas que nacen de la soberanía, de la forma representativa de gobierno y de la dignidad del hombre”.

Significa este artículo que nuestra Constitución acepta el *numerus apertus*, o sea, que cabe la inclusión de este derecho. Además, como ya se explicó, el Estado de Honduras, por los Convenios y Pactos internacionales, está obligado a reconocerlo y protegerlo.

En la legislación ordinaria, cabe recordar que la Ley de Emisión del Pensamiento (vigente desde 1958) establece en su artículo 2: “Las libertades de expresión del pensamiento e

información son inviolables. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas por cualquier medio de expresión”. Pero a pesar de que tenía los fundamentos necesarios para exigir información a las autoridades, aunque fuera sólo para fines periodísticos, nunca se aplicó.

La Ley General de la Administración Pública³⁰¹ establece: “Decretos así como los acuerdos del Presidente de la República y de los Secretarios de Estado, serán publicados en el Diario Oficial *La Gaceta* (artículo 119). que se emiten por decreto los actos que de conformidad con la ley serán privativos del Presidente de la República o deban ser dictados por el Consejo de Ministros (artículo 117); y por acuerdo se emitirán las decisiones de carácter particular que se tomen fuera de los procedimientos en que los particulares intervengan como parte interesada y los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria (artículo 116).

El Código Procesal Penal³⁰², entre otros principios, se fundamenta en el de “publicidad de los actos procesales”, pues la publicidad constituye una exigencia del proceso penal propio de una sociedad democrática abierta y transparente, en la que se pueda conocer cuándo -como es la actividad jurisdiccional penal- es *res pública*, objeto de interés colectivo. La publicidad, dice el magistrado Jesús Fernández Entralgo³⁰³, constituye no en vano, una eficaz garantía frente a la arbitrariedad.

El principio de publicidad de las actuaciones de la autoridad formalmente se mantiene en toda la legislación hondureña, pero no se contemplaba como derecho propio de los ciudadanos el derecho, de exigir la información a los funcionarios públicos.

³⁰¹ Decreto Número 46-87 del 27 de octubre de 1986.

³⁰² Decreto Número 9-99 del 19 de diciembre de 1999, vigente desde 20 de febrero de 2002.

³⁰³ Honduras, Código Procesal Comentado (2000).

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Después de un largo proceso impulsado activamente por la sociedad civil, se aprobó³⁰⁴ a finales de 2006 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), que ha sido catalogada como un instrumento eficaz para potenciar la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Fue para muchos sectores un descubrimiento enterarse que las actuaciones de las autoridades se hacen en beneficio de todas y todos y, por tanto, tenemos derecho a conocerlas. Que las y los funcionarios públicos tienen el deber de informarnos, de hacer “transparentes” sus actuaciones y resoluciones, dado que según reza en la Constitución de la República: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley”, y quien actúa dentro de la ley nada tiene que ocultar.

Por otra parte, tener información de las actuaciones de las autoridades resulta indispensable para el ejercicio de la democracia. ¿Cómo votar a favor de un o una candidato si no sabemos si ha actuado bien o mal? La democracia implica rendición de cuentas y una forma de rendirla, es mediante la apertura a la información. Se trata de salir de las tinieblas a la luz, de lo opaco a lo transparente, para romper el viejo esquema de la *secretividad* para pasar de lo oscuro y secreto a lo abierto y público³⁰⁵.

Contenido del derecho a la información pública

Los juristas mexicanos Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva³⁰⁶ sostienen que el derecho a la información (en sentido amplio), de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “es la garantía fundamental que toda persona posee a traerse información, a informar y a ser informada”. De esta definición se desprenden los tres aspectos más importantes que corresponden a esta garantía fundamental:

1. El derecho a traerse información incluye las facultades de: a) acceder a los archivos, registros de documentos públicos. b) La decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.
2. El derecho a informar incluye: a) las libertades de expresión y de imprenta. b) El de constitución de sociedades y empresas informativas.
3. El derecho a ser informado incluye las facultades de: a) recibir información objetiva y oportuna. b) Ésta debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias. c) Con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin excepción alguna.

Y en un sentido específico, Ernesto Villanueva (2001) define el derecho de acceso a la información pública como “la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder de autoridades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática”.

³⁰⁴ Congreso Nacional, Decreto Número 170-2006, *La Gaceta*, Número 31,193, de 30 de diciembre de 2006.

³⁰⁵ Honduras: *En camino hacia la Transparencia y el acceso a la información*, Tegucigalpa, MD.C., abril de 2008. Leo Valladares Lanza, publicación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Red por la Transparencia en

Honduras (RETHO) y Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE).

³⁰⁶ Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva (2001). *El derecho a la información. Propuesta de algunos elementos para su regulación en México*, En Diego Valades y Rodrigo Gutiérrez: Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso de Derecho Constitucional, Págs. 71-112 México, UNAM.

Así mismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) define el derecho de acceso a la información pública como “el derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma” (artículo 3, 3. LTAIP).

Y son “Instituciones obligadas” a cumplir la ley:

- a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado.
- b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las organizaciones privadas de desarrollo (OPD) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero, o sea, por sí misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos (artículo 3, 4).

Como puede observarse, el marco de competencia de la LTAIP es amplísimo, pues abarca toda la administración pública, centralizada y descentralizada y organizaciones no gubernamentales que manejen fondos públicos, emitan timbres o reciban exenciones fiscales.

Para comprender los alcances de la LTAIP es conveniente señalar que es una ley de orden público y de interés social que tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como de garantizar el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública, para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia mediante

la participación ciudadana (artículo 1). Tiene como objetivos establecer los mecanismos para:

1. Garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos.
2. Promover la utilización eficiente de los recursos del Estado.
3. Hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con los particulares.
4. Combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado.
5. Hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades y servidores públicos.
6. Garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos que establece la ley (artículo 2).

El principio fundamental de la Ley es el de “máxima publicidad”, es decir, la regla general es la presunción que toda la información es pública, y esto porque las y los funcionarios públicos actúan de acuerdo a la ley y, por consiguiente, nada tienen que ocultar. La excepción es la reserva o *secretividad*, que tiene que estar determinada por la ley y autorizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Es por esto que para el cumplimiento de su deber de transparencia, las instituciones obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso para los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles. Para ese efecto, cada institución designará un Oficial de Información Pública responsable de este subsistema y para que suministre la información solicitada, siempre y cuando no esté declarada como reservada. Cada institución creará una partida presupuestaria suficiente para asegurar su funcionamiento (artículo 8 LTAIP).

También, se simplifican las solicitudes de acceso a la información pública que deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin motivación ni formalidad alguna (artículo 20). El término para resolver la solicitud será de 10 días, que podrá prorrogarse una sola vez, por igual tiempo (artículo 21). Se establece, además, un procedimiento expedito para reclamar la denegatoria de la información (artículo 26) y determinan las infracciones administrativas y sus respectivas sanciones (artículo 27).

Finalmente, y para promover la “máxima publicidad de la información”, la LTAIP promueve una “Cultura de Transparencia y Apertura de la Información”, velando porque las Instituciones Obligadas capaciten y actualicen en forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de acceso a la información, la cultura de apertura informativa, transparencia de la gestión pública. Y todavía más, establece que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por conducto de las instituciones de educación formal o no formal y las universidades públicas y privadas, incluirá contenidos sobre esta materia en los planes y programas de estudio (artículo 6).

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los diferentes tipos de información

Para comprender en toda su dimensión los alcances de la LTAIP veamos, brevemente, se señalan los diferentes tipos de información:

Información Pública. “Todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido clasificado como reservado y que se encuentre en poder de las instituciones obligadas que no haya sido previamente clasificada como Reservada y que pueda ser reproducida. Dicha información

incluirá la contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las instituciones obligadas sin importar su fuente o fecha de elaboración” (artículo 3, 6 LTAIP).

Información que debe ser difundida de oficio. “Toda institución obligada está en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente o a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de éstos, por los medios escritos disponibles” (artículo 13). Esta información se considera “más pública y necesaria”, que cualquiera otra, por eso la ley obliga a distribuirla y difundirla en una acción proactiva, no es como la información en general que está a disposición de las personas y la suministran hasta que haya una solicitud. Debe ser dada a conocer sin necesidad de que la pidan.

La Ley detalla la información de oficio en 19 categorías: 1) De la 1 a la 12 se refiere a información de oficio para todas las instituciones obligadas como: su estructura orgánica y sus funciones; las leyes y reglamentos que rigen su funcionamiento; las políticas generales, los planes, programas y proyectos; la información catastral que posean; los registros públicos de cualquier naturaleza; el Diario Oficial *La Gaceta* actualizado; la remuneración mensual de los empleados por puesto; los presupuestos, un informe semestral y otro anual de su ejecución; las contrataciones, concesiones, ventas, convocatorias, concursos; los mecanismos que permitan la participación ciudadana; el nombre de los empleados públicos encargados de gestionar y resolver solicitudes; los decretos ejecutivos, acuerdos y resoluciones que emita el Poder Ejecutivo. 2) Además de esta información, otras específicas para las siguientes instituciones: Congreso Nacional, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República

y las 298 municipalidades. 3) Las actividades de empresas privadas que trabajen con fondos del Estado será divulgada por medio de la entidad pública con la cual se hayan celebrado los contratos respectivos. 4) Las instituciones respectivas publicarán, además, las estadísticas y la información relativa al comportamiento macroeconómico y financiero del Estado que generen o manejen.

Información Reservada. La información pública clasificada como tal por esta Ley, la clasificada como de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones del sector público (artículo 3, 6).

La información reservada es la excepción a la regla de la máxima publicidad de la información pública. Por este motivo sólo la autoridad competente puede restringir el acceso a la información por las causas que están taxativamente enumerados en la LTAIP (artículo 16) y son las siguientes: 1) Cuando lo establezca la Constitución, las leyes, los tratados o sea declarada como reservada. 2) Se reconozca como información reservada por contener datos personales confidenciales o información entregada al Estado por particulares con el carácter confidencial. 3) Todo lo que corresponda a instituciones y empresas del sector privado que no esté comprendido que señala la Ley y leyes especiales. 4) No se usará el derecho de acceso a la información pública para identificar las fuentes de información periodísticas.

La clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse es mayor que el interés público de conocerla o cuando la divulgación de la información o perjudique: 1) La seguridad del Estado. 2) La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Hábeas Data. 3) El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o

persecución de los delitos o de la impartición de justicia. 4) El interés protegido por la Constitución y las Leyes. 5) La conducción de las negociaciones y las relaciones y las relaciones internacionales. 6) La estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad (artículo 17).

Para clasificar la información como reservada, de acuerdo con las causales enumeradas, el titular de cualquier órgano público deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca. Quien, de considerarla pertinente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información, debidamente motivado y sustentado, debiendo enviar copia al IAIP (artículo 18).

La información clasificada como reservada mantendrá este carácter mientras subsista la causa que dio origen a la reserva, y su desclasificación tendrá lugar hasta un máximo de 10 años.

Datos personales confidenciales. Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal, o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o a la propia imagen (artículo 3, 7).

Información confidencial. Es la información entregada al Estado por particulares a la que la ley le atribuya carácter confidencial, incluyendo las ofertas selladas en concursos y licitaciones antes de la fecha señalada para su apertura (artículo 3, 9).

El derecho de acceso a la información pública no puede ser considerado como un derecho absoluto, por eso se protege a los derechos a la vida privada, a la confidencialidad de los datos privados como domicilio personal, creencias

religiosas y políticas, y el derecho al honor y a la propia imagen. También deber protegidas como confidenciales las informaciones dadas a las autoridades con este carácter.

Obligaciones del Estado

El IAIP es el órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia operativa, decisional y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública, de acuerdo con esta Ley. La Presidencia de la República apoyará el funcionamiento de este instituto y actuará como órgano de enlace la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (artículo 8).

El IAIP está integrado por tres comisionados/comisionadas elegidos por dos tercios de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional, de una nómina de 20 candidatos propuestos: dos por cada una de las siguientes instituciones: Presidente de la República, Procuraduría General de la República (PGR), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y Tribunal Superior de Cuentas. Duran en sus cargos cinco años: el Presidente ostenta la representación legal y su designación es hecha por el Congreso Nacional. Los comisionados resolverán colegiadamente todos sus asuntos. Sólo podrán ser sustituidos por imposibilidad legal o natural, cuando sus actuaciones entren en conflicto con la naturaleza de las funciones del instituto (artículo 9).

Son funciones y atribuciones del IAIP: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de esta Ley. 2. Establecer los manuales e instructivos de procedimientos para la clasificación, archivo, custodia y protección de la información pública, que deban aplicar las

instituciones públicas conforme las disposiciones de la Ley. 3. Apoyar las acciones y el Archivo Nacional en cuanto a la formación y protección de los fondos documentales de Honduras. 4. Establecer criterios y recomendaciones para el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Pública. 5. Aplicar el marco sancionatorio de la presente Ley. 6. Realizar las gestiones estrictamente administrativas y necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. 7. Reglamentar, planificar, organizar y llevar a cabo su funcionamiento interno. 8. Presentar un informe de actividades en forma semestral a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional. 9. Realizar actividades de promoción y divulgación en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Operar un sistema de información con relación a su funcionamiento. 10. Otras afines y necesarias para alcanzar las finalidades del IAIP. 11. Garantizar que se publique la información que debe ser difundida de oficio según el artículo 13 de esta Ley (artículo 11).

Instituciones públicas con responsabilidades para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho

El IAIP, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Comisión de Modernización del Estado, tiene bajo su responsabilidad el Sistema Nacional de Información Pública. Este sistema debe integrar, sistematizar, publicar y dar acceso a la información pública por medio de todos los subsistemas de información existentes, los cuales deberán integrarse en formatos uniformes de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el IAIP (artículo 12).

En la actualidad (noviembre 2012), el sistema está integrado por las instituciones obligadas que suman un total de 87 subsistemas agrupados de la siguiente manera: Poderes del Estado, secretarías de Estado, instituciones

desconcentradas, instituciones descentralizadas, alcaldías y otras instituciones³⁰⁷.

Como órgano de vigilancia externo para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se designa al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien tendrá acceso a las instituciones y a la información que no sea clasificada como reservado, confidencial, datos personales confidenciales (artículo 30). Por otra parte, el Congreso Nacional constituirá una Comisión Especial de seguimiento de la LTAIP, la cual recibirá informes trimestrales por parte de las instituciones públicas y formulará recomendaciones al respecto, pudiendo requerir para ello ante la Comisión (artículo 31).

Diagnóstico sobre el acceso a la información pública

Situación actual

1) Panorama general

A seis años de la emisión de la LTAIP puede afirmarse que el tema ha salido a la luz pública, no obstante, se puede afirmar que no ha tomado carta de ciudadanía en la población hondureña. Todavía persiste en la gran mayoría un desconocimiento de la Ley, y el ambiente de desconfianza en las actuaciones de las nuevas instituciones.

Sin embargo, hay que reconocer que el IAIP ha hecho algunos esfuerzos, más bien dirigidos a una superficial capacitación de las y los empleados y funcionarios públicos, que a la población que necesita conocer la información para ejercer sus derechos y pedir cuentas a sus autoridades.

Pero no todo es responsabilidad del IAIP, también las y los representantes de la sociedad civil, que tanto lucharon por la emisión de la LTAIP, por diversas circunstancias, una de ellas la falta de recursos económicos, fueron abandonando su papel de impulsores de la aplicación de la Ley mediante la capacitación de la población y la presentación masiva de solicitudes de acceso a la información. Si no hay demanda de información, el sistema va anquilosándose.

Ahora que el IAIP ha renovado a sus comisionadas y comisionados, valdría la pena relanzar el derecho de acceso a la información pública mediante una alianza entre el IAIP y las organizaciones de la sociedad civil que se han mostrado interés por el tema.

2) Baja calidad de las resoluciones emitidas

Uno de los problemas iniciales que enfrentó el IAIP fue la baja calidad de sus resoluciones, sobre todo de aquellas que autorizaban la reserva de la información. No tenían en sus considerandos un fundamento lógico y jurídico para respaldar la resolución. Igualmente, ni siquiera explicaban el contenido general del documento cuya reserva se solicitaba, únicamente el número con que lo identificaba la institución solicitante.

3) Burocratización

El IAIP poco a poco fue cayendo en el clientelismo político y el amiguismo al punto que su presupuesto se invierte mayoritariamente en pagar al personal. Por otra parte, causó mala impresión en la ciudadanía la forma unilateral en que las y los comisionados se elevaron el sueldo. Se debe hacer una urgente “reingeniería” y dedicar más esfuerzos hacia el exterior, a la capacitación de los empleados y funcionarios públicos y a la ciudadanía en general.

³⁰⁷ Portal del IAIP, listado de Oficiales de Información Pública. Encontrado en www.iaip.gob.hn

Tendencias relevantes

i) **Demanda ciudadana por la rendición de cuentas**

En 2013, se celebrarán elecciones generales para la escogencia de autoridades, en los niveles presidencial, legislativo y municipal. Esto hace que la población se vuelva sensible en conocer qué hacen las autoridades, e igualmente se plantean un conocimiento real de la situación del país. Esta demanda puede ser canalizada a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

ii) **Todavía es necesario utilizar los medios tradicionales de difusión**

Se ha apostado por la difusión de la información pública por los medios electrónicos de comunicación, particularmente Internet. Existen 87 portales de otras tantas instituciones obligadas, pero es sabido que la mayoría de la población no tiene acceso a estas modernas tecnologías. Por eso, es importante hacer mayor difusión en los medios impresos (periódicos, revistas, ediciones propias del IAIP radio y la televisión con campañas permanentes).

Principales desafíos

1) **Potenciar el Sistema Nacional de Información Pública**

Existe una capacidad instalada con 87 instituciones obligadas con su equipo y personal a las que se les puede hacer rendir más eficientemente en su trabajo, integrando en este esfuerzo al Tribunal Superior de Cuentas, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

2) **Promover la emisión de la Ley General de Archivos**

Es urgente trabajar por la emisión de una Ley General de Archivos para que fije las formas

para organizar y conservar los archivos documentales nacionales, y evitar su destrucción y ocultación principalmente a partir de cada cambio de autoridades. Sin esta herramienta, se puede burlar el cumplimiento de la LTAIP.

3) **Promoción de una cultura de transparencia y apertura de la información**

Éste es el principal desafío, para ello se deben realizar convenios con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación para que las instituciones de educación formal o no formal y las universidades públicas y privadas incluyan en sus programas de estudio el estudio del “derecho de acceso a la información pública”.

4) **Exigir a los órganos garantes del cumplimiento de la Ley que ejerzan sus funciones.**

Hasta el presente, la acción ejercida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para que vele por la correcta aplicación de la Ley ha sido muy débil, o más bien inexistente. Tampoco se conocen los resultados obtenidos por la Comisión Especial de Seguimiento a la LTAIP, creada por el Congreso Nacional de la República, ni si el IAIP le ha enviado los informes trimestrales ni si la Comisión del Congreso Nacional ha hecho recomendaciones al Instituto, como lo manda el artículo 31 de la LTAIP. Se requiere que ambas cumplan eficientemente su responsabilidad.

5) **Promover el monitoreo de la aplicación de la LTAIP desde la sociedad civil**

El IAIP vela por el cumplimiento de la Ley, pero es la sociedad civil, en representación de la sociedad civil, la que debe ejercer ese control ciudadano, esa rendición de cuentas sobre la forma en que se aplica la LTAIP.

Matriz sobre el derecho al acceso a información

Resultados de impacto

1. Elaborado e implementado un Plan Nacional para la Promoción de una Cultura de Acceso a la Información Pública basado en la garantía, el respeto, la protección y la efectividad del derecho de la población a tener acceso a toda información de y sobre las instituciones públicas obligadas al cumplimiento estricto de la LTAIP.
2. Realizadas las acciones necesarias para la promoción de una cultura de transparencia y acceso a la información pública en los servidores públicos como garantía del respeto al derecho irrevocable de la ciudadanía a acceder a información bajo el amparo de la Ley.
3. Abolida en el mayor grado posible entre las instituciones, funcionarios y servidores públicos la cultura de secretismo sobre las solicitudes de información realizadas en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Transversalizado el enfoque de transparencia y rendición de cuentas en cada una de las acciones de divulgación de información de las instituciones obligadas por la LTAIP.

Indicadores de impacto

1. Acciones y estrategias implementadas desde las secretarías de Estado a favor del derecho de la población en general a tener acceso a la información.
2. Implementado a nivel de Estado y sociedad en general un plan de formación enfatizando la transparencia y acceso a la información pública como un derecho.

Indicadores

Recepción de los derechos en la legislación:

1. Planes operativos del IAIP e instituciones obligadas transversalizado la cultura de acceso a la información pública como factor primordial en la actuación de las instituciones y servidores públicos.
2. Número de informes elaborados y presentados a la sociedad por las instituciones de control.
3. Entrada en vigencia de nuevas leyes y reformas de leyes que permitan una mejora en la efectividad de las instituciones obligadas a garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Recepción del derecho en las políticas públicas:

1. Para finales del año 2015, el IAIP y las Corporaciones Municipales trabajan conjuntamente en el diseño e implementación de la política y el plan como herramienta para extender a nivel nacional el proceso de transparencia y garantizar el acceso a la información pública.
2. Al finalizar el año 2016, las instituciones de control poseen mecanismos que de forma amigable con la ciudadanía facilitan el acceso a la información, afianzando la transparencia de las instituciones públicas.

Cultura de DD HH en las instituciones y servidores públicos:

1. Para finales del año 2017, instituciones públicas e instancias civiles de contraloría trabajan de manera conjunta en la disminución de información pública calificada como reservada.
2. Para finales del año 2016, la mayor cantidad posible de servidores públicos han recibido educación en cultura de

acceso a la información, cultura de apertura informativa, transparencia de la gestión pública y ejercicio de la garantía de *hábeas data*; permitiéndoles cumplir efectivamente con el deber de garantizar el derecho al acceso a la información pública.

Desarrollo de capacidades en el Estado:

1. Para finales del año 2017, se ha implementado una estrategia de educación en derecho de acceso a la información que permite a la población tener una participación más activa en los procesos de auditoría social y rendición de cuentas de las instituciones y funcionarios públicos.
2. A partir del año 2015, se publican 2 boletines semestrales y un informe anual del seguimiento del Sistema de Indicadores y Monitoreo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Para abril de 2014, se inicia el proceso conjunto entre instancias públicas y civiles para el diseño de los mecanismos de incidencia necesarios para la pronta ratificación de la figura de *hábeas data*.

Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos

1. Para agosto del año 2015, se ha implementado un plan de atención inmediata para el acompañamiento a los reclamos realizados sobre el incumplimiento de la LTAIP y la violación del derecho de acceso a la información pública.
2. Para finales del año 2017, se ha duplicado el número de charlas y capacitaciones impartidas a la sociedad sobre la LTAIP, los mecanismos existentes en el marco de ley, así como el ejercicio de su derecho de acceso a la información.

Promoción de la cultura de derechos humanos en la sociedad (respeto, tolerancia)

1. Para febrero del año 2018, se ha llevado a publicitar al máximo la LTAIP como herramienta de auditoría social sobre la actuación del Estado y sus funcionarios.
2. Para finales del año 2019, se ha llevado a cabo un proceso de capacitación a lo largo de todo el territorio nacional a fin de formar a la población en una cultura de transparencia y acceso a la información enfocado como un derecho.

Lucha contra la impunidad de violaciones a personas migrantes y reparación (todos los derechos, tal como están contemplados, no sólo los civiles)

1. Implementada para septiembre del año 2016 una comisión interinstitucional para dar revisión y dictamen de las denuncias de violación reincidente del derecho de acceso a la información.

Rendición de cuentas y transparencia

1. Para finales del año 2017, se cuenta con mecanismos eficientes en las instituciones obligadas, y en especial en los órganos de control, a fin de optimizar y masificar el conocimiento de la ciudadanía sobre su existencia, funciones y resultados logrados anualmente.
2. Establecida para el final del año 2014, la publicación trimestral de boletines impresos, radiales y televisivos sobre las acciones y resultados de las instituciones estatales.

Acciones urgentes

1. Para el mes de agosto del año 2013, se ha iniciado un proceso de educación de las y los empleados públicos en la creación y fortalecimiento de una

cultura de transparencia y acceso a la información.

2. Para finales de 2013, implementación de una comisión de evaluación y seguimiento sobre el cumplimiento de las instituciones públicas de su

obligación ante la ley de garantizar el derecho de acceso a la información.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho de acceso a la información pública en la legislación.				
1	Ratificación de la figura de habeas data como garantía constitucional, indispensable para regular la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo concerniente a la información confidencial o protección del dato personal (E).	2014-2014	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA
2	Aprobación de la Ley de Archivos como una herramienta indispensable en la aplicación amplia y expedita de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (E19).	2014-2014	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA
3	Demandar a las instituciones de control el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto a la publicación de las memorias anuales de actividades, resultados, estadísticas y procedimientos sobre los servicios que prestan estos órganos a la ciudadanía (S).	2013-2015	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, CONADEH, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
4	Fortalecer al IAIP para que sea efectivo el cumplimiento a los artículos 6 y 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y su reglamento (IAIP) (PC121).	2013-2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP
Componente: 2 - Recepción del derecho de acceso a la información pública en las políticas públicas.				
1	Implementar el plan nacional, departamental y municipal de transparencia y acceso a la información (PC128).	2015-2018	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Alcaldías Municipales
2	Fortalecer el proceso de implementación de la política y el plan nacional de transparencia y acceso a la información, departamental y municipal	2016-2022	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Alcaldías Municipales

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3	Diseñar mecanismos idóneos de acceso a la información pública y rendición de cuentas de los órganos de control hacia la ciudadanía de forma tal que se masifique el conocimiento sobre su existencia, sobre sus funciones y sus resultados (E19).	2016-2022	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA
4	Fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones obligadas por medio de otros mecanismos aparte de los portales virtuales de transparencia.	2014-2014	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Secretaría del Despacho Presidencial
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Capacitar a las y los servidores públicos no solo sobre el deber de garantizar el derecho al acceso a la información pública, sino en la cultura de acceso a la información, la cultura de apertura informativa, la transparencia de la gestión pública y el ejercicio de la garantía de habeas data. (E)	2014-2016	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1	Fortalecer la coordinación entre instancias públicas y civiles de contraloría para una mejor aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permita el seguimiento y la disminución de la información aceptada como reservada (PC154).	2016-2017	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Consejo Nacional Anticorrupción - CNA , Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1	Aplicar un plan de capacitación y acompañamiento a los reclamos de la ciudadanía y organizaciones sociales que se sientan afectadas por el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de las instituciones obligadas (PC130).	2015-2015	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA
2	Incrementar el número de capacitaciones impartidas a la población en general sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los mecanismos existentes en el marco de la Ley, así como el ejercicio de su derecho de acceso a la información.	2017-2017	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Diseñar una estrategia de generación de conocimiento y la producción de insumos que permitan conocer, difundir y orientar a la población sobre el derecho a la información pública, la transparencia, el acceso a la información pública, la auditoría social y la rendición de cuentas	2015-2015	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP ,	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
2	Implementar una estrategia de generación de conocimiento y la producción de insumos que permitan conocer, difundir y orientar a la población sobre el derecho a la información, la transparencia, el acceso a la información pública, la auditoría social y la rendición de cuentas (PC127).	2018-2022	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP ,	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Promover el máximo de publicidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como herramienta esencial de la población para hacer valer su derecho de acceso a la información con apego a la ley (PC100).	2014-2015	Instituto de Acceso a la Información Pública	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional Anticorrupción, Tribunal Superior de Cuentas
Componente: 7 - Lucha contra impunidad de violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Sancionar penalmente a funcionarios públicos con reincidencia en la violación del derecho de la población al acceso a la información, ya sea por acción u omisión.	2016-2016	Ministerio Público	Instituto de Acceso a la Información Pública , Corte Suprema de Justicia
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Sensibilizar y fortalecer las capacidades de las y los funcionarios públicos a fin de lograr el cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en garantía del derecho de toda la población, sin distinción alguna, a acceder a toda información pública que acorde a la Ley no sea calificada como reservada.	2015-2016	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA
2	Creación de una comisión de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las instituciones públicas del derecho de la población a la información.	2013-2013	Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Marco Normativo

El derecho a la libertad de expresión³⁰⁸ está reconocida en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: “Los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos: vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión³⁰⁹”, artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 13 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental inalienable e inherente a las personas. La importancia del derecho a la libertad de expresión la ha puesto de manifiesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH):

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también *conditio sine qua non* para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes

deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre³¹⁰”.

La libertad de expresión contiene, además, la necesidad de pluralidad informativa. Como lo ha dicho la CIDH: “La pluralidad denota el carácter esencial de la libertad de expresión para la vigencia de un régimen democrático³¹¹”. La doctrina ha ahondado en esta materia y establece que: las libertades de expresión e información garantizan la existencia de una opinión pública libre y plural, siendo condición inexcusable para la existencia de una sociedad plural y democrática, sin la cual es impensable el respeto a la libertad de conciencia y a la dignidad de la persona³¹².

Definición del derecho

La interdependencia de la libertad de expresión con otros derechos humanos se manifiesta en que, además de ser un derecho en sí mismo, funciona como medio para el ejercicio y goce efectivo de otros derechos humanos, lo cual implica que la violación de la libertad de expresión conllevará a la violación de otros derechos.

La CorteIDH reconoce que la libertad de expresión tiene dos dimensiones: individual y social. La primera requiere “que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada

³⁰⁸ Los contenidos de este apartado fueron retomados del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 2008.

³⁰⁹ Artículo 5, inciso d).

³¹⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), *La colegiación obligatoria de periodistas* (artículos 13 y 29,

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, número 5, párrafo 70.

³¹¹ Informe CIDH (2004). Capítulo V, párrafo 14.

³¹² Informe CIDH (2004). Capítulo V, párrafo 15.

individuo”³¹³ y, la segunda, implica “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”³¹⁴. En consecuencia, “cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas”³¹⁵. Ambas dimensiones son iguales en importancia y deben ser garantizadas plena y simultáneamente para dar efectividad al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión³¹⁶. La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos.

Respecto a la dimensión individual de la libertad de expresión, la CorteIDH establece que “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”³¹⁷. En lo que respecta a la dimensión social, incluye el derecho a tratar de comunicar a otras personas los puntos de vista propios, “pero implica también el derecho de todos a conocer

opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia”³¹⁸.

Los derechos pueden ser sujetos a limitaciones, siempre y cuando exista una justificación, una norma que así lo disponga o un procedimiento adecuado para imponerla. Al respecto, la fracción II del artículo 32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”³¹⁹.

Para el caso del derecho a la libertad de expresión, la CorteIDH reitera: “El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto”. El artículo 13.2 de la Convención Americana prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben en modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa³²⁰.

³¹³ COIDH, *La colegiación obligatoria de periodistas*, artículos 13 y 29, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 30. En el mismo sentido, véase también COIDH, *Caso Ricardo Canese vs. Paraguay*, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C, núm. 111, párr. 77; COIDH, *Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, Excepciones preliminares; Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C, núm. 107, párr. 108; COIDH, *Caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile*; Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C, núm. 73, párr. 64.

³¹⁴ *Ibidem*.

³¹⁵ *Ibidem*.

³¹⁶ COIDH, *Caso Ricardo Canese vs. Paraguay*, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C, núm. 111, párr. 80; COIDH, *Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, Excepciones preliminares; Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004,

Serie C, núm. 107, párr. 111; COIDH, *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C, núm. 74, párr. 149; COIDH, *Caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile*; Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C, núm. 73, párr. 64; y COIDH, *La colegiación obligatoria de periodistas* (arts. 13 y 29, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 32.

³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ *Ibidem*.

³¹⁹ CADH, artículo 32.2.

³²⁰ COIDH, *Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, Excepciones preliminares; Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C, núm. 107, párr. 120; COIDH, *La colegiación obligatoria de periodistas* (arts. 13 y 29, CADH), Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 39.

La censura previa supone el veto de la información antes de que sea difundida. Sobre esa base, la CorteIDH expresa que “el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido”³²¹.

El principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”³²².

La única excepción que se prevé en la CADH³²³ a la censura previa es la clasificación de espectáculos y materiales audiovisuales para proteger los derechos de la infancia y adolescencia. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.79.

La jurisprudencia más protectora del derecho a la libertad de expresión sostiene que no se puede establecer censura previa, únicamente responsabilidades ulteriores en caso de que se excedan los límites establecidos por el derecho.

Los límites o restricciones deben, además, cumplir con ciertos requisitos para avalar que

en cada caso se apliquen de manera proporcional, al garantizar que la libertad de expresión se restrinja lo menos posible. Estos límites deben estar previamente establecidos por ley para evitar la arbitrariedad de la autoridad y deben ser necesarios en una sociedad democrática. El concepto de “necesidad” atiende a que el límite al derecho debe aplicarse cuando sea la única forma de garantizar el fin protegido y que restrinja, en menor medida, el derecho a la libertad de expresión.

El artículo 13.2 del CADH permite las restricciones necesarias para asegurar “el respeto a los derechos de terceros o la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas”³²⁴.

Sobre la definición del concepto de orden público, la CorteIDH establece como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios³²⁵. Y agrega: “El concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia”³²⁶.

Los casos de salud pública y seguridad nacional como límites legítimos a la libertad de expresión se encuentran regulados federalmente.

³²¹ COIDH, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29, CADH), Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5.

³²² Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108 período de sesiones en octubre del año 2000, principio 5.

³²³ Convención Americana de Derechos Humanos.

³²⁴ COIDH, *La colegiación obligatoria de periodistas* (artículos 13 y 29, CADH), Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 65.

³²⁵ CIDH, *Informe anual 1998*, OEA/Ser. L/V/II.102, Doc. 6 Rev., 16 de abril de 1999, vol. III, *Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión*, cap. IV, aparte B.

³²⁶ COIDH, *La colegiación obligatoria de periodistas* (artículos 13 y 29, CADH), Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 69 y 70.

Otras restricciones a la libertad de expresión que se aceptan en la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal son aquellas que inciden en “toda propaganda a favor de la guerra” y “toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”, “toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial”³²⁷.

El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de rectificación o respuesta de la siguiente manera:

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión, su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso, la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial³²⁸.

Obligaciones del Estado para el cumplimiento del derecho

De acuerdo con los estándares más protectores del derecho a la libertad de expresión, las limitaciones legítimas deben establecerse mediante responsabilidades ulteriores, por lo que la censura previa debe estar prohibida.

³²⁷ PIDCP, “Toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”, Art. 22.2.

³²⁸ CADH, artículo 14.

La libertad de expresión se rige bajo el principio de la “amplia protección y mínima restricción”. Esto se manifiesta, por ejemplo, en que no puede ser sujeta a censura previa³²⁹, sino a responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- El respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
- La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

Este derecho implica que nadie puede ser molestado por sus opiniones y que no es posible restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, “tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”³³⁰.

Por otro lado, la ley debe prohibir “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”³³¹.

Instituciones Nacionales que tienen responsabilidad para el cumplimiento del derecho

En Honduras, 12 instituciones nacionales, entre poderes del Estado y entes gubernamentales, son responsables del cumplimiento y tutela del Derecho a la Libertad de Expresión y de Opinión.

³²⁹ Esta especificación está expresada en el artículo 13 de la CADH.

³³⁰ CADH, artículo 13.3.

³³¹ *Ibidem*, artículo 13.5. Véase también artículo 20 del PIDCP.

A nivel de poderes del Estado destacan el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo es responsable de hacer cumplir la Constitución de la República, sus leyes y los tratados suscritos en la materia, así como promover entre los entes a su cargo el respeto a la libertad de expresión y de opinión; el Poder Legislativo tiene entre sus funciones crear, decretar, reformar y derogar leyes; y el Poder Judicial conoce los recursos de amparo o casación que violenten derechos y libertades fundamentales a la luz de los tratados internacionales, emitir sentencias en materia de libertad de expresión acordes con lo estipulado en este derecho, disminuyendo así la mora judicial y la impunidad en los casos.

En cuanto a instituciones gubernamentales, destacan la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría del Interior y Población, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, la Presidencia de la República; la Secretaría del Despacho Presidencial o Ministerio de la Presidencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Instituciones con rango constitucional que tiene funciones en cuanto a la tutela de este derecho son el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, en especial la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

Para hacer efectivo este derecho destacan: Presidencia de la República, Congreso Nacional de la República, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Instituto de Acceso a la Información Pública, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y Ministerio Público,

³³² Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (1994). *Los Hechos Hablan por sí mismos: Informe Preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993*.

³³³ Comité por la Libre Expresión (C-Libre) (2003). *Informe Nacional sobre derecho a la información y la libertad de expresión*, Tegucigalpa, Honduras.

con énfasis en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

Diagnóstico

El retorno a la democracia en Honduras hace tres décadas estuvo marcado por signos altibajos en materia de libertad de expresión y opinión, en particular a mediados de la década de los ochenta con la etapa de las desapariciones forzosas en donde desaparecieron más de un centenar de personas, según un informe oficial del Estado hondureño³³².

El ejercicio de la libertad de expresión y de opinión permitió, por un lado, contribuir en el registro de las denuncias de los desaparecidos pero, por otro, varios periodistas fueron obligados a tomar precauciones al trascender que sus nombres figuraban en listas de los cuerpos de seguridad del Estado como parte de la doctrina de seguridad nacional y los conflictos político ideológico la década de los ochenta, que marcó a la región centroamericana. Lamentablemente, de este tipo de violaciones específicas a la libertad de expresión y opinión no existen registros formales, sólo relatos orales.

En 2003, se presenta desde una instancia civil el primer Informe Nacional sobre Derecho a la Información y la Libertad de Expresión³³³, que consigna una serie de hechos violatorios a este derecho, entre ellos, el asesinato del primer periodista en el interior del país, Germán Rivas³³⁴, en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán. Desde esa fecha hasta ahora, el fenómeno de la violencia se mantiene en forma ascendente³³⁵.

³³⁴ El periodista Germán Rivas fue asesinado el 26 de noviembre de 2002, seis meses después de salir ileso de un atentado.

³³⁵ El relator para la libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, condenó el 29 de noviembre el crimen e instó a las autoridades hondureñas a investigar este hecho y sancionar a los responsables: "Si bien aún no existe una versión oficial sobre los motivos del hecho, según

De 2003 a septiembre de 2012, se reporta el asesinato de 33 periodistas y comunicadores sociales en Honduras, por causas aún no determinadas. Las regiones donde se produjeron estos hechos son Copán, Santa Bárbara, Lempira, en occidente; junto a Cortés, Colón, Yoro y Atlántida, en el norte; así como Francisco Morazán, en el centro, y Olancho al nororiente³³⁶.

El golpe de Estado de junio de 2009, detonó en sistemáticas violaciones a la libertad de expresión con cierre de medios, asesinatos e intimidaciones, entre otros. En el período que comprende de enero de 2010 hasta septiembre de 2012, tras contabilizarse un promedio de 26 muertes violentas de periodistas, según datos del CONADEH y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). De las 33 muertes, sólo un caso ha sido sentenciado y en otro se detuvo a un supuesto responsable³³⁷.

Las falencias en la investigación criminal y la impunidad siguen siendo los principales obstáculos estructurales para el esclarecimiento de los casos de crímenes a periodistas y comunicadores sociales.

Ante las recomendaciones de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias nacionales e internacionales vigilantes de este derecho, el Estado de Honduras se ha comprometido a cumplir sus obligaciones en el marco de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos para revertir esta tendencia mediante el presente Plan Nacional de Acción

información recibida, el asesinato podría estar relacionado con investigaciones y denuncias sobre asuntos de interés público que Rivas difundía en su noticiario. La Relatoría fue informada de que la Fiscalía de Honduras ya inició la investigación del suceso y practicó las primeras diligencias procesales”, señala el comunicado. El relator recordó que “el asesinato de periodistas es la forma más brutal de coartar la libertad de expresión. “[...] El asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a los comunicadores sociales tiene dos objetivos

en Derechos Humanos, que busca articular todas las iniciativas del Estado en esta materia.

Matriz sobre el derecho a la libertad de expresión

Resultados de impacto

1. Tendencia al fortalecimiento de la libertad de expresión y de opinión con la adecuación de la normativa interna a la legislación internacional para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.
2. Disminución de las violaciones, asesinatos, amenazas, intimidaciones y criminalización contra la prensa, con la vigencia y ejecución de un programa de protección a periodistas.
3. Gestión pública con un enfoque creciente hacia el respeto y garantías del ejercicio de la libertad de expresión y de opinión en cuanto al número de instituciones que asumen su compromiso y crean condiciones favorables para el ejercicio, respeto y las garantías debidas al derecho a la libertad de expresión y de opinión.

Resultados estructurales

1. Reformas aprobadas y publicadas en el Diario Oficial *La Gaceta*.
2. Aprobada la despenalización de los delitos contra el honor y publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*.
3. Aprobada y publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*, la Ley para la Protección de Defensores de—Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de la Justicia.

concretos: por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre abusos e irregularidades a fin de que las mismas no puedan concluirse y, por otro, intenta ser una herramienta de intimidación dirigida contra todas aquellas personas que realizan tareas de investigación”.

³³⁶ Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (septiembre 2013). *Informe Muertes Violentas de Periodistas*.

³³⁷ *Ibidem*.

4. Aprobado un Decreto Ejecutivo en Consejo de Ministros y publicado en el Diario Oficial *La Gaceta*.
5. Reforma aprobada y publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*.
6. Aprobada la Ley sobre Publicidad Oficial y publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*.

Resultados de proceso

1. Institucionalizada una política pública de respeto a la libertad de expresión y de opinión.
2. Generados mecanismos de evaluación de cumplimiento.
3. Número de actividades desarrolladas.
4. Cantidad de recursos públicos destinados anualmente.
5. Institucionalizada la Dirección General de Mecanismos de Protección y el Consejo Nacional de Protección para defensores de los derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad.
6. Política Pública y Plan Nacional de Derechos Humanos oficialmente con recursos y en ejecución gradual y creciente.
7. Identificado el mapa de la comunicación pública, privada y comunitaria en Honduras.
8. Creada e institucionalizada la Comisión de Protección a la Libertad de Expresión, decreto publicado en *La Gaceta* y con recursos para su funcionamiento.
9. Institucionalizado y conformado anualmente el Diálogo Nacional de la Comunicación y la Libertad de Expresión.
10. Identificados, consensuados y aprobados los instrumentos prioritarios en materia de libertad de expresión y de opinión: códigos y manuales, entre otros.
11. Aprobada, con recursos y en ejecución y publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*, la Ley de Radios Comunitarias.
12. Generados protocolos de manejo responsable en temas de violencia y promoción de cultura y valores.
13. Identificados y sancionados los responsables de los crímenes, judicializados los casos de asesinatos de periodistas.
14. Funcionando con recursos necesarios la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Periodistas, defensores de los derechos humanos y otros sectores vulnerables.
15. Funcionando el sistema de reparación a víctimas de violaciones de la libertad de expresión y derechos humanos con recursos propios. Efectuadas las primeras indemnizaciones, una vez judicializados los casos con sentencia firme.
16. Publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* y en ejecución un decreto ejecutivo sobre mecanismos de alerta temprana para movilizar en el interior o en el exterior a periodistas o defensores humanitarios en situación inminente de riesgo.

Componentes y acciones

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho a la libertad de expresión en la legislación.				
1	Adecuación de la legislación interna a la normativa internacional en materia de libertad de expresión y de opinión (RI, Informe CVR, p. 419, Recomendación 1; Informe Relatoría especial para la Libertad de Expresión OEA, 2010).	2013-2013	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
2	Reforma de los artículos 117 (tipificando crímenes de odio como una de las circunstancias para ser reo de asesinato) y 321 (tipificando como discriminación la orientación sexual e identidad de género) del Código Penal	2014-2015	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
3	Reformar los artículos de la legislación nacional en cuanto a “buenas costumbres y contrarias a la moral” se refiere, para facilitar el reconocimiento de las personerías jurídicas de las asociaciones de la población con orientación sexual e identidad de género	2013-2021	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
4	Armonizar el marco regulatorio de la Ley Marco del Sector de Telecomunicación y el actuar de CONATEL para la distribución de frecuencias públicas, privadas y comunitarias (RI EPU, doc. 152, p. 85.b; Informe Relator ONU 2009; Informe CVR Informe Relatoría Libertad de Expresión OEA, 2010).	2014-2014	CONATEL	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
5	Aprobar la Ley de Publicidad Oficial (RI Informe CVR, Recomendaciones 4 y 5, p. 420; Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2010; Informe de la Relatoría Especial sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de Opinión de la ONU, 2009, doc. 150, p. 83).	2015-2015		Congreso Nacional de la República, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas
6	Instituir mecanismos que garanticen la aplicación y efectividad de la norma constitucional dirigida a proteger el derecho fundamental de la libertad de expresión (RI Informe CVR, Recomendación 2 de ámbito de los medios de comunicación social, p. 420): Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de la Justicia.	2015-2016	Congreso Nacional de la República	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
7	Instituir mecanismos que garanticen la aplicación y efectividad de la norma constitucional dirigida	2013-2013	Secretaría de Justicia y	Corte Suprema de Justicia, Secretaría de

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	a proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión; fortalecer los mecanismos que garanticen el respeto del derecho y que vigilen el cumplimiento de las normas legales en la materia, en el sistema de justicia, en la SJDH y en el CONADEH (RI Informe CVR, Recomendación 2 de ámbito de los medios de comunicación social, p. 420): Ley de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.		Derechos Humanos	Estado del Despacho Presidencial, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
8	Evitar medidas destinadas a criminalizar la libertad de expresión, despenalización de los delitos contra el honor (RI, Informe Relator Especial ONU, 2009; EPU, Informe Relatoría Libertad de Expresión OEA-2010).	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Componente: 2 - Recepción del derecho a la libertad de expresión en las políticas públicas.				
1	Establecer espacios y acciones para el funcionamiento de los mecanismos de protección que disminuyan las amenazas y hostigamiento de que son objeto los defensores de los derechos humanos, los jueces y periodistas de conformidad con la Asamblea General de 1998 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RI EPU, doc. 152, pp. 82.3; 152.82.91 y 92.94; Informe CIDH 2011, Título IV Honduras, doc. 161, p. 4).	2013-2013	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, CONADEH
2	Conformar una Comisión de Protección a la Libertad de Expresión orientada a tomar medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión como un bien social, que defienda la integridad del periodista y el comunicador rural y comunitario, en la cual participen los medios de comunicación en forma democrática y con enfoque multiétnico (RI, Informe del Relator Especial sobre todas las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, misión a Honduras, 2005, doc. 146,32j; PC Balance Libertad de Expresión 2011: Impunidad y represión, el rostro de 2011, C-LIBRE).	2014-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN, La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH
3	Emitir en el marco del Diálogo Nacional de la Comunicación y la Libertad de Expresión de manera consensuada códigos de ética de estilo y autorregulación en los medios de comunicación, con enfoque de derechos humanos (Informe Relator Libertad de Opinión ONU 2009, Informe	2015-2016	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Organizaciones Ciudadanas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	Relator Especial de todas la Formas Contemporáneas de Racismo Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Misión a Honduras 205)			Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM
4	En el marco del Diálogo Nacional de la Comunicación y la Libertad de Expresión, generar condiciones para promover los códigos de ética, de estilo y autorregulación en los medios de comunicación con enfoque en el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión y de opinión (RI Informe Relator Libertad de Opinión ONU 2009, doc. 150, p. 83; Informe del Relator Especial de todas las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Misión a Honduras, 2005, doc. 146, 32j).	2014-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Desarrollo Social, Organizaciones Ciudadanas
5	Generar y aprobar una propuesta consensuada sobre el tratamiento de la información en los temas de violencia y la promoción de valores y la cultura (RI Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, mayo de 2007, doc. 143,36; PC Informe General de las consultas regionales en el marco del proceso de diseño de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Justicia y Derechos Humanos, doc. 203, p. 6.1).	2014-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - UNPFM, Secretaría de Desarrollo Social, Organizaciones Ciudadanas
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1	Establecer directrices claras para que los funcionarios y servidores públicos de los tres poderes del Estado y en todos los niveles autónomos, gobiernos locales y entes descentralizados y desconcentrados eliminen prácticas discriminatorias e inhibitorias del ejercicio de la libertad de expresión y de opinión por medio de charlas de sensibilización, foros, talleres, manuales e incluso premiación anual a la institución o gobierno local que tenga las mejores prácticas de respeto a este derecho (RI, Examen EPU, doc. 152, pp. 82, 97).	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
1	Fortalecer capacidades del CONADEH, la SJDH y organizaciones ciudadanas, para vigilar el cumplimiento de las normas legales en materia proteger un derecho fundamental de la libertad de expresión en el sistema de justicia, (RI Informe CVR, Recomendación 2 de ámbito de los medios de comunicación social, p. 420): Ley de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.	2015-2022	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Consejo Nacional Anticorrupción, Organizaciones Ciudadanas
2	Presentar un diagnóstico sobre la caracterización de los medios de comunicación en Honduras a nivel público, privado y comunitario (RI Informe del Relator Especial de la ONU, marzo de 2009, doc. 150, p. 86; Recomendación CVR, doc. 187, p. 77) (E). Formulación y validación.	2013-2013	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Organizaciones Ciudadanas
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1	Establecer diferentes espacios y mecanismos que de manera permanente en todos los niveles del Estado, municipal o nacional, y en todas las esferas de poderes, para que reconozcan públicamente que los defensores de derechos humanos de la sociedad civil y la prensa cumplen una función de notorio interés en la consolidación y avance de las sociedades pluralistas e integradoras, como primer paso para la prevención de los riesgos que corren (A/HRC/13/22, párr. 114 a, Recomendaciones CVR-derechos Humanos, 185, p. 33; Informe sobre Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, p. 3, PC).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Congreso Nacional de la República, Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH
2	Desarrollar anualmente un Diálogo Nacional de la Comunicación y la Libertad de Expresión que permita generar el debate, analizar la situación del ejercicio de este derecho, sus avances y desafíos con participación de todos los sectores involucrados (RI Informe de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la OEA, 2010).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Organizaciones Ciudadanas
3	Generar condiciones para desarrollar anualmente un Diálogo Nacional de la Comunicación y la Libertad de Expresión que permita generar el debate, analizar la situación del ejercicio de este derecho, sus avances y desafíos con participación de todos los sectores involucrados (RI Informe de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la OEA, 2010).	2013-2021	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH, Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

No	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 7 - Lucha contra impunidad por violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1	Realizar investigaciones en los crímenes contra los periodistas a cargo de una unidad especial de investigación (RI EPU, doc. 152, p. 82.76; Informe Relator Libertad de Opinión ONU, Misión a Honduras 2009, doc. 150, p. 82; Declaración del Gobierno de Honduras con el Grupo Cooperantes G-16, doc. 188, p. 11; Informe 2011, Título IV CIDH Honduras, doc. 161, p. 5; Informe 2010, cap. IV CIDH Honduras, doc. 160, p. 4; E) Balance Libertad de Expresión 2011, C-LIBRE, doc. 195, p. 8).	2013-2021	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Congreso Nacional de la República
2	Realizar reparaciones a familiares de víctimas de violaciones a la libertad de expresión una vez concluidas las respectivas investigaciones y causas de asesinatos de periodistas (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. OEA, 2010. Doc. 163).	2015-2018	Secretaría de la Presidencia	Secretaría de Finanzas, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Realizar investigaciones en los crímenes contra los periodistas a cargo de una unidad especial de investigación (RI EPU, doc. 152, p. 82.76; Informe Relator Libertad de Opinión ONU, Misión a Honduras 2009, doc. 150, p. 82; Declaración del Gobierno de Honduras con el Grupo Cooperantes G-16, doc. 188, p. 11; Informe 2011, Título IV CIDH Honduras, doc. 161, p. 5; Informe 2010, cap. IV CIDH Honduras, doc. 160, p. 4; E) Balance Libertad de Expresión 2011, C-LIBRE, doc. 195, p. 8).	2013-2021	Ministerio Público	Secretaría de Seguridad, Congreso Nacional de la República
2	Establecer espacios y acciones para el funcionamiento de los mecanismos de protección que disminuyan las amenazas y hostigamiento de que son objeto los defensores de los derechos humanos, los jueces y periodistas de conformidad con la Asamblea General de 1998 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RI EPU, doc. 152, pp. 82.3; 152.82.91 y 92.94; Informe CIDH 2011, Título IV Honduras, doc. 161, p. 4).	2013-2013	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, CONADEH

DERECHOS POLÍTICOS O DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

Marco Normativo

En el plano internacional los derechos políticos están reconocidos en los siguientes instrumentos:

- Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 21)
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 20, 24, 32 y 34)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 23)
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 5)
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 7 y 14)
- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Art. 42)
- Carta Democrática Interamericana (Art. 1-6)

A nivel nacional los derechos políticos están reconocidos en los siguientes instrumentos normativos:

- Construcción de la República.
- Ley de Servicio Civil

³³⁸ Por ejemplo, puede ser razonable exigir que, a fin de ser electo o nombrado para determinados cargos, se tenga más edad que para ejercer el derecho de voto o establecer que la incapacidad mental verificada puede ser motivo para negar a una persona el derecho a votar o a ocupar un cargo público (OG 25 CDH, 3). Por otro lado, los tratados internacionales sobre de derechos humanos de los no

Contenido de los derechos políticos

Los derechos políticos o de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, son los siguientes:

- Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos;
- Derecho a votar y ser electo; y,
- Derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública.

La restricción de los derechos políticos, a diferencia de los otros derechos civiles y políticos, que se garantizan a “*todas las personas dentro del territorio y sujetos a la jurisdicción del Estado*”, los derechos políticos se restringen a las personas dentro de un Estado que tienen la categoría de *ciudadanos (as)*. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art 25. OG 25 C). No obstante, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que cualquier restricción que se imponga al ejercicio de los derechos políticos, deberá basarse en **criterios objetivos y razonables** (OG 25 CDH, párr. 3)³³⁸.

A continuación se precisa el contenido de cada uno de estos derechos:

Contenido del Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

El Comité de Derechos Humanos ha planteado que la participación en la dirección de los asuntos públicos se refiere a la posibilidad real de obtener información y de participar en la

ciudadanos, como los niños y niñas y los trabajadores migrantes contienen lineamientos especiales sobre los derechos políticos de estos grupos (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Convención de Derechos del Niño).

discusión de todo lo relativo al poder político. Es un concepto amplio que abarca todos los aspectos de la administración pública, incluido la formulación y aplicación de políticas públicas a nivel internacional, nacional, regional y local (OG 25 CDH, párr.5)

Las formas concretas en que se ejerce este derecho también incluyen un amplio espectro que va desde la participación en asambleas populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales, el acceso a información pública como condición necesaria para hacer efectivas las otras formas de participación, la fiscalización o monitoreo social de la gestión pública, el planteamiento de iniciativas ciudadanas, el ejercicio de influencias a través del debate público, la designación de representantes libremente electos, la incorporación directa como miembros de órganos legislativos y ejecutivos, la decisión sobre cuestiones de interés público mediante referendos, plebiscitos, consultas u otros procesos similares de participación, hasta la participación en la definición o modificación de la Constitución de la República como la norma básica de organización y funcionamiento del Estado. (Comité Derechos Humanos. Observación General 25, párr. 6 y 8. Sentencias Caso Castañeda Gutman - México, párr. 147 y voto concurrente del Juez Diego García Sayán Párr. 13, OG 25 CDH, 5, 8, 19). La Carta Democrática establece se debe “promover las diversas formas de participación para fortalecer la democracia” (Art. 6).

Para garantizar el pleno ejercicio del **derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos** se debe prestar especial atención a dos poblaciones en situación de riesgo: Los opositores políticos y los sectores en condiciones de exclusión social.

- **Derecho a la participación en la dirección de los asuntos públicos por parte de los opositores/as:** La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que “*es de resaltar que las voces de oposición resultan*

imprescindibles para una sociedad democrática, sin estas voces no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad. Por ello, la participación efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados” (Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, párr. 173. Caso *Yatama Vs. Nicaragua*, párr. 20. Declaración para Proteger y Promover los Derechos Humanos, Art. 8.2)

- **Derecho a la participación en la dirección de los asuntos públicos por parte de sectores en situación de exclusión social.** “La participación en la dirección de los asuntos públicos ha de considerarse como algo que promueve una ciudadanía activa. En tal sentido debe potenciar la capacidad de acción de los ciudadanos/as, especialmente los más marginados, para articular sus expectativas en relación con el Estado como principal titular de deberes. Esto exige lo siguiente:
 - a) Presupuestar y aumentar las capacidades de organización de la sociedad civil.
 - b) Aumentar la transparencia, difundiendo las políticas y la información sobre los proyectos, en formatos accesibles y en idiomas minoritarios, cuando proceda.
 - c) Crear canales específicos de participación para los grupos más pobres y más marginados, prestando atención al contexto social y cultural. Esos canales deben integrarse en todo el proceso de programación en la gestión pública, no exclusivamente en la fase de formulación, en la que a menudo se detiene la participación.
 - d) Promover la educación cívica y el aumento de la concienciación sobre los derechos humanos como componentes transversales de la gestión pública.

- e) Apoyar las campañas en los medios de información y de comunicación.
- f) Promover y aumentar la capacidad de las redes de comunicadores sociales locales.
- g) Ampliar las alianzas con organizaciones de la sociedad civil y grupos de intereses compartidos, y fortalecer redes para articular sus expectativas respecto del Estado y otros titulares de deberes” (Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo. 2006. Pág. 26)

Contenido del Derecho a votar y ser electo (a):

Este derecho está relacionado con el derecho anterior, ya que tanto el derecho al voto como el derecho a ser electo , constituyen una forma de participación en la dirección de los asuntos públicos, ya sea en calidad de votante o de candidato. No obstante, dada su importancia para el funcionamiento de un estado democrático, se le reconoce como un derecho aparte.

Derecho al Voto. Este derecho supone la garantía real que todas las y los portadores legítimos del derecho deben ser libres de votar a favor de cualquier candidato/a sin ningún tipo de coacción, violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación.

Derecho a ser electo (a). Este derecho supone la garantía real que todas las y los ciudadanos deben tener la oportunidad real de ejercer el derecho de postularse como candidatos candidatas, en condiciones de igualdad y que, si logran obtener la cantidad de votos necesarios, puedan ocupar los cargos públicos para los que han sido electos.

Contenido del Derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos:

El ejercicio de este derecho requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de los servidores públicos sean razonables, objetivos y no discriminatorios. Los sistemas de contratación, ascensos y carrera administrativa en el aparato estatal basada en méritos y en igualdad de oportunidades deben estar libres de toda injerencia o presión política. Por ningún motivo las personas que accedan a cargos públicos podrán ser objeto de discriminación por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por el contrario, deberán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos/as tengan **igual acceso a los cargos públicos**. (OG 25 CDH 23)

Obligaciones del Estado

Obligaciones del Estado relativas a los derechos políticos en general

- La obligación general del Estado es adoptar las medidas legislativas y de otro tipo para garantizar que las y los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos políticos. El Estado debe establecer garantías judiciales que protejan los derechos políticos. Se prohíbe la suspensión de los derechos políticos. Toda actuación que signifique una violación de los derechos políticos, puede dar lugar a reclamaciones en virtud del Primer Protocolo Facultativo. (OG 25 CDH, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 27, Sentencias Caso Castañeda Gutman - México, párr. 140, OG 25 CDH 2).
- Garantizar que la regulación y que la aplicación de los derechos políticos sean

acordes al principio de igualdad y no discriminación, considerando la situación de debilidad de ciertos sectores o grupos sociales (*Caso Yatama Vs. Nicaragua.*, párr. 201. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*).³³⁹

- Garantizar a través de **medidas positivas** que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos (Sentencias Caso Castañeda Gutman - México párr. 145 y Caso Yatama párr. 195).
- Asegurarse que las **reglas para restringir los derechos políticos** se refieran excluidoramente a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. Las restricciones deben encontrarse explícita y claramente planteada en ley, no deben ser discriminatorias, deben basarse en criterios razonables, deben atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (Sentencia CorIDH, Caso Yatama párr. 206)³⁴⁰.
- Asegurarse que si por vía judicial se afectan alguno de los derechos políticos, **las decisiones** que adopten los órganos internos **deben estar debidamente**

³³⁹ Cuando se viola el derecho a ser electo a un cargo público de un miembro/a de un sector en situación de vulnerabilidad también se viola el derecho de la comunidad del cual dicha persona es miembro ... en el desarrollo de la participación política representativa, los electos ejercen su función por mandato o designación y en representación de una colectividad. Esta dualidad recae tanto en el derecho del individuo que ejerce el mandato o designación como en el derecho de la colectividad a ser representada. En este sentido, la violación del primero repercute en la vulneración del otro derecho. (Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 115).

³⁴⁰ La Corte ha desarrollado las condiciones que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención: 1) Legalidad

fundamentadas. La argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado³⁴¹. (Caso López Mendoza vs Venezuela, párr. 141).

- Garantizar que el ejercicio de los derechos políticos se realice sin **ningún tipo de coacción**, violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación (OG 25 CDH, 5, 8, 19).
- **En sus informes**, el Estado debe dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones para respetar, proteger y dar cumplimiento a los derechos políticos. Debe escribir las disposiciones jurídicas que definen la ciudadanía y por lo tanto el ámbito de restricciones para el ejercicio de los derechos políticos por parte de las y los **No Ciudadanos**. Se deberá indicar si grupos como los residentes permanentes, gozan de tales derechos en forma limitada (OG 25 CDH 3).

Obligaciones del Estado relativas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos:

- El reconocimiento en la Constitución u otras leyes de **los medios** por los cuales

de la medida restrictiva. 2) Finalidad de la medida restrictiva. 3) Necesidad en una sociedad democrática y 4) proporcionalidad de la medida restrictiva, 5) la existencia de una necesidad social imperiosa - interés público imperativo, 6) la exclusividad en la nominación y el medio idóneo menos restrictivo para regular el derecho a ser votado, 7) la proporcionalidad respecto del interés que se justifica y 8) La adecuación al logro del objetivo legítimo. Véase Sentencia Caso Yatama párr. 175 - 204

³⁴¹ Cfr. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 122; *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo")*, supra nota 237, párr. 78, y *Caso Chocrón*, supra nota 13, párr. 118.

cada ciudadano/a ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. (OG 25 CDH 5).

- El establecimiento en el ordenamiento jurídico nacional del marco de operación de los referendos. (OG 25 CDH 10).

Obligaciones del Estado relativas al derecho a votar:

- El establecimiento en el marco jurídico nacional del derecho a votar en elecciones.
- La organización de los **sistemas electorales** que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser electo votado. El sistema electoral debe hacer posible la celebración de **elecciones auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto** que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. (OG 25 CDH 10, 157, 158).
- **Realización periódica de las elecciones** con intervalos de tiempo que no sean demasiado largos y que garanticen que la autoridad del gobierno sigue basándose en la libre expresión de la voluntad del pueblo, (157, 158).
- El establecimiento de una **junta electoral independiente** que supervise el proceso electoral y garantice que se desarrolla en forma justa e imparcial y de conformidad con un marco jurídico compatible con la normativa internacional en derechos humanos.
- La **no restricción del derecho de voto** por motivos de discapacidad física ni la imposición de requisitos o restricciones relacionados con la capacidad para leer y escribir, el nivel de instrucción o la situación económica. La afiliación a un partido no debe ser condición ni impedimento para votar.
- Cuando se exige que los votantes se inscriban, su inscripción debe facilitarse, y no deberán ponerse obstáculos para efectuarla.
- Deberá prohibirse mediante disposiciones penales todo acto que interfiera en exceso

con la inscripción o el voto, y esas disposiciones deberán **aplicarse estrictamente**. (OG 25 CDH 11).

- **Los motivos para privar el derecho a votar deben ser objetivos y razonables**. Si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el período de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. A las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar. (OG 25 CDH 14).
- La adopción de **medidas positivas para superar toda dificultad concreta**, como el analfabetismo, las barreras lingüísticas, la pobreza o los obstáculos a la libertad de circulación, que impidan a las personas con derecho de voto ejercer sus derechos en forma efectiva. Se deberá disponer de información y material acerca de la votación en los idiomas de las distintas minorías. Deben adoptarse métodos concretos, como fotografías y símbolos, para que los electores analfabetos puedan votar contando con suficiente información. (OG 25 CDH 12).
- Prestación de **asistencia independiente**, libre de cualquier coacción, presión o manipulación a los discapacitados, ciegos o analfabetos.
- La aplicación del principio de **un voto por persona**, asegurando que el voto de un elector debe tener igual valor que el de otra. La delimitación de los distritos electorales y el método de asignación de votos no deben desvirtuar la distribución de los votantes, ni comportar discriminación alguna contra ningún grupo, ni debe excluir o restringir en forma irrazonable el derecho de los ciudadanos/as a elegir libremente a sus representantes.

- Adopción de medidas explícitas para garantizar el **carácter secreto del voto** durante las elecciones, incluida la votación cuando se está ausente de la residencia habitual. Se debe proteger a los votantes contra toda forma de coacción para revelar cómo van a votar o cómo han votado, y contra toda injerencia ilícita en el proceso electoral.
- La garantía de la seguridad de las urnas
- La garantía del **escrutinio de los votos en presencia de los candidatos** o de sus agentes, así como un proceso de **recuento independiente** y con posibilidad de **revisión judicial** o de otro proceso equivalente a fin de que los electores/as tengan confianza en el proceso de votación y el recuento de los votos.
- La garantía que **los resultados de las elecciones serán respetados**.
- La protección plena de **la libertad de expresión, de reunión y de asociación** como condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho al voto. El ejercicio efectivo del derecho al voto supone una comunidad bien informada, por lo que es preciso hacer campañas de educación de los votantes.
- La **información plena** a las y los electores acerca **de todas las garantías anteriores**. (OG 25 CDH 10, 11, 19, 20, 21).
- Emitir informes sobre sus actuaciones para respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho a la participación en los asuntos públicos.

Contenido del informe del Estado acerca del derecho a votar

En sus informes, el Estado debe dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones para respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho a votar. Los informes deberán:

Describir las normas que rigen el **derecho de voto** y la aplicación de esas normas en el período abarcado por los informes. Deben describirse asimismo los factores que impiden a los ciudadanos/as ejercer su derecho de voto y las medidas positivas que se han adoptado para superar tales factores, incluidos los obstáculos relacionados con el analfabetismo, barreras lingüísticas, pobreza, obstáculos a la libertad de circulación. Debe indicar de qué forma la legislación garantiza el secreto, la seguridad y la validez del proceso electoral. Deberá explicarse la aplicación práctica de estas garantías en el período abarcado por el informe de que se trate. (OG 25 CDH 12 13).

Indicar y explicar las disposiciones legislativas, en virtud de las que se puede privar del derecho de voto a los ciudadanos/as. (OG 25 CDH 14).

Indicar las medidas que han adoptado para garantizar elecciones auténticas, libres y periódicas, y la forma en que su sistema electoral garantiza y da efecto a la libre expresión de la voluntad de los electores. Se debe describir el sistema electoral y explicar cómo las distintas opiniones políticas de la comunidad están representadas en los órganos electos. (OG 25 CDH 22).

Obligaciones del Estado relativas al derecho ser electo:

- La **no imposición de requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio** para presentarse como candidato (a), como el nivel de instrucción, el lugar de residencia, la descendencia o afiliación política. Nadie debe ser objeto de discriminación ni sufrir desventajas de ningún tipo a causa de su candidatura.
- **Las condiciones** relacionadas como la fecha, el pago de derechos o la realización de un depósito para la presentación de candidaturas **deberán ser razonables y no tener carácter discriminatorio**.

- Toda exigencia que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios para presentar su candidatura también deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a dicha candidatura.
- No deberá ponerse como requisito para ser candidato (a) el hecho de ser miembro de un partido. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que *“no se desconoce la importancia que revisten los partidos políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, pero se reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan candidaturas para cargos de elección popular con miras a la*

realización de fines comunes, cuando ello es pertinente e incluso necesario para favorecer o asegurar la participación política de grupos específicos de la sociedad...La participación en los asuntos públicos de organizaciones diversas de los partidos [...], es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria,

cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación. (Sentencias Caso Castañeda Gutman - México, párr. 168 Caso Yatama, párr. 215, 217).

- No deberán usarse las opiniones políticas como motivo para privar a una persona del derecho a presentarse como candidato/a.
- Si hay motivos razonables para considerar que ciertos cargos electivos son incompatibles con determinados puestos (por ejemplo, los de la judicatura, los militares de alta graduación y los funcionarios públicos), las medidas que se adopten no deberán limitar indebidamente los derechos amparados al voto y ser electos.
- Las razones para la destitución de las y los titulares de cargos electivos deberán preverse en disposiciones legales basadas en criterios objetivos y razonables y que comporten procedimientos justos y equitativos. (OG 25 CDH, 16, 17).
- La vigilancia para que, en su organización interna, los partidos políticos respeten las disposiciones anteriores con la finalidad los ciudadanos/as puedan ejercer los derechos a la participación. (OG 25 CDH 26).
- Emitir informes sobre sus actuaciones para respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho a ser electo.

Contenido del informe del Estado acerca del derecho a ser electo

En sus informes, el Estado debe dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones para respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho ser electo. Los informe deberán:

- a) Describir las disposiciones jurídicas que norman el **derecho a ser electo** para cargos públicos y las limitaciones aplicables a determinados cargos. También deben explicar las disposiciones legislativas en virtud de las cuales se puede privar a un grupo o categoría de personas de la posibilidad de desempeñar cargos electivos, (OG 25 CDH 15)
- b) Indicar si hay restricciones que impiden que personas que ocupan puestos en la administración pública (inclusive en la policía o las fuerzas armadas) puedan ser elegidas para determinados cargos públicos.
- c) Describir los motivos y los procedimientos legales para destituir a personas que ocupan cargos electivos.

Obligaciones del Estado relativas al derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad:

En sus informes, el Estado debe dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones para respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública. Debe Describir los procesos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución o separación de cargos en la administración pública y los mecanismos judiciales u otros mecanismos para su revisión. En los informes también debe indicarse cómo se cumple el requisito de acceso

en igualdad de condiciones, y si se han adoptado medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades y, en tal caso, en qué medida.

Vinculación de los derechos políticos con la democracia, la rendición de cuentas y la complementariedad de derechos

Como se deriva de lo planeado anteriormente, los derechos políticos llevan implícito las nociones de democracia, rendición de cuentas y complementariedad de derechos

- **Democracia.** La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los

derechos humanos, la sociedad democrática y el Estado de Derecho constituyen una tríada en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros componentes. (Sentencia Caso Castañeda Gutman - México, párr. 143 y Sentencia Caso Yatama, Párr. 191, 192).

Hablando específicamente a los derechos políticos, la Carta Democrática Interamericana plantea que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su desarrollo es una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia, por lo que promover diversas formas de participación fortalece la democracia. (Carta Democrática Interamericana, Art. 6).

En los mismos términos la CorIDH ha plantado que el ejercicio de los derechos políticos propicia el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político (Sentencia Caso Castañeda Gutman - México, párr. 143 y Sentencia Caso Yatama, Párr. 191, 192)

La Carta Democrática Interamericana ha definido las características que debe tener la participación como derecho político a fin de contribuir de manera efectiva con la triada derechos humanos, Democracia, i. Estado de Derecho, cuando ha señalado en su artículo 2 que la democracia se profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía (Carta Democrática Interamericana, artículo 2).

Otro instrumento que ha aportado sobre las características que debe tener la participación es la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo cuando ha planteado que la misma debe ser activa, libre y significativa. La Carta Democrática también ha recordado el doble carácter de los derechos políticos como derechos y como deberes: La

participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su desarrollo es un derecho y una responsabilidad. (Carta Democrática Interamericana, Art. 6)

Finalmente, la Carta Democrática ha planteado los 5 componentes de la democracia, todos ellos en estrecha relación con los derechos políticos:

- La transparencia de las actividades gubernamentales;
- Probidad;
- Responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública;
- Respeto por los derechos sociales; y,
- Libertad de expresión y de prensa

Estos 5 componentes deben entenderse como un conjunto de deberes de los Estados, en tanto que no son otra cosa que la contrapartida de derechos de los ciudadanos (Sentencia de la CorIDH, Caso Yatama, voto concurrente el Juez Diego García Sayán, párr. 3).

- **Rendición de cuentas.** Parte del principio que, una vez en sus cargos, los servidores públicos electos ejercen solamente las facultades que les atribuyen la Constitución y las leyes y son responsables por sus actuaciones ante los ciudadanos/as que los han electo y ante las leyes. (OG 25 CDH 7).

Los derechos políticos tienen implícito este componente de rendición de cuentas por parte de las y los servidores públicos, electos o nombrados. Lo anterior plantea un doble reto:

- 1.1. Instalar mecanismos de rendición de cuentas accesibles, transparentes y efectivos en los niveles central y local.
- 1.2. Desarrollar capacidades en los titulares de los derechos para ejercer su derecho a la participación en los asuntos públicos, conocer y

reivindicar el resto de derechos y demandar la rendición de cuentas. *“Para que la rendición de cuentas sea eficaz, ha de ser demandada...Esto exige analizar las capacidades que deben tener los titulares de los derechos, especialmente los más pobres, para reivindicar sus derechos”*. (Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo. 2006. Pág. 24

- **La complementariedad de los derechos políticos con otros derechos** consustanciales de la triada derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho: Libertad de expresión, reunión, asociación y acceso a la información pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido además que estos derechos, en conjunto, hacen posible el **juego democrático**³⁴².

El Comité de Derechos Humanos ha establecido que para el pleno ejercicio de los derechos políticos es **indispensable** la libre comunicación de ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos/as, los candidatos/as y los representantes electos/as. Lo anterior, supone la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública. (OG 25 CDH 25).

En consecuencia, el pleno ejercicio de los derechos políticos **requiere** del disfrute de la libertad de participar en actividades políticas individualmente o a través de partidos políticos y otras organizaciones, el derecho a fundar organizaciones y asociaciones

interesadas en cuestiones políticas y públicas y a adherirse a ellas, la libertad de debatir los asuntos públicos, de realizar manifestaciones y reuniones pacíficas, de criticar o de oponerse al gobierno, de publicar material político, de hacer campaña electoral y de hacer propaganda política. (OG 25 CDH 25, 26).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que, vistos en esta forma complementariedad, los derechos políticos, además de ser un fin en sí mismos, son a la vez, un medio fundamental que tienen las sociedades democráticas para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Sentencia Caso Castañeda Gutman - México, párr. 143 y Sentencia Caso Yatama, Párr. 191, 192).

Finalmente, todos estos derechos tienen como telón de fondo el derecho a la libre determinación de los pueblos que otorga a los mismos el derecho a decidir libremente la forma del gobierno que tendrá la responsabilidad de hacer efectivos todos estos derechos. Tanto en el sistema internacional como el sistema interamericano de derechos humanos se limitan a establecer determinados **estándares** dentro de los cuales los Estados pueden y deben regular los derechos políticos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. (OG 25 CDH Sentencias Caso Castañeda Gutman - México, párr. 149 162, 166).

Diagnóstico

Derecho al voto

- a. **Establecimiento en el marco jurídico nacional del derecho a votar en elecciones:**

“El sistema electoral, como elemento del sistema político, es un factor importante en el

³⁴² Comité Derechos Humanos. Observación General 25, No7. Sentencia Caso Castañeda Gutman - México No. 140 y 143

proceso de consolidación institucional en la relación entre Estado y sociedad. Su efecto directo consiste en dar forma concreta a las preferencias políticas de la población expresadas en las elecciones, influyendo en la forma en cómo se adjudica los cargos de representación”³⁴³

En el país, en las últimas décadas se han realizado diversas reformas electorales con las cuales se ha mejorado el marco jurídico nacional que garantice el derecho a votar, los avances más sustantivos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 1977; fue una ley que permitió organizar la elección de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de abril de 1980 los avances más sustantivos logrados fueron:

- Celebración de elecciones internas en los partidos políticos;
- Establecimiento del principio de representación proporcional en las elecciones internas en los partidos políticos; y, Reconocimiento a las candidaturas independientes.

La Ley Electoral de 1981: Como avances importantes de esta ley citarse el tema de la deuda política, mecanismo que financia con fondos público las campañas de los partidos políticos, en base a los votos obtenidos. En el año de 1982 se creó el Registro Nacional de las Personas cuya función desde su creación fue la elaboración del Censo Nacional Electoral.

En 1986, se reforman diversos artículos de la Ley de 1981, los cambios se orientan a:

Define los vínculos del RNP al TSE y además su función en relación al Censo Nacional Electoral; trámites y requisitos relacionados con partidas de nacimiento, cartas de naturalización, etc.

Requisitos para ejercer el sufragio; la definición del principio de representación proporcional

en, la elección de autoridades de organismos de Gobierno del partido o cuando se escojan candidatos a cargo de elección popular, participen distintos movimientos, corrientes o tendencias internas; la potestad para que los partidos puedan introducir los cambios que sean necesarios en sus estatutos; requisitos y documentación para la inscripción de los partidos; requisitos para la postulación de candidaturas independientes; tiempo para hacer propaganda.

En 1989, se vuelve a reformar la Ley de 1981, en este momento los cambios son:

Contenidos de las franquicias postal, telefónica; periodo de inscripción de candidatos; días para celebrar, reuniones o concentraciones de las organizaciones; cantidad de electores y condiciones para instalar las mesas electorales; preparación de listas electorales por el Registro Nacional de las Personas, en él se establecen las ubicaciones en las mesas electorales.

El voto separado en papeleta única, la colocación de la foto del candidato a la presidencia, y el nombre del alcalde; la ubicación en de líneas verticales en cada partido político o candidatura independiente, se hicieron en los cambios a la Ley en 1992 y al siguiente año se emitió un decreto, que permitió, la inscripción del partido Unificación Democrática, así como la definición de separar el voto en boletas distintas para las elecciones de 1997.

En el periodo 94-98, se logró aprobar sobre la base de consenso con sociedad civil del voto domiciliario y de boletas separadas de elección de presidentes y designados, congreso, parlamento centroamericano, corporaciones municipales.

En el año 2004, se crea una nueva Ley Electoral, que fue producto de la concertación entre los diversos partidos existentes y además de la

³⁴³ Calix. A. 2001. *Caracterización y análisis del sistema electoral en Honduras*. FIDE y PNUD. Tegucigalpa. 2001

participación de la sociedad civil a través del Movimiento Cívico por la Democracia.

Las tareas pendientes:

1. Promover la modernización y democratización de todos los partidos políticos en Honduras;
2. Desarrollar procesos de auditoría y rendición de cuentas de los fondos privados y públicos de los ingresos de los partidos políticos; y,
3. Se propone, además, la separación de las elecciones para escoger Presidente de la República y alcaldes municipales.

b. La protección plena de la libertad de expresión, de reunión y de asociación como condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho al voto.

Los artículos 5, 6 y 7 garantizan la participación de los ciudadanos en los procesos electorales como votantes o como candidatos y el Artículo 139: trabajo político permanente, son garantía de este precepto.

c. Realización periódica de las elecciones.

El país ha tenido siete periodos electorales ininterrumpidos, con una interrupción en el periodo de gobierno 2006-2010.

d. El establecimiento de una junta electoral independiente que supervise el proceso electoral.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y sus reformas del 2004, otorga al Tribunal Supremo Electoral, la facultad de organizar, dirigir, administrar y vigilar los procesos electorales y consultas populares (**artículo 15**); no obstante, los últimos procesos electorales han contado con la visita de observadores internacionales que ayudan a garantizar que el proceso sea transparente.

e. La no restricción del derecho de voto por motivos de discapacidad física ni la imposición de requisitos o restricciones relacionados con la capacidad para leer y escribir, el nivel de instrucción o la situación económica.

En el capítulo II: Se desarrolla la igualdad de oportunidades políticas y en los artículos 103 y 104 plantea, acciones orientadas a garantizar, la incorporación y participación sin discriminación por razones de género, raza, credo.

No obstante, las principales barreras a las que se enfrentan son:

- Inaccesibilidad de la información electoral;
- Barreras arquitectónicas en escuelas/colegios; y
- Garantías del secreto del voto que afecta especialmente a los no videntes.

f. Prestación de asistencia independiente, libre de cualquier coacción, presión o manipulación a los discapacitados, ciegos o analfabetos.

Una acción importante en esta dirección fue la firma del convenio (julio del 2009) entre el Tribunal Supremo Electoral y FENOPDIH, FENAPAPENESH y CIARH, para desarrollar un plan piloto de actividades que facilite el ejercicio del voto de las personas con discapacidad.

g. Garantía del escrutinio de los votos en presencia de los candidatos o de sus agentes, así como un proceso de recuento independiente y con posibilidad de revisión judicial.

En la Ley vigente (2004) El artículo 173. ESCRUTINIO DE LA MESA: le asigna a todos los representantes de los partidos políticos los mecanismos y procedimientos que se seguirán para escrutar las urnas de las mesas electorales.

h. La garantía que los resultados de las elecciones serán respetados.

En capítulos VI y VII: Se regula la declaratoria de elecciones y la nulidad de elecciones y sus efectos, con los cuales se garantiza el respeto a los resultados de las elecciones.

Derecho a ser electo

- a. **La no imposición de requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio para presentarse como candidato/a, como el nivel de instrucción, el lugar de residencia, la descendencia o afiliación política.**

En la Ley vigente y en el capítulo I se desarrollan los requisitos para postularse a cargos de elección popular, para garantizar el derecho a la participación.

- b. **Toda exigencia que las y los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios para presentar su candidatura también deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a dicha candidatura.**

En la Ley vigente, en el Título VII, Capítulo II relativo a las candidaturas independientes se establecen los requisitos para presentar las mismas, una de los criterios criticados es el que se refiere a la cantidad de firmas que son necesarias.

- c. **Las razones para la destitución de las y los titulares de cargos electivos deberán preverse en disposiciones legales basadas en criterios objetivos y razonables y que comporten procedimientos justos y equitativos.**

En el Capítulo III relativo a las Disposiciones Generales se establecen las actuaciones para declarar la inhabilitación de las y los candidatos.

Matriz sobre derechos políticos o de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos

Resultado de impacto

El Pleno goce de los derechos políticos por parte de las y los ciudadanos se alcanzará mediante:

- La instalación de mecanismos formales, abiertos, inclusivos, transparentes y articulados entre sí de participación ciudadana en los asuntos públicos a nivel local, regional y central (Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos)
- La incorporación de las demandas de las y los ciudadanos en los programas ofertados por los partidos políticos y en su momento por los planes gobiernos electos. (Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos)
- El cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del Estado de Honduras para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho al voto y a ser electo en los tres procesos electorales a realizarse durante la vigencia del presente Plan: 2013, 2017, 2021. (Derecho a votar y ser electo)
- Los procesos de democratización interna, transparencia y rendición de cuenta de los partidos políticos (Derecho a votar y ser electo)
- El establecimiento carrera administrativa con base amerito (Derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública)
- La generación una cultura política en las y los ciudadanos para el ejercicio del voto de manera consiente y razonada.
- Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para ejercer informada mente sus derechos a la participación en la gestión pública

Indicadores de impacto

Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

1. Porcentaje de instituciones públicas con mecanismos formales de participación ciudadana en funcionamiento
2. Porcentaje de instituciones públicas que presentan sus Planes Operativos Naturales, presupuestos y liquidaciones operativos y presupuestarias trimestrales y anuales en un lenguaje técnico comprensible
3. Número de auditorías sociales a la gestión pública a nivel local y nacional
4. Porcentaje de recomendaciones de auditoría sociales que son tomadas en cuenta por las instituciones públicas

Derecho a votar y ser electo

1. Porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que participan en elecciones versus los que no participan por sexo, población urbana rural y origen étnico y edad.
2. Número de observatorios electorales ciudadanos.
3. Número de organizaciones y personas que participan de los observatorios electorales por sexo, edad y origen étnico
4. Porcentaje de recomendaciones que son tomadas en cuenta en cada proceso electoral, provenientes de procesos de observatorios electorales ciudadanos y de observadores internacionales.
5. Porcentaje de obligaciones del Estado que tienen cumplimiento en cada proceso electoral.

Derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública:

1. Número de servidores públicos del Poder Ejecutivo sujetos a un régimen de

contratación y ascenso por méritos, diferenciado por sexo, situación de discapacidad y origen étnico.

2. Número de funcionarios técnicos que se mantienen y que cambian en cada proceso de gobierno

Indicadores estructurales

1. Tratados o Convenios Internacionales relativos al derecho a los derechos políticos ratificados por el Estado de Honduras.
2. Realizadas las reformas a la Ley Electoral contempladas en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Indicadores de proceso

1. Porcentaje de actividades del PNADH sobre derechos políticos que son incorporadas a los POA de las instituciones públicas con competencias para su implementación.
2. Número de actividades del PNADH sobre derechos políticos que son ejecutadas al final del año
3. Número de acciones que son incorporadas al PNDH como resultado de recomendaciones de Órganos de Tratado u otros procedimientos especiales del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Sistema interamericano o de demandas ciudadanas.

Componentes y acciones

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho en la legislación.				
1.	Asegurarse que la reforma constitucional regule el tratamiento que se le dará al plebiscito y referéndum y las materias o asuntos en los cuales su realización tendrá carácter obligatorio (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013)	2013, 2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de la Presidencia
2.	Elaborar un Reglamento de sanciones dirigidas a las violaciones del Código de Conducta del Servidor Público con el fin de lograr un mayor compromiso y manejo ético para la debida administración de los recursos públicos y su correspondiente beneficio para la Ciudadanía en calidad de portadora de derechos (Plan de Gobierno Abierto. 2012)		Tribunal Superior de Cuentas	Secretaría de la Presidencia, Consejo Nacional Anticorrupción- CNA, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos-SJDH
3.	<p>Completar la tramitación del Proyecto de Ley Especial de Audiencias Públicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado, que son cargos de elección directa del Congreso Nacional y de relevancia especial para la efectividad de los Derechos Humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, • Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, • Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, • Director y Subdirector del Registro Nacional de las Personas, • Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, • Procurador y Subprocurador General de la República, • Procurador y Subprocurador del ambiente, • Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, superintendente de concesiones, • Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública <p>(Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pág. 406, 407)</p>	2013, 2014	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
4.	Reglamentar el Convenio 169 de la OIT para asegurar el cumplimiento de los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas y tribales respecto al uso y explotación de los recursos naturales en sus territorios. (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pago 407)	2015	Congreso Nacional de la República	Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños - SEDINAFROH
5.	Revisar y reformar la Ley Orgánica de la Policía, respecto al funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de políticas de seguridad. (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pág. 406)	2014	Congreso Nacional de la República	CONASIN
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1.	Garantizar que los mecanismos de plebiscito y referéndum, introducidos en la reforma constitucional puedan ser puestos a disposición de la ciudadanía para su utilización (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013)	2014-2022	Secretaría de la Presidencia	Congreso Nacional de la República
2.	Realizar un inventario de todos los mecanismos formales de participación ciudadana en los asuntos públicos en las diferentes instituciones públicas, a nivel central, regional y local identificar las que están funcionando, las que no y las lecciones aprendidas por parte de los diferentes actores involucrados en las mismas.	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	Secretaría de la Presidencia
3.	Definir canales y estrategias para articular procesos formales de participación ciudadana en la gestión pública a fin de evitar duplicidades y potenciar la acción coordinada entre ellos.	2015-2022	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN	Secretaría de la Presidencia Comité Interinstitucional PNADH
4.	Poner en funcionamiento los mecanismos de participación ciudadana formalmente establecidos pero que no están en funcionamiento.	2015-2022	Varias	

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
5.	Instalar un proceso de presupuesto participativo a nivel local y central articulado a los procesos de planificación estratégica, territorial y operativa. Establecer en el marco de dicho proceso, mecanismos específicos de participación para los grupos más pobres y en situación de exclusión.	2015-2022	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN	Todas las instituciones publicas
6.	Hacer una recopilación puntual de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la experiencia internacional sobre el sistema independiente de queja ciudadana que ofrezca respuestas ágiles a la población sobre ciertos aspectos del funcionamiento de la gestión pública.	2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	Secretaría de la Presidencia
7.	Realizar experiencias piloto de sistema independiente de queja ciudadana en instituciones y sectores públicos claves.	2015-2017		
8.	Aprobar e implementar la Política Integral Anticorrupción de Honduras con la participación de los sectores sociales, económicos y políticos del país.	2015	Secretaría de la Presidencia	Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Consejo de Ministros
9.	Realizar una evaluación independiente y con participación de sociedad civil de: 1) Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2011 - 2013 2) y del 2) Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas y hacer reformulación de los mismos en base a los hallazgos y buenas practicas identificadas en la evaluación	2014 - 2015	Secretaría de la Presidencia	Secretaria Finanzas, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH, Secretaria del Interior y Población, Consejo nacional Anticorrupción
10.	Implementar de manera participativa del Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2011 - 2013 el Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas y el Plan de Gobierno abierto	2016 - 2022	Todas las instituciones del Poder Ejecutivo	
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1.	Definir estrategias y canales específicos para que las instituciones y servidores públicos permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública (Mecanismo de	2014-2022	Todas las instituciones publicas	

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013. No. 388)			
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1.	Desarrollar una estrategia para empoderar a la ciudadanía sobre la información relativa a presupuestos públicos a fin de facilitar su aporte a los procesos de toma de decisiones (Plan de Gobierno Abierto. 2012)	2015-2016	Secretaría de Finanzas - SEFIN	Secretaría de la Presidencia, SEPLAN, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Consejo Consultivo Ciudadano, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH
2.	Aplicar anualmente el Índice de Presupuesto Abierto en base a la metodología del International Budget Partnership (IBP),	2014 - 2022	Consejo Consultivo Ciudadano	SEFIN, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH
3.	Desarrollar procesos de capacitación de las instancias de participación en los asuntos públicos sobre el enfoque de derechos humanos en la gestión pública y su papel como portadores de derechos.	2014 - 2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	Todas las instituciones públicas
4.	Poner en funcionamiento programas para facilitar las herramientas a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para la utilización adecuada de mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública. En el marco de este Programa, realizar una amplia difusión de las herramientas en el Centro Virtual de Conocimiento sobre el Derecho a los derechos humanos (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013)	2014-2022	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial - SDP	TSC, Consejo Nacional Anticorrupción - Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Instituto de Acceso a la Información Pública - IAIP, SJDH
5.	Promover la discusión interna de sociedad civil sobre el desarrollo de sus capacidades para una participación independiente, permanente, ética, responsable, activa, libre y significativa de la ciudadanía en la gestión pública.	2015 - 2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	Secretaría del Interior y Población, Consejo Nacional Anticorrupción - CNA, Consejo Consultivo Ciudadano
6.	Realizar investigación científica sobre las condiciones que se deben estimular en el	2014-2016	Universidad Nacional	Secretaría del Interior y Población, Consejo Nacional

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	Estado y la ciudadanía para una participación independiente, permanente, ética, responsable, activa, libre y significativa de la ciudadanía en la gestión pública.		Autónoma de Honduras - UNAH	Anticorrupción - CNA, Consejo Consultivo Ciudadano
7.	Instalar y fortalecer un Consejo Consultivo Ciudadano independiente que dé seguimiento independiente a la ejecución del Plan Nacional en Derechos Humanos y realice propuestas permanentes para su perfeccionamiento	2014-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	
8.	Reactivar y fortalecer el funcionamiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las políticas del Ministerio Público. (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. pág. 406)	2014-2015	Ministerio Público	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1.	Diseñar un programa para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013)	2015	Tribunal Superior de Cuentas - TSC	SDP, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH
2.	Poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013)	2016 - 2022	Tribunal Superior de Cuentas - TSC	SDP, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH, Medios de comunicación del Estado
Componente: 7 - Lucha contra impunidad de violaciones de derechos humanos y reparación integral.				
1.	Preparar y dar amplia difusión a un material educativo que informe sobre los mecanismos institucionales existentes de los que pueden hacer uso las y los portadores del derecho, para denunciar violaciones a los derechos políticos a nivel nacional e internacional y los pasos para acceder a dichos mecanismos.	2014	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	Tribunal Supremo Electoral - TSE, Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - USCVR
2.	Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante instancias nacionales e	2014-2022	Secretaría de Justicia y	Ministerio Público, Consejo Consultivo Ciudadano

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	internacionales para verificar que se obtiene respuesta en los términos establecidos y que, dependiendo del caso, se hacen las reparaciones respectivas.		Derechos Humanos - Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH, CONADEH	
3.	Sistematizar y dar amplia difusión a casos paradigmáticos de uso exitoso de mecanismos institucionales para denunciar violaciones a los derechos políticos y obtención de reparaciones. Una publicación electrónica anual	2016-2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH	Ministerio Publico, Consejo Consultivo Ciudadano

Componente: 8 - Rendición de cuentas y transparencia.

1.	Publicar en los Portales de Transparencia de cada institución pública, los Planes Estratégicos Institucionales, Programas, Proyectos, Planes Operativos Anuales, presupuestos y los reportes trimestrales, utilizando un lenguaje técnico comprensible, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	2014 - 2021	Todas las instituciones públicas e instituciones obligadas por la LTAIP	Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional Anticorrupción y Comisión Legislativa de Seguimiento de la LTAIP
2.	Publicar periódica, oportuna y de manera accesible información sobre las finanzas y presupuesto de la Republica	2014-2022	Secretaria de Finanzas - SEFIN	Todas las instituciones públicas e instituciones obligadas por la LTAIP
3.	Realizar la actualización y divulgación del Informe sobre Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA por sus siglas en inglés), con el fin de conocer el desempeño de la gestión y de la transparencia de las finanzas públicas en Honduras. (Plan de Gobierno Abierto. 2012)	2014, 2016, 2018, 2020, 2022	Secretaria de Finanzas - SEFIN	Secretaria de la Presidencia
4.	Hacer el ejercicio de una lista de chequeo del cumplimiento de las obligaciones del Estado en relación con los derechos	2014, 2016, 2018,	Secretaría de Justicia y Derechos	Tribunal Supremo Electoral - TSE, USCVR

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	políticos. Repetir la lista en forma periódica para identificar avances y retos. (Por lo menos cada 2 años)	2020, 2022	Humanos - SJDH	
5.	Publicar y dar amplia difusión a la lista de chequeo.	2014, 2016, 2018, 2020, 2022	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	Tribunal Supremo Electoral - TSE, Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - USCVR
Componente: 9 - Acciones Urgentes.				
1	Garantizar que los mecanismos de plebiscito y referéndum, introducidos en la reforma constitucional puedan ser puestos a disposición de la ciudadanía para su utilización (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013)	2014-2022	Secretaría de la Presidencia	Congreso Nacional de la República
2	Realizar un inventario de todos los mecanismos formales de participación ciudadana en los asuntos públicos en las diferentes instituciones públicas, a nivel central, regional y local identificar las que están funcionando, las que no y las lecciones aprendidas por parte de los diferentes actores involucrados en las mismas.	2014-2015	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH	Secretaría de la Presidencia
3	Instalar un proceso de presupuesto participativo a nivel local y central articulado a los procesos de planificación estratégica, territorial y operativa. Establecer en el marco de dicho proceso, mecanismos específicos de participación para los grupos más pobres y en situación de exclusión.	2015-2022	Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN	Todas las instituciones públicas
4	Realizar experiencias piloto de sistema independiente de queja ciudadana en instituciones y sectores públicos claves.	2015-2017	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos- CONADEH	

Derecho a votar y ser electo

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1.	Destinar recursos financieros y apoyo logístico suficiente, oportuno y en condiciones de transparencia para los procesos electorales 2013, 2017 y 2021, con la finalidad que dichos pongan en poarctuca las obligaciones del Estado para hacer efectivo el derecho al voto y a ser electo por parte de los ciudadanos y ciudadanas (Declaracion Conjunta del Gobierno de Honduras con el Grupo de Cooperantes G16. Agosto 2012. Observacion No. 25 Comité Derechos Humanos)	2013, 2017 y 2021	Presidente	Secretaria de Finanzas - SEFIN
2.	Fortalecer y democratizar los partidos políticos a fin de cumplir su rol de mediación política entre la comunidad y el Estado y que contribuyan a hacer efectivos los derechos ciudadanos, a través de la distribución de la deuda política en varios años y no únicamente en el periodo electoral. Ligar un porcentaje de la deuda a la puesta en marcha de programas de institucionalidad, de democratización interna de los partidos y de formación sobre los derechos políticos de los ciudadanos/as y su responsabilidad al respecto. (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. pág. 414. Observación General 25 Comité Derechos Humanos)	2016-2022	Tribunal Supremo Electoral - TSE	SEFIN, Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - USCVR
3.	Fortalecer y democratizar los partidos políticos a través de una permanente rendición de cuentas por parte de los mismos y del monitoreo de sus fondos y sus programas de fortalecimiento y democratización (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. pág. 414. Observación General 25 Comité Derechos Humanos)	2016-2022	Tribunal Supremo Electoral - TSE	Consejo Consultivo Ciudadano, Partidos Políticos
4.	Depurar la calidad del censo electoral mediante su actualización permanente (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. pág. 415)	2016 - 2022	Tribunal Supremo Electoral - TSE	Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - USCVR
Componente: 4 - Desarrollo de capacidades en el Estado.				
1.	Reformar el procedimiento para seleccionar a los candidatos a magistrados al TSE para fortalecer la independencia del mismo, de forma que no sea integrada por activistas y dirigentes de los partidos políticos. Modificar los procedimientos de nombramientos de los funcionarios del TSE y RNP, eliminando el peso que los partidos políticos tienen en la designación. (Informe Comisión de la Verdad y	2017	Congreso Nacional de la República	Partidos Políticos, Tribunal Superior de Cuentas - TSC

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
	Reconciliación. págs. 414, 415. Observación General 25 Comité Derechos Humanos)			
2.	Instalar y fortalecer un servicio civil de carrera basado en el mérito y en la competencia, que dote al personal funcionario de la estabilidad laboral necesaria para llevar a cabo sus funciones. (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. Págs. 414)	2017	Secretaría de la Presidencia.	Congreso Nacional de la República
3.	Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas en su capacidad de emisión de la tarjeta de identidad. Los partidos políticos no deberían ser gestores de la tarjeta de identidad (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. pág. 415).	2017	Presidente de la República	Congreso Nacional de la República
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1.	Apoyar y facilitar una observación electoral independientemente de los procesos electorales 2013, 2017 y 2021 por parte de la sociedad civil, organizaciones internacionales y otros observadores (Declaración Conjunta del Gobierno de Honduras con el Grupo de Cooperantes G16. Agosto 2012. Observación No. 25 Comité Derechos Humanos)	2013, 2017 y 2021	Tribunal Supremo Electoral - TSE	Consejo Consultivo Ciudadano
2.	Facilitar los esfuerzos de la sociedad civil para monitorear los gastos de campaña y el financiamiento general de los partidos políticos que estimule un ambiente de responsabilidad en los partidos políticos y candidatos. (Declaración Conjunta del Gobierno de Honduras con el Grupo de Cooperantes G16. Agosto 2012. Observación No. 25 Comité Derechos Humanos)	2013, 2017 y 2021	Tribunal Supremo Electoral - TSE	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial - SDP
3.	Desarrollar un mecanismo que permita mejorar la calidad de los procesos electorales mediante la incorporación sostenida de las recomendaciones derivadas de las observaciones independientes, las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos (Observación No. 25 Comité Derechos Humanos)	2017 y 2021	Tribunal Supremo Electoral - TSE	Consejo Consultivo Ciudadano
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
4.	Realizar campañas de permanente concienciación ciudadana, sobre los deberes y derechos a la participación en los asuntos públicos y las obligaciones del Estado. Uso de medios de comunicación estatales en la campaña. (Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación. pág. 414, 415. Observación General 25 Comité Derechos Humanos, Declaración Conjunta del Gobierno de Honduras con el Grupo de Cooperantes G16. Agosto 2012. Observación No. 25 Comité Derechos Humanos)	2017-2022	Tribunal Supremo Electoral - TSE	Presidencia de la República, CONADEH, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH, IAIP

Derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 1 - Recepción del derecho en la legislación.				
1.	Hacer una revisión y someter al Congreso Nacional de la República una propuesta consensuada y participativa de Reforma a la Ley de Servicio Civil para adecuarla a las mejores prácticas a nivel internacional, a las obligaciones del Estado con respecto al derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública y al cumplimiento de los propios objetivos de la Ley actual (1)	2016	Secretaría del Despacho Presidencial, Dirección General de Servicio Civil	Consejo Consultivo Ciudadano, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH
2.	Aprobar una Reforma a la Ley de Servicio Civil adecuándola a las mejores prácticas a nivel internacional, a las obligaciones del Estado con respecto al derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública y al cumplimiento de los propios objetivos de la Ley actual	2017	Congreso Nacional de la República	Secretaría del Despacho Presidencial, Dirección General de Servicio Civil

(1) La Ley fue aprobada en 1967, ha tenido 4 reformas en 1988, 1989 y 1993 y se plantea 5 objetivos:

- 1) Crear la carrera administrativa con base en el sistema de méritos
- 2) Ofrecer iguales oportunidades para servir en la administración pública, a todos los hondureños, conforme a su idoneidad y aptitudes, independientemente de su sexo, raza, credo religioso, filiación política o clase social
- 3) Capacitar, responsabilizar, proteger y dignificar a los servidores del Estado
- 4) Incrementar la eficiencia de la función pública
- 5) Garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el cumplimiento de las normas de esta Ley, sus reglamentos y demás leyes conexas.

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
Componente: 2 - Recepción del derecho en las políticas públicas.				
1.	Crear y fortalecer la carrera administrativa con base amerito que manda la Ley General de Servicio Civil de manera sólida, sistemática y progresiva, con evidencia e indicadores definidos.	2018-2022	Secretaría del Despacho Presidencial,	Dirección General de Servicio Civil
2.	Asegurar que los 3 procesos de transición de gobiernos que se realizaran durante la vigencia del presente Plan sean eficientes y garanticen la continuidad del personal técnico a fin de garantizar derechos de los servidores públicos en base a la normativa internacional, evitar la pérdida de memoria institucional, pérdida de recursos humanos técnicos capacitados por el Estado, dar continuidad a procesos de planificación de mediano y largo plazo e inculcar un sentido de responsabilidad en los empleados del servicio público con la población como portadora de derechos.	2013, 2017 y 2021	Secretaría del Despacho Presidencial,	Secretarías de Estado

No.	Acción Estratégica	Fecha	Responsable directo	Co-responsables
3.	Estimular compromisos solidos por parte de los partidos políticos en el sentido de fortalecer el Estado de Derecho, eliminando el clientelismo en la gestión pública y respetando la carrera administrativa en base a méritos establecida en la Ley General de Servicio Civil	2013 - 2022	Presidente de la Republica	Secretaría Despacho Presidencial, Dirección de Servicio Civil
4.	Establecer y aplicar, en el marco de la carrera administrativa con base a méritos, medidas positivas para favorecer el acceso igualitario a la función pública por parte de sectores en condiciones de inequidad: Jóvenes, profesionales recién egresados, adultos mayores, mujeres, pueblos indígenas y negros, discapacitados, población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero)	2014-2021	Presidencia de la Republica, Secretaría del Despacho Presidencial	Consejo de Ministros, Dirección de Servicio Civil
5.	Respetar y fortalecer la naturaleza eminentemente técnica y especializada del quehacer de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, respetando la carrera de servicio público del personal de la Secretaría en vista de haber ingresado por oposición, bajo criterios de meritocracia personal y profesional y estar capacitados en el área de justicia y derechos humanos (Declaracion Conjunta del Gobierno de Honduras con el Grupo de Cooperantes G16).	2013, 2017 y 2021	Presidencia de la Republica	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 3 - Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos.				
1.	Diseñar y desarrollar un programa de profesionalización de las y los servidores públicos que incorpore el tema del enfoque de derechos humanos en la gestión pública, cree condiciones para eficientar la gestión pública, para la promoción de los servidores públicos y establezca claramente la responsabilidad y desempeño esperado de los servidores/as públicos en el respeto y de los derechos humanos y trato con dignidad a los portadores de derechos (Ley Servicio Civil. Programa Nacional de Formación en Derechos Humanos. Declaracion Conjunta del Gobierno de Honduras con el Grupo de Cooperantes G16. Agosto 2012)	2016	Presidencia de la Republica, Secretaría del Despacho Presidencial	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - SJDH, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - SEPLAN
Componente: 5 - Desarrollo de capacidades en los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos.				
1.	Instalar un mecanismo de monitoreo social de la carrera administrativa con base a méritos con amplia participación de las organizaciones de sociedad civil y de la academia, con apoyo técnico de la cooperación internacional en base a las mejores practica internacionales al respecto.	2016	Consejo Consultivo Ciudadano	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Componente: 6 - Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad.				
1.	Realizar una campaña de educación ciudadana sobre la naturaleza del servicio público para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, la importancia de una carrera administrativa con base a méritos como una condición para hacer efectivos la totalidad de derechos humanos y contrarrestar la noción introducida por la clase política que los activistas del partido en el poder tiene derecho a un puesto en la admiración pública.	2016	Presidencia de la Republica, Secretaría del Despacho Presidencial	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

BIBLIOGRAFÍA

- Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993. Declaración y Programa de Acción de Viena. <http://www.catedradh.unesco.unam.mx>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 2002. Handbook on National Human Rights Plans of Action. <http://www.hchr.org.mx>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia. www.corteidh.or.cr
- Abolición de la Convención sobre Pena de Muerte, Carta Democrática Interamericana y Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.
- Políticas Públicas y presupuestos con perspectiva de Derechos Humanos, Manual Operativo para servidoras y servidores públicos, OACNUDH, 2010. 20 Claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos, OACNUDH. México, 2011.
- Recopilación de las Observaciones Finales e Informes de los Comités de Tratados, Relatores Especiales y Grupos de Trabajo sobre Honduras (anexo 11: versión digital).
- Recopilación de Sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra Honduras (anexo 12: versión digital).
- Mani, Devyani, Human Security and Local Development, Centro de Desarrollo Regional de las Naciones Unidas. <http://www.sma.df.gob.mx>
- Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1994. Nuevas dimensiones de la seguridad humana, Nueva York.
- Mendez, J., 2000. El acceso a la justicia, un enfoque desde los derechos humanos, Acceso a la justicia y equidad. Estudios en siete países de América Latina, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco Interamericano de Desarrollo, p. 16, San José.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia. <http://www.corteidh.or.cr>
- Álvarez, E., "Seguridad pública, derechos humanos y cultura de la legalidad", en Seguridad Pública, prevención del delito y derechos humanos: construyendo alternativas desde la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos, Fundar y Red de todos los Derechos para Todos, pp. 37-38, México.
- Calsamiglia, A., 2004. "Constitucionalismo y democracia", en Harold Hongju Koh y Ronald C. Slye (comps.), Democracia deliberativa y derechos humanos, Barcelona, Gedisa.
- Carta Democrática Interamericana, 2001. artículo 9.
- Carbonell, M., 2006. "El derecho de acceso a la información como derecho fundamental", en López, S. Ayllon. (coord.), Democracia, transparencia y constitución: propuestas para un debate necesario, UNAM, México.
- González, J., "Transparencia y acceso a la información judicial", en Caballero, J.A., 2005. El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, México, UNAM, Due Process of Law Foundation/Instituto de Investigaciones para la Justicia/Open Society Institute., México.
- Corte Internacional de Derechos Humanos, (Corte IDH), La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva, 1985, Carta Democrática Interamericana, 2001. Artículo 4.

- Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1996. Observación general, sobre Derecho a participar en asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
- PIDESC, Artículo 2, párrafo 1, Directrices de Maastricht, párrafo 8 sobre “Margen de discreción” y párrafo 9 sobre “Niveles mínimos esenciales”. Aplicación interna del pacto.
- PIDESC, Artículo 2, párrafo 2, CEDAW, Directrices de Maastricht, párrafo 12.
- Organizaciones de Naciones Unidas, 2006. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, p. 12, Nueva York, Ginebra.
- OACNUDH y Unión Interparlamentaria, Derechos Humanos, Manual para Parlamentarios, 2005. p. 6,. Francia.
- CEDAW, Para una mejor comprensión de las medidas temporales se puede consultar la recomendación general número 25: define estas medidas como un amplio universo de acciones que tienen impacto en los diversos órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), como los sistemas de cuotas de género, la etiquetación de presupuesto, la capacitación específica, entre otras.
- OACNUDH y Unión Interparlamentaria Derechos Humanos, 2005. Manual para Parlamentarios,. p. 8, Francia.
- Políticas Públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos, 2010.
- Manual Operativo para servidoras y servidores públicos, OACNUDH. México.
- Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC), 2002. Observación general núm. 13, párrafo 2.
- Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008. Ciudad de México .
- Presupuesto de Educación, 2009. <http://190.5.81.199/SIEE/indicadores> De CoberturaCalidad.php.
- Informe de evaluación cualitativa de la gobernabilidad en el sector educación en Honduras, Banco Mundial. S.F.
- Instituto Nacional Estadística, 1990-2011. Tasa de analfabetismo población de 15 años y más.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Organización Mundial de la Salud (OMS). 2008, El derecho a la salud, Geneva.
- Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000. Observación general número. 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: General Comments, párrafo 12.
- Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1990.
- República de Honduras, 1982. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República, decreto número. 131.
- Congreso Nacional de la República de Honduras, 1999. Código de Salud y Reglamento General de Salud Ambiental, decreto No. 65-91. Tegucigalpa, Honduras.
- A. Altamirano, 2003. La garantía y seguridad jurídica del derecho a la protección de la salud en Honduras. Tesis previa a la opción del grado de magíster en Salud Pública. POSAP-UNAH. Tegucigalpa, Honduras.
- Instituto Nacional de Estadísticas, 2009. Proyecciones poblacionales. Tegucigalpa, Honduras.
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL). América Latina: tasas globales de fecundidad según quinquenios por países, en Estadística e indicadores demográficos y sociales. 2010.
- SJDH, 2010. Informe del Estado de Honduras sobre Examen Periódico Universal. Tegucigalpa, Honduras.

- SJDH, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos Avances y Desafíos 2011-2012. Tegucigalpa, Honduras.
- PNUD, 2011. Informe sobre Desarrollo Humano. Reducir la inequidad: un desafío impostergable. Tegucigalpa, Honduras.
- PNUD, 2011. Informe sobre Desarrollo Humano. Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos, Nueva York.
- Foro Nacional de Migraciones de Honduras, 2010. Los efectos de la crisis política y la migración. Tegucigalpa, Honduras.
- UNAH-IUDPAS, 2012. Observatorio de la Violencia. Varios Boletines.
- Organización Mundial de la Salud, Comisión sobre determinantes sociales de la salud, 2008. Subsanan las desigualdades. Resumen analítico del informe final. Ginebra.
- Secretaría de Salud, 2010-2014. Plan Nacional de Salud. Tegucigalpa, Honduras.
- Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y Organizaciones Panamericana de la Salud (OPS), Análisis de la situación.
- Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y Organizaciones Panamericana de la Salud (OPS), 2012. Análisis de la situación alimentaria en Honduras, Tegucigalpa.
- Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y Organizaciones Panamericana de la Salud (OPS), 2011,2012. Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD,
- Instituto Nacional de Estadísticas, 2002. La discapacidad en Honduras. Análisis de los resultados de la XXVI encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, Tegucigalpa, Honduras.
- Programa Regional de Salud y Protección Social del Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOS-Bélgica) en Centro América, 2012. La protección social en salud en Honduras, presente y desafíos, Tegucigalpa.
- Programa Regional de Salud y Protección Social del Fondo de Cooperación al Desarrollo, 2012.
- Secretaría de Salud, 2005. Plan Nacional de Salud 2021. Tegucigalpa, Honduras.
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 2010. Ficha estadística de Tegucigalpa, Honduras.
- CEPAL, 2005. La reforma de salud en Honduras.
- Organización Panamericana de la Salud, 2003. Exclusión en salud en países de América Latina y el Caribe. Washington D.C.
- Secretaría de Salud, 2005. Plan Nacional de Salud 2021. Tegucigalpa; Secretaría de Salud, Marco conceptual, político y estratégico de la reforma del sector salud, 2009. Tegucigalpa.
- Forti, S. 1993-2006, Cambios en la política de salud y continuidad en la denegación del derecho a la salud en Honduras. Tesis previa a la opción del grado de PHD en Salud Comunitaria, 2010. Universidad de Laval, Canadá.
- Rupp, R., 2003. Apuntes para un derecho democrático de la sexualidad, Universidad de Columbia.
- Lopez, M., y Maceira, L., 2003. Manual para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. México.
- Organización de las Naciones Unidas, 1994. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo.
- Plataforma de Acción de Beijing, Párrafo 96.
- Centro por los Derechos Reproductivos, 2006. Gaining Ground, A Tool for Advancing Reproductive Rights Law Reform, Nueva York.
- UNFPA, 2012. Estado de la Población Mundial. Sí a la opción, no al azar. Nueva York.

- Buglione, S., y Feix, V., 2006. Sistematización y análisis de leyes de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe. Brasil.
- OMS, 2002. Conceptualización enriquecida sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, Consulta Técnica sobre Salud Sexual.
- López, C.M. y Ochoa, M.L., 2003. Manual para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. México.
- Centro de Derechos Reproductivos, 2007. Haciendo de los derechos una realidad. Un análisis del trabajo de los comités de monitoreo de la ONU sobre derechos reproductivos y sexuales, 2003. http://www.reproductiverights.org/pdf/bo_hacinedo_body.pdf
- Carías, M., 2009. Análisis de situación de población en Honduras, Cuaderno 2, Tegucigalpa: Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Tegucigalpa.
- Ramírez, A. y Martínez, M., 2003. Diagnóstico nacional: los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Honduras, CLADEM-Honduras.
- Secretaría de Salud de Honduras, 2008-2015. Reducción acelerada de la mortalidad materna y de la niñez, Tegucigalpa.
- Gobierno de Honduras, 2010. Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras. Tercer informe de país, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tegucigalpa.
- Méndez, M., y cols., 2003. Análisis de las políticas nacionales de ITS y VIH/SIDA desde un enfoque de género, CEM-H/UNIFEM. Tegucigalpa.
- Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), 2005-2006. Honduras.
- Secretaría de Salud de Honduras, 2008-2015. Reducción acelerada de la mortalidad materna y de la niñez, Tegucigalpa.
- Informes de país para UNGASS., 2003, 2005, 2008 y 2012.
- Ley contra la Violencia Doméstica y sus reformas, 2005. Instituto Nacional de la Mujer. Tegucigalpa, Honduras.
- Observatorio de la Violencia. Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS-UNAH. boletines números 11, 16, 19 y 20
- Alduvín, E., 2003. Diagnóstico situacional de la atención a víctimas de violencia sexual, OPS. Tegucigalpa, Honduras.
- Centro de Derechos de Mujeres, 2012. Sobre la anticoncepción de emergencia, Comunicado de prensa, Tegucigalpa.
- Ramírez, A. y Martínez, M., 2003. Diagnóstico nacional: los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Honduras, CLADEM-Honduras.
- PNUD, 2006. Informe Nacional de Desarrollo Humanos. Hacia la expansión de la ciudadanía, Tegucigalpa.
- Decreto ejecutivo Número PCM-024-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 13 de julio del 2012.
- Discurso del Director Ejecutivo del UNFPA, 2012. Presentación del Informe Mundial de Población, Por elección, no por azar, Londres.
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el párrafo 2 del artículo 12, reconoce el derecho a la nutrición de las mujeres durante el embarazo y la lactancia, en el contexto de la protección de la maternidad.
- Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños a la alimentación adecuada en los acápites c) y e) del párrafo 2, del artículo 24, en el contexto del derecho a la salud; y en el párrafo 3, del artículo 27, en el contexto del derecho a un nivel adecuado de vida.

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 25, en el contexto del derecho a la salud; y en el acápite l), del artículo 28, en el contexto del derecho a un nivel adecuado de vida y a la protección social.
- Protocolo de San Salvador, artículos 12 y 17, en el contexto de la protección de las personas de edad.
- FAO, 2004. Directrices voluntarias del derecho a la alimentación.
- Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), 1999. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 12, p 3, XX período de sesiones N.Y., p 3.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cumplir las obligaciones de facilitar, promover y suministrar.
- CEPAL y PMA, 2007. Análisis del impacto social y económico de la desnutrición infantil en América Latina: Centroamérica y República Dominicana, 2005. página 15, Comisión. Santiago de Chile.
- Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), 2010. Objetivos del Desarrollo del Milenio, Honduras, Tercer informe de país, p 58.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2001-2010. Mujeres y hombres en cifras, Boletín Estadístico, página 16.
- Ley de Reforma Agraria de Honduras, 1975. Plataforma agraria. Propuesta de Ley de Transformación Agraria Integral, 2011.
- CEPAL, 2010. Anuario estadístico.
- Comité DESC, 2005. Observación general número. 18 relativa al derecho al trabajo, párrafo 1.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 1966. Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas; entró en vigor en el 1971.
- Comité DESC, 2005. Observación general número. 18, párrafo 2.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), artículo 19, inciso 6.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2005. Observación general No. 18, párrafo 12.
- Organización Internacional del Trabajo. Artículo 2 del Convenio No. 111 “formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2005. Observación general No. 18, párrafos 20 y 21.
- Conferencia Internacional del Trabajo, 2002. XC reunión, Informe VI: El trabajo decente y la economía informal, Sexto punto del orden del día, pp. 142-143, Oficina Organización Internacional del Trabajo. Ginebra.
- Informe del director general de la OIT, 1999. Embajador Juan Somavía, en la LXXXVII Conferencia Internacional del Trabajo, titulada “Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global”, Ginebra.
- Naciones Unidas/Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2005. XXXV período de sesiones.
- Gerthan Stads y otros, I&D agropecuaria en América Central, página 36, 2008, página 36.
- La CIDH, 2008. En audiencia temática realizada en Washington, sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las trabajadoras de la maquila en Honduras. <http://www.codemuh.net>

- CEPAL/OIT, Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina, Tomo II, página 162.
- ONU, 2010. Objetivos del Desarrollo del Milenio, Tercer informe de país, Honduras 2010, página 75.
- ISACC, 2009. Estudio sobre el mercado laboral y su relación con la pobreza en Honduras, Guatemala y Nicaragua, p. 42.
- PNUD, 2009. Informe de Desarrollo Humano Honduras.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), 1991. Observación general número 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, párrafo 7.
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 2005. El derecho humano a una vivienda adecuada, pp. 18-19, Caracas.
- <http://www.undp.un.hn/situacionODMHonduras.htm>.
- <http://www.old.latribuna.hn/2010/12/29/deficit-habitacional-en-honduras-supera-el-millon-de-viviendas>.
- Foro Intersectorial sobre el Derecho al Agua en la Ciudad de México, 2005. Ponencia de Areli Terán de Equipo Pueblo, A. C.
- Informe sobre la Realización del Derecho al Agua Potable y al Saneamiento, 2005. Presentado por el relator especial, El Hadji Guissé. Observación general No.15 lista de tratados, declaraciones y otras normas que reconocen el derecho humano al agua.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), Observación general número 15, relativa al derecho al agua, párrafo 3.
- Constitución de la República, 1981. Decreto número 131.
- Bartram y Howard, 2007. Informe de la Organización Mundial de la Salud). Tomado de DECA Equipo Pueblo, A. C. DESCA en la Ciudad de México: análisis, perspectivas y propuestas sobre algunos derechos.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 1990-2011.
- AECID-PNUD, 2008. Programa conjunto de agua y saneamiento. Tegucigalpa, Honduras.
- López, M. 2011, Estudio sobre exclusión en el sector agua y saneamiento en Honduras, RASHON, Tegucigalpa: RASHON.
- Organización Panamericana de la Salud, 2003. Exclusión en salud en países de América Latina y El Caribe.
- ONU, 1972. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo, Suecia.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 1972. Estocolmo, Suecia.
- ONU, 1997. Protocolo de Kyoto, pp. 11
- Vreugdenhil, 2002. SERNA/DiBiO,
- Mejía, T., 2006. "Nueva fiebre del oro", Honduras.
- SEPLAN. 2010, 2038, Visión de País, Horizonte de Planificación para 7 períodos de Gobierno. p. 69.
- Programa Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local, 2012. Plan Nacional de Cultura (2012-2022).Tegucigalpa.
- Proyecto de Ley, 2001. "Ley General y de Fomento a la Cultura". Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local.
- <http://www.ine.gob.hn/drupal/node/123>.

- Miralle, E., 2009. Cohesión social y reducción de la pobreza. Cultura, cooperación descentralizada y desarrollo local.
- Gobierno de Honduras, 2010. Plan de Nación 2010 - 2022.
- CDIH, 2010. Programa Conjunto, Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local; Diagnósticos de actores sociales vinculados al ámbito de la cultura y el desarrollo.
- Sistema Cultural de Honduras. Patrimonio Cultural. <http://www.oei.es/cultura2/honduras/>
- PNUD, 2003. Informe sobre Desarrollo Humanos, Tegucigalpa, Honduras.
- SCAD, 2011. Programa Conjunto, Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro "Cultura y Desarrollo: un desafío de país". Conferencia de Ernesto Piedras.
- Chareille Samantha, 2001. La planificación lingüística y el establecimiento de un sistema regional: Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chile (tesis doctoral en dos volúmenes, de la Universidad de París III-La Sorbonne Nouvelle - Coste, D. 2011. Escuela Normal superior de Humanidades de Lyon.
- SCAD, 2011. Programa Conjunto "Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro "Cultura y Desarrollo: un desafío de país". Conferencia: Políticas culturales y los nuevos desafíos: Mac, J. Construcción de diálogos interculturales.
- SCAD. Programa Conjunto "Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro Cultura y Desarrollo. Comentarios nacionales: (Julio Raudales).
- Programa Conjunto Cultura y Desarrollo. Mejía, M. Estrategias Regionales.
- SCAD, 2011. Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro "Cultura y Desarrollo: un desafío de país". Conferencia Plan de desarrollo cultural: su formulación y evaluación. (Clara Mónica Zapata Jaramillo).
- SCAD, 2011. Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local. Memoria del Foro "Cultura y desarrollo: un desafío de país". Conferencia Plan de desarrollo cultural: (Clara Mónica Zapata Jaramillo).
- Declaración Universal de los Derechos Humanos arts. 2, 3 y 25; y Convención Americana sobre Derechos Humanos arts. 4, 8, 25, 27 No. 2.
- Observación General No. 6, Comité de Derechos Humanos de la ONU, CODHONU. Observación General No. 6, (A/37/40).
- OACNUDH, Derechos Humanos, Manual para Parlamentarios, 2005. Página 84. Derechos Humanos, Manual para Parlamentarios, pág. 84. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria.
- Massini, C., 2000. "El Derecho a la Vida en la Sistemática de los Derechos Humanos". En: Problemas Actuales sobre Derechos humanos. Coord. Javier Saldaña, p. 161. UNAM, México.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 1988. Casos Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz y el caso Blake, sentencia.
- Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, 1994., Artículo 9, OEA ,Washington.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Desaparición Forzada en la Jurisprudencia, <http://www.menschenrechte.org/lang/de/verstehen/desaparicion-forzada-cidh>
- Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, <http://www2.ohchr.org/spanish/issues/executions/index.htm>
- Informe de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.2004, 2003.
- Informe del Observatorio de la Violencia, 2011. Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de (IUDPAS), UNAH. Tegucigalpa.

- Poder Judicial y Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Seguridad, 2012. Honduras.
- Observatorio de la Violencia, 2011, 2012, Boletín Especial N. 5. Sobre Criminalidad Policial, Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Tegucigalpa.
- Fiscalía del Ministerio Público <http://noticias.univision.com/america-latina/honduras/article/2012-08-14/honduras-con-indice-mas-alto-asesinatos-periodistas#ixzz2AlBQi2V7>
- Informe de la Misión Internacional de Verificación en el marco de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, 2012.
- La Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2011. FIO. VIII Informe sobre Derechos Humanos: Seguridad Ciudadana.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 57, Washington.
- Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO. VIII Informe sobre Derechos Humanos: Protección de la Seguridad Ciudadana, pág. 77; Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, 2011. Módulo Instruccional: Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales, IIDH. San José.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009. OEA/Ser.L/V/II. (Doc. 57), Washington.
- FIO, VIII Informe sobre Derechos Humanos: Protección de la Seguridad Ciudadana, página 77.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009. OEA/Ser.L/V/II, (Documento 57, Párrafo 41).
- XLIII European Court of Human Rights, Kiliç Turkey, Judgment of 28 March 2000, Application No. 22492/93, párrafos 62 y 63, Osman v. the United Kingdom Judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, párrafos 115 y 116.
- Corte IDH, 2001. Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia No. 73, párr. 72 y Voto Concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade, párrafos 16 y 31-3. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 2005, Serie C, No. 134, párrafo 108; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 2006, numero. 140, párrafo 111.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2009. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos,. OEA/Ser.L/V/II, Documento 57, p. 41, párrafo 18. P. 41, párrafo 18, Washington.
- Corte IDH, 2012. Caso Furlan y familiares vs. Argentina, Resumen oficial sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_246_esp.pdf
- Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, VIII Informe sobre Derechos Humanos: Protección de la Seguridad Ciudadana, p. 61, ítem 7.
- Observatorio de la Violencia, 2012. Boletín Observatorio de la Violencia, edición 24, Tegucigalpa, Honduras.
- Datos del Observatorio Hemisférico de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) <http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/regionsdetails.aspx?lang=es®ion=6>
- Gasto público de los países de Centroamérica en seguridad y justicia 2006-2010 (AECID/SICA/PNUD, 2011).
- Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y Ministerio Público (MP), 2010.
- Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 27.2.

- Consejo Económico y Social, 1977. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Aprobadas por Resoluciones 663C (xxiv) 1957, y 2076 (lxii), regla 31.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2008. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia número. 187, párrafo 88.
- Instituto Interamericano de derechos humanos (IIDH), 2011. Módulo instruccional: derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales. IIDH, p. 50. San José, Costa Rica.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2009. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, p.5. OEA/Ser.L/V/II. (Doc.57), Ítem 114, pp. 47. Washington.
- Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.
- <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/133.asp>
- CIDH, "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
- Corte IDH, 2005. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia núm. 129, párr. 74 y 75. Caso Tibi vs. Ecuador, 2004. Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia, número. 114, párr. 106 y 180.
- Corte IDH, 2006. Caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia, numero. 141, párrafo 104.
- CIDH, 2002. caso Giménez c. Argentina, párr. 80. Caso Pinheiro y Dos Santos c. Paraguay, en la que la CIDH considera que la detención prolongada sin condena viola el artículo 8(2) de la Convención Americana y el artículo XXVI de la Declaración Americana, párr. 86.
- CPTRT Informe CPTRT al Examen Periódico Universal, Tegucigalpa 2010. Página
- Observatorio de la Violencia, 2012. Boletín Especial N.5 sobre Criminalidad Policial, IUDPAS, Tegucigalpa. Observatorio de la Violencia, Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. Boletín Especial N. 5, sobre Criminalidad Policial, 2011- 2012,
- Constitución de la República, Asamblea Nacional Constituyente, 1982. Decreto número 131, Publicado en el diario oficial La Gaceta, número 23,612 del 20 de enero 1982.
- Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966. Mediante resolución 2200(XXI), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, Aprobado por Decreto 64-95 del Congreso Nacional 1995, Publicado en el diario oficial La Gaceta, número 28,293 de 1997.
- Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969. San José, Costa Rica, el 22 de noviembre, Aprobada por Honduras mediante acuerdo número 8 del 22 de noviembre de 1977. Ratificada por Decreto número 523 del Jefe de Estado en Consejo de Ministros el 26 de agosto de 1977. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta, número 22,287 del 1 de septiembre de 1977.
- Congreso Nacional, 1999. Decreto No. 9-99-E. Publicado en el diario oficial La Gaceta, número 29,176 el 20 de mayo de 2000.
- Congreso Nacional, 2007. Decreto 211-2006. Publicado en el diario oficial La Gaceta 31,313 de 26 de mayo de 2007.
- Congreso Nacional, 1996. Decreto No. 73-96. Publicado en el diario oficial La Gaceta, número 28,053 de 5 de septiembre de 1996.
- Consejo de Derechos Humanos, V período de sesiones. El derecho a la verdad: informe de del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 7 de junio de 2007 (Docto. A/HRC/5/7); Asamblea General de la OEA, IV sesión plenaria, 4 de junio de 2009. El derecho a la verdad, (Docto. AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001; y Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Sentencia sobre reparaciones de 22 de febrero de 2002.

- Informe N° 10/95, 1995. Ecuador, Manuel Bolaños. La Comisión abordó el tema del con motivo del caso de la desaparición de Manuel Bolaños.
- Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, LXI período de sesiones, Tema 17 del programa provisional.
- Informe de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos ONU, 2009. Violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado.
- Comisiones de la Verdad, éstas se refieren a órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen el carácter judicial y se ocupan de investigar abusos a de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario que se han cometido a lo largo de varios años o en un periodo corto.
- Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Para que los hechos no se repitan, página 47.
- Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Para que los hechos no se repitan, página 404.
- Congreso Nacional, Decreto Número 170-2006, La Gaceta, Número 31,193, de 30 de diciembre de 2006.
- Transparencia y acceso a la información, 2008. Leo Valladares Lanza, publicación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Red por la Transparencia en Honduras (RETHO) y Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE). Tegucigalpa, Honduras.
- Carpizo, J. y Villanueva E., 2001. El derecho a la información. Propuesta de algunos elementos para su regulación en México, En Valades, D.y Gutiérrez, R., Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso de Derecho Constitucional, Págs. 71-112. UNAM, México.
- Portal del IAIP, listado de Oficiales de Información Pública. Encontrado en www.iaip.gob.hn
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29, Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, número 5, párrafo 70.
- Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2004. Capítulo V, párrafo 14.
- Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2004. Capítulo V, párrafo 15.
- COIDH, 2004. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay,. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia, número. 111, párr. 80; COIDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones preliminares; Fondo, reparaciones y costas. Sentencia número. 107, párr. 111; COIDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 2001. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia, número. 74, párr. 149; COIDH, Caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile; 2001. Fondo, reparaciones y costas, Sentencia, número. 73, párr. 64; y COIDH, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 32.
- COIDH, 2004. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones preliminares; Fondo, reparaciones y costas. Sentencia, número. 107, párr. 120; COIDH, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29, CADH), Opinión consultiva, 1985, numero. 5, párr. 39.
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 2000. adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108 período de sesiones en octubre del año 2000, principio 5.
- CIDH, Informe anual 1998, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 6 rev., 16 de abril de 1999, vol. III, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, cap. IV, aparte B.
- PIDCP, "Toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia", Art. 22.2.

- Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 1994. Los Hechos Hablan por sí mismos: Informe Preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993.
- Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 2003. Informe Nacional sobre derecho a la información y la libertad de expresión, Tegucigalpa, Honduras.
- Folleto informativo N° 10 (Rev.1), Los derechos del niño, Centro de Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
- Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE), 2011. Proyecciones de población.
- CEPAL y UNICEF, 2008-2009. Pobreza infantil en América Latina y el Caribe. <http://www.unicef.org/honduras/>
- Fabiana del Popolo, El derecho al bienestar para la infancia indígena: situación y avances en América Latina, CELADE-División de Población. <http://www.diplomaciaindigena.org>.
- Secretaría de Educación, 2010. Informe Nacional de Rendimiento Escolar 2010, Español y Matemáticas, de primer a noveno grado.
- Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, 2011.
- Secretaría de Educación, 2010. Informe Estadístico de la Población Escolar con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales (NEE).
- Observatorio de los Derechos de la Niñez, Política Nacional de Atención Integral a la primera infancia, 2011.
- ENDESA, 2011. Política Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, 2005-2006.
- Secretaría de Salud, 2010. Política Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
- SISNAM, INE, 2010. Niños y Niñas de cero a 17 años huérfanos en Honduras. <http://www.ine.gob.hn/sisnam.htm>
- Observatorio Casa Alianza, 2012. <http://www.casa-alianza.org.hn>.
- Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009. OEA/Ser.L/V/II.135 (Doc. XX Relatoría sobre los derechos de la niñez),. <http://www.cidh.org>.
- Casa Alianza, 2011. Informe mes de diciembre.
- Proyecto de Paz y Convivencia Ciudadana para los Municipios del Valle de Sula, aprobado en 2003.
- Decreto No.141-2001 para la prevención, rehabilitación y reinserción de los integrantes de maras.
- Casa Alianza, 2012. Informe de seguimiento de la situación de derechos de los niños, niñas y jóvenes en el Bajo Aguán.
- Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Juventud en Honduras, 2011. Informe de Verificación de Derechos de la Infancia en la zona del Bajo Aguán.
- Observatorio de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras ,2011. El trabajo infantil en Honduras.
- Callejas, L., 2005. La estigmatización social como factor fundamental de la discriminación juvenil. El Cotidiano. UAM, México,
- Asociación Bayán,2012. Impacto de las escuelas secundarias alternativas en adolescentes rurales.
- CEPAL, 2012. Boletín Desafíos No. 14.
- Asociación Cristiana de Jóvenes, 2006. Informe sobre violencia contra la juventud. Tegucigalpa, Honduras.
- Consejo Nacional de Narcotráfico, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Observatorio Hondureño sobre Drogas, 2005. Magnitud del Consumo de Drogas en Jóvenes Estudiantes Hondureños. Tegucigalpa, Honduras.

- Institut Guttmacher, Boletín, 2008. En Resumen, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2005-2006.
- ONU, 2000. Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, aprobada en la X sesión plenaria, celebrada el 12 de abril de 2002.
- CIPRODEH, 2009. Informe Nacional sobre el Cumplimiento de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, P. 11.
- Ley Contra la Violencia Doméstica, Reformar Artículo 1. la contenida en el Decreto No. 132-97 de fecha 11 de septiembre de 1997 y publicado en La Gaceta en fecha 15 de noviembre del mismo año, en sus artículos del 3 al 23 (ambos inclusive). Asimismo, se adicionan los artículos 20-A y 20-B. Ley Contra la Violencia Doméstica y sus Reformas, INAM, 2006.
- Zavala, E., 2007. Informe Situación Migratoria Honduras, Foro Nacional para las Migraciones en Honduras.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009. Superando barreras: movilidad humana y desarrollo humanos, Informe sobre Desarrollo Humano 2009.
- Convenio 182-OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999. Convenio 111-OIT sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958. Convenio 108-OIT sobre los Documentos de Identidad de la Gente de Mar, 1958. Convenio 105-OIT sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 y Convenio 100-OIT sobre Igualdad de Remuneración, 1951. entre otros.
- Human Rights Watch, 2007. Yogyakarta Principles, a Milestone for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights, Human Rights News, 26 de marzo.
- Martínez, E., 2012. Documento acerca de la situación de la diversidad sexual en Honduras, 9 de febrero. (Activista del Movimiento de Diversidad en Resistencia).
- Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 2012. Jornada de consulta a la población de diversidad sexual.
- Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, Artículo 3. Decreto No. 160-2005.
- ONU, 2000. Observación general No. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 22, Período de sesiones, párrafo 9.
- ONU, 2007. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24.
- CIDH, Informe de la situación de los derechos humanos en México, OEA/ser.L/V/II.100, Doc. 7 rev. 1, 24 de septiembre de 1998, párrafo 649, P. 142, caso 11,739, reporte No. 5/99, Héctor Félix Miranda.
- Informe anual de la CIDH, 2000. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II, aparte B.
- COFADEH-EDEFENDERH, 2011. Informe situación de defensores de DD HH en Honduras.
- CVR, 2011. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, P. 334.
- Secretaria de Justicia de Derechos Humanos (SJDH), 2012. Diagnóstico situación defensores, comunicadores, periodistas y operadores de justicia.

SIGLAS

- AHIBA – Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias
- AHMON – Asociación Hondureña de Municipios de Honduras
- AMC – Asociación de Medios de Comunicación
- ANARH – Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras
- ANDI – Asociación Nacional de Industriales
- APH – Asociación de Periodistas de Honduras
- BANADESA – Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
- BANPROVI – Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
- BCIE – Banco Centroamericano de Integración Económica
- CEDAW – Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
- CEDIF – Centros de Desarrollo Infantil y Familiar
- CEPAL – Comisión Económica Para América Latina
- CESAMO – Centros de Salud Con Médico y Odontólogo
- CESAR – Centro de Salud Rural
- CGT – Central General de Trabajadores
- CICEST – Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas
- CIDH – Corte Interamericana de Derechos Humanos
- CIPD – Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
- CLADEM – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
- C-Libre – Comité para la Libre Expresión
- CLIPER – Clínicas Periféricas de Emergencia
- CMI – Clínicas Materno Infantil
- CN – Congreso Nacional
- CNA – Consejo Nacional Anticorrupción
- CNSC – Comisión Nacional del Servicio Civil
- CODEM – Comité de Emergencia Municipal
- COHCIT – Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación
- COHDESSE – Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía
- COHEP – Consejo Hondureño de la Empresa Privada
- CONADEH – Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
- CONAPRED – Comité Nacional para la Prevención de la Discriminación
- CONAPREV – Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
- CONASA – Consejo Nacional Agua Potable y Saneamiento
- CONASIDA – Comisión Nacional del SIDA
- CONASIN – Consejo Nacional de Seguridad Interna
- CONATEL – Comisión Nacional de Telecomunicaciones

- CONEANFO – Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
- COPECO – Comité Permanente de Contingencia
- CPH – Colegio de Periodistas de Honduras
- CPI – Corte Penal Internacional
- CSJ – Corte Suprema de Justicia
- CUTH – Central Unitaria de Trabajadores de Honduras
- DESC – Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- DGAM – Dirección General del Adulto Mayor
- DIECP – Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
- DIGEDEPDI – Dirección General de Personas con Discapacidad
- DNIC – Dirección Nacional de Investigación Criminal
- DUDH – Declaración Universal de los Derechos Humanos
- ENDESA – Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud
- ENEE – Empresa Nacional de Energía Eléctrica
- ENSAN – Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
- EPU – Examen Periódico Universal
- ERSAPS – Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
- FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
- FEDH – Fiscalía Especial de los Derechos Humanos
- FHIS – Fondo Hondureño de Inversión Social
- FONAPROVI – Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda
- FOSOFI – Fondo Social para la Vivienda
- IAIP – Instituto de Acceso a la Información Pública
- ICF – Instituto de Conservación Forestal
- IHAH – Instituto Hondureño de Antropología e Historia
- IHDES – Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud
- IHER – Instituto Hondureño de Educación por Radio
- IHNFA – Instituto Hondureño de la niñez y la Familia
- IHSS – Instituto Hondureño de Seguridad Social
- IIAP – Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
- INA – Instituto Nacional Agrario
- INAM – Instituto Nacional de la Mujer
- INCAP – Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
- INE – Instituto Nacional de Estadística
- INFOP – Instituto Nacional de Formación Profesional
- INFOP – Instituto Nacional de Formación Profesional
- INJ – Instituto Nacional de la Juventud
- INJUPEMP – Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
- INTERPOL – Organización Internacional de la Policía
- IPM – Instituto de Prevención Militar
- ITS – Infecciones de Transmisión Sexual

- IUDPAS – Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad
- LGTBTTI – Lesbianas, gays, transgénero, travestis, transexuales bisexuales e intersex
- MP – Ministerio Público
- OACNUDH – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
- ODM – Objetivos de Desarrollo del Milenio
- OIT – Organizaciones Internacional del Trabajo
- OMM – Oficina Municipal de la Mujer
- OMS – Organización Mundial de la Salud
- ONCAE – Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- ONG – Organizaciones No Gubernamentales
- ONU – Organización de las Naciones Unidas
- OPCD – Organizaciones de Personas con Discapacidad
- OPS – Organización Panamericana para la Salud
- OSC – Organizaciones de Sociedad Civil
- PAE- Pastilla Anticonceptiva de Emergencia
- PAIA - Programa de Atención Integral a la Adolescencia
- PANI – Patronato Nacional de la Infancia
- PATH – Programa de Administración de Tierras de Honduras
- PCD – Personas con Discapacidad
- PEA - Población Económicamente Activa
- PGR – Procuraduría General de la Republica
- PIB – Producto Interno Bruto
- PIDESC – Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- PJ – Poder Judicial
- PMA – Programa Mundial de Alimentos
- PN – Policía Nacional
- PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- POA – Plan Operativo Anual
- POSAP – Posgrado en Salud Pública
- PRAF – Programa de Asignación Familiar
- PRALEBAH – Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos de Honduras
- RNP – Registro Nacional de las Personas
- SAG – Secretaría de Agricultura y Ganadería
- SANAA – Servicio Autónomo Nacional de Alcantarillados y Acueductos
- SAT – Sistema de Aprendizaje Tutorial
- SCAD – Secretaría de Cultura, Artes y Deportes
- SEPLAN – Secretaría de Planificación y Cooperación Externa
- SEDINAFROH – Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños de Honduras
- SEFIN – Secretaría de Finanzas

- SEIP – Secretaria del Interior y Población
- SEMED – Sistema de Educación Media a Distancia
- SERNA – Secretaría de Recursos Naturales
- SIDA – Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
- SIEE – Sistema de Información Energética Económica
- SJDH – Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos
- SOPTRAVI – Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
- SS – Secretaria de Seguridad
- TPS – Status Temporal de Protección
- TSC – Tribunal Superior de Cuentas
- TSE – Tribunal Supremo Electoral
- UMA – Unidad de Medio Ambiente
- UNAH – Universidad Nacional Autónoma de Honduras
- UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México
- UNEP – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura
- UNFPA – Fondo de Población de las Naciones Unidas
- UPNFM – Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
- UTSAN – Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- VIH – Virus de Inmunodeficiencia Humana
- VPH – Virus de Papiloma Humano

Decreto Legislativo No. 177-2010

Reforma a la Ley General de la Administración Pública mediante la cual se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos.



Decreto Ejecutivo PCM-027-2011

Reforma al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

Decreto Ejecutivo No. PCM- 003 -2013

Aprobación de la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Misión

Rectorar e impulsar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo en materia de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, a través de la promoción de políticas públicas, con el fin de generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos, que se fundamente en el principio de la dignidad de la persona humana, como base del desarrollo social y democrático.

Visión

Ser la Institución del Estado que rectora, orienta e impulsa la Política Nacional, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con las instituciones, demás órganos del Estado, y la participación de organizaciones de la Sociedad Civil.

Dirección:

Col. Lomas del Mayab, avenida. República de Costa Rica entre BAC-BAMER y BANHCAFE , antiguo local de CARE-Honduras.

Tel. (504) 2235-5123 ext. 129

Fax: (504) 2235-5124

Dirección de Contacto

contacto@sjdh.gob.hn

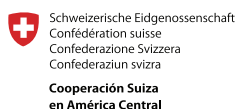
Sitio Web:

www.sjdh.gob.hn

ISBN: 978-99926-819-3-0



El diseño de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es una contribución de:



Esta es una publicación con el apoyo financiero de:

